COMISIÓN PERMANENTE
SEGUNDO RECESO DEL TERCER AÑO

GACETA PARLAMENTARIA

LXII
LEGISLATURA

No. 28
TOMO I

MESA DIRECTIVA

PRESIDENTE:
SEN. MIGUEL BARBOSA HUERTA

VICEPRESIDENTES:
DIP. MANUEL AÑORVE BAÑOS
SEN. LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ
DIP. MARTÍN ALONSO HEREDIA LIZÁRRAGA

SECRETARIOS:
DIP. ROCÍO ESMERALDA REZA GALLEGOS
DIP. CRISTINA RUIZ SANDOVAL
SEN. MA. DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ
DIP. TOMÁS TORRES MERCADO

CONTENIDO

ORDEN DEL DÍA..... **04**

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR..... **12**

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Oficio por el que informa de la renuncia del señor Marcos Fastlicht Sackler como integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. **26**

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES

Una, del Sen. Javier Corral Jurado, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 26 de agosto de 2015. ..... **27**

Una, del Dip. Damián Zepeda Vidales, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, a partir del 19 de agosto de 2015. ..... **28**

Una, de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, con la que remite su Informe de actividades correspondiente al periodo septiembre 2014-agosto 2015. ..... **29**

Una, de la Sen. Marcela Guerra Castillo, con la que remite el Informe que presenta en su calidad de Presidenta de ParlAmericas, con motivo de las reuniones de trabajo sostenidas en ocasión de la VI Reunión de la Red Parlamentaria Latinoamericana de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Probidad, el 6 de agosto de 2015; así como el II Encuentro del Foro Interamericano de Presidentes de Poderes Legislativos, los días 6 y 7 de agosto de 2015, ambos eventos celebrados en Santiago de Chile, Chile. **30**

Una, del Sen. Teófilo Torres Corzo, con la que remite el Informe de las reuniones que sostuvo, conjuntamente con la Sen. Marcela Guerra Castillo, en Maui, Hawaii, del 28 al 31 de julio de 2015, en ocasión de la reunión ministerial el Acuerdo de Asociación Transpacífico. **31**

INFORMES DE LAS COMISIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE

De la Primera Comisión, con la que remite su Informe de actividades correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura. **46**

De la Segunda Comisión, con la que remite su Informe de actividades correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura. **47**

De la Tercera Comisión, con la que remite su Informe de actividades correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura. **48**

INICIATIVAS

1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con aval de grupo, con proyecto de decreto por el que se expide la nueva Ley General de Combate a la Corrupción y Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. **49**

2. Del Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. **93**

3. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con aval de grupo, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. **100**

4. De la Dip. Raquel Jiménez Cerrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición de Personas. **142**

5. Del Dip. Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. …….. **180**

6. Del Dip. Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en materia de datos abiertos. ……. **278**

CONTINÚA TOMO II

ORDEN DEL DÍA

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones y correspondencia.

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Oficio por el que informa de la renuncia del señor Marcos Fastlicht Sackler como integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES

Una, del Sen. Javier Corral Jurado, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 26 de agosto de 2015.

Una, del Dip. Damián Zepeda Vidales, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, a partir del 19 de agosto de 2015.

Una, de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, con la que remite su Informe de actividades correspondiente al periodo septiembre 2014-agosto 2015.

Una, de la Sen. Marcela Guerra Castillo, con la que remite el Informe que presenta en su calidad de Presidenta de ParlAmericas, con motivo de las reuniones de trabajo sostenidas en ocasión de la VI Reunión de la Red Parlamentaria Latinoamericana de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Probidad, el 6 de agosto de 2015; así como el II Encuentro del Foro Interamericano de Presidentes de Poderes Legislativos, los días 6 y 7 de agosto de 2015, ambos eventos celebrados en Santiago de Chile, Chile.

Una, del Sen. Teófilo Torres Corzo, con la que remite el Informe de las reuniones que sostuvo, conjuntamente con la Sen. Marcela Guerra Castillo, en Maui, Hawaii, del 28 al 31 de julio de 2015, en ocasión de la reunión ministerial el Acuerdo de Asociación Transpacífico.

INFORMES DE LAS COMISIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE

De la Primera Comisión, con la que remite su Informe de actividades correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura.

De la Segunda Comisión, con la que remite su Informe de actividades correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura.

De la Tercera Comisión, con la que remite su Informe de actividades correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura.

INICIATIVAS

1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con aval de grupo, con proyecto de decreto por el que se expide la nueva Ley General de Combate a la Corrupción y

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

2. Del Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

3. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con aval de grupo, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

4. De la Dip. Raquel Jiménez Cerrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición de Personas.

5. Del Dip. Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

6. Del Dip. Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en materia de datos abiertos.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN

Siete, de la Primera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo:

1. Que exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos de las entidades federativas a fortalecer las acciones para prevenir y evitar el robo a cuentahabientes y transeúntes.
2. Que exhorta a los tres órdenes de gobierno a reforzar los mecanismos institucionales y legales y las acciones tendientes a respetar y hacer efectivos los derechos humanos, así como el pleno goce de éstos para la población.
3. Que exhorta a las procuradurías generales de justicia y fiscalías generales de las entidades federativas y a la Procuraduría General de la República a coordinarse en el trabajo de investigación del delito de robo de hidrocarburos.
4. Por el que se dan por atendidas las proposiciones relativas a problemas de planeación territorial y urbana en las delegaciones Cuajimalpa y Tlalpan en el Distrito Federal.
5. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a investigar los recursos confiscados a colaboradoras del ciudadano Ricardo Monreal.
6. Por el que se desechan las proposiciones de exhorto a investigar al candidato del PAN a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
7. Por el que se da por atendida la proposición relativa a presuntas irregularidades en la jornada electoral del 19 de julio de 2015 en el estado de Chiapas.

Once, de la Segunda Comisión, los que contienen puntos de acuerdo:

1. Por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación reforzar y ampliar el Programa *Somos Mexicanos*, a fin de que los connacionales repatriados cuenten con toda la asistencia y asesoría para que regresen rápidamente con sus familias y se inserten a la vida productiva del país.
2. Que exhorta a las autoridades sanitarias emitir a la brevedad la norma oficial mexicana para regular

y supervisar la reproducción asistida en sus distintas modalidades en México.

3. Que exhorta a las entidades federativas y al Distrito Federal a fortalecer las acciones dirigidas a coadyuvar en la política migratoria nacional dirigida a la atención, protección y garantía de derechos humanos con base en el principio del interés superior de la niñez, de niñas, niños y adolescentes en condición de migrantes.

4. Por el que la Comisión Permanente felicita a los alumnos, maestros, asesores e instituciones educativas que alcanzaron distinciones de honor en diversos concursos internacionales de conocimiento para estudiantes, celebrados en el transcurso del presente año.

5. Que exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Economía y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a fortalecer las acciones encaminadas a vincular la formación profesional de los alumnos de educación media superior y educación superior, así como los programas de investigación con las empresas y las vocaciones productivas regionales del país.

6. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a revisar los convenios U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales en su modalidad de Educación Media Superior y Superior, y U023 Subsidios para Centros de Educación, con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.

7. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a fomentar y promover políticas públicas con un enfoque preventivo para abatir los delitos en materia de trata de personas.

8. Por el que la Comisión Permanente se congratula por el retiro de la República de Cuba de la lista de países que no cumplen plenamente con estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas.

9. Que exhorta al Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia y a sus sistemas estatales a emprender acciones que garanticen la vigilancia y aplicación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

10. Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a impulsar una política de estado para garantizar el pleno respeto a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, especialmente de aquéllos que realizan trabajos remunerados o trabajo en apoyo a las actividades familiares.

11. Por el que se da por atendida la solicitud de la proposición que solicitaba la ampliación de información delos Objetivos del Milenio.

Treinta y tres, de la Tercera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo:

1. Que exhorta al Gobierno Federal a proceder a la ministración de los recursos aprobados por la Cámara de Diputados en el anexo 31 del ramo 16: Medio Ambiente y Recursos Naturales, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015.

2. Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en la elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, contemple destinar recursos al “Proyecto Campeones Infantiles Mexicanos” de la Embajada de México en la República Federativa del Brasil.

3. Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Procuraduría General de la Republica y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a intervenir en la investigación de las actividades y operaciones de la empresa Monte de la República Sociedad Anónima Promotora de Inversión Casa de Empeño, como consecuencia de las múltiples denuncias de irregularidades reportadas.

4. Que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a presentar un estudio de factibilidad y disponibilidad hídrica, ante el proyecto de modernización de riego en Parras de la Fuente en el estado de Coahuila.

5. Por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe sobre los datos de las coberturas de los precios del petróleo que el Gobierno Federal ha contratado desde el año 2012.

6. Por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que establezcan mecanismos para dar solución a los diferentes grupos de defraudados por empresarios privados del ahorro y el préstamo.

7. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a publicar de manera oficial una prórroga que permita el tránsito de vehículos pesados en la carretera El Sauzal-Tecate y que se agilicen los trabajos para concluir los 8 kilómetros restantes en las obras programadas.
8. Que exhorta al Ejecutivo Federal a proponer al Congreso de la Unión una serie de estímulos fiscales para incentivar las inversiones y el consumo, en el marco del paquete económico de 2016.
9. Por el que se solicita a las Secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público un informe sobre la estrategia o política pública en materia de inversiones en hidrocarburos para el resto del 2015.
10. Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a remitir un informe respecto de los ahorros obtenidos a partir de la centralización de la nómina educativa a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo.
11. Que exhorta a la Secretaría de Turismo a formular el proyecto correspondiente para solicitar al titular del Ejecutivo Federal la expedición del Decreto de Declaración de Zona o Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable en las playas de Huatulco, Puerto Ángel y Puerto Escondido del estado de Oaxaca.
12. Que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Procuraduría General de la República a llevar a cabo una investigación exhaustiva y se castigue a los responsables de la caza de un jaguar en la localidad de Xolapa, Acapulco.
13. Que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a definir en el catálogo de las actividades que integran los sectores agrícolas, forestal, de aserradero, silvícolas, de caza y pesca, cuáles labores son peligrosas o insalubres, y cuáles no lo son, a efecto de que se brinde oportunidad a los jóvenes mayores de 15 y los que no han cumplido los 18 años de edad, de continuar laborando en estas actividades.
14. Por el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales remita la Manifestación de Impacto Ambiental correspondiente a las construcciones en el malecón de Tajamar, en el estado de Quintana Roo. Asimismo, investigar el desmonte de manglar en menoscabo de la biodiversidad de la zona y llevar a cabo las acciones necesarias para detener la tala ilegal de manglares en el estado de Tabasco.
15. Que exhorta al Gobierno Federal a girar instrucciones a quien corresponda a efecto de que se analice la pertinencia de elaborar una norma oficial mexicana para la regulación del denominado “Nopal en Polvo” así como a su industria.
16. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar sobre los fundamentos técnicos, jurídicos y ambientales, por los cuales se autorizó la Manifestación de Impacto Ambiental para construir un segundo Centro Integral para el Manejo, Tratamiento, Aprovechamiento y Disposición Final de Residuos Industriales y Peligrosos, en el estado de Coahuila.
17. Que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a ampliar los mecanismos de prevención y atención para evitar los fraudes inmobiliarios.
18. Que exhorta al Gobierno Federal a llevar a cabo las medidas pertinentes a fin de apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas del país.
19. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a fortalecer las acciones para el manejo integral de los residuos peligros y prevenir posibles afectaciones al medio ambiente y a la salud.
20. Que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a impulsar las acciones pertinentes para resolver las problemáticas descritas en sus respectivos Informes.
21. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a liquidar los adeudos que se tienen con la población afectada derivados de los daños y afectaciones que trajo el derrame tóxico del 6 de agosto del 2014 en los ríos Sonora y Bacanuchi.
22. Que exhorta a la Secretaría de Salud, a la Comisión Nacional del Agua, al gobierno del estado de Hidalgo y al gobierno municipal de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo a revisar, analizar e implementar acciones coordinadas para solucionar la problemática de salud pública originada por la contaminación del agua

potable que consumen los habitantes del citado municipio.

23. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a otorgar la puesta a disposición de la línea ferroviaria "E", en su tramo Sánchez-Oaxaca, a efecto de que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales pueda proceder a la donación de los terrenos de vía férrea en desuso.

24. Que exhorta al Instituto Nacional Electoral y a la Comisión Estatal Electoral del estado de Zacatecas a investigar la probable comisión de delitos de funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social.

25. Por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe respecto de las acciones realizadas para estabilizar el tipo de cambio del peso frente al dólar americano.

26. Que exhorta al gobierno del estado de Sonora a remitir un informe en donde se detalle si ha detectado alguna irregularidad en la declaración patrimonial del titular del Poder Ejecutivo del estado.

27. Que exhorta al Gobierno Federal a escuchar las inquietudes, opiniones, intereses y sensibilidades de los actores involucrados en el proceso de negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico; al mismo tiempo, abundar en lo relativo al capítulo de transparencia y asistencia médica.

28. Que exhorta a las legislaturas de los estados, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a valorar la pertinencia de legislar sobre las nuevas modalidades del servicio de transporte de pasajeros en vehículos de alquiler por medio del uso de tecnologías de la información y la comunicación.

29. Por el que se solicita a la Comisión Nacional de Hidrocarburos a informar sobre los requisitos que colmó la compañía Sierra Oil & Gas S. de R.L de C.V. para acreditar su capacidad técnica y operativa para participar en la primera fase de la Ronda Uno.

30. Por el que se da por atendida la proposición por la que se solicitaba apoyo integral a la industria siderúrgica nacional.

31. Por el que se da por atendida la proposición sobre la capacidad económico-financiera nacional, para hacer frente a futuras situaciones económicas externas.

32. Por el que se da por atendida la proposición por la que se citaba a comparecer al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de informar y explicar el monto del recorte al presupuesto del 2015 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

33. Por el que se solicita al gobierno del estado de Oaxaca informar sobre la programación de la ejecución de los recursos del empréstito autorizado por el congreso del estado el pasado 30 de junio.

PROPOSICIONES

1. Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a suspender la actualización del padrón electoral hasta que se concluyan los periodos extraordinarios de elecciones.

2. De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a brindar protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes afectados por explotación laboral en el país.

3. Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Cambios y al Banco de México a informar sobre los mecanismos de subasta de dólares implementados ante la devaluación del peso mexicano.

4. De Dip. Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Desarrollo Social y de Educación Pública a ejecutar diversas acciones en el marco de la celebración del Día del Abuelo, 28 de agosto de 2015.

5. Del Dip. Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto

de acuerdo sobre los ataques a las instalaciones del Diario *Presente* de Poza Rica, Veracruz.

6. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a sus homólogas estatales a implementar un programa de otorgamiento de actas de nacimiento extemporáneas.

7. De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a informar la situación del avance en la instalación de bebederos de agua potable en las escuelas públicas y, en caso de retraso, las causas del mismo.

8. Del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a solicitar la publicación de las declaratorias de libertad de terreno, correspondientes a las zonas de fluorita y otros minerales de uso industrial que han sido abandonadas en el municipio de Múzquiz, Coahuila.

9. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a decretar un plan de emergencia para controlar y evitar la expansión del chikungunya en el país.

10. De la Dip. Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Estado Mexicano a coadyuvar para que se lleve a cabo una reunión con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y los 26 militares del 27 Batallón de Infantería; así como a realizar las pruebas genéticas de 19 objetos encontrados en un autobús abandonado cerca del Palacio Municipal de Iguala y otro en la calle Juan N. Álvarez y extender el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo.

11. De las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Martha Elena García Gómez y Angélica de la Peña Gómez, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a asignar los recursos presupuestales al Canal del Congreso para llevar a cabo la promoción de los derechos humanos de las mujeres, así como acciones en favor de la igualdad entre mujeres y hombres.

12. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Secretaría de la Función Pública con el objeto de informar sobre el estado que guardan las investigaciones en torno a los posibles vínculos y conflictos de interés entre el grupo HIGA y el Gobierno Federal.

13. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Lilia Merodio Reza, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a las entidades federativas, así como a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a contemplar en sus acciones y programas los principios de autonomía y autorrealización, participación, equidad, corresponsabilidad y atención preferente, en favor de las personas adultas mayores y del respeto íntegro de sus derechos humanos.

14. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con hechos de Corrupción a llevar a cabo una investigación sobre el presunto “conflicto de intereses” con la constructora Grupo HIGA.

15. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente las agresiones cometidas en contra del ciudadano Guillermo Rodríguez, en Boston, Massachussets, así como cualquier forma de violencia física o verbal dirigida a los mexicanos que radican en los Estados Unidos de América.

16. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los estados de la República y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a mejorar las condiciones laborales de los cuerpos de bomberos del país.

17. Del Dip. Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía, de Turismo y de Desarrollo Social, del Instituto Nacional del Emprendedor y del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a diseñar un programa intersectorial para el impulso a las empresas culturales y creativas, aprovechando las ventajas competitivas que éstas tienen y al alto impacto económico y de generación de empleos que presentan.

18. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente condena las declaraciones del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela que descalifican a la Organización de los Estados Americanos.

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA CÁMARA DE SENADORES

- Proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para el mes de septiembre de 2015.

- Informe del presupuesto ejercido por la Cámara de Senadores al mes de julio de 2015.

INTERVENCIONES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CON MOTIVO DE LA CONCLUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO RECESO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO DE LA LXII LEGISLATURA

EFEMÉRIDES

De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día del Adulto Mayor.

Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el "Día del Abuelo o Día del Adulto Mayor".

Del Dip. Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el “Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas”.

De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre la conmemoración de la firma de los Tratados de Córdoba que ratifican el Plan de Iguala por el que se consuma la Independencia de México el 24 de Agosto de 1821.

AGENDA POLÍTICA

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a los avances logrados en la LXII Legislatura.

De los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la situación política nacional.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE

PRESIDE EL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con treinta y dos minutos del miércoles diecinueve de agosto de dos mil quince, con una asistencia de treinta y un legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.

(Lectura del Orden del Día)

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta y a su difusión.

(Acta de la Sesión anterior)

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión celebrada el viernes catorce de agosto de dos mil quince.

(Comunicaciones)

Se recibió de la Secretaría de Gobernación, Iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y se reforman las Leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental.- *Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.*

Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de julio de 2015, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de julio de 2014.- *Se remitió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.*

Se recibió del Servicio de Administración Tributaria, oficio por el que informa que durante el mes de julio de 2015 únicamente se destinaron mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.- *Se remitió a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.*

Se recibió del Instituto Federal de Telecomunicaciones, su Segundo Informe Trimestral de Actividades, correspondiente al año 2015.- *Se remitió a las Comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía y de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Radio y Televisión y de Comunicaciones de la Cámara*

de Diputados.

Se recibió de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el "Informe Anual 2014. Balance. Acciones de Promoción, Defensa y Fortalecimiento Institucional".- *Se remitió a las Comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.*

Se recibió de la Senadora Margarita Flores Sánchez, el Informe de su participación en la Reunión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo del Parlamento Latinoamericano, celebrada los días 30 y 31 de julio de 2015, en Panamá.- *Quedó de enterado.*

Se recibió del Diputado Raúl Paz Alonzo, oficio por el que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 17 de agosto de 2015.- *Quedó de enterado. Se comunicó a la Cámara de Diputados.*

Se recibió de la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, oficio por el que informa de la reunión con integrantes de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, en cumplimiento del artículo 298 del Reglamento del Senado.- *Quedó de enterado.*

(Iniciativas) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas:

De la Senadoras Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Lilia Merodio Reza, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.- *Se turnó a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.*

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 38 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el fin de fortalecer los consejos locales.- *Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.*

Del Diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.- *Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.*

De la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 2º de la Ley de Planeación.- *Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados.*

De los Diputados Adriana Fuentes Téllez y Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 52 y se adiciona un artículo 52 Bis a la Ley de Aviación Civil.- *Se turnó a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados.*

Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para el Diálogo e Implementación de la Reforma Educativa.- *Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.*

Del Diputado Danner González Rodríguez del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos décimo, décimo primero y décimo segundo al artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para crear la defensoría del emprendedor.- *Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.*

De la Diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.- *Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.*

Del Diputado Francisco Grajales Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 248 y 252 de la Ley Federal del Trabajo, a fin de regular las jornadas laborales de los trabajadores ferrocarrileros.- *Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.*

PRESIDE EL DIPUTADO
MANUEL AÑORVE BAÑOS

(Dictámenes a Discusión)

Se sometieron a consideración de la Asamblea treinta y dos dictámenes de la Primera Comisión, con punto de acuerdo:

1. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a vigilar que la venta de publicaciones impresas que se encuentran en exhibición en los puestos de periódicos y revistas del país, observen las disposiciones del Reglamento sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas.- *Intervino el Diputado José Alejandro Montano Guzmán del PRI.*

2. Que exhorta al Consejo General del Instituto Nacional Electoral y al organismo

público local electoral del estado de Oaxaca a garantizar el derecho humano a la consulta y consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y comunidades que integran los municipios indígenas de ese estado antes de aprobar la nueva distritación electoral local 2016.

3. Que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a reforzar los programas enfocados al combate a la corrupción en los centros de verificación vehicular.- *Intervinieron los legisladores: Diputado Enrique Cárdenas del Avellano del PRI y Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN.*

4. Por el que la Comisión Permanente se pronuncia para que la gobernadora electa del estado de Sonora y los gobernadores electos de los estados de Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro y San Luis Potosí hagan un compromiso público por la igualdad sustantiva y sus equipos de trabajo tanto del gabinete legal y ampliado se integren de manera paritaria entre mujeres y hombres.- *Intervino la Senadora Angélica de la Peña Gómez del PRD.*

5. Por el que la Comisión Permanente reprueba todo acto de violencia que pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico o psicológico para las mujeres; y exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Chiapas a efectuar una diligente y exhaustiva investigación que permita esclarecer los hechos y sancionar a los agresores de la ciudadana Yesenia Alamilla Vicente.- *Intervinieron los legisladores: Diputado Tomás Torres Mercado del PVEM, Senadora Angélica de la Peña Gómez del PRD, Diputado Fernando Belaunzarán Méndez del PRD, Senador Zoé Robledo Aburto del PRD y Diputado Fernando Rodríguez Doval del PAN.*

6. Por el que se solicita al Gobierno del Distrito Federal emprenda una estrategia de información y comunicación con la ciudadanía para explicar los protocolos de las acciones de vigilancia por medio de las cuales los agentes de seguridad estén facultados para hacer inspecciones de personas y/o vehículos, especialmente en lo relacionado a los operativos Escudo Centro, Escudo Ciudad de México, Arrancones y Relámpago.

7. Que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, a su secretaría técnica y a sus homólogos locales a seguir trabajando con las funciones que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y/o sus decretos de creación les mandatan.- *Intervinieron los legisladores: Diputada María Sanjuana Cerda Franco de NA y Senador Miguel Romo Mediana del PRI.*

8. Por el que la Comisión Permanente reconoce la labor de los habitantes de la colonia "El Tanque", de la delegación Magdalena Contreras, en el Distrito Federal, en favor de la recuperación de sus espacios públicos y la construcción de ciudadanía.

PRESIDE EL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

9. Que exhorta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Veracruz a investigar sobre la violencia en contra de las mujeres en esa entidad y analizar la posibilidad de presentar una solicitud de alerta de violencia de género.- *Intervinieron los legisladores: Diputada Graciela Saldaña Fraire del PRD, Diputado Danner González Rodríguez de MC, Diputado Fernando Belaunzarán Méndez del PRD, Diputado José Alejandro Montano Guzmán del PRI y Diputada Lilia Aguilar Gil del PT.*

10. Por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente las amenazas hechas en contra de la diputada federal Yazmín de los Ángeles Copete Zapot y exhorta a la Procuraduría General de la República a investigar con diligencia e imparcialidad los hechos denunciados en la averiguación previa correspondiente.- *Intervinieron los legisladores: Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero del PRD y Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN.*

11. Por el que se considera sin materia la proposición que exhortaba al Instituto Nacional Electoral a realizar las investigaciones necesarias para esclarecer y resolver las inconsistencias observadas en la sesión de cómputo.- *Intervino la Diputada Lilia Aguilar Gil del PRD.*

12. Por el que se solicita la Secretaría de Gobernación analice la viabilidad de implementar, en el contexto del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018, las recomendaciones contenidas en el Estudio "Prevención del Delito en México ¿Cuáles son las Prioridades?.- *Intervinieron los legisladores: Diputada María Sanjuana Cerda Franco del PANAL y Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero del PRD.*

PRESIDE EL DIPUTADO
MARTÍN ALONSO HEREDIA LIZÁRRAGA

13. Por el que se desecha la proposición que solicitaba al Instituto Nacional Electoral y a los organismos electorales locales un informe sobre el cumplimiento del retiro de la propaganda electoral en el proceso electoral federal 2014-2015.- *Intervino el Senador Zoé Robledo Aburto del PRD.*

14. Por el que se consideran atendidas las proposiciones sobre el homicidio del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril y los feminicidios de cuatro tres mujeres.- *Intervinieron los legisladores: Diputado Fernando Belaunzarán Méndez del PRD, Diputada Graciela Saldaña Fraire del PRI, Senadora Angélica de la Peña Gómez del PRD y Senador Zoé Robledo Aburto del PRD.*

15. Por el que se considera atendida la proposición que exhortaba a realizar las investigaciones sobre el proceso y sentencia de los sistemas de justicia civil y/o militar referente a los siete jornaleros secuestrados en el municipio de Calera de Víctor Rosales, en el estado de Zacatecas.

16. Por el que se considera atendida la proposición que exhortaba a vigilar y supervisar el manejo adecuado del patrimonio histórico de la Nación en la remoción del

empedrado de las inmediaciones del inmueble conocido como “Casa de la Malinche” en la delegación Coyoacán.

PRESIDE EL SENADOR
MIGUEL BARBOSA HUERTA

17. Por el que se desechan las proposiciones relativas a las reformas a la legislación electoral local en materia de candidaturas independientes.- *Intervinieron los legisladores: Diputado Fernando Rodríguez Doval del PAN, Diputado Juan Pablo Adame Alemán del PAN, Diputado Fernando Belaunzarán Méndez del PRD, Senador Zoé Robledo Aburto del PRD y Senador Manuel Cavazos Lerma del PRI.*

18. Por el que se considera atendida la proposición que exhortaba al ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, a implementar y reforzar medidas de seguridad en sus instalaciones.

19. Por el que se considera atendida la proposición que exhortaba a articular acciones de coordinación en materia de protección civil y seguridad pública para resguardar la integridad física de las personas que participan en las “peregrinaciones”.

20. Por el que se consideran sin materia las proposiciones que exhortaban a sancionar al Partido Verde Ecologista de México por las presuntas violaciones a las disposiciones en materia electoral.

21. Por el que se considera que han quedado sin materia las proposiciones que requerían información a diversas autoridades.

22. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla a velar y regirse por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos.

23. Por el que se desecha la proposición que condenaba el atentado cometido en contra de Bernardino Antelo Esper, candidato a diputado por el Distrito II del estado de Sinaloa.

24. Por el que se desecha la proposición que condenaba los hechos de violencia ocurridos en Oaxaca, así como la sustracción y destrucción de material electoral por parte de supuestos integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

25. Por el que se desecha la proposición que solicitaba al Tribunal Electoral de Tabasco declarar la nulidad de la elección de presidente municipal y regidores en el municipio de Centro, que tuvo lugar el 7 de junio.

26. Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Instituto Nacional Electoral a investigar el uso de recursos públicos y programas sociales que hicieron las administraciones delegacionales en el Distrito Federal con fines electorales a favor del PRD.

27. Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Gobierno Federal y al gobierno del estado de Chiapas a instrumentar mecanismos de control a efecto de evitar la utilización de los programas sociales para beneficio de campañas electorales.

28. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a informar los números de averiguación previa, el estado y los resultados de las 15 denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación en noviembre del 2014 al gobierno del estado de Veracruz.

29. Por el que se desecha la proposición que exhortaba al congreso del estado de Nuevo León a reconsiderar y modificar la iniciativa de reforma el artículo 1 de su Constitución.

30. Por el que se desecha la proposición sobre el respeto a la función independiente e imparcial del Tribunal Electoral del estado de Tabasco.

31. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a diversas autoridades a liberar a Roger Enrique Narcia Álvarez, presunto preso político en el estado de Chiapas.

32. Por el que se desecha la proposición que solicitaba a los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal investigar el actuar del titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia de procesos penales en el estado de Puebla.

Los treinta y dos dictámenes fueron aprobados en votación económica.

(Proposiciones) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones:

Del Senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar acciones de promoción y difusión del Programa de Desarrollo de Zonas Áridas en los municipios priorizados de la región mixteca del estado de Oaxaca.- *Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Senadores.*

Del Senador Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incrementar el monto del estímulo fiscal otorgado a las personas físicas residentes en México, consistente en la deducción anual de los pagos por colegiaturas correspondientes a la educación básica y la media superior.- *Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.*

De los Diputados Miguel Alonso Raya y Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo para expresar el respaldo de la Comisión Permanente a la carta abierta signada por escritores, periodistas y artistas creativos para exigir al Presidente Enrique Peña Nieto el pronto esclarecimiento de los homicidios de periodistas en México.- *Se turnó a la Cámara de Diputados.*

Del Diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al gobierno del estado de Baja California a desarrollar un plan estratégico para hacer frente a la situación crítica de abastecimiento de agua y la sequía que se presenta en el territorio bajacalifomiano, particularmente en el municipio de Ensenada.- *Se turnó a la Cámara de Diputados.*

Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a implementar medidas mediante un análisis detallado en los gastos fiscales, con el objetivo de evitar que se disminuyan las metas y recursos de programas sociales y para el campo.- *Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.*

De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a aumentar los recursos propuestos para aplicarse a la instalación de bebederos de agua en las escuelas públicas.- *Se turnó a la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores.*

De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se cita comparecer al titular de la Secretaría de la Función Pública con el objeto de informar sobre el estado que guardan las investigaciones en torno a los posibles vínculos y conflictos de interés entre el grupo HIGA y el Gobierno Federal.- *Se turnó a la Cámara de Diputados.*

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a instuir al titular de la Procuraduría General de Justicia a agotar todas las líneas de investigación, en el caso del homicidio y feminicidios de la Colonia Narvarte.- *Se turnó a la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Senadores.*

Del Diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a investigar, y en su, caso sancionar las infracciones a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales cometidas por el alcalde de Ixmiquilpan, Hidalgo, Cipriano Chárrez Pedraza.- *Se turnó a la Cámara de Diputados.*

De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Lilia Merodio Reza, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a la Federación y a las entidades federativas en sus tres poderes, así como a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a publicitar y darle puntual seguimiento a las Observaciones realizadas por el Comité sobre los Derechos del Niño.- *Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores.*

De los Diputados Juan Pablo Adame Alemán y Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informe de los avances que guarda el proceso para el despliegue y operación de la red compartida de la banda de los 700 mhz.- *Se turnó a la Cámara de Diputados.*

Del Diputado Fernando Belaunzarán Méndez y de la Senadora Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a que, en todos los dictámenes de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, se privilegie el respeto a los derechos humanos, específicamente a la libertad de expresión y con especial referencia al caso de la revista Cáñamo.- *Se turnó a la Cámara de Diputados.*

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de los estados y del Distrito Federal a reforzar las medidas para prevenir los accidentes automovilísticos ocasionados por el uso de teléfono celular y otros dispositivos electrónicos.- *Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores.*

De la Diputada Heidy Guadalupe Estrada Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades federales y locales competentes en materia ambiental, de ordenamiento territorial y urbano, así como de fiscalización superior, a dar seguimiento al proyecto minero a cielo abierto "Los Cardones" en la reserva de la Biosfera de Sierra La Laguna del municipio de La Paz, Baja California Sur.- *Se turnó a la Cámara de Diputados.*

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal un informe sobre los mecanismos de capacitación y formación profesional para que las y los jueces juzguen y emitan sus resoluciones con perspectiva de género.- *Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género de la Cámara de Senadores.*

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a reforzar la normatividad, vigilancia y supervisión de las clínicas y establecimientos en los que se practican cirugías plásticas y estéticas.- *Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores.*

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y al titular de poder ejecutivo del estado de México a tomar en cuenta la situación de la entidad y emitan políticas públicas eficientes de combate al feminicidio y a la desigualdad de género.- *Se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género de la*

Cámara de Senadores.

De la Diputada Martha Lucía Mícher Camarena y de la Senadora Martha Tagle, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al congreso de Nuevo León a excluir del orden del día de su periodo extraordinario de sesiones la discusión sobre reforma al artículo 1 de su Constitución.- *Se turnó a la Cámara de Diputados.*

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Turismo y a la Comisión Nacional de Seguridad a reforzar sus acciones en el marco del "Operativo Verano 2015" con motivo de la conclusión de las vacaciones de verano y regreso a clases en el país.- *Se turnó a la Comisión de Turismo de la Cámara de Senadores.*

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador y a la Procuraduría General de Justicia del estado de México a implementar las acciones integrales de previsión y combate al secuestro para garantizar la seguridad de los mexiquenses.- *Se turnó a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Senadores.*

De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a ampliar los plazos del Acuerdo de Asistencia Técnica Internacional con el Grupo Interinstitucional de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.- *Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores.*

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las entidades federativas a fortalecer los programas de orientación vocacional en la educación media superior, a fin de que los estudiantes identifiquen con mayor claridad las opciones profesionales que tienen.- *Se turnó a la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores.*

Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar las razones que motivaron la disolución de la Coordinación para la Atención Integral de Migración en la Frontera Sur.- *Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Senadores.*

Del Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de

Hidrocarburos a cancelar los procesos licitatorios de la denominada Ronda Uno.- *Se turnó a la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores.*

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal, al de los 31 estados y al del Distrito Federal a implementar o, en su caso, intensificar campañas informativas sobre las acciones de prevención, control y fomento sanitario para evitar daños a la salud ante el diagnóstico de altas temperaturas en diversas entidades del país.- *Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores.*

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades federales a realizar acciones tendientes a prevenir y sancionar el cambio de equipaje o "siembra" de maletas con algún tipo de droga en aeropuertos nacionales e internacionales.- *Se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores.*

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas de las entidades federativas a llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar que las escuelas privadas cuenten con los registros de validez oficial.- *Se turnó a la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores.*

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo para crear una comisión especial de observación electoral *in situ* de las elecciones legislativas en la República Bolivariana de Venezuela, compuesta por legisladores mexicanos de todas las fuerzas políticas.- *Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe de la Cámara de Senadores.*

Del Diputado Roberto Ruíz Moronatti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Gobierno del Distrito Federal a fortalecer las medidas de prevención y atención de los incendios forestales ocurridos dentro de su territorio.- *Se turnó a la Cámara de Diputados.*

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, se consideren los requerimientos de los municipios de Agua Blanca de Iturbide y de Pacula, del estado de Hidalgo.- *Se turnó a la Cámara de Diputados.*

Del Diputado Alejandro Rangel Segovia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia a recuperar y restaurar la zona arqueológica Cuahilama.- *Se turnó a la Cámara de Diputados.*

De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a prestar asistencia humanitaria a la República Bolivariana de Venezuela ante el desabasto de medicamentos que enfrenta.- *Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe de la Cámara de Senadores.*

De las Diputadas Aleida Alavez Ruiz, Lizbeth Rosas Montero, Lorenia Valles Sampedro y Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación; de la Procuraduría General de la República, de la Comisión Nacional de Seguridad Nacional y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional a remitir a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional la información comprometida en su comparecencia del 16 de julio pasado sobre la evasión de Joaquín Guzmán Loera.- *Se turnó a la Cámara de Diputados.*

De las Senadoras Graciela Ortiz González, Ana Lilia Herrera Anzaldo y Mariana Gómez del Campo, con punto de acuerdo por el que la comisión permanente insta al Gobierno Federal a informar del número de observatorios estatales de lesiones instalados.- *Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores.*

Del Diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Gobierno del Distrito Federal a dar solución a las averías y la falta de seguridad del corredor peatonal cultural "Regina" ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México.- *Se turnó a la Cámara de Diputados.*

(Efemérides)

El Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitió efeméride sobre el Día Internacional del Peatón, el 17 de agosto.- *Se insertó en el Diario de los Debates.*

La Senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el "Día Mundial de la Asistencia Humanitaria".- *Se insertó en el Diario de los Debates.*

El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitió efeméride sobre el “Día Mundial de la Asistencia Humanitaria”.- *Se insertó en el Diario de los Debates.*

El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el "Día Mundial de la Asistencia Humanitaria".- *Se insertó en el Diario de los Debates.*

La Senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitió efeméride sobre el "Día Conmemorativo de la Promulgación de la Primera Ley Federal del Trabajo del 18 de agosto de 1931".- *Se insertó en el Diario de los Debates.*

(Agenda política)

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron intervención para referirse a la política exterior.- *Se insertó en el Diario de los Debates.*

Los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron intervención para referirse a la situación política nacional.- *Se insertó en el Diario de los Debates.*

La Presidencia dio por concluida la sesión, a las quince horas con diecinueve minutos y citó para la siguiente sesión el miércoles veintiséis de agosto a las once horas, en el recinto de Xicoténcatl, número 9, Centro Histórico.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
COMISIÓN PERMANENTE

REGISTRO DE ASISTENCIA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE, CELEBRADA EL DIA MIÉRCOLES 19 DE AGOSTO DE 2015

Diputado Adame Alemán Juan Pablo.
Diputada Aguilar Gil Lilia.
Senador Amador Gaxiola Daniel.
Diputado Añorve Baños Manuel.
Senador Barbosa Huerta Miguel.
Senador Bartlett Díaz Manuel.
Diputado Belaunzarán Méndez Fernando.
Diputado Cárdenas del Avellano Enrique.
Senador Cavazos Lerma Manuel.
Diputada Cerda Franco María Sanjuana.
Senadora De la Peña Gómez Angélica.
Senadora Domínguez Arvizu María Hilaria.
Senador Flores Ramírez Juan Gerardo.
Senador Gamboa Patrón Emilio.
Senadora Gómez del Campo Gurza Mariana.
Diputado González Morfín José.
Diputado González Rodríguez Danner.
Diputado Guevara González Javier Filiberto.
Diputado Heredia Lizárraga Martín Alonso.
Senador Hernández Deras Ismael.
Senador Herrera Ávila Fernando.
Senador Juárez Cisneros René.
Diputado León Mendívil José Antonio.
Diputado Montano Guzmán José Alejandro.
Senadora Ortiz González Graciela.
Diputado Rangel Segovia Alejandro.
Senador Robledo Aburto Zoé.
Diputado Rodríguez Doval Fernando
Senador Romero Hicks Juan Carlos.
Senador Romo Medina Miguel.
Diputada Rosas Montero Lizbeth Eugenia.
Diputado Ruiz Moronatti Roberto.
Diputada Ruiz Sandoval Cristina.
Diputada Saldaña Fraire Graciela.
Diputado Torres Mercado Tomás.

ATENTAMENTE

DIPUTADA CRISTINA RUIZ SANDOVAL
SECRETARIA

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Oficio por el que informa de la renuncia del señor Marcos Fastlicht Sackler como integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

PRESIDENCIA

México, D. F., a 21 de agosto de 2015.

SENADOR LUIS MIGUEL GERÓNIMO BARBOSA HUERTA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA H. CÁMARA DE SENADORES

Distinguido Senador Barbosa Huerta:

Anexo a la presente, le envío copia de la carta con la cual el señor **Marcos Fastlicht Sackler**, presenta su renuncia como integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Lo anterior, para su conocimiento y efectos legales conducentes.

Hago propicia la ocasión para reiterarle las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ
PRESIDENTE

C.c.p.- **Sen. Angélica de la Peña Gómez** – Presidenta de la Comisión Derechos Humanos de la Cámara de Senadores. Presente.
C.c.p.- **Lic. Joaquín Narro Lobo** – Secretario Técnico del Consejo Consultivo de la CNDH. Presente.
C.c.p.- **Sr. Marcos Fastlicht Sackler** – Integrante del Consejo Consultivo de la CNDH. Presente.

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES

Una, del Sen. Javier Corral Jurado, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 26 de agosto de 2015.

JAVIER CORRAL JURADO
SENADOR DE LA REPÚBLICA

México, Distrito Federal, a 25 de agosto de 2015
JCJ/0389/2015

RECIBIDO 25 AGO 15 17:57 SENADO DE LA REPÚBLICA COMISIONES PERMANENTES 006700

Sen. Miguel Barbosa Huerta
Presidente de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión
Presente

Distinguido Senador Presidente:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, me permito informar a Usted mi reincorporación a las funciones legislativas como Senador de la República a la XLII Legislatura, a partir del día de mañana 26 de agosto del año en curso.

Lo anterior, para los efectos legales y administrativos correspondientes.

Le manifiesto las seguridades de mi distinguida consideración.

Atentamente

C.c.p.- Sen. Fernando Herrera Ávila. Coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la República. Presente.

Av. Paseo de la Reforma No. 135 Hemiciclo. Piso 6, Oficina 30 Col. Tabacalera
Delegación Cuauhtémoc México, D.F. C.P. 06030 Tel. 53 45 30 35
javier.corral@pan.senado.gob.mx

Una, del Dip. Damián Zepeda Vidales, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, a partir del 19 de agosto de 2015.

LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de Agosto de 2015

RECIBIDO
2015 AGO 21 PM 1:14
SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
CÁMARA DE DIPUTADOS
009677

SENADOR LUIS MIGUEL GERÓNIMO BARBOSA HUERTA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
P R E S E N T E

Estimado Presidente:

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por los artículo 6, numeral 1, fracción XVI; y 12, numeral 1, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar **LICENCIA POR TIEMPO INDEFINIDO**, para separarme de mis funciones legislativas como Diputado Federal de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, mismo que he venido desempeñando desde el 1 de Septiembre del 2012.

Para lo anterior, le solicito de la manera más atenta que dicha licencia surta efecto a partir del día 19 de Agosto del 2015 y sea sometida a consideración del pleno de esta soberanía de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Sin otro asunto en particular, agradezco la atención que sirva dar a la presente y aprovecho para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. DAMIÁN ZEPEDA VIDALES

Una, de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, con la que remite su Informe de actividades correspondiente al periodo septiembre 2014-agosto 2015.

EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ESTE DÍA.

Una, de la Sen. Marcela Guerra Castillo, con la que remite el Informe que presenta en su calidad de Presidenta de ParlAmericas, con motivo de las reuniones de trabajo sostenidas en ocasión de la VI Reunión de la Red Parlamentaria Latinoamericana de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Probidad, el 6 de agosto de 2015; así como el II Encuentro del Foro Interamericano de Presidentes de Poderes Legislativos, los días 6 y 7 de agosto de 2015, ambos eventos celebrados en Santiago de Chile, Chile.

EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ESTE DÍA.

Una, del Sen. Teófilo Torres Corzo, con la que remite el Informe de las reuniones que sostuvo, conjuntamente con la Sen. Marcela Guerra Castillo, en Maui, Hawaii, del 28 al 31 de julio de 2015, en ocasión de la reunión ministerial el Acuerdo de Asociación Transpacífico.

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
ASIA-PACÍFICO

Senador Teófilo Torres Corzo
Presidente

México, D.F., a 25 de agosto de 2015.
CS/LXII-3/CREAP/316/2015.

Senador Miguel Barbosa Huerta
Presidente de la Mesa Directiva
H. Comisión Permanente
Segundo Receso del Tercer Año
LXII Legislatura
P r e s e n t e.

Distinguido Presidente Barbosa:

Me permito hacerle llegar el Informe de trabajo de las reuniones que la senadora Marcela Guerra Castillo y el que suscribe, sostuvimos en Maui, Hawaii del 28 al 31 de julio de 2015, en ocasión de la reunión ministerial del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP).

Lo anterior solicitando sus amables instrucciones a fin de que sea incluido en el Orden del Día de la sesión ordinaria del miércoles 26 de agosto del presente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 283 fracción VI del Reglamento del Senado de la República.

No omito señalar que se adjunta la versión electrónica del informe en comento, para facilitar la publicación del documento en la Gaceta Parlamentaria.

Sin otro particular, le reitero mi más alta consideración.

Atentamente,

CÁMARA DE SENADORES
SECRETARÍA GENERAL DE
SERVICIOS PARLAMENTARIOS
2015 AGO 25 PM 1 36
RECIBIDO
060720

Nota: Se adjunta lo anteriormente señalado.

c.c.p. **Dr. Arturo Garita Alonso**, *Secretario General de Servicios Parlamentarios*. Para su conocimiento y atención.

Av. Paseo de la Reforma No. 135, Torre de Comisiones Piso 9 Oficina 4, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030, México, D.F.
Tel. (52-55) 5345 3536 asiapacifico@senado.gob.mx

INFORME QUE PRESENTAN LOS SENADORES TEÓFILO TORRES CORZO Y MARCELA GUERRA CASTILLO CON MOTIVO DE LAS REUNIONES DE TRABAJO SOSTENIDAS EN OCASIÓN DE LA REUNIÓN MINISTERIAL DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO (TPP) CELEBRADA EN MAUI, HAWAII, DEL 28 AL 31 DE JULIO DE 2015.

Del 28 al 31 de julio de 2015, los senadores Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico y Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, sostuvieron reuniones de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal y representantes de sectores productivos en México, quienes participan en las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico.

Lo anterior en cumplimiento del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República por el que se designó a los senadores con el objeto de que acompañen y se informen oportunamente del avance del proceso de negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) conducidas por el Poder Ejecutivo Federal del Gobierno de la República.

Dichas reuniones se llevaron a cabo bajo el formato denominado *cuarto de junto* donde los funcionarios de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal informaban a los senadores del avance de las negociaciones que se estaban llevando a cabo entre los equipos negociadores de los países miembros del TPP.

1

Primera reunión de trabajo con el Secretario Guajardo y el Subsecretario De Rosenzweig.

Tuvo lugar un primer encuentro de trabajo con el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo y el Subsecretario de Comercio Exterior, Francisco de Rosenzweig en una reunión con los representantes de los sectores productivos presentes en esta ronda de negociaciones.



Encuentro de trabajo con el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo y el Subsecretario de Comercio Exterior, Francisco de Rosenzweig con representantes del Sector Empresarial; Planta Productiva en Industria de Servicios en México.

2



Senadora Marcela Guerra, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con el Secretario de Economía Ildefonso Guajardo.



Intervención de la Senadora Marcela Guerra, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, durante la reunión con el Secretario de Economía Ildefonso Guajardo, el Subsecretario de Comercio Exterior, Francisco de Rosenzweig y el Lic. Roberto Zapata Barrada, Jefe Negociador del TPP de la Subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaria de Economía con representantes del Sector Empresarial; Planta Productiva en Industria de Servicios en México.

4

Reuniones de trabajo con sectores productivos nacionales

En la reunión se escucharon de primera mano los intereses e inquietudes de cada sector y la manera en que se han venido dando sus consultas y posicionamientos con el gobierno de México.

Posteriormente, se sostuvieron varias reuniones de trabajo de manera individual con los integrantes del *cuarto de junto*, conformado por representantes de diversos sectores productivos como los que se enumeran a continuación:

Área	Organismo representante
Sector Agropecuario	• Consejo Nacional Agropecuario
Arroz	• Consejo Mexicano del Arroz
Bovino	• Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas
Lácteos	• Federación Mexicana de Lechería A.C. (FEMELECHE) • Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG)
Pesca	• Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola (CANAINPESCA)
Procesadores de Cítricos	• Asociación Nacional de Procesadores de Cítricos (ANAPROCI)
Tabaco	• Consejo Nacional Agropecuario (CNA)
Tequila	• Consejo Regulador del Tequila (CRT)
Sector Industrial	• Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) • Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA)
Automotriz	• Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) • Nissan Mexicana, S.A. de C.V.
Autopartes	• Industria Nacional de Autopartes, A.C. (INA)
Manufacturas eléctricas	• Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas (CANAME)

5

Industria del vestido	• Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CANAIVE)
Industria textil	• Cámara Nacional de Industria Textil (CANAINTEX)
Calzado	• Consejo Nacional de Cámaras de Calzado (CONCALZADO) • Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG)
Industria química	• Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ)
Industria farmacéutica de genéricos	• Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos A.C. (ANAFAM)
Industria Farmacéutica de Innovadores	• Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica A.C. (AMIF).

6

Segunda reunión de trabajo con el Secretario Guajardo, el Subsecretario De Rosenzweig y el resto del equipo negociador mexicano.

Durante los días de la negociación, se recibieron informes referentes a las áreas y objetivos a abordar en el Acuerdo de Asociación Transpacífico.

Se dio una breve explicación del panorama general sobre el estado y la perspectiva de las negociaciones.



La Senadora Marcela Guerra, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte y el Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia Pacífico, recibiendo informes del equipo negociador mexicano sobre las áreas y objetivos a abordar en el TPP

7

También se informó sobre el gran avance de éstas y se explicaron los temas particulares en los que aún falta llegar a un acuerdo entre los distintos gobiernos de los países que participan en el TPP con el fin de alcanzar el fin la conclusión de las negociaciones. Se comentó que, como resultado de las negociaciones, se había logrado obtener acceso adicional a los mercados de Japón, Australia, Nueva Zelandia, y los demás integrantes del Acuerdo de Asociación Transpacífico en productos de interés de exportación para México.



Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia Pacífico, con el Subsecretario de Comercio Exterior, Francisco De Rosenzweig y el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.

De igual forma, se indicó que respecto a las concesiones ofrecidas a los países del *TPP*, se buscó proteger los productos sensibles para México con tiempos más largos de desgravación y la posibilidad de recurrir a la utilización de cuotas arancelarias a la importación.

8

Se comentó que durante todo el proceso de negociación se mantuvo comunicación constante con las organizaciones concentradas en el *cuarto de junto*, prestando especial atención a sus intereses e inquietudes.

Se dijo que el Acuerdo de Asociación Transpacífico constituye una plataforma para impulsar el comercio y fomentar la integración comercial de México en la región Asia-Pacífico, la cual representa uno de los polos industriales más dinámicos y de mayor crecimiento en el mundo.

A continuación, se hace referencia a los informes recibidos sobre las áreas de negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico:

Empresas Propiedad del Estado y Monopolios designados

Se indicó que el objetivo del Capítulo es promover la igualdad de condiciones entre las Empresas Propiedad del Estado (SOEs) y Monopolios Designados (MD); y las Empresas Privadas, a través de disciplinas que impulsen el buen gobierno corporativo, las buenas prácticas empresariales y la transparencia.

Las disciplinas del Capítulo, se establecieron para que las SOEs y los Monopolios Designados no afecten el comercio o la inversión entre los países del TPP y se aseguren de actuar de acuerdo a consideraciones comerciales, en donde no se distorsione el mercado, ni se obtengan ventajas competitivas en la compra y venta de bienes, servicios e inversión, por el uso indebido de apoyos gubernamentales que las empresas privadas no reciben.

El Capítulo estará sujeto a las disposiciones sobre solución de controversias, por lo que si se comprueba que una Empresa en su accionar, desplaza un producto o servicio por su poder monopólico, la Parte afectada podrá iniciar un caso a través del mecanismo de solución de controversias.

En las recientes reuniones técnicas de negociación hubo avances importantes en el texto del Capítulo, el cual está cerca de ser acordado. En cuanto a los anexos, cada país continúa revisando puntos específicos de sus reservas, tomando en cuenta los comentarios recibidos por las demás Partes. México busca introducir

9

las reservas necesarias para el debido funcionamiento de las Empresas en manos del Estado Mexicano, involucrando en todo momento a las Dependencias encargadas de los temas.

Reglas de Origen

Se explicó que las reglas de origen son una herramienta indispensable para los acuerdos comerciales como es el caso del *TPP*. El objetivo de las reglas es establecer los procesos de producción requeridos para la fabricación de las mercancías negociadas en el Tratado, a fin de que les sea otorgado el arancel preferencial determinado.

Se mencionó que en esta negociación algunas Partes mantienen posturas que privilegian el suministro y abastecimiento de insumos a nivel global, es decir, que éste provenga de países donde exista actualmente una cadena de abastecimiento desarrollada. Mientras que otras sostienen un enfoque de abastecimiento regional, con el fin de fomentar la integración de cadenas productivas. Dada la divergencia de visiones, durante el proceso de negociación se han tratado de buscar balances que permitan atender necesidades e intereses particulares de cada país.

Facilitación del Comercio

Se indicó el alcance de las negociaciones en materia de facilitación del comercio, cuyas disposiciones complementan lo alcanzado recientemente en la Conferencia Ministerial de Bali, llevada a cabo en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La finalidad de este capítulo en el *TPP* es hacer el despacho de las mercancías más ágil y fluido, establecer medidas para lograr una cooperación efectiva entre las aduanas, promover la asistencia técnica y creación de capacidades. Se busca así mismo, lograr un suministro logístico más eficiente de manera rápida y a bajo costo.

Propiedad Intelectual

Se informó que en el capítulo de Propiedad Intelectual se lograron avances importantes en los temas aún pendientes, entre los que destaca el entendimiento alcanzado en la sección de indicaciones geográficas (IGs). Actualmente, el texto prevé la aplicación de las disciplinas del TPP a IGs protegidas en acuerdos internacionales, cuando esos acuerdos sean suscritos por alguna de las partes en fecha posterior a la entrada en vigor del TPP.

Las disciplinas que se aplicarían en esos casos, tienen que ver fundamentalmente con la aplicación de procedimientos de oposición y bases para tales efectos. Mientras tanto, se excluyen de la aplicación de las disciplinas del TPP las IGs ya reconocidas en tratados existentes (lo que salvaguarda la protección obtenida para denominaciones de origen como el tequila, en acuerdos internacionales celebrados por México en el pasado) y, respecto de IGs que sean reconocidas en el futuro con base en esos tratados, solo se establecen obligaciones mínimas de transparencia.

Se añadió que un tema pendiente que probablemente requerirá discusión Ministerial, es el de patentes farmacéuticas, el cual está compuesto por los siguientes elementos:

- Protección de datos para productos fármaco-químicos y agroquímicos
- Protección de datos para biológicos
- Vinculación
- Extensión de patentes para compensar retrasos en el otorgamiento de registro sanitario a productos farmacéuticos;
- Procedimientos vejatorios
- Periodos de transición

Servicios

En materia de servicios, se compartió que el TPP tiene disciplinas sobre comercio de servicios (Comercio Transfronterizo de Servicios, Servicios Financieros,

Telecomunicaciones, Comercio Electrónico, Entrada Temporal de Personas de Negocios), además de algunas disposiciones en el capítulo de inversión que aplican a servicios (la inversión puede ser en bienes o en servicios) y las listas de compromisos de servicios e inversión, que se llaman Anexos de Medidas Disconformes.

A diferencia de los bienes, en materia de servicios, las barreras al comercio se encontrarán en la legislación de cada Parte. Por ejemplo, a través de requisitos de nacionalidad, residencia, o barreras al buscar obtener una licencia para prestar un servicio. Se explicó el caso particular de los servicios profesionales y las disposiciones del TPP que fomentan la negociación de acuerdos de reconocimiento mutuo para el ejercicio profesional. Se comentó sobre los servicios de consultoría y el efecto de las cláusulas que congelan la apertura vigente (*standstill*) a la entrada en vigor del Tratado, así como cualquier apertura unilateral futura (*ratchet*).

Compras de Gobierno

Se informó que el capítulo de compras del Estado, quedan establecidas las disciplinas que deberán observar los países en los procesos de contratación pública, tales como la no discriminación entre proveedores; igualdad de oportunidad en términos de la información relacionada con la contratación; especificaciones técnicas de los bienes y servicios a contratar basados en criterios objetivos; plazos iguales para todos los proveedores; prohibición en relación con la imposición de condiciones compensatorias como contenido nacional que ponga en desventaja la proveeduría nacional y extranjera; y principios generales que deberán observarse en los procedimientos de impugnación de los actos que integran los procesos de licitación pública.

Este capítulo otorga certidumbre jurídica tanto a proveedores extranjeros que pretendan participar en el mercado de contratación pública de nuestro país, como a los proveedores mexicanos que pretendan participar en los procesos de compras del sector público de los otros países del *TPP*, abriendo nuevas

12

oportunidades de negocio a nuestra industria y transparentando el sistema de compras de gobierno en nuestro país al mismo tiempo.

Inversión

Se puntualizó que el Acuerdo de Asociación Transpacífico, contiene un capítulo de inversión que establece los compromisos que adquieren los países del *TPP* con relación a la inversión extranjera que reciben. Estas disposiciones otorgan certidumbre jurídica en materia de trato no discriminatorio (trato nacional, trato de nación más favorecida y nivel mínimo de trato), regulación de requisitos de desempeño, reglas claras sobre la expropiación de inversiones, entre otras.

Asimismo, el capítulo de inversión contiene un mecanismo de arbitraje que otorga a los inversionistas extranjeros el derecho de someter a arbitraje una disputa en contra de un estado cuando considera que la actuación de éste último es violatoria de alguno de los compromisos que adquieren los países, y que, como consecuencia de lo anterior, sus inversiones han sido objeto de daños y perjuicios.

Estructura jurídica del Acuerdo de Asociación Transpacífico

Sobre los temas relacionados con disposiciones legales, se dijo que el *TPP* coexistirá con otros Tratados de Libre Comercio celebrados con países miembros de las negociaciones (Japón, Canadá, Estados Unidos, Chile y Perú), lo que permitirá la prevalencia de la disposición con el estándar más exigente en beneficio del libre comercio, y en cualquier caso se prevén disposiciones que permitirán solucionar posibles contradicciones entre estos instrumentos mediante consultas entre los países parte de dichos tratados.

Aunado a lo anterior el TPP contendrá un capítulo general de solución de controversias entre Estados, relacionados con la aplicación y correcta interpretación de los compromisos comerciales, así como un mecanismo Inversionista-Estado para solucionar conflictos entre los inversionistas y el Estado receptor de la inversión.

13

Comercio y trabajo

Se compartió que el Acuerdo de Asociación Transpacífico contendrá un capítulo similar al que México negoció con Canadá y Estados Unidos sobre cuestiones laborales, relacionadas con los principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que pudieran tener relación con el comercio y la inversión, a fin de mantener en los países del *TPP* un mayor compromiso con las obligaciones internacionales de México en materia de trabajo, en beneficio de nuestros trabajadores.

Acceso a Mercados

Se indicó que se llevaron a cabo negociaciones con todos los países integrantes del Acuerdo de Asociación Transpacífico, y que los avances son particularmente desarrollados con Perú, Brunei, Chile, Singapur, Japón, Australia, Malasia, y Vietnam.

Se añadió que en todo momento se ha sostenido contacto continuo con las organizaciones que conforman el *cuarto de junto*, a fin de cohesionar la posición de México, tanto en los intereses de sus industrias exportadoras, como en las concesiones mexicanas en aquellos productos de interés para los países del *TPP*.

14

INFORMES DE LAS COMISIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE

De la Primera Comisión, con la que remite su Informe de actividades correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura.

De la Segunda Comisión, con la que remite su Informe de actividades correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura.

De la Tercera Comisión, con la que remite su Informe de actividades correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
COMISIÓN PERMANENTE

TERCERA COMISIÓN

Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas

México, D.F., a 25 de agosto de 2015.

SEN. MIGUEL BARBOSA HUERTA
Presidente de la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión,
P r e s e n t e .

Adjunto al presente el **Informe de Actividades de la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,** correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura, solicitando a usted se haga del conocimiento del Pleno.

Atentamente

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO
Presidente

Anexo: Informe de Actividades.

EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ESTE DÍA.

INICIATIVAS

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con aval de grupo, con proyecto de decreto por el que se expide la nueva Ley General de Combate a la Corrupción y Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Las y los suscritos Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numerales 1 y 3, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente, del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente **INICIATIVA CON AVAL DE GRUPO POR LA QUE SE EXPIDE LA NUEVA LEY GENERAL DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS**. Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El combate a la corrupción y la pugna por la limpieza de la vida pública emergen del programa histórico del Partido Acción Nacional desde su fundación en 1939.

En 1946, en su informe a la Convención Nacional del Partido Acción Nacional, Manuel Gómez Morín, al hablar de la Limpieza de la vida pública como condición para el cambio, sentenció:

"Este es el clima actual de México, saturación ya intolerable de fatiga y nauseas por la corrupción de la vida pública"

Este mismo sentimiento persiste setenta años después, la percepción de la ciudadanía respecto de la corrupción continúa *in crescendo*, y de manera proporcional y paralela decrece la legitimidad de las instituciones democráticas. Los mexicanos hoy vivimos en un clima de duda ciudadana e institucional.

La desconfianza ciudadana tanto en las instituciones como en la clase política está más que justificada. Todos los días se conocen y se denuncian hechos de corrupción.

Contrario a las afirmaciones del Presidente, la corrupción no es una cuestión cultural inherente a los mexicanos, hemos generado incentivos perversos. Las recompensas se han invertido, negociar, evitar o incumplir la ley es más efectivo, fácil y barato que respetarla. Este es el caldo de cultivo perfecto para que ser honesto sea muy complicado.

Desde su creación, el Partido Acción Nacional ha pugnado por combatir prácticas corruptas, sin embargo, a estas alturas, nadie puede tirar la primera piedra, la corrupción ha rebasado a las instituciones del Estado, poniendo en peligro la subsistencia del sistema democrático.

Precisamente por ello hoy, con esta propuesta de Ley General de Combate a la Corrupción y las otras leyes secundarias en materia anticorrupción, los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional refrendamos nuestro compromiso con la ciudadanía a través de la creación, impulso y aprobación de herramientas legislativas a favor de la integridad y rendición de cuentas.

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional confía en que solo se puede alcanzar la regeneración y renovación nacional no sólo a través de nuevos paradigmas legales sino también de verdaderos esfuerzos institucionales de todos los servidores públicos que integran al Estado mexicano.

Las cifras de la corrupción son contundentes y frustrantes, sin embargo como lo sentenció Manuel J. Clouthier:

"...un gran número de mexicanos dejamos de llorar por el país que se frustró, el México que pudo haber sido y no es, para ocuparnos en la construcción del México que por su historia, su cultura, sus recursos, su posición geográfica y su gente todavía puede y deber ser"

Hoy el Partido Acción Nacional, a través de su Grupo Parlamentario en el Senado en la víspera de la LXIII

Legislatura, presenta a la Nación este esfuerzo legislativo como prueba de su compromiso por inhibir el ya insoportable clima de corrupción e impunidad, a través de la generación de un entorno de integridad en el servicio público para cambiar el rumbo del país hacia una democracia sólida, los mexicanos no merecemos menos.

Los sistemas democráticos pierden legitimidad, y con ella pierden credibilidad, cuando los intereses de uno o de unos cuantos parecen ser más importantes que aquellos expresados por toda una nación a través de sus instituciones.

La lógica es simple. Los sistemas democráticos se han convertido en el paradigma del mundo occidental precisamente porque son el modelo más eficaz para incorporar a toda una sociedad en la dirección que tomará el país, en todos los rubros relevantes.

Cuando esta sociedad observa que a pesar de haber participado en el proceso democrático, la voluntad privada y los intereses de unos cuantos prevalece, se pierde la confianza en el sistema, y éste pierde arraigo en la sociedad a la que gobierna.

Así, el combate a la corrupción es también un elemento esencial de supervivencia del modelo democrático de un país. El combate a la corrupción se convierte en un elemento esencial para mantener la idea de que es el colectivo social el que toma las decisiones y su opinión sí importa.

Fenómeno y preocupación internacional

En los últimos años, este fenómeno ha cobrado relevancia mundial por su impacto, por su trascendencia y por su universalidad.

Hace apenas algunos años, se percibía como una enfermedad de los países subdesarrollados. Hoy se entiende que no existe país en el mundo, por desarrollado que sea, que esté libre del fenómeno de la corrupción.

Uno tras otro se acumularon los escándalos en países de todo tipo, y así, el tema se colocó como un elemento de subsistencia y gobernanza en todas las regiones del mundo.

Esto dio pie a numerosas reuniones en organismos internacionales, foros de discusión, creación de estudios y herramientas de análisis y medición, y finalmente, a la creación de instrumentos jurídicos internacionales que por primera vez intentan abordar el problema de forma integral.

En la mayoría de las agendas de los organismos internacionales más trascendentes, el tema dejó de ser un complemento secundario, y se convirtió en tema central.

Por ejemplo, el G20 creó en 2010 un grupo de trabajo especial, que elaboró un *Anti-Corruption Action Plan,* que en su introducción establece:

> *G20 Leaders established the Anti-Corruption Working Group (ACWG) at the Toronto Summit in 2010 in recognition of the significant negative impact of corruption on economic growth, trade and development. At the end of 2014, corruption continues to represent a significant threat to global growth and financial stability. Corruption destroys public trust, undermines the rule of law, skews competition, impedes cross-border investment and trade, and distorts resource allocation. As a group of the world's largest economies, the G20 remains committed to reducing the incidence of corruption and building a global culture of intolerance towards corruption.*

El 31 de octubre de 2003, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción, en Nueva York. Esta es sin duda la Convención más importante y completa sobre el tema. Se abrió a la firma de los países miembros de UN del 9 al 11 de diciembre de 2003, en Mérida Yucatán, México. (Es por esto que se le conoce como la Convención de Mérida).

México la firmó el 9 de diciembre de 2003, y la ratificó el 20 de julio de 2004.

Al día de hoy cuenta con 175 Estados signatarios, y 140 que ya han ratificado el documento después de sus procesos legales internos. Esto la convierte en una de las Convenciones más populares, dada la gran aceptación en tan corto plazo.

En el Prefacio de la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción se dice:

> *La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los merca- dos, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana.*
>
> *Este fenómeno maligno se da en todos los países —grandes y pequeños, ricos y pobres— pero sus efectos son especialmente devastadores en el mundo en desarrollo. La corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque desvía los fondos destinados al desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia y desalienta la inversión y las ayudas extranjeras. La corrupción es un factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el desarrollo.*

Una de las conclusiones más interesantes, surgida de las discusiones que precedieron a la firma y ratificación de esta Convención (que se relata en el "United Nations Handbook on Practical Anti-Corruption Measures for Prosecutors and Investigators", publicado por esta Organización, en Viena, en septiembre de 2004) fue que era prácticamente imposible asumir una definición única y general del concepto "Corrupción".

Según este documento, quienes discutieron y finalmente acordaron la redacción de la Convención más importante sobre el tema, llegaron a la conclusión de que era muy difícil, y poco práctico, establecer una definición que pretenda englobar y explicar el fenómeno en su conjunto.

En lugar de esto, decidieron tratar de explicarlo y conceptualizarlo, a través de las distintas formas y actos de corrupción que eran comunes entre las naciones que discutían la Convención. Y así, arribaron a una serie de conceptos básicos que permiten entender el fenómeno y sus variantes más comunes, y permiten también identificar las medidas y estrategias que se consideran mínimas y necesarias para combatir el fenómeno.

A partir de la propagación de estas ideas entre organismos internacionales, y la participación de toda la comunidad internacional, se ha creado una tendencia global que impulsa el combate directo, abierto y eficaz del fenómeno de la corrupción.

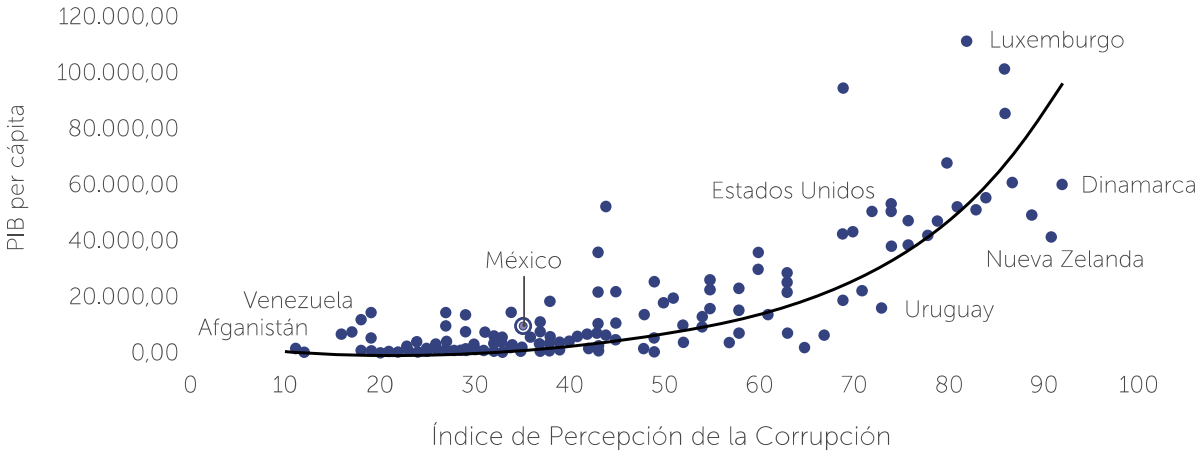
La Corrupción en México como amenaza a la Democracia y al Desarrollo

De acuerdo con el libro "México: Anatomía de la Corrupción", de la Doctora María Amparo Casar, publicado por el IMCO en mayo de 2015:

> *No es posible establecer una relación de causalidad inequívoca entre el PIB per cápita y los niveles de percepción sobre la corrupción pero ocurre que en la mayoría de los casos prevalece una correspondencia positiva entre ambos.*
>
> *Los países con PIB per cápita más alto tienen en promedio una calificación también más alta del Índice de Percepción de la Corrupción (es decir son menos corruptos) mientras que los países más pobres son los que tienen en promedio las calificaciones más bajas.*
>
> *No obstante la correlación no siempre se sostiene. Kuwait es uno de los países con mayor PIB per cápita en el mundo y su calificación alcanza sólo los 44 puntos en el IPC. Por su parte, México tiene un PIB per cápita de $10,305 USD y una calificación en el IPC de 35; es decir, nuestro país tiene la calificación en el IPC que promedian los países con un PIB per cápita entre dos y diez veces menor que el suyo.*

La relación entre el Índice de Percepción de la Corrupción y el PIB podría ser exponencial. Avanzar un poco en la calificación, digamos de 35 a 45, puede no rendir los frutos esperados pero si logra darse un salto significativo –cruzar el umbral de 60 de calificación- el impacto en el PIB podría ser también significativo.

Relación entre PIB per cápita e Índice de Percepción de la Corrupción



Fuente: IMCO, mayo 2015

La correlación entre las dos variables puede ser menos robusta de lo que se pensaba inicialmente. No obstante, es el caso que la corrupción afecta negativamente muchos de los determinantes del crecimiento y, por tanto, puede inferirse que el efecto de ella en el crecimiento también es negativa (Consequences of Corruption at the Sector Level and Implications for Economic Growth and Development, 2015). Además del crecimiento, la corrupción impacta también al desarrollo. A partir de la literatura analizada, la OCDE concluye en el mismo estudio que afecta negativamente algunas de las variables del bienestar que no están capturadas en las mediciones del PIB: desarrollo sostenible, salud y seguridad, equidad y otros tipos de capital cívico o social como es la confianza.

En este mismo libro publicado por el IMCO se hace referencia a un estudio realizado por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) en 2014, en el que claramente se destaca a la corrupción como el factor que en mayor medida inhibe un buen entorno de negocios:



Fuente: Encuesta Sobre Mejora Regulatoria, Gobernabilidad y Buen Gobierno en los Principales Municipios de México, Centro de Estudios Económicos del Sector Privado 2014

Según el reporte de Latinobarómetro de 2013, *"México tuvo alternancia en el poder después de 72 años de hegemonía del PRI, en el año 2000 con el triunfo de Vicente Fox. En ese momento el apoyo a la democracia alcanzaba 44%. El apoyo a la democracia tardó dos años, no fue hasta 2002 que aumenta a 63% manteniéndose alto durante todo el resto de la presidencia de Vicente Fox terminando con 59% en 2005. Felipe Calderón lo sucede e inaugura su gobierno con un 54% en 2006 para bajar rápidamente a 48% en 2007. La democracia no se recupera en el período de Felipe Calderón llegando a un mínimo de 40% en 2011.*

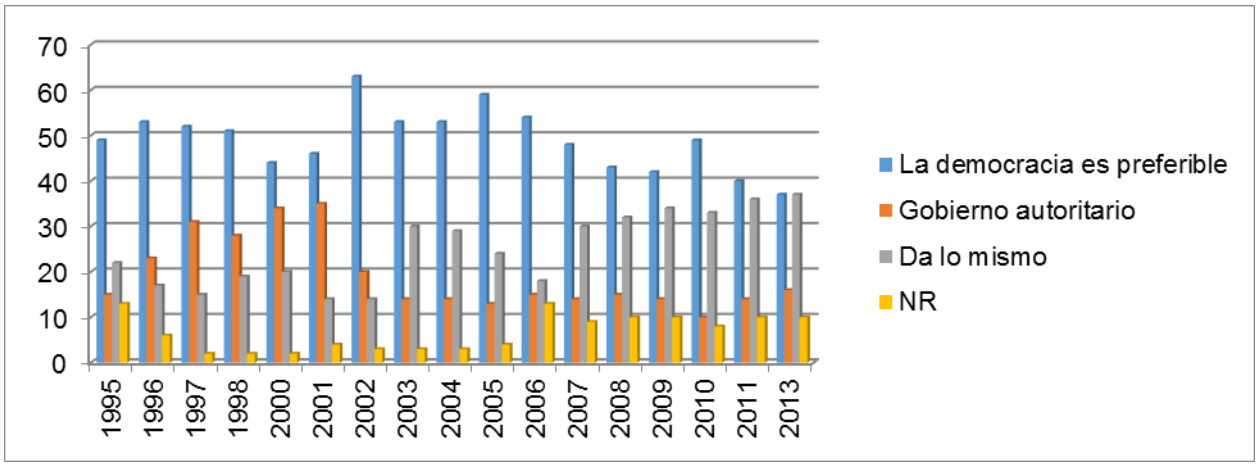
En 2012 vuelve el PRI al poder con Enrique Peña Nieto y México tiene en 2013 sólo un 37% de su población que apoya a la democracia.

El caso de México es uno donde la alternancia en el poder no produce un impacto inmediato sobre el apoyo a la democracia y después de un repunte se produce una perdida sostenida. En 2013 México ha perdido 12 puntos porcentuales de apoyo a la democracia respecto del promedio 1995 -2013. "

El conocido estudio que año con año realiza Latinobarómetro es muy interesante. No se trata de un análisis académico sobre la calidad de la democracia mexicana. Tampoco es un estudio sobre la eficacia de los procesos que hacen viable el sistema democrático mexicano. Se trata de un estudio de mera percepción que solicita a la gente su opinión sobre el sistema.

Las respuestas de la población pueden tener distintas causas. El reporte de cada año trata de desagregar las respuestas por sector socio económico, nivel de educación o problema que el encuestado considera más grave.

Lo interesante de la siguiente gráfica es que en el agregado del período 1995-2013, (que es aquel que los académicos expertos en transiciones democráticas, mexicanos y extranjeros, lo consideran como el periodo en que finalizó la transición e inició la consolidación democrática) este tipo de gobierno carece, en general, de apoyo social. A pesar de años de lucha por instaurar el sistema, y luego por consolidarlo, para el 2013, sólo el 37% de la población dice preferir este sistema, contra el mismo 37% que dice que "da lo mismo" y 16% que dice preferir un gobierno autoritario.



	1995	1996	1997	1998	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2013	Promedio 1995-2013	1995-2013	Dif. Promedio - 2013
democracia es preferible	49	53	52	51	44	46	63	53	53	59	54	48	43	42	49	40	37	49	12	12
obierno autoritario	15	23	31	28	34	35	20	14	14	13	15	14	15	14	10	14	16	19	-1	3
a lo mismo	22	17	15	19	20	14	14	30	29	24	18	30	32	34	33	36	37	25	-15	-12
R	13	6	2	2	2	4	3	3	3	4	13	9	10	10	8	10	10	7	3	-3

México se ubica en la poco honrosa tabla de países de la región que, en el agregado de 1995 al 2013, disminuyó en el apoyo a la democracia con 12% como se muestra en la siguiente tabla.

aíses de Latinoamérica en donde disminuyó el apoyo a la democracia entre 1995 y 2013

Costa Rica	16
México	12
Uruguay	7
Panamá	6
Honduras	3
Nicaragua	3
El Salvador	1

aíses de toda la región, concentrado 1995-2013

País	Apoyo	Autoritarismo	Indiferencia
Uruguay	78	15	10
Venezuela	71	19	11
Costa Rica	69	9	10
Argentina	68	17	12
Rep. Dominicana	65	9	8
Bolivia	56	15	15
Chile	55	15	26

Panamá	55	14	16
Perú	54	17	18
Nicaragua	53	12	19
El Salvador	50	13	20
Ecuador	49	19	19
México	49	19	25
Colombia	48	13	23
Honduras	47	13	21
Paraguay	45	34	17
Brasil	44	19	24

Las explicaciones sobre la falta de legitimidad del sistema democrático en México pueden ser varias: Los conflictos post electorales del 2006; la falta de crecimiento y desarrollo constante y suficiente de la economía en los últimos 20 años; la pobreza que no cede a pesar de innumerables políticas y esfuerzos; la falta de cultura democrática en la población en general; la pobreza ideológica, programática y organizacional de todos los partidos políticos del sistema; la violencia e inseguridad.

Distintos especialistas en estos temas han construido sólidos argumentos en torno a estos problemas como la causa de la falta de legitimidad de nuestro sistema democrático.

La propuesta de quienes suscriben esta iniciativa es que la corrupción, y sobre todo, la ineficacia en el combate, su tolerancia y la impunidad, han sido factores preponderantes en la falta de legitimidad del sistema democrático en nuestro país.

Transparencia internacional realiza año con año dos estudios consolidados de carácter distinto. El primero y más conocido genera un índice que mide la percepción sobre la corrupción en un país (Corruption Perceptios Index o CPI).

Como se puede observar en la siguiente tabla, y con base en el reporte 2013, la percepción de los mexicanos sobre el arraigo de la corrupción es muy grave. Con un CPI de 34, México es el país rankeado en el número 22 de la región, y 106 del mundo.

A pesar de que sólo es un dato sobre la percepción, y no sobre el estado que guarda realmente el fenómeno de la corrupción en un país, es muy interesante y relevante. De acuerdo con este índice, un CPI de 100 implica que la gente percibe a su país como absolutamente libre de corrupción.

Ningún país alcanza un CPI de 100, sin embargo, Dinamarca y Nueva Zelanda alcanzan una puntuación de 91, Finlandia y Suecia tienen un CPI de 89, y Noruega de 86. En la Región “Américas” donde se ubica México, Canadá obtiene una puntuación de 81.

En ese mismo índice, “0” quiere decir que la gente considera que su país es absolutamente corrupto.

El país con la peor puntuación de todos los que fueron analizados por este estudio es Somalia con un CPI de 8. En la región donde se encuentra México, Haití es el peor país con un CPI de 19.

Tabla Región Américas

Ranking Mundial	Ranking Región	País	CPI
9	1	Canada	81

15	2	Barbados	75
19	3	Uruguay	73
19	3	United States	73
22	5	Bahamas	71
22	5	Chile	71
22	5	Saint Lucia	71
33	8	Puerto Rico	62
33	8	Saint Vincent and the Grenadines	62
41	10	Dominica	58
49	11	Costa Rica	53
63	12	Cuba	46
72	13	Brazil	42
83	14	El Salvador	38
83	14	Jamaica	38
83	14	Peru	38
83	14	Trinidad and Tobago	38
94	18	Colombia	36
94	18	Suriname	36
102	20	Ecuador	35
102	20	Panama	35
106	22	Argentina	34
106	22	Bolivia	34
106	22	Mexico	34
123	25	Dominican Republic	29
123	25	Guatemala	29
127	27	Nicaragua	28
136	28	Guyana	27
140	29	Honduras	26
150	30	Paraguay	24
160	31	Venezuela	20
163	32	Haiti	19

México obtuvo un alarmante CPI de 34 en 2013, que lo coloca por debajo de países como China (CPI 40), El Salvador (CPI 38), Cuba (CPI 46), Rwanda (CPI 53) o Botswana (CPI 64).

Como lo señalan los críticos de este índice, poco refleja respecto de fenómeno de la corrupción, sus causas, sus orígenes o las posibles soluciones.

Pero respecto al sistema democrático, este índice puede ser muy ilustrativo. A pesar de que no conocemos un estudio que establezca una correlación directa entre la corrupción y la falta de legitimidad del sistema democrático, creemos que es posible hacer un buen argumento respecto de su conexión.

Es decir, se puede argumentar que los datos derivados de los reportes de Latinobarómetro desde 1995, respecto de la poca legitimidad de la democracia en México, y la percepción de la población sobre la

corrupción, pueden tener alguna relación.

Si la democracia es un sistema basado en la idea de que el gobierno es sólo un mandatario de la sociedad, y que está obligado a responder respecto de sus intereses, necesidades, problemas y propuestas, entonces la percepción de que estos son atendidos, es crucial.

Es decir, el sistema democrático supone ser aquel en el que se crean reglas básicas del juego, que todos están obligados a acatar. Con esas reglas, se procesan las contiendas políticas, y todos aceptan que quienes obtienen el voto favorable serán mandatarios de la sociedad por un periodo determinado. Estos representantes actuarán a nombre y en beneficio de aquellos a los que representan.

Según el estudio por Eurobarometer en 2013, el 73% de los daneses (Dinamarca CPI de 91) confían en sus diferentes órdenes de gobierno, igual que el 65% de los finlandeses (Finlandia CPI 89), el 61% de los suecos (Suecia CPI 89) así como el 65% de los alemanes (CPI 76). Noruega no forma parte del estudio de Eurobarometer, pero tiene un CPI de 86, una muy baja percepción de corrupción, y como se verá adelante, una alta confianza en sus instituciones.

México obtuvo su mejor puntuación en 2001 con un CPI de 37. En los años 2002, 2003 y 2004 obtuvo un CPI de 36, en 2006 y 2009 tuvo una caída hasta 33. Y el peor año fue 2011 con un CPI de 30.

Según los datos de Latinobarómetro, en 2001, el 46% de los mexicanos opinaban que era preferible la democracia, contra 35% que preferían un gobierno autoritario, y 14% que decían que daba lo mismo.

En 2011, el peor año en el índice de percepción sobre corrupción sólo el 40% preferían la democracia, contra 14% que preferían el gobierno autoritario y 36% que decían que daba lo mismo.

No se pretende aquí argumentar que hay una correlación directa. Pero los datos de estos dos estudios, independientes entre sí, son por lo menos muy interesantes.

En los últimos 13 años, una vez concluido el periodo de transición a la democracia, en México se ha mantenido un muy bajo apoyo al sistema democrático, al mismo tiempo que se ha mantenido una muy alta percepción sobre la incidencia de la corrupción.

Para profundizar en el tema, Transparency International creó otro estudio que puede dar aún más luz en el asunto. Se llama Global Corruption Barometer.

De las distintas preguntas que se realizan, se extrajeron los datos para México en el reporte 2013, de 6 preguntas. Los resultados son muy reveladores.

¿En los últimos dos años, cómo ha cambiado el nivel de corrupción en su país?

	Decrecido mucho	Decrecido un poco	Se mantuvo igual	Aumentó poco	Aumentó mucho
	%	%	%	%	%
México	1	7	21	19	52
Global	5	13	29	22	32

Según esta primera tabla, el 71% de los encuestados consideran que el nivel de corrupción ha aumentado en el país, 52% de éstos afirman que “mucho”. Según el estudio de Latinobarómetro, 2013 es el año que menos apoyo existe de la población respecto del sistema democrático, desde 1995, con 37%.

Si comparamos esta respuesta con lo que respondieron los daneses, sólo el 4% considera que aumento mucho, mientras el 12% de los finlandeses y noruegos piensan así.

Por su parte, el 23% de daneses, el 32% de finlandeses, y el 33% de los noruegos considera que aumentó poco.

¿Qué tan grave es el problema en el sector público en su país?

	1 - No es un problema	2	3	4	5- Es un problema muy serio	Escala 1- 5
	%	%	%	%	%	
México	1	1	5	14	79	4.7
Global	4	7	17	22	51	4.1

De la segunda pregunta se obtiene otro dato muy interesante. Según el 79% de los encuestados para este estudio, el problema de la corrupción en el sector público es muy serio. Es decir, no se trata de un asunto más para la población, sino de un problema crucial que debería ser atendido.

En el caso de Dinamarca, el 26% considera que no es un problema en lo absoluto, en Finlandia es el 9%, en Noruega el 5%.

Y sólo 3% de los daneses, 9% de los finlandeses y 11% de los noruegos cree que es un problema muy serio.

¿En el trato con el sector público, qué tan importantes son los contactos personales para resolver su necesidad?

	No es para nada importante	Es de poca importancia	Moderadamente importante	Importante	Muy Importante
	%	%	%	%	%
México	4	6	12	38	40
Global	7	10	19	34	31

La respuesta de la población mexicana deja en evidencia la confianza que éstos tienen a los canales institucionales que todo sistema democrático debería de tener. De acuerdo con el 78% de los encuestados, para resolver una necesidad, es importante (38%) o muy importante (40%) tener contactos personales en el trato con el sector público.

Esto es, la gente percibe que sin contactos personales en el sector público, sin una ventaja extra legal, es muy difícil resolver sus problemas.

¿Cómo puede funcionar un sistema democrático si la abrumadora mayoría de las personas considera que los canales institucionales no son suficientes y que necesita “algo” extra para resolver sus problemas?

En el caso de los daneses y los finlandeses, sólo el 15% respectivamente cree que es muy importante tener contactos personales en el trato con el sector público para resolver un problema. En el caso de los noruegos, 0% de la población piensa esto, 23% de los daneses, 21% de los finlandeses y 26% de los noruegos dice que es importante.

Sin embargo, 14% de los daneses, 15% de los finlandeses y el 16% de los noruegos cree que no es para nada importante tener contactos.

Esto refleja una importante confianza de los pobladores de estos tres países en los canales normales e institucionales para resolver problemas. En estas democracias no es necesario tener contactos, dinero extra o influencia para resolver un asunto que debe ser atendido por el Estado. De eso precisamente se trata la democracia.

¿Hasta qué punto el gobierno de su país está manejado por unas cuentas entidades que promueven sus propios intereses?

	Para nada	Hasta cierto punto	Algo	Mucho	Completo
	%	%	%	%	%
México	2	11	25	36	26
Global	6	13	28	36	19

Como se ha mencionado, la idea fundacional de la democracia es que el gobierno es sólo un mandatario temporal que debe cuidar y promover los intereses de toda la población. Una vez que concluye la contienda electoral, el gobierno electo y el parlamento deben escuchar, atender y responder a todas y cada una de las demandas e intereses que plantee la población.

De acuerdo con los datos de este estudio, el 62% de la población mexicana considera que el gobierno está manejado "mucho" (36%) o completo (26%) por unas cuantas entidades que promueven sus propios intereses.

¿Qué legitimidad y arraigo en la población puede tener un sistema democrático en el que la mayoría de la población considera que sus intereses están supeditados a aquellos que promueven unas cuantas personas que administran el gobierno?

En cambio, sólo el 18% de los daneses, el 23% de los finlandeses, y el 5% de los noruegos considera que el gobierno está manejado "mucho" por unas cuantas entidades que promueven sus propios intereses.

Y sólo el 6% de los daneses, el 5% de los finlandeses dice que "completo". En el caso de los noruegos, 0% de la población piensa esto.

Para las personas que tienen estas tres nacionalidades, sus países cuentan con gobiernos que en general, gobiernan para todos.

Qué tan efectivas son las acciones del gobierno en contra de la corrupción?

	Muy efectivo	Efectivo	Ni uno ni otro	No efectivo	Muy inefectivo
	%	%	%	%	%
México	1	10	17	43	30
Global	5	17	24	33	20

La impunidad es quizá uno de los elementos que en mayor medida provoca las distintas respuestas antes comentadas. El 73% de la población considera que las acciones en contra de la corrupción son "no efectivas" (43%) o "muy inefectivas" (30%).

Esto quiere decir que la abrumadora mayoría de la población considera que cuando unos cuantos promueven sus propios intereses, y lo hacen de manera ilegal, es muy poco probable que paguen las consecuencias.

¿Cómo puede tener legitimidad un sistema en el que aquellos que incumplen las reglas aceptadas por todos, y lo hacen para promover intereses privados, quedan impunes?

El 25% de los daneses, el 19% de los finlandeses y el 18% de los noruegos creen que son "efectivas" .

Sólo el 8% de los daneses y noruegos, y el 5% de los finlandeses cree que son "muy inefectivas".

Percepciones decorrupción por institución (%)

	Partidos Políticos	Legislativo	Ejercito	ONG´s	Medios	Instituciones Religiosas	Sector Privado	Sistema educativo	Judicial	Sector Salud	Policía	Servidores Públicos
México	91	83	42	43	55	43	51	43	80	42	90	87
Global	65	57	34	28	39	29	45	41	56	45	60	57

Escala de 1-5												
Country	Partidos Políticos	Legislativo	Ejercito	ONG´s	Medios	Instituciones Religiosas	Sector Privado	Sistema educativo	Judicial	Sector Salud	Policía	Servidores Públicos
México	4.6	4.3	3.2	3.2	3.6	3.1	3.5	3.3	4.3	3.2	4.6	4.5
Global	3.8	3.6	2.9	2.7	3.1	2.6	3.3	3.2	3.6	3.3	3.7	3.6

Esta última tabla es clave para argumentar que la pésima percepción sobre la democracia, está influenciada por el fenómeno de la corrupción. El 87% de los mexicanos considera que los servidores públicos son corruptos. Esto es, que quienes se encargan de procesar las demandas de la población, y ejercer el presupuesto para dar respuesta a éstas, son considerados corruptos en su gran mayoría.

El 91% de los mexicanos considera que los partidos políticos son corruptos. Estos es, que las instituciones que recogen, organizan y canalizan las demandas de la población, son considerados, casi en su totalidad, como corruptos.

Por otro lado, la población considera que el 83% de quienes hacen las reglas del juego, las leyes, son así mismo corruptos.

Asimismo, quienes deben resolver jurídicamente y en justicia los conflictos legales, son considerados corruptos por el 80% de la población.

Así, las instituciones básicas de la democracia mexicana, están bajo sospecha de ser corruptas por la gran mayoría de la población.

¿Cómo puede funcionar un sistema democrático si la abrumadora mayoría de la población considera que las instituciones fundamentales de ésta, se sirven a sí mismas, en lugar de servir a la sociedad?

El 11% de los daneses, 25% de los finlandeses, y el 29% de los noruegos considera que sus servidores públicos son corruptos.

Sólo el 30% de los daneses, 45% de los finlandeses y 41% de los noruegos considera que los partidos políticos de su país son corruptos.

El 18% de los daneses, 31% de los finlandeses y el 21% de los noruegos cree que sus legisladores son corruptos.

Por su parte, apenas el 5% de los daneses, 9% de los finlandeses y noruegos cree que los miembros del Poder Judicial son corruptos.

Destaca el altísimo nivel de confianza que los daneses, finlandeses y noruegos depositan en los miembros

del Poder Judicial, precisamente el poder encargado de velar por el Estado de Derecho, que es el elemento base de cualquier sistema democrático.

¿Ha usted pagado un soborno a alguno de estos 8 servicios en los últimos 12 meses?

	Educación	Judicial	Sector Salud	Policía	Registro y permisos	Servicios básicos	Autoridades de impuestos	Servicios territoriales	Ha pagado soborno a alguno de los 8 servicios?
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
México	17	55	10	61	27	17	16	31	33
Global	16	24	17	31	21	13	15	21	27

El 33% de los mexicanos contestó abiertamente haber pagado un soborno a alguno de estos 8 servicios en los últimos 8 meses.

Sólo el 1% de los daneses y finlandeses respectivamente, y el 3% de los noruegos dijeron haber pagado un soborno a alguno de estos 8 servicios en los últimos 8 meses.

La corrupción es un fenómeno de dos vías. Los daneses, finlandeses y noruegos no sólo confían en sus autoridades y en su democracia. También la cuidan. Sólo el 1-3% de la población de estos países considera que vale la pena buscar ventajas extras a través de la corrupción, y poner en riesgo a su sistema democrático.

Lo que existía hasta antes de la Reforma Constitucional

Hasta antes de abril de 2015, el Estado mexicano abordaba este fenómeno de forma a través de autoridades diseñadas y creadas para revisar y fiscalizar el adecuado ejercicio de los recursos públicos, pero no para combatir la corrupción.

La Auditoría Superior de la Federación, las Auditorías locales, la Secretaría de la Función Pública y sus homólogos en las entidades de la República, fueron creadas para revisar, auditar y controlar el ejercicio de los recursos públicos, y no para dar una lucha frontal y eficaz a la corrupción.

Este mandato lo adquirieron con posterioridad, derivado de la exigencia social y de la percepción sobre el crecimiento del fenómeno de la corrupción.

Sin embargo, a pesar de algunos esfuerzos de cooperación y coordinación, estos órganos, más la Procuraduría General y las locales, se mantuvieron en sus propias esferas de acción, alejados de la noción de un sistema de combate a la corrupción.

Con pocas herramientas jurídicas y técnicas para afrontar la lucha de manera eficaz, se limitaron a sancionar faltas administrativas de poca relevancia, cometidas en su mayoría por servidores públicos de rangos medianos hacia abajo.

Estas sanciones quedaban así limitadas al ámbito del servidor público que las cometía, y carecían de un efecto disuasor y preventivo de la corrupción.

Así, el Estado mexicano carecía de un sistema que afrontara el fenómeno desde tres ámbitos básicos: la prevención, la investigación y la sanción.

La Reforma Constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)

El martes 21 de abril de 2015, el Senado de la República votó a favor el "Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Gobernación, y de Estudios Legislativos, Segunda, sobre la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción".

La discusión del dictamen fue intensa. Más de veintitrés senadores intervinieron en la discusión parlamentaria. Numerosas reservas fueron presentadas. Al final, el proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular. Fue remitido a los congresos estatales. Y después de su aprobación por la mayoría de éstos, fue promulgada y publicada por el Presidente de la República.

Algunas de las cuestiones más relevantes de esta reforma constitucional son:

- El Congreso de la Unión tendrá la facultad para expedir una nueva Ley General que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción;

- El Congreso de la Unión tendrá la facultad para expedir una nueva Ley General que establezca las conductas graves que serán consideradas actos de corrupción, el proceso para identificarlas, investigarlas y sancionarlas, y las distintas sanciones que deberán imponerse a servidores públicos, y personas físicas o morales que participen en actos de corrupción

- Se aumentan y fortalecen las facultades de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (en adelante, ASF);

- Se eliminan los principios de anualidad y posterioridad. Este punto es particularmente importante. La ASF podrá realizar auditorías durante el ejercicio fiscal en turno y no tendrá que esperar a que el año fiscal concluya para poder realizar la auditoría. Esto le permitirá corregir prácticas indebidas de manera más rápida y realizar investigaciones de manera más oportuna;

- La Auditoría podrá fiscalizar los recursos locales. Cabe señalar que también, dentro de estos recursos, se consideraron las participaciones federales, que solían ser recursos que las entidades federativas manejaban con un margen de discreción amplio y de los cuales no transparentaban prácticamente nada;

- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se transforma en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que podrá imponer las sanciones a funcionarios públicos por faltas administrativas graves, así como a los particulares que estén involucrados;

- Se introduce en la Constitución la diferenciación entre responsabilidad administrativa grave y responsabilidad administrativa no grave. La primera será investigada por la ASF y los órganos internos de control, quedando a cargo de la sanción el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; la segunda será investigada y sancionada por los propios órganos internos de control;

- El Senado de la República ratifica al titular de la Secretaría de la Función Pública;

- Se le devuelven a la Secretaría de la Función Pública (SFP) todas las facultades que se le habían retirado en noviembre de 2012, cuando en una iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados se planteó la desaparición de la SFP, pasando sus facultades a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

- A partir de la entrada en vigor de las reformas constitucionales, el Congreso de la Unión tiene un plazo de un año para aprobar la legislación secundaria correspondiente.

Así, la reforma constitucional crea un nuevo sistema, en el que distintos órganos del Estado mexicano tienen una misma misión: combatir la corrupción.

La Nueva Ley General del Combate a la Corrupción

Con base en la facultad que la reforma Constitucional otorgó al Congreso de la Unión para establecer las conductas graves y sus sanciones desde el plano administrativo, se propone esta nueva Ley General del Combate a la Corrupción, que tiene como características e innovaciones más importantes los siguientes 20 puntos:

1.**Una Misión Clara de la Ley**. Un Listado claro de objetivos, dentro de los cuales destacan los siguientes:

- Distribuir competencias en el proceso sancionatorio entre los Órganos que integran el Sistema Nacional Anticorrupción.
- Establecer los tipos (actos) administrativos graves que en cualquier circunstancia deberán ser considerados actos de corrupción.
- Crear las bases que deberán observarse en la creación de canales adecuados de participación ciudadana en el combate a la corrupción y la creación de una cultura de una ética pública.

2.**Una Nueva Cultura de la Rendición de Cuentas**.Cada servidor público estará obligado a rendir de manera periódica, veraz y pública:

- Declaración patrimonial.
- Declaración de intereses.
- Declaración anual de impuestos.

3.**El Riesgo de Corrupción como elemento fundamental en el diseño del Gobierno.**Todos los órganos, instituciones, dependencias y entidades del Estado mexicano, sus titulares, y servidores públicos que los conforman, están obligados a diseñar, crear y construir estructuras, normas, procesos y políticas públicas que minimicen los riesgos de corrupción.

4**. Una Nueva cultura Cívica de la Sociedad**. Corresponde a los ciudadanos mexicanos la tarea de evitar, señalar, repudiar y denunciar cualquier acto que a su juicio atente contra los principios del servicio público.

5.**El Código de Ética del Servicio Público como Ley General**. Se introduce un Título en la ley acerca de la conducta ética de los servidores públicos. Este título contiene las conductas que el Estado democrático espera de sus servidores públicos.

Se establecen trece obligaciones éticas en sentido positivo, que se convierten en una guía legal, clara, sencilla pero completa, de aquello que el régimen democrático espera de sus servidores públicos.

6.**Una Lista completa de aquellos actos que serán considerados corrupción**. Con base en las Convenciones Internacionales a las que México está sometido, se consideran actos de corrupción:

- Soborno.
- Malversación de fondos públicos.
- Tráfico de influencias.
- Abuso de funciones.
- Enriquecimiento ilícito.
- Blanqueo del producto del ilícito.
- Obstrucción.
- Colusión.

- Simulación.
- Utilización ilegal de información confidencial.
- Nepotismo.

7**. Una Nueva Cultura de Prevención**. Establecimiento de políticas públicas de educación y capacitación, tanto para servidores públicos, como para niñas, niños y adolescentes.

8.**Un Sistema Proactivo en la Lucha contra la Corrupción**. Cualquier medio de información que exponga un caso de corrupción será suficiente para activar el procedimiento de investigación formal.

9.**Nueva Cultura de la denuncia en el Servicio público**. Todo servidor público tendrá la obligación de denunciar por escrito las acciones u omisiones que en ejercicio de sus funciones tuviere conocimiento.

Se crea un nuevo sistema de protección a denunciantes y testigos, y la creación de fondos para recompensar a quienes dan un paso al frente y denuncian corrupción en sus instituciones.

10.**Nueva Cultura de la denuncia en la Sociedad**. Las empresas o personas morales que se denuncien a sí mismas, por actos de personas físicas que pertenecen a ellas, podrán negociar un convenio con las autoridades investigadoras.

11.**Nueva Cultura de Participación Ciudadana en la Lucha Contra la Corrupción**. Para promover la efectiva participación de la sociedad en el combate a la corrupción se utilizarán, entre otros, los siguientes mecanismos:

- Testigo Social.
- Las auditorias Sociales para proyectos de alto impacto comunitario.
- Redes de participación ciudadana.

12.**Nuevas Facultades de investigación para autoridades que trabajan con una Misión Común**. La ley establece grandes innovaciones en las facultades que se le dan a las autoridades en materia de investigación, para ellas no hay secreto bancario, financiero o bursátil, cuentan con todo lo necesario para que los órganos que integran las investigaciones las realicen con plenitud y sin traba alguna.

Las autoridades encargadas de investigar actos de corrupción son:

- Auditoría Superior de la Federación.
- Órganos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
- Sus homólogos en las entidades federativas.
- Órganos Internos de control de los entes públicos federales.
- Órganos Internos de control de los entes públicos estatales, municipales y del Distrito Federal.
- Contralorías internas de las empresas de participación del Estado.

13.**Procesos Claros y completos de investigación**. Las investigaciones sobre posibles actos de corrupción inician por tres vías básicas:

- Denuncia.
- Auditoría.
- Oficio.

14. **Sanciones para Servidores Públicos de Todo el Estado Mexicano**. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa es competente en todos aquellos cosas que involucren a Gobernadores, Diputados de las legislaturas locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de los ayuntamientos, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, cuando incurren en alguno de los actos de corrupción señalados en esta Ley, en el uso, manejo, administración y aplicación de fondos, bienes, y recursos federales, bajo cualquier rubro.

15. **Lista Negra de consulta obligatoria para todo el Estado Mexicano**. El Sistema de Servidores Públicos Sancionados será público, y será de consulta obligatoria para todas las dependencias, entidades y órganos de todos los Poderes, Órdenes de gobierno, y Órganos Autónomos del Estado Mexicano, en sus procesos de selección, incorporación, contratación, comisión o empleo de cualquier persona.

16. **Sanciones Claras y Eficaces para servidores Públicos**. Las Sanciones administrativas para servidores públicos (Senadores, Diputados, Gobernadores, Presidentes Municipales, entre otros) por actos de corrupción consistirán en:

- Destitución del puesto.
- Sanción económica.
- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

17.**Destino Productivo de las Sanciones.**Los recursos que se deriven de las sanciones económicas serán entregados al Secretariado del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción para los siguientes fines:

- Comité de Participación Ciudadana.
- Proyectos de investigación sobre combate a la corrupción.
- Nuevos sistemas y tecnologías en el SNA.
- Establecer un fondo para recompensas de testigos y denunciantes.
- Creación de nuevas capacidades de los servidores públicos.

18**. Nuevo régimen de sanciones para personas físicas y morales.**Los Tribunales de Justicia Administrativa impondrán a los particulares que intervengan en actos de corrupción, las siguientes sanciones:

- Económica.
- Inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
- El resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos federales.
- También podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de actos de corrupción que causen perjuicio a la Hacienda Pública a los entes públicos federales.

19. **Cooperación y Coordinación entre órganos del SNA, y cooperación internacional.**Esta ley se plantea como eje fundamental la cooperación tanto entre órdenes y órganos de gobierno, así como entre el Estado mexicano con organismos internaciones y otros países para el efectivo combate a la corrupción.

20**. Nueva Plataforma Digital para el Combate a la Corrupción**. Se crean el Sistema de Captación de Denuncias, así como el Sistema Nacional de Servidores Públicos Sancionados, y se fortalecen los Sistemas de Declaración Patrimonial y de Intereses.

Se establece también la obligación de interconectarlos para crear una gran Plataforma de combate a la corrupción.

Por lo anteriormente expuesto se propone la creación de la nueva:

Ley General de Combate a la Corrupción y Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos

ÍNDICE

Título I: Disposiciones Generales
Capítulo I: Objeto de la Ley
Capítulo II: Principios Generales

Título II: De la Conducta de los Servidores Públicos
Capítulo I: Principios Generales
Capítulo II: De las Obligaciones Éticas de los Servidores Públicos

Título III: De los Actos de Corrupción
Capítulo I: De las conductas que constituyen Actos de Corrupción
Capítulo II: Del Soborno
Capítulo III: De la Malversación, el Peculado y el Desvío de Recursos públicos
Capítulo IV: Del Tráfico de Influencias
Capítulo V: Del Abuso de Funciones
Capítulo VI: Del Enriquecimiento Ilícito
Capítulo VII: Del Blanqueo del Producto del Ilícito
Capítulo VIII: Obstrucción de la Justicia
Capítulo IX: De la Colusión
Capítulo X: De la Extorsión**.**
Capítulo XI: De la Simulación
Capítulo XII: De la Utilización de información o documentación falsa
Capítulo XIII: Del Nepotismo

Título IV: De la Denuncia y los medios de participación ciudadana
Capítulo I: De la Denuncia
Capítulo II: De los Medios de Participación Ciudadana

Título V: De la Etapa de investigación
Capítulo I: Principios generales de la Investigación
Capítulo II: De la Investigación

Título VI: De la Etapa de instrucción
Capítulo I: De la Competencia
Capítulo II: De la Recepción y Radicación del Expediente
Capítulo III: De la Instrucción
Capítulo IV: De la Prueba

Título VII: De la Etapa de resolución
Capítulo I: De los Elementos de la Resolución
Capítulo II: Del Procedimiento para emitir, notificar y publicar la Resolución

Título VIII: De las Sanciones
Capítulo I: De los principios para establecer la sanción
Capítulo II: De la Reducción De Sanciones
Capítulo III: De las sanciones para Servidores Públicos
Capítulo IV: De las sanciones para personas físicas y morales

Título IX: De las Medidas de ejecución de las sanciones
Capítulo I: De las facultades y competencia
Capítulo II: Del Incidente de Inejecución de la Resolución

Título X: Del Recurso de Revisión y el Amparo
Capítulo I: Del Recurso de Revisión
Capítulo II: Del Amparo

Transitorios

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo I
Objeto de la Ley

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, y es reglamentaria del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de responsabilidades administrativas y combate a la corrupción.

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar que los distintos Poderes, órganos e instituciones del Estado mexicano, de todos los órdenes de gobierno, cuenten con un sistema adecuado para identificar, investigar, sancionar y prevenir aquellos actos que esta Ley califica como actos de corrupción.

Artículo 2. Son objetivos de esta Ley:

I. Distribuir competencias en el proceso sancionatorio, entre los Órganos que integran el Sistema Nacional Anticorrupción;

II. Establecer las bases mínimas que regirán los procedimientos para identificar, investigar y sancionar actos de corrupción;

III. Establecer las conductas administrativas graves que en cualquier circunstancia deberán ser consideradas actos de corrupción;

IV. Establecer las sanciones que serán imputadas a estos actos, y los medios de ejecución para garantizar su eficacia;

V. Establecer las bases mínimas para crear los sistemas de captación de denuncias, protección de denunciantes y testigos, y recompensas para denunciantes;

VI. Establecer la obligación de todo servidor público de rendir con oportunidad y veracidad sus declaraciones patrimonial y de intereses, así como establecer las bases del funcionamiento de los sistemas que las alojarán, y la forma de hacerlas públicas;

VII. Crear las bases mínimas para que todo órgano del Estado mexicano establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio;

VIII. Crear las bases que deberán observarse en la generación de canales adecuados de participación ciudadana en el combate a la corrupción y la creación de una cultura de una ética pública, que contribuya a la consolidación de la democracia; y

IX. Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas de apremio y las sanciones que correspondan.

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

I. SNA: Sistema Nacional Anticorrupción.

II. Comité Coordinador del SNA: La Instancia administrativa a la que hace referencia el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encargada de la coordinación y eficacia del SNA en su conjunto.

III. Servidor Público: Cualquier persona que se ubique en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
IV. Actos de Corrupción: Son las faltas administrativas graves a las que hacen referencia los artículo 73 y 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, detalladas en esta Ley.
V. Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
VI. LOPSRM: Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
VII. LAASSP: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Capítulo II
Principios Generales

Artículo 4. Todos los órganos, instituciones, dependencias y entidades del Estado mexicano están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable de cada servidor público.

Artículo 5. Todo servidor público está obligado a respetar los principios constitucionales de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficacia y eficiencia en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

Asimismo, todo servidor público está obligado a mantener los más altos estándares de ética y responsabilidad, que permitan el adecuado funcionamiento de los órganos, instituciones, dependencias o entidades a las que prestan su servicio, con el objeto de mantener la viabilidad y funcionalidad del Estado democrático mexicano.

Artículo 6. Para que el Estado y la sociedad puedan cerciorarse en todo momento de que un servidor público cumple con los principios constitucionales y responde al mandato democrático depositado en su función, cada servidor público estará obligado a rendir, de manera periódica y veraz:

I. Una Declaración Patrimonial; y
II. Una Declaración de Intereses.

Estas dos declaraciones, junto con su declaración anual de impuestos, estarán disponibles al público, exceptuandolos datos personales de conformidad con la normatividad vigente.

El ocultamiento, mentira o engaño en la información declarada sobre sus intereses o patrimonio, o el de sus dependientes económicos, será sancionado como un acto de corrupción grave.

El Sistema Nacional Anticorrupción será responsable de establecer los Sistemas de recepción de declaraciones, de control de datos, y de verificación de la información declarada.

Para esto, tendrá facultades para establecer convenios con las distintas autoridades de todo el Estado mexicano que tengan a su disposición datos, información o documentos que puedan servir para verificar la información declarada por los servidores públicos.

El SNA será responsable de crear una plataforma digital que conecte los distintos Sistemas que poseen datos e información necesaria para verificar no sólo los intereses y patrimonio de los servidores públicos, sino también para monitorear el adecuado manejo y uso de los recursos públicos, y poder rendir cuentas veraces sobre su administración.

Artículo 7. Los partidos políticos, como entidades de interés público, así como sus militantes, adherentes,

candidatos y toda persona que a través de ellos pretenda obtener un cargo público, están obligados a mantener los más altos estándares de ética y responsabilidad institucional y personal, para resguardar la integridad de los órganos, instituciones, dependencias y entidades del Estado mexicano.

Artículo 8. Todas las personas físicas y morales, en cualquier relación que tengan con el Estado mexicano, están igualmente obligadas a mantener los más altos estándares de ética y responsabilidad personal, para resguardar la integridad de los órganos, instituciones, dependencias y entidades del Estado mexicano.

Artículo 9. El combate a las distintas formas de corrupción es una tarea principal del Estado mexicano en su conjunto. Todos los órganos, instituciones, dependencias y entidades del Estado mexicano, sus titulares, y servidores públicos que los conforman, están obligados a diseñar, crear y construir estructuras, normas, procesos y políticas públicas que minimicen los riesgos de corrupción, y hagan posible su identificación y administración.

El Sistema Nacional Anticorrupción será el principal titular de esta responsabilidad y función de Estado. A su cargo estarán los sistemas de identificación, investigación, sanción y prevención de la corrupción.

Artículo 10. Corresponde a los ciudadanos mexicanos la tarea de evitar, señalar, repudiar y denunciar cualquier acto que a su juicio atente contra los principios del servicio público.

Será obligación de los órganos del SNA establecer mecanismos sencillos, eficaces y seguros de captación de denuncias, para su debida investigación, clasificación, y consecuente sanción, en su caso. Será también obligación del SNA establecer mecanismos eficaces que permitan la participación ciudadana en la vigilancia, control y supervisión de las funciones básicas de todos los órganos, instituciones, dependencias y entidades del Estado mexicano.

Los ciudadanos que cumplieron con su responsabilidad cívica de denunciar un acto de corrupción, tendrán derecho a ser informados del cauce y resultados del proceso sancionatorio.

Artículo 11. La Rendición de Cuentas es una función básica de todos los órganos, instituciones, dependencias y entidades del Estado mexicano, de sus titulares y de cada servidor público que las integra. Se trata de la herramienta principal en el combate a la corrupción. La Rendición de Cuentas implica:

I. Transparencia en el ejercicio diario de sus funciones;
II. Documentación y registro de las funciones básicas;
III. Evaluación periódica del desempeño y de los resultados obtenidos;
IV. Informes periódicos, sistemáticos y detallados sobre sus funciones y resultados; y
V. Asignación de consecuencias institucionales y personales por faltas u omisiones relacionadas con las fracciones anteriores.

Artículo 12. La cooperación internacional y la participación activa en los foros más importantes sobre combate a la corrupción, será función principal del Estado mexicano. Esta participación deberá establecer condiciones para conocer y compartir las mejores prácticas internacionales, para colaborar en el combate global del fenómeno, y para invitar a la comunidad internacional a evaluar las políticas anticorrupción del Estado mexicano.

TÍTULO II
De la Conducta Ética de los Servidores Públicos

Capítulo I
Principios Generales

Artículo 13. En un Estado democrático es imperativo definir la conducta esperada de los servidores públicos que lo integran.

Las obligaciones de ética individual a la que están sujetos deben ser claras y concretas, así como congruentes con los fines del Estado mexicano.

Asimismo, es necesario definir claramente las conductas que se apartan de ese deber de ética individual, y establecer el proceso para identificar, investigar y sancionar esas conductas.

Artículo 14. El Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece un régimen de responsabilidades administrativas,que tiene por objeto determinar consecuencias concretas para aquellas personas que se hayan apartado de las obligaciones éticas que el Estado democrático exige.

Artículo 15. Todas las personas que presten sus servicios al Estado Mexicano, a través de cursos, talleres, seminarios o de cualquier otra forma, deberán ser informados y capacitados sobre sus obligaciones éticas, sobre su conducta esperada y sobre las consecuencias de incumplir con esas obligaciones.

Capítulo II
De las Obligaciones Éticas de los Servidores Públicos

Artículo 16. El servicio público es un mandato social que demanda lealtad a la Constitución, las leyes y las obligaciones éticas de los servidores públicos, por encima de los intereses privados de los servidores públicos.

Las obligaciones éticas de los servidores públicos, descritas en este Capítulo, deberán ser la base de toda norma que implique la función pública.

Artículo 17. Los servidores públicos deberán evitar usar su empleo, cargo o comisión para obtener beneficios privados, para sí, o para personas cercanas a ellos.

Artículo 18. Los servidores públicos deberán evitar tener intereses que puedan entrar en conflicto con el desempeño responsable y objetivo de sus facultades y obligaciones.

Artículo 19. Los servidores públicos deberán hacer todo aquello que esté a su alcance para realizar de manera adecuada sus funciones.

Artículo 20. Los servidores públicos deberán evitar realizar cualquier trato o promesa privada o no autorizada, que comprometa al Estado Mexicano.

Artículo 21. Los servidores públicos deberán actuar de manera imparcial, y no brindar ventajas o tratos preferentes a ninguna persona u organización.

Artículo 22. Los servidores públicos deben cuidar el Patrimonio del Estado, conservarlo y no utilizarlo ni comprometerlo para beneficio privado.

Artículo 23. Los servidores públicos deberán evitar tener empleos o actividades externas que entren en conflicto con sus obligaciones, funciones y facultades como servidor público.

Artículo 24. Los servidores públicos deberán denunciar todo acto de corrupción del que tenga conocimiento, ante las autoridades competentes.

Artículo 25. Los servidores públicos deberán cumplir con todas sus obligaciones derivadas de su carácter de ciudadanos mexicanos.

Artículo 26. Los servidores públicos deberán, en todo momento, evitar cualquier tipo de conducta que vaya en contra de lo establecido en el Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 27. Los servidores públicos deberán evitar cualquier transacción comercial o financiera, en la que utilicen información o documentación gubernamental que no es pública.

Artículo 28. Los servidores públicos deberán evitar aceptar cualquier tipo de regalo o donación que tenga como propósito ganar su favor o voluntad, o pueda influenciar su objetividad e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

TÍTULO III
DE LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN

Capítulo I
De las Conductas que constituyen Actos de Corrupción

Artículo 29. Serán consideradosactos de corrupción, sancionados con base en el proceso administrativo, independiente de la vía penal: el soborno, la malversación de fondos públicos, el tráfico de influencias, el abuso de funciones, el enriquecimiento ilícito, el blanqueo del producto del ilícito, la obstrucción, la colusión, la extorsión, la simulación, la utilización ilegal de información confidencial y el nepotismo.

Artículo 30. En la investigación, la instrucción y la determinación de las sanciones por actos de corrupción, se privilegiará siempre la obtención de la verdad material de los hechos, frente a los requisitos formales. Es de interés público determinar la responsabilidad de quienes violan los principios constitucionales y afectan la confianza de la sociedad en el Estado democrático de derecho, frente a cualquier otra circunstancia.

Artículo 31. Es de orden público el establecimiento de políticas integrales de educación y capacitación, tanto en el servicio público, como para niñas, niños y adolescentes, en los distintos niveles del sistema educativo mexicano, sobre las distintas conductas de corrupción, sus características, las circunstancias en las que se presentan, y sus consecuencias.

Artículo 32. Es también de orden público la generación de estudios y acervos académicos sobre las distintas formas de corrupción, y sobre las mejores maneras de prevenirla, identificarla e investigarla.

Artículo 33. El SNA será el encargado de establecer las distintas formas de evaluación de las políticas y medidas de combate a la corrupción en todo el Estado mexicano. Los indicadores deberán diseñarse con el

objeto de medir tanto el fenómeno de la corrupción, así como las medidas que el Estado toma para combatirlo. Los resultados de estas evaluaciones serán públicos.

Artículo 34. Tanto las autoridades que conforman el SNA, así como todos y cada uno de los órganos, dependencias y entidades valoradas, deberán atender con diligencia los resultados de estas evaluaciones y tomar medidas concretas para minimizar los riesgos de corrupción.

El SNA será el encargado de dar seguimiento a estas medidas y emitir recomendaciones.

Capítulo II
Del Soborno

Artículo 35. Incurre en soborno el servidor público que exige, solicita, acepta, recibe o pretende recibir, un beneficio adicional a sus contraprestaciones legales, a cambio de hacer, o dejar de hacer, aquello que son sus funciones, o que quien otorga el beneficio extra legal, cree que son sus funciones.

Incurre también en soborno quien ofrece, entrega o pone a disposición de un servidor público, un beneficio adicional a las contraprestaciones legales de éste, para hacer o dejar de hacer algo que entre dentro de su esfera de funciones.

Artículo 36. Además delaconducta básica, incurre en soborno el servidor público que exige, solicita, acepta, recibe o pretende recibir, un beneficio adicional a sus contraprestaciones legales, a cambio de:

I. Otorgar un derecho, licencia, servicio, resolución o pago a quien no le corresponde
II. Otorgar un derecho, licencia, servicio, resolución o pago a quien aún no ha cumplido con el trámite legal o procedimiento establecido
III. Evadir obligaciones de carácter fiscal
IV. Evitar una responsabilidad administrativa o penal
V. Ofrecer u otorgar condiciones de privilegio indebido en cualquier tipo de concurso de Estado
VI. Otorgar información confidencial o privilegiada
VII. Influencia o consideración especial
VIII. Ofrecer, en el futuro, algún privilegio indebido, consideración especial o circunstancia favorable

Incurre también en soborno quien ofrece, entrega o pone a disposición de un servidor público, un beneficio adicional a las contraprestaciones legales de éste, para hacer o dejar de hacer algo que entre dentro de su esfera de funciones.

. **Artículo 37.** Incurre en Soborno el candidato que exige, solicita, acepta, recibe o pretende recibir, donativos en numerario o en especie, para él o para su campaña, a cambio de otorgar una ventaja indebida en el futuro a quien entrega u ofrece el soborno, o para la empresa, institución o grupo a la que este último pertenece.

Artículo 38. Incurrirán también en soborno los sujetos que en alguna transacción comercial internacional, por sí o a través de un tercero, prometan, ofrezcan o entreguen dinero o cualquier otra dádiva indebida, a un servidor público extranjero o a un tercero, a cambio de que dicho servidor público realice o se abstenga de realizar un acto relacionado con sus funciones o con las de otro servidor público extranjero, con la finalidad de obtener o mantener un beneficio o ventaja, con independencia de la aceptación o del resultado obtenido.

Artículo 39. Para probar la conducta básica de soborno sólo será necesario acreditar la exigencia,

solicitud, aceptación, recepción o pretensión de recepción de un beneficio adicional a las contraprestaciones legales del servidor público, como condición para hacer o dejar de hacer algo que forma parte de sus funciones.

Para el otro actor del soborno, sólo será necesario probar el fin de obtener una ventaja indebida, al ofrecer, entregar o poner a disposición del servidor público, un beneficio adicional a los que legalmente le corresponden.

También será soborno cuando se pueda probar que quien otorga el beneficio indebido es engañado respecto de las funciones del servidor público, o las características del trámite, proceso o servicio.

Capítulo III
De la Malversación, el Peculado y el desvío
de Recursos públicos

Artículo 40. Incurre en malversación quien se apropia de recursos públicos, o destina recursos públicos a un uso ajeno a su función, que provoca un daño o perjuicio al erario.

Artículo 41. Incurre en peculado quien hurta recursos del erario, confiados su administración, utilización o resguardo

Artículo 42. Incurre en Desvío quien utiliza recursos públicos para un fin privado.

Artículo 43. Además de las tres conductas básicas anteriores, incurre en malversación quien tiene a su cargo o bajo su resguardo, recursos o bienes públicos, y cuenta con los medios para disponer de ellos de una manera distinta para la que están afines a través de:

I. La sustracción del bien o recurso para uso o disposición personal;
II. El ocultamiento y disposición para un fin distinto al que legalmente se destinó el bien o recurso;
III. La disposición ilegal del bien o recurso para beneficio personal, político o económico de terceros, distintos a los beneficiarios legales;
IV. La transformación ilegal del bien o recurso para esconder el fin real para el que será utilizado; y
V. La inutilización, destrucción o mala disposición del bien, para afectar a quienes eran los beneficiarios o destinatarios legales del bien o recurso.

Artículo 44. Para probar que existe malversación, peculado o desvío, basta con acreditar el destino legal de un bien o recurso público, y la acción del servidor público de sustraerlo, apropiarse de él, desviarlo a un fin privado, ocultarlo, transformarlo ilegalmente, inutilizarlo, destruirlo o disponer inadecuadamente de él.

Capítulo IV
Del Tráfico de Influencias

Artículo 45. Incurre en tráfico de influencias el servidor público que solicita o acepta, en forma directa o indirecta, un beneficio indebido que redunde en su provecho, con el fin de abusar de su influencia real o supuesta, para obtener de una autoridad del Estado un beneficio indebido para un tercero.

Artículo 46. Incurre en tráfico de influencias quien promete, ofrece o concede a un servidor público, en forma directa o indirecta, un beneficio indebido, con el fin de que ese servidor público abuse de su influencia real o supuesta, para obtener de una autoridad del Estado, un beneficio indebido que redunde en

provecho del instigador original del acto o de cualquier otra persona.

Artículo 47. Para probar que existe tráfico de influencias de parte del servidor público, es suficiente con acreditar la promesa o la intención de abusar de una influencia real o supuesta, y la intención de obtener un beneficio indebido.

De parte del instigador del acto, será suficiente con probar la promesa de un beneficio indebido, con el fin de abusar de una influencia real o supuesta.

Capítulo V
Del Abuso de Funciones

Artículo 48. Incurre en abuso de funciones quien realiza u omite un acto, en contravención a la ley, o en exceso de sus funciones legales, con el fin de obtener un beneficio indebido para sí mismo o para otra persona.

Artículo 49. Incurre también en abuso de funciones quien realiza u omite un acto, en contravención a la ley, o en exceso de sus funciones legales, con el fin de afectar a otra persona, grupo o institución.

Artículo 50. Para probar que existe abuso de funciones es suficiente con acreditar las funciones y facultades legales del servidor público, y la intención de obtener un beneficio indebido o de afectar a otra persona, grupo o institución.

Capítulo VI
Del Enriquecimiento ilícito

Artículo 51. Incurre en enriquecimiento ilícito el servidor que:

I. Miente en su declaración patrimonial o en su declaración de intereses, para esconder bienes o recursos;
II. Esconde bienes o recursos que utiliza para beneficio propio, o goza de los frutos de éstos;
III. Utiliza a terceras personas, físicas o morales, para poseer materialmente bienes, sin convertirse en propietario legal;
IV. Posee un patrimonio notoriamente superior a los ingresos legales declarados en su trayectoria como servidor público.

Artículo 52. El enriquecimiento de un servidor público es ilícito, y por lo tanto es un acto de corrupción, cuando se engaña al Estado y a la sociedad respecto del origen del patrimonio, respecto del poseedor o beneficiario real de éste, y cuando simplemente no existe forma lógica de explicar el incremento desproporcionado del patrimonio, de un periodo a otro.

Capítulo VII
Del Blanqueo del Producto del Ilícito

Artículo 53. Incurre en blanqueo del producto del ilícito quien convierte o transfiere, recursos o bienes, a sabiendas de que esos recursos o bienes son producto de un acto ilegal, con el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de aquellos, o ayudar a cualquier persona involucrada a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos;

Artículo 54. También incurre en blanqueo del producto del ilícito quien oculta o disimula la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación, la disposición, el movimiento o la propiedad de bienes o del legítimo derecho a éstos, a sabiendas de que dichos bienes son producto de un acto ilícito.

Artículo 55. Asimismo, incurre en blanqueo del producto del ilícito quien adquiere, posee o utiliza bienes o recursos, a sabiendas, en el momento de su recepción, de que son producto de un acto ilícito.

Artículo 56. Para probar el blanqueo del producto del ilícito es suficiente con acreditar la intención de esconder el origen ilícito de los bienes o recursos, o la intención de ayudar a quien cometió el acto ilícito a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos.

Capítulo VIII
De la Obstrucción de la Justicia

Artículo 57. Incurre en obstrucción de justicia quien hace uso de fuerza física, violencia moral, como amenazas o intimidación, o una promesa, un ofrecimiento o una concesión de un beneficio indebido, para inducir a una persona a prestar falso testimonio o a obstaculizar la prestación de testimonio o la aportación de pruebas en procesos en relación con la comisión de actos de corrupción.

Artículo 58. Incurre también en obstrucción de justicia quien hace uso de fuerza física, violencia moral, comoamenazas o intimidación para obstaculizar el cumplimiento de las funciones oficiales de un funcionario de la justicia o de los servicios encargados de hacer cumplir la ley en relación con la comisión de actos de corrupción.

Artículo 59. Incurre en Obstrucción de Justicia el servidor público que conoce de un posible acto de corrupción y omite denunciarlo a las autoridades correspondientes.

Artículo 60. Incurre en Obstrucción de Justicia el servidor público que selecciona, emplea, contrata, o comisiona a otro servidor público que fue acreedor a una sanción de las establecidas en esta Ley, y se encuentra vigente en el Sistema Nacional de Servidores Públicos Sancionados.

Artículo 61. Incurre en Obstrucción de Justicia la persona que de cualquier forma evite que se desarrolle el procedimiento sancionador establecido en esta Ley, o evite, retrase u obstaculice de cualquier forma el cumplimiento de las sanciones que se determinen.

Artículo 62. Para probar obstrucción de justicia será suficiente con acreditar que existió una acción tendiente a evitar que se concretara adecuadamente una investigación, el proceso de instrucción o la implementación de una sanción.

Capítulo IX
De la Colusión

Artículo 63. Incurre en colusión quien genere acuerdos comerciales o económicos ocultos, con el objeto de obtener ventajas frente a otros competidores, en detrimento del patrimonio o intereses públicos del Estado.

Artículo 64. Para probar colusión será suficiente con acreditar que existió un acuerdo comercial o económico, tendiente a obtener una ventaja indebida en detrimento del interés público.

Capítulo X
De la Extorsión.

Artículo 65. Incurre en extorsión quien obliga, a través de violencia de cualquier tipo o amenazas, a un servidor público a:

I. Emitir un acto administrativo, o dejar de hacerlo;
II. Emitir un acto administrativo en un sentido específico;
III. Emitir una resolución en un sentido específico, o en un tiempo irregular; y
IV. Suscribir, otorgar, destruir o entregar un documento, información o algún bien, con el fin de obtener para sí o un tercero una ventaja o beneficio.

Artículo 66. Incurre también en extorsión el servidor público que obliga a un particular, a través de violencia o amenazas, a renunciar a un derecho, a suscribir un acto, a obligarse frente al Estado, a condonar una deuda del Estado, o a cualquier acto jurídico, contra la voluntad del particular.

Artículo 67. Para probar la extorsión será suficiente con acreditar la intención de ir contra la voluntad del servidor o del particular, a través de violencia de cualquier tipo o de amenazas.

Capítulo XI
De la Simulación

Artículo 68. Incurre en simulación quien actúa o interviene frente al Estado, en nombre propio pero en interés de otra u otras personas físicas o morales que se encuentren impedidas legalmente para participar en algún procesos jurídico, por actos ilegales previos, o por no cumplir con los requisitos pre establecidos.

Artículo 69. Para probar la simulación será suficiente con acreditar la intención de engañar al Estado al actuar en beneficio de otra persona.

Capítulo XII
De la Utilización de información o documentación falsa.

Artículo 70. Incurre en utilización de información o documentación falsa, quien las presenta en un trámite o proceso del Estado, a sabiendas de su ilegitimidad, con el propósito de lograr un beneficio o ventaja.

Artículo 71. Para probar la utilización de información o documentación falsa será suficiente con acreditar la intención de engañar al Estado.

Capítulo XIII
Del Nepotismo

Artículo 72. Incurre en nepotismo el servidor público que ofrece, otorga o promete ventajas indebidas a miembros de su familia, al utilizar sus facultades o el poder fáctico que el empleo, cargo o comisión le otorgan.

Artículo 73. Para probar el nepotismo será suficiente con acreditar la relación familiar y la pretensión de otorgar una ventaja indebida.

Título IV
De la Denuncia y los Medios de Participación Ciudadana

Capítulo I
De la Denuncia

Artículo 74. La investigación que precede al procedimiento administrativo sancionador iniciará de oficio o por denuncia.

Cualquier medio de información, denuncia verbal o señalamiento que exponga un caso de corrupción, será suficiente para activar el procedimiento de investigación de manera formal.

Las autoridades competentes conocerán de las probables infracciones que cometan las personas sujetas a esta Ley, entre otros, a través de los siguientes medios:

I. Denuncia remitida por medio del sistema electrónico de captación de denuncias creado y administrado por el Sistema Nacional Anticorrupción;
II. Denuncia remitida a través del módulo de captación de denuncias de COMPRANET;
III. Denuncia de particulares; y
IV. Denuncia internacional formulada por un Estado extranjero, organismo u organización públicos internacionales, en la que se deberán precisar las probables infracciones y acompañar los elementos de prueba en que aquélla se sustente.

Las autoridades competentes mantendrán con carácter confidencial la identidad de las personas que denuncien los actos de corrupción previstos en esta Ley, así como la de aquéllas que pretendan acogerse al beneficio establecido en los artículos 132 al 134 de la misma.

Artículo 75. Todo servidor público tendrá la obligación de denunciar por escrito las acciones u omisiones que en ejercicio de sus funciones tuviere conocimiento y que pudieren ser sancionadas en términos de esta Ley. El incumplimiento de dicha obligación será motivo de las sanciones previstas por obstrucción de la justicia.

Artículo 76. El escrito de denuncia deberá contener lo siguiente:

I. Los hechos y cualquier otra información que permitan advertir la comisión de probables infracciones;
II. Los datos de identificación del probable infractor; y
III. El señalamiento de los elementos probatorios que acrediten las probables infracciones.

Artículo 77. Con el objeto de promover la denuncia, el Sistema Nacional Anticorrupción deberá establecer:

I. Un Sistema de Recompensas para la denuncia de casos relevantes;
II. Mecanismos eficaces para la protección de denunciantes; y
III. Mecanismos eficaces para la protección de testigos.

Artículo 78. Las empresas o personas morales que se denuncien a sí mismas, por actos de personas físicas que pertenecen a ellas, podrán negociar un convenio con las autoridades investigadoras para los efectos de reducir la sanción a la persona moral.

Podrán incluso quedar libres de responsabilidad si dentro de su organización, cuentan con las medidas establecidas en el "CAPÍTULO DE INTEGRIDAD DE LAS EMPRESAS" establecido en la LOPSRM y en el LAASSP., así como en las leyes de obra y adquisiciones de las entidades federativas.

Las empresas que conozcanprobables actos de corrupción de personas físicas que pertenecen a aquellas, y no los denuncian, agravarán por ese sólo hecho la sanción que corresponda a la persona moral.

Artículo 79. Una vez recibida la denuncia, si las autoridades competentes advierten la posible existencia de actos de corrupción, iniciarán la etapa de investigación a que hace referencia esta Ley.

Capítulo II
De los medios de Participación Ciudadana

Artículo 80. Para el eficaz combate a la corrupción, es fundamental la participación ciudadana, no sólo por vía de la denuncia. El Sistema Nacional Anticorrupción tendrá como mandato principal establecer los mecanismos y sistemas más eficaces para promover y permitir la participación de la sociedad en el combate a las distintas conductas de corrupción.

Artículo 81. El órgano encargado de la política de participación ciudadana en el combate a la corrupción, es el Comité de Participación Ciudadana. Éste será el encargado de crear las redes y los canales de participación, y evaluar la política en este rubro de todo el SNA.

Es fundamental el establecimiento de convenios y acuerdos con las organizaciones de la sociedad civil, con las organizaciones empresariales, los medios de comunicación, y cualquier institución ciudadana que tenga la intención de cuidar la cultura de la legalidad del Estado mexicano.

Artículo 82. Para promover la efectiva participación de la sociedad en el combate a la corrupción, se utilizarán, entre otros, los siguientes mecanismos:

I. El Testigo Social;
II. Las Auditorías Sociales para proyectos de alto impacto comunitario;
III. Las Redes de participación ciudadana.

Título V
De la Etapa de Investigación

Capítulo I
Principios generales de la Investigación

Artículo 83. El proceso completo que establece esta Ley, desde la denuncia hasta la ejecución de la sanción, tiene como objeto principal la aplicación de justicia.

Se trata de conocer los elementos suficientes de tiempo, modo y lugar de cada acto de corrupción, para asignar consecuencias concretas y justas para quien o quienes son responsables de su concepción, planeación o ejecución, o para quienes resultan beneficiados por éstos.

Artículo 84. Las autoridades encargadas de desarrollar la investigación de los actos de corrupción señalados en esta Ley se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,

honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales.

Artículo 85. Las autoridades encargadas de investigar posibles actos de corrupción son:

I. La Auditoría Superior de la Federación;
II. Los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;
III. Sus homólogos en las entidades federativas;
IV. Los órganos internos de control de aquellos organismos a los que la Constitución dota de autonomía;
V. Los órganos Internos de control de los entes públicos federales;
VI. Las contralorías internas de las empresas productivas del Estado; y
VII. Los órganos internos de control de los entes públicos estatales y municipales, y del Distrito Federal.

Estas autoridades investigadoras serán responsables de la oportunidad, exhaustividad e integralidad de cada proceso de investigación.

Serán responsables de atender todas y cada una de las denuncias que sean puestas a su conocimiento y de rendir cuentas a los denunciantes que lo soliciten.

Artículo 86. Las autoridades encargadas de la investigación deberán contar en todo momento con las herramientas, sistemas y personas idóneas para allegarse de todos los elementos que requieran para conocer la verdad material de un hecho o hechos denunciados.

Artículo 87. El SNA será responsable de crear las condiciones materiales y presupuestales para que las autoridades investigadoras cuenten con todas las herramientas y sistemas que requieran.

Será también responsable de crear sistemas de capacitación de personal para crear cuerpos de especialistas en las distintas materias que requieren los actos de corrupción.

Artículo 88. Será responsabilidad de las autoridades investigadoras establecer unidades especializadas en los temas y las materias que se requieran. Además de otras unidades especializadas que puedan crearse con base en las necesidades que se generen por el complejo fenómeno de la corrupción, las autoridades investigadoras deberán contar con Unidades Especializadas en:

I. Contrataciones públicas;
II. Obra pública;
III. Sistemas digitales;
IV. Patrimonio del Estado; y
V. Manejo de recursos financieros y presupuestales.

Artículo 89. Las autoridades encargadas de la investigación serán responsables de la integridad de los denunciantes y de los testigos que participen en los procesos de investigación.

Artículo 90. Son obligaciones de las autoridades encargadas de la investigación:

I. Realizar la investigación de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que esta Ley señala como acto de

corrupción, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión;

II. Resguardar, cuidar y controlar la información y documentación que tengan a su disposición, y utilizarla sólo para los fines establecidos en esta Ley;

III. Escuchar a todo denunciante, testigo o persona interesada en aportar elementos a la investigación;

IV. Incorporar nuevas técnicas, capacidades, tecnologías y métodos a sus investigaciones;

V. Coordinarse y colaborar con otras autoridades del SNA que lleven investigaciones, auditorías o proceso de responsabilidad;

VI. Denunciar a toda aquella persona que pretenda entorpecer de cualquier modo una investigación;

VII. Respetar en todo momento los derechos humanos y garantías individuales establecidas en la Constitución de todo aquel que de cualquier forma esté involucrado en la investigación;

VIII. Implementar cualquier medida legal a su alcance para resguardar la integridad de los elementos de prueba de la investigación; y

IX. Dejar registro de todas las actuaciones que se realicen durante la investigación, utilizando al efecto cualquier medio que permita garantizar que la información recabada sea completa, íntegra y exacta, así como el acceso a la misma por parte de los sujetos que de acuerdo con la ley tuvieren derecho a exigirlo. El registro de cada actuación deberá contener por lo menos la indicación de la fecha, hora y lugar en que se haya efectuado, identificación de los servidores públicos y demás personas que hayan intervenido y una breve descripción de la actuación y, en su caso, de sus resultados.

Capítulo II
De la Investigación

Artículo 91. Las investigaciones sobre posibles actos de corrupción inician por tres vías básicas:

I. Por denuncia;

II. Por auditoría; y

III. De oficio.

Artículo 92. Una vez recibida una denuncia por posibles actos de corrupción, las autoridades investigadoras deberán proceder inmediatamente a la pre-clasificación de los hechos, para dar prioridad a aquellas denuncias que traten sobre:

I. Violaciones graves a los derechos humanos básicos de las personas;

II. Afectación a la integridad o libertad física de las personas;

III. Posibles redes de corrupción; y

IV. Actos en los sea factible o sencilla la desaparición de las pruebas, o los probables responsables.

La pre-clasificación se hará también para asignar aquellos casos que deban ser investigados por las unidades especializadas correspondientes.

Artículo 93. Tanto los encargados directos de cada investigación, como sus supervisores, serán responsables de la oportunidad en la investigación, la exhaustividad, la integralidad de los datos y documentos, y el resguardo del expediente en su conjunto.

Artículo 94. Una vez radicada la investigación en la unidad especializada correspondiente o en el equipo al que corresponda, se deberá estudiar de inmediato si se requieren medidas precautorias para resguardar los elementos que puedan servir de prueba en la investigación.

Artículo 95. Las autoridades investigadores podrán determinar la suspensión temporal del empleo, cargo

o comisión del servidor público señalado, si a su juicio así conviene para la conducción o continuación de las investigaciones. La suspensión temporal no prejuzga sobre la responsabilidad que se investiga.

La suspensión temporal a que se refiere el párrafo anterior suspenderá los efectos del acto que haya dado origen a la ocupación del empleo, cargo o comisión, y regirá desde el momento en que sea notificada al interesado.

La suspensión cesará cuando así lo resuelvan las autoridades encargadas de la investigación. En todos los casos, la suspensión cesará cuando se dicte la resolución en el procedimiento correspondiente.

La suspensión temporal es una medida precautoria que tiene como fin resguardar los posibles elementos de prueba que servirán como base de la investigación. Como no prejuzga sobre la probable responsabilidad del señalado o los señalados, quien la decreta sólo podrá ser denunciado si se prueba su mala fe, la falsedad en sus argumentos para decretarla o su intención manifiesta de afectar directamente al señalado o los señalados.

En el supuesto de que el servidor público suspendido temporalmente no resultare responsable de los hechos que se le imputan, la dependencia o entidad donde preste sus servicios lo restituirán en el goce de sus derechos y le cubrirán las percepciones que debió recibir durante el tiempo en que se halló suspendido.

Artículo 96. Cuando el o los servidores públicos señalados desaparezcan, o exista riesgo inminente de que oculten, enajenen o dilapiden los bienes objeto del ilícito, se solicitará a la Tesorería de la Federación, proceda al embargo precautorio de sus bienes, a fin de garantizar la recuperación de los bienes obtenidos ilegalmente, así como el cobro de las sanciones económicas que llegaren a imponerse con motivo de la infracción cometida. Impuesta la sanción económica, el embargo precautorio se convertirá en definitivo y se procederá en los términos del tercer párrafo del artículo X de la Ley.

El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo por parte del jefe inmediato, del titular de la dependencia o entidad correspondiente o de los servidores públicos de la Tesorería de la Federación, será causa de responsabilidad administrativa en los términos de la Ley.

Artículo 97. En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios.

El SNA tendrá amplias facultades para constituir convenios con el SAT, la CNVB y otras autoridades financieras y fiscales, para establecer las medidas y los protocolos necesarios para conectarse directamente a sus diversos sistemas, con el objeto de contar con herramientas reales y eficaces para investigar actos de corrupción en los que estén involucrados flujos de recursos económicos.

Artículo 98. Para la investigación de posibles actos de corrupción, y la identificación de redes que los realizan, las autoridades investigadoras podrán utilizar las estrategias que sean necesarias, como la del Usuario Simulado, que se utiliza para sorprender en flagrancia a quien o quienes pretenden beneficiarse con el uso ilegal de recursos públicos.

El Usuario Simulado será utilizado para documentar actos de corrupción en tiempo real, no para provocarlos. Es legal utilizar medios de grabación y registro ocultos para documentar las circunstancias de

tiempo, modo y lugar en las que suceden los hechos materia de la investigación.

Artículo 99. Será considerado delito grave mentir a las autoridades investigadoras en esta y cualquier etapa del proceso. Esta disposición es aplicable para los testigos, abogados, peritos, servidores públicos que forman parte de la autoridad investigadora, y para cualquier persona que intervenga directamente en la investigación o el proceso de instrucción.

Artículo 100. El expediente que resulte de la investigación a la que se refiere este capítulo, tendrá como objeto determinar la probable responsabilidad de él, o los probables involucrados.

Título VI
De la etapa de Instrucción

Capítulo I
De la Competencia

Artículo 101. Una vez determinada la probable responsabilidad por parte de la autoridad encargada de la investigación, definirá si el acto o los actos que están documentados en el expediente, encuadran en alguna de las conductas de corrupción establecidas en esta ley.

Artículo 102. Cuando encuentren coincidencia entre el acto o los actos documentados en el expediente, con al menos uno de los supuestos de corrupción establecidos en esta Ley, lo turnarán al Tribunal de Justicia Administrativa que corresponda.

Artículo 103. Es competente para recibir asuntos de responsabilidad administrativa grave, señalados en esta ley, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en los siguientes supuestos:

I. Todos aquellos casos que involucren a una persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal;
II. Todos aquellos casos que involucren a servidores públicos de los organismos a los que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorgue autonomía;
III. Todos aquellos casos que involucren a Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de los ayuntamientos, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, cuando incurren en alguno de los actos de corrupción señalados en esta Ley, en el uso, manejo, administración y aplicación de fondos, bienes, y recursos federales, bajo cualquier rubro; y
IV. Todos aquellos casos que involucren a personas que las Constituciones de los Estados señalan como servidores públicos, cuando incurren en alguno de los actos de corrupción señalados en esta Ley, en el uso, manejo, administración y aplicación de fondos, bienes y recursos federales, bajo cualquier rubro.

En caso de tratarse de posibles actos de corrupción, de los señalados en esta Ley, pero en el uso, manejo, administración o aplicación de fondos, bienes y recursos de carácter estrictamente local o municipal, el expediente será turnado al Tribunal de Justicia Administrativa que corresponda. Este Tribunal

estará obligado a aplicar cada uno de los principios, criterios y disposiciones generales, establecidos en la presente Ley, para la instrucción, resolución y determinación de sanciones.

Artículo 104. Para los efectos de esta Ley, habrá acumulación de procesos cuando:

I. Se trate de concurso de actos de corrupción;
II. Se investiguen actos de corrupción conexos;
III. En aquellos casos seguidos contra los autores o partícipes de un mismo acto de corrupción; o
IV. Se investigue un mismo acto de corrupción cometido en contra de diversas instituciones, órganos, dependencias o entidades.

Se entenderá que existe conexidad de actos de corrupción cuando se hayan cometido simultáneamente por varias personas reunidas, o por varias personas en diversos tiempos y lugares en virtud de concierto entre ellas, o para procurarse los medios para cometer otro, para facilitar su ejecución, para consumarlo o para asegurar la impunidad.

Existe concurso real cuando con pluralidad de conductas se cometen varios actos de corrupción. Existe concurso ideal cuando con una sola conducta se cometen varios actos de corrupción. No existirá concurso cuando se trate de un acto continuado en términos de la legislación aplicable. En estos casos se harán saber los elementos indispensables de cada clasificación jurídica y la clase de concurso correspondiente.

Artículo 105. Cuando dos o más procesos sean susceptibles de acumulación, y se sigan por diverso órgano jurisdiccional, será competente el que corresponda, de conformidad con las reglas generales previstas en esta Ley:

I. Será competente el que conozca del acto de corrupción cuya punibilidad sea mayor. Si los actos señalados implican similar punibilidad, la competencia será del que conozca de los actos procesales más antiguos; y
II. Si éstos comenzaron en la misma fecha, el que previno primero. Para efectos de este artículo, se entenderá que previno quien dictó la primera resolución del procedimiento.

Artículo 106. El Magistrado que instruye el proceso podrá imponer las siguientes medidas cautelares:

I. La exhibición de una garantía económica;
II. El embargo de bienes;
III. La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero;
IV. La prohibición de salir sin autorización del país;
V. El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada; y
VI. La suspensión temporal en el ejercicio del empleo, cargo o comisión en el servicio público

Las medidas cautelares no podrán ser usadas como medio para obtener un reconocimiento de responsabilidad o como sanción administrativa anticipada.

Capítulo II
De la Recepción y Radicación del Expediente

Artículo 107. Una vez recibido el expediente proveniente de la autoridad encargada de la investigación, se turnará al Magistrado de la Sección Especializada que corresponda.

Artículo 108. Antes de radicar el expediente, el Magistrado a quien le fue turnado, deberá revisar si:

I. A su juicio se encuentra debidamente integrado;

II. Considera que en la etapa de investigación se realizaron todas las diligencias necesarias para encontrar la verdad material de los hechos;

III. El acto o los actos están debidamente calificados; y

IV. A su juicio, de los hechos y documentos que tiene a su disposición, se puede inferir la probable responsabilidad de otros servidores públicos.

Artículo 109. Cuando el Magistrado que recibió el expediente encuentre que no está debidamente integrado; que no se realizaron todas las diligencias pertinentes para encontrar la verdad material de los hechos; que el acto o los actos no están debidamente calificados; o que se puede inferir, a su juicio, la probable responsabilidad de otros servidores públicos, podrá regresarlo a la autoridad encargada de la investigación, con instrucciones y direcciones sobre lo que se requiere para su debida radicación.

El Tribunal podrá establecer un plazo para el cumplimiento de esta instrucción.

Artículo 110. Cuando la autoridad encargada de la investigación se niegue a acatar las instrucciones o direcciones mencionadas en el artículo anterior, cuando tarde un tiempo no razonable para acatarlas, o las acate de manera distinta, el Magistrado podrá iniciar un proceso de responsabilidades administrativas en contra de quienes puedan ser responsables.

Asimismo, dará cuenta de esto al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, para que esta conducta quede registrada y documentada, y se tomen las medidas pertinentes.

Capítulo III
De la Instrucción

Artículo 111. En caso de que el expediente esté debidamente integrado, el Magistrado procederá a su radicación, lo que dará lugar al procedimiento siguiente:

I.- Citará al probable responsable a una audiencia, le notificará que debe comparecer personalmente a rendir su declaración en torno a los hechos que se le imputan, y que puedan ser causa de responsabilidad grave, en los términos de esta Ley.

En la notificación deberá expresarse el lugar, día y hora en que tendrá verificativo la audiencia; la autoridad ante la cual se desarrollará ésta; los actos u omisiones que se le imputen al servidor público y el derecho de éste a comparecer asistido de un defensor.

La notificación a que se refiere esta fracción se practicará de manera personal al probable responsable.

II.- Concluida la audiencia, se concederá al probable responsable un plazo de veinte días hábiles para que ofrezca los elementos de prueba que estime pertinentes y que tengan relación con los hechos que se le atribuyen;

III.- Una vez que se han desahogado las pruebas ofrecidas por los involucrados, la autoridad realizará una revisión de los autos que integran el procedimiento de responsabilidad administrativa, a efecto de constatar que no existe prueba alguna por desahogar, diligencia pendiente de practicar, ni

promoción pendiente de acordar, se emitirá el acuerdo que declarará cerrada la instrucción del procedimiento, en el que además se ordenará se proceda a la emisión de la resolución que en derecho corresponda.

En caso de así solicitarlo el probable responsable, se abrirá un periodo de alegatos por un plazo no mayor a cinco días hábiles, previos a la emisión de la resolución que ponga fin al procedimiento.

IV.- Resolverá dentro de los sesenta días hábiles siguientes al cierre de la instrucción, sobre la inexistencia de responsabilidad, o impondrá al infractor las sanciones administrativas correspondientes y le notificará la resolución en un plazo no mayor de diez días hábiles. Dicha resolución, en su caso, se notificará para los efectos de su ejecución al jefe inmediato o al titular de la dependencia o entidad, según corresponda, en un plazo no mayor de diez días hábiles.

La Resolución será comunicada de inmediato al Secretariado del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, para su inmediata incorporación al Sistema Nacional de Servidores Públicos Sancionados.

IV.- Durante la sustanciación del procedimiento,el Magistrado que lo instruye, podrá practicar todas las diligencias tendientes a perfeccionar las pruebas y allegarse de la verdad sobre la probable responsabilidad del servidor público señalado, así como requerir a éste y a las dependencias o entidades involucradas, la información y documentación que se relacione con los hechos. Dichas dependencias y entidades están obligadas a proporcionar de manera oportuna y veraz la información o documentación requerida.

Si las autoridades encontraran que no cuentan con elementos suficientes para resolver o advirtieran datos o información que impliquen nueva responsabilidad administrativa a cargo del probable responsable o de otros servidores públicos, podrán disponer la práctica de otras diligencias o citar para otra u otras audiencias.

Artículo 112. Durante la substanciación del procedimiento de responsabilidad administrativa, se pondrá a disposición de los involucrados o de sus defensores, los autos del expediente para consulta, la cual podrán realizar en los días y horas hábiles establecidos en el Tribunal que corresponda.

Capítulo IV
De la Prueba

Artículo 113. Cualquier hecho puede ser probado por cualquier medio, siempre y cuando sea lícito.Las pruebas serán valoradas por el órgano jurisdiccional de manera libre y lógica.

Artículo 114. El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un acto de corrupción y la probable participación del imputado.

Los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos.

Se denomina prueba a todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresado al proceso como medio de prueba y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al Magistrado

instructor como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación.

Artículo 115. Las partes tendrán el derecho de ofrecer medios de prueba para sostener sus planteamientos en los términos previstos en esta Ley.

Artículo 116. Los datos y las pruebas deberán ser obtenidos, producidos y reproducidos lícitamente y deberán ser admitidos y desahogados en el proceso, en los términos que establece esta Ley.

Artículo 117. Se considera prueba ilícita cualquier dato o prueba obtenidos con violación a las leyes o los derechos fundamentales, lo que será motivo de exclusión o nulidad.

Las partes harán valer la nulidad del medio de prueba en cualquier etapa del proceso y el Magistrado instructor deberá pronunciarse al respecto.

Artículo 118. El órgano jurisdiccional asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas, de manera libre y lógica, deberá justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas, y explicará y justificará su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios.

Título VII
De la Etapa de Resolución

Capítulo I
De los Elementos de la Resolución

Artículo 119. La resolución administrativa es el acto declarativo que pone fin al procedimiento disciplinario, y determina la existencia o inexistencia de responsabilidad administrativa, respecto de los servidores públicos involucrados y en su caso, la imposición de las sanciones respectivas.

El Magistrado que instruyó el procedimiento analizará todas y cada una de las constancias que obren en el expediente, con el fin de que la resolución que se emita, sea justa y se encuentre debidamente fundada y motivada.

Artículo 120. La resolución debe elaborarse con una estructura lógica que haga asequible los elementos de juicio en que la autoridad sustenta su determinación final.

Artículo 121. La Resolución contendrá:

I. La mención del órgano jurisdiccional que la emite y el nombre del Magistrado o Juez;
II. La fecha en que se dicta;
III. Identificación del acusado;
IV. La enunciación de los hechos y de las circunstancias o elementos que hayan sido objeto de la acusación y, en su caso, los daños y perjuicios imputados, la pretensión reparatoria y las defensas del imputado;
V. Una breve y sucinta descripción del contenido de la prueba;
VI. La valoración de los medios de prueba que fundamenten las conclusiones alcanzadas por el Magistrado o Juez que dicta la resolución;

VII. Las razones que sirvieren para fundar la resolución;

VIII. La determinación y exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se consideren probados y de la valoración de las pruebas que fundamenten dichas conclusiones;

IX. Los resolutivos de absolución o responsabilidad en los que, en su caso, el Órgano jurisdiccional se pronuncia; y

X. La firma del Magistrado o Juez que dicta la Resolución.

Capítulo II
Del Procedimiento para emitir, notificar y publicar la Resolución

Artículo 122. La Resolución deberá ser dictada dentro de los sesenta días hábiles siguientes al cierre de la instrucción, y se notificará al servidor público en un plazo no mayor de diez días hábiles, de manera personal.

Artículo 123. Si dicha resolución determinó la responsabilidad del servidor público, y sanciones correspondientes, se notificará para los efectos de su ejecución al jefe inmediato o al titular de la dependencia o entidad, según corresponda, en un plazo no mayor de diez días hábiles.

Artículo 124. Los superiores jerárquicos que se nieguen a ejecutar esta resolución, y dilaten su ejecución sin causa lógica y justificada, incurrirán en obstrucción de la justicia, como lo determina el artículo 61 de esta Ley.

Artículo 125. La Resolución será también comunicada de inmediato al Secretariado del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, para su inmediata incorporación al Sistema Nacional de Servidores Públicos Sancionados.

Todos los plazos deberán ser respetados en los términos establecidos en esta Ley. Sólo podrán ser ampliados por causa razonada y justificada, o a petición de cualquier interesado en el proceso.

Artículo 126. El Sistema Nacional de Servidores Públicos Sancionados será público, y será de consulta obligatoria para todas las dependencias, entidades y órganos de todos los poderes, órdenes de gobierno, y órganos autónomos del Estado mexicano, así como de las empresas productivas del Estado, en sus procesos de selección, incorporación, contratación, comisión o empleo de cualquier persona.

Artículo 127. Este sistema deberá hacer públicas todas las resoluciones completas que hayan sido notificadas a los servidores públicos responsables.

Artículo 128. El registro sólo desaparecerá de este sistema cuando vía amparo se haya declarado la inconstitucionalidad de la resolución.

Título VIII
De las Sanciones
Capítulo I
De los principios para establecer la sanción

Artículo 129.- Para la imposición de las sanciones administrativas se tomarán en cuenta los siguientes elementos:

I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra;
II. El grado y forma de participación en los hechos;
III. El tipo de funciones del servidor público y el impacto del acto a la sociedad;
IV. El nivel jerárquico del servidor público;
V. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público o de la persona;
VI. Los antecedentes del infractor, entre ellos la antigüedad en el servicio;
VII. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución;
VIII. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y
IX. El monto del beneficio, lucro, o daño o perjuicio derivado del acto que se sanciona.

Para los efectos de esta Ley, se considerará reincidente al servidor público que habiendo sido declarado responsable de algún acto de corrupción, incurra nuevamente en una o varias conductas infractoras.

Artículo 130.- Procede la imposición de sanciones económicas cuando el acto de corrupción produzca beneficios o lucro, o se causen daños o perjuicios.

En ningún caso la sanción económica que se imponga podrá ser menor o igual al monto de los beneficios o lucro obtenidos o de los daños o perjuicios causados.

Artículo 131. Las facultades de las autoridades competentes para imponer las sanciones administrativas previstas en esta Ley prescribirán en un plazo de 10 años, contados a partir del día siguiente de aquél en que se hubieren cometido las infracciones, o a partir del momento en que hubieren cesado, si fueren de carácter continuo.

Para los efectos del presente artículo la prescripción se interrumpe con la notificación del inicio del procedimiento administrativo sancionador o con la impugnación de la resolución respectiva por el infractor.

Capítulo II
De la Reducción De Sanciones

Artículo 132. La persona que haya realizado alguno de los actos de corrupción previstos en esta Ley, o bien, que se encuentre participando en su realización, podrá confesar su responsabilidad con el objeto de acogerse al beneficio de reducción de sanciones establecido en este artículo. Esta confesión se podrá hacer ante cualquier autoridad que tenga facultades de investigación, señaladas en esta Ley.

Artículo 133. La aplicación del beneficio a que hace referencia el artículo anterior, tendrá por efecto una reducción de entre el cincuenta y el setenta por ciento del monto de las sanciones, o del plazo de inhabilitación, que se impongan al responsable. Para su procedencia será necesario que adicionalmente se cumplan los siguientes requisitos:

I. Que no se haya notificado a ninguno de los probables infractores el inicio del procedimiento administrativo sancionador;
II. Que la persona que pretende acogerse a este beneficio, sea entre los sujetos involucrados en la infracción, la primera en aportar los elementos de convicción suficientes y que a juicio de las autoridades competentes permitan comprobar la existencia de la infracción;
III. Que la persona que pretende acogerse al beneficio coopere en forma plena y continua con la autoridad competente que lleve a cabo la investigación y, en su caso, con la que substancie el

procedimiento administrativo sancionador conducente, y

IV. Que la persona interesada suspenda de inmediato su participación en la infracción.

Las personas que soliciten este beneficio serán sujetas del procedimiento administrativo sancionador a que se refiere esta Ley, en el cual se constatará el cumplimiento de los requisitos a que hace referencia este artículo, así como la veracidad y validez de la confesión realizada y se resolverá sobre la procedencia de dicho beneficio.

Artículo 134. Una vez iniciado el procedimiento administrativo sancionador a que se refiere esta Ley, si el probable infractor confiesa su responsabilidad sobre los actos que se le imputan, se le aplicará una reducción de hasta el cincuenta por ciento del monto de las sanciones que se impongan, siempre que lo haga antes del cierre de la instrucción.

Capítulo III
De las sanciones para Servidores Públicos

Artículo 135. Las sanciones administrativas para servidores públicos por actos de corrupción señalados en esta Ley, consistirán en:

I. Destitución del puesto;
II. Sanción económica; e
III. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

Artículo 136. La destitución del puesto deberá ser ejecutada de manera inmediata por el superior jerárquico del servidor público, o por el servidor público u órgano colegiado que lo designó.

La destitución para cualquier servidor público cuyo cargo se derive de un proceso electoral será declarada por el tribunal competente en la resolución, y surtirá efectos a partir del día siguiente a la notificación realizada a aquel.

Artículo 137. La inhabilitación será efectiva para cualquier empleo, cargo o comisión, de cualquier órgano, entidad, institución, dependencia, poder u orden de gobierno del Estado mexicano.

Artículo 138. El SNA será responsable de crear, controlar, vigilar y administrar el Sistema Nacional de Servidores Públicos Sancionados.

Para la incorporación de una persona a cualquier empleo, cargo o comisión, de cualquier órgano, entidad, institución, dependencia, poder u orden de gobierno del Estado mexicano, será requisito previo y formal verificar que no se encuentra inhabilitado.

La misma obligación tendrán los partidos políticos, previo al registro de cualquier persona como pre candidato o candidato a cualquier cargo de elección popular, o para la designación de dirigentes.

Artículo 139. Las sanciones económicas serán ejecutadas de manera directa por el Tribunal que impuso la sanción. Para estos efectos, tendrá facultades de decretar e inscribir embargos, solicitar a las autoridades competentes el congelamiento de cuentas bancarias, así como de realizar convenios resarcitorios y de ejecución alternativa con el servidor público.

Artículo 140. Los recursos que se deriven de las sanciones económicas serán entregados al Secretariado del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción para los siguientes fines:

I. Financiar las actividades del Comité de Participación Ciudadana;
II. Financiar proyectos de investigación sobre combate a la corrupción;
III. Financiar el establecimiento de nuevos sistemas y tecnologías en el SNA;
IV. Establecer un fondo para recompensas de testigos y denunciantes;
V. Para la creación de nuevas capacidades de los servidores públicos que integran el SNA; y
VI. Para resarcir a las personas afectadas por el acto de corrupción.

Capítulo IV
De las sanciones para personas físicas y morales

Artículo 141. Los tribunales de Justicia Administrativa impondrán a los particulares que intervengan en actos de corrupción, señalados en esta Ley, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las siguientes sanciones:

I. Sanción económica;
II. Inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas;
III. El resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos federales, locales o municipales.

Artículo 142. Las personas morales serán sancionadas en los términos de este artículo cuando los actos vinculados con actos de corrupción sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella.

También podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de actos de corrupción que causen perjuicio a la hacienda pública o a los entes públicos, federales, locales o municipales, siempre que la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves; en estos supuestos la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva.

Artículo 143. Las dependencias y entidades, así como la Procuraduría no podrán otorgar a las personas que hubieren sido sancionadas en términos de esta Ley, durante el plazo en que éstas se encuentren inhabilitadas, subsidios, donativos y otros beneficios previstos en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y en los demás ordenamientos aplicables.

Título IX
De las Medidas de ejecución de las sanciones
Capítulo I
De las facultades y competencia

Artículo 144. Los Tribunales de Justicia Administrativa son las autoridades finales del proceso administrativo sancionatorio. Sus resoluciones tienen fuerza legal plena.

Artículo 145. Las sanciones que estos Tribunales determinen en sus resoluciones deberán ser ejecutadas

de inmediato por los superiores jerárquicos del servidor público sancionado, y cumplidas sin dilación alguna por el servidor público sancionado. El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será a su vez sancionado como obstrucción de la justicia, en los términos establecidos en esta Ley.

Artículo 146. Los Tribunales de Justicia Administrativa tienen la facultad de determinar la forma, el modo y el tiempo en el que deberán ejecutarse las distintas sanciones. Así mismo, tendrán la facultad de dar seguimiento a la ejecución de las sanciones que determinen.

Artículo 147. Es obligación del SNA establecer los sistemas y mecanismos adecuados para monitorear el debido cumplimiento de las sanciones administrativas que se imponen con base en esta Ley.

Asimismo, el SNA deberá establecer los convenios necesarios para el debido cumplimiento de las resoluciones establecidas en esta Ley.

Capítulo II
Del Incidente de Inejecución de la Resolución

Artículo 148. Es facultad de cualquiera de las autoridades que forman el SNA iniciar el Incidente de inejecución de la Resolución, ante el Tribunal de Justicia Administrativa que instruyó el proceso que dio origen a la sanción.

También podrá hacerlo la persona, institución u organismo que interpuso la denuncia que dio origen al proceso sancionador.

Artículo 149. Una vez recibido el escrito con el que se denuncia la no ejecución o la indebida ejecución de la resolución, el Tribunal deberá definir si se cumplió o no la Resolución previamente dictada.

En caso de determinar que se cumplió satisfactoriamente, dará aviso al SNA.

Artículo 150. En caso de definir que no se cumplió la Resolución, o que se cumplió de forma distinta a la previamente determinada, dictará nuevas medidas de ejecución, y abrirá un nuevo expediente para determinar si existen nuevas responsabilidades por Obstrucción de Justicia, en los términos establecidos por esta Ley.

Título X
Del Recurso del Revisión y el Amparo
Capítulo I
Del Recurso de Revisión

Artículo 151. La Auditoría Superior de la Federación o la Secretaría de la Función Pública en su caso, podrán interponer el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede del Pleno, Sección o Sala Regional a que corresponda, mediante escrito que se presente ante la responsable, dentro de los quince días siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificación respectiva, siempre que se refiera a cualquiera de los siguientes supuestos:

I. El Tribunal de Justicia Administrativa se haya negado a recibir un expediente para su instrucción, en los términos de esta Ley;
II. Se declare la no responsabilidad de un servidor público por alguno de los actos de corrupción señalados en esta Ley; o

III. Esté inconforme con los términos de la Resolución emitida con base en esta Ley.

Capítulo II
Del Amparo

Artículo 152. Contra las Resoluciones administrativas a las que se refiere esta Ley procederá el Juicio de Amparo Directo en los términos del artículo 107 de la Constitución, y del Artículo 170 y subsecuentes de la Ley de Amparo.

Transitorios

Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Los procedimientos administrativossancionatorios iniciados antes de la entrada en vigor del presente Decreto, se seguirán tramitando hasta su conclusión conforme a las disposiciones vigentes al momento de la comisión de los hechos que les dieron origen. Lo mismo se observará respecto de la ejecución de las sanciones correspondientes.

Artículo Tercero. El Congreso de la Unión deberá armonizar todas la Leyes que de manera directa o indirecta se requieran, para la integralidad y eficacia del Sistema Nacional Anticorrupción, en el plazo establecido en el Decreto que crea este Sistema en la Constitución.

Artículo Cuarto. Los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, procederán a hacer las reformas pertinentes en las leyes específicas, con el fin de armonizarlas en lo conducente a la presente Ley, en un plazo no mayor a seis meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley.

ATENTAMENTE

SENADOR FERNANDO HERRERA ÀVILA

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el

Senado de la República

México, Distrito Federal, a los 25 días del mes de agosto de 2015.

Del Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.



SEN. JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ

Quien suscribe, **JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ,** Senador de la República integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, PARA FORTALECER LA SEPARACIÓN PRIMARIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS,** con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La globalización ha generado una crisis ambiental sin precedentes, caracterizada por afectaciones y agotamiento de recursos naturales, pérdida de biodiversidad, altos índices de contaminación y, en general, patrones de consumo que no observan esquemas de sustentabilidad.

Una de las consecuencias inmediatas y más dañinas de dichos patrones de consumo, es la generación de residuos, pues prácticamente todas las actividades productivas requieren insumos que, una vez que cumplen con su finalidad, generan desperdicios o simplemente son desechados por carecer de utilidad alguna; de tal manera que parte de la materia empleada se traduce en residuos.

Para reforzar lo anterior, basta recordar, a manera de ejemplo, que el pasado 12 de agosto se registraron una serie de explosiones en la ciudad China de Tianjin, que aparentemente tuvo origen en una terminal de contenedores en la que se encontraban cerca de unas 3 mil toneladas de productos químicos peligrosos, incluyendo unas 700 toneladas de cianuro de sodio, un compuesto altamente tóxico que puede ser mortal y que explota en contacto con el agua; los efectos de esta explosión han dejado un saldo de 129 fallecidos, 44 desaparecidos y 650 hospitalizados; además, los restos de cianuro que esparcieron las explosiones se han filtrado al mar y al suelo, lo que ha generado el temor de una catástrofe medioambiental.[1] Este suceso es prueba de la crisis ambiental que vivimos actualmente y que se agrava considerablemente por el mal manejo de residuos y sustancias peligrosas.

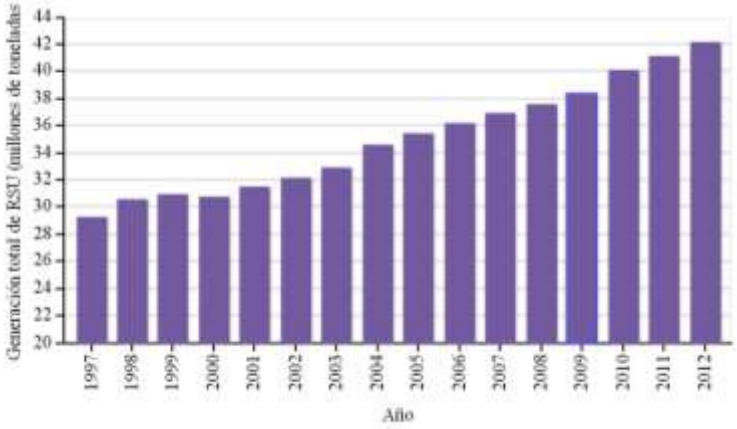
En nuestro país, los residuos sólidos urbanos representan la mayor parte de los desechos que se generan, de tal manera que su manejo adecuado es de suma importancia.

De acuerdo con el informe *El Medio Ambiente en México 2013-2014*[2], elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la generación de residuos sólidos urbanos se incrementó notablemente en los últimos años; tan sólo entre 1997 y 2012 creció 43.8%, pasando de cerca de 29.3 a 42.1 millones de toneladas; ello principalmente como resultado del crecimiento urbano, el desarrollo industrial, las modificaciones tecnológicas y el cambio en los patrones de consumo, tal como se expresa en la siguiente gráfica:

[1] Para más información consultar: http://internacional.elpais.com/internacional/2015/08/14/actualidad/1439538935_379755.html http://www.excelsior.com.mx/global/2015/08/24/1041802

[2] Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, *El Medio Ambiente en México 2013-2014*, México, 2015. Disponible en: http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_resumen14/index.html

Generación total de residuos sólidos urbanos[3]



La falta de infraestructura y cultura ambiental, el crecimiento demográfico, los patrones de producción y consumo, así como la inobservancia de la normatividad aplicable, han hecho de los residuos sólidos urbanos uno de los problemas ambientales de mayor impacto en el país.

La fracción XXXIII del artículo 5 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en adelante Ley General de Residuos, define a los residuos sólidos urbanos como "*Los generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por esta Ley como residuos de otra índole*".

Este tipo de residuos, comúnmente enmarcados bajo el concepto genérico de basura, no sólo constituye un problema de contaminación paisajística, al afectar la imagen de las zonas tanto urbanas como rurales, sino que detona otros tipos de contaminación, como del suelo, el agua y el aire, así como problemas de salud pública por enfermedades transmitidas por plagas y fauna nociva.

Conforme al *Sistema Nacional de Indicadores Ambientales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales*[4], en 2012 los mexicanos generamos en promedio casi un kilogramo de residuos sólidos urbanos diarios, lo que se traduce en 42 millones de toneladas anuales. De este volumen menos del 10% tuvo su disposición final[5] en sitios controlados, el 65% fue dispuesto en rellenos sanitarios y el 20% en sitios no controlados, tal como se refleja en la siguiente gráfica:

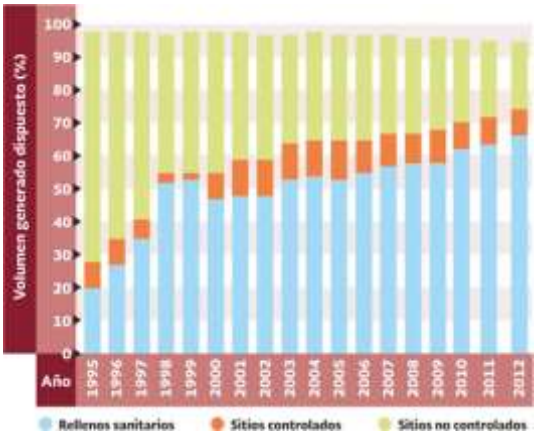
Disposición final de residuos sólidos urbanos[6]

[3] *Ibídem*. Disponible en: http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_resumen14/07_residuos/7_1_1.html

[4] Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sistema Nacional de Indicadores Ambientales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, México 2013. Disponible en: http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/indicadores13_cd/conjuntob/indicador/04_residuos/4_2.html

[5] Disposición Final: Acción de depositar o confinar permanentemente residuos en sitios e instalaciones cuyas características permitan prevenir su liberación al ambiente y las consecuentes afectaciones a la salud de la población y a los ecosistemas y sus elementos (fracción V del artículo 5 de la Ley General de Residuos).

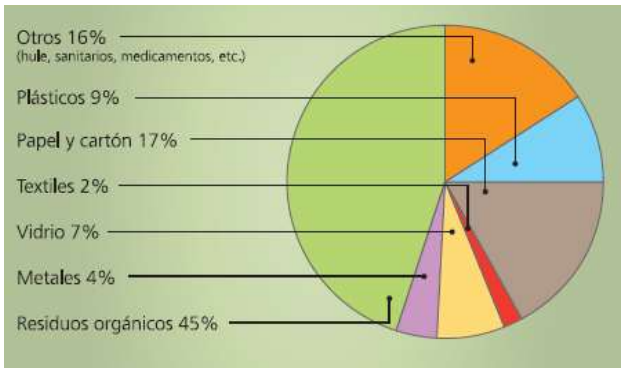
[6] Secretaría de Desarrollo Social. Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas. México. 2013. Disponible en:http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/indicadores13_cd/conjuntob/indicador/04_residuos/4_3.html



Hay que recordar que una parte significativa de los residuos sólidos urbanos se encuentra constituida por materiales o residuos orgánicos susceptibles de aprovechar su valor remanente o capacidad energética, a fin de ser incorporados a otros procesos productivos, bajo criterios de responsabilidad compartida, manejo integral y eficiencia ambiental, tecnológica y económica. Dicha actividad es definida en la fracción XLIV del artículo 5 de la Ley General de Residuos como valorización de residuos como un principio y conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es recuperar el valor remanente o el poder calorífico de los materiales que componen los residuos, mediante su reincorporación en procesos productivos, bajo criterios de responsabilidad compartida, manejo integral y eficiencia ambiental, tecnológica y económica.

En este sentido, los residuos orgánicos pueden ser utilizados como nutrientes para suelos o para la generación de biogás transformable en energía eléctrica y calor, mientras que otros residuos como el papel, el cartón, los textiles, los plásticos, el vidrio o los metales, pueden ser reciclados.

Composición de los residuos sólidos urbanos[7]



Conforme a lo anterior, es evidente que la valorización de residuos supone un manejo adecuado, lo cual incluye tanto separarlos desde su generación como implementar medidas adecuadas para distinguirlos en su recolección. En consecuencia, resulta necesario adoptar medidas legislativas para fortalecer la separación de residuos sólidos urbanos en el orden de gobierno competente en esta materia, es decir, en el ámbito municipal; por ello, la presente iniciativa tiene por **objeto** establecer categóricamente la separación residuos sólidos urbanos como una función que forme parte del manejo integral a cargo de los municipios.

Lo anterior en función a que el artículo 10 de la Ley General de Residuos atribuye a los municipios llevar a cabo las funciones de manejo integral de residuos sólidos urbanos, lo cual incluye: la promoción de su separación, recolección, traslado, tratamiento, y su disposición final; por tanto, la separación de residuos

[7] Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Una propuesta para la gestión ambiental municipal de los residuos sólidos. El Sistema Integral de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM). México, 2006. Pág. 7. Disponible en: file:///F:/Documents%20and%20Settings/senado/Mis%20documentos/Downloads/584.pdf

sólidos urbanos no constituye una función de manejo integral a cargo de los municipios, toda vez que esta disposición únicamente mandata la promoción de su separación.

Ahora bien, resulta necesario distinguir entre separación primaria y separación secundaria.

La fracción XXXVIII del artículo 5 de la Ley General de Residuos define a la separación primaria como la "*Acción de segregar los residuos sólidos urbanos y de manejo especial en orgánicos e inorgánicos, en los términos de esta Ley*"; por su parte, la fracción XXXIX define a la separación secundaria como la "*Acción de segregar entre sí los residuos sólidos urbanos y de manejo especial que sean inorgánicos y susceptibles de ser valorizados en los términos de esta Ley*".

De estas definiciones se infiere que la Ley General de Residuos reconoce dos niveles de separación, de tal suerte que es posible afirmar que la separación primaria es básica, al distinguir entre residuos orgánicos e inorgánicos, mientras que la separación secundaria es más compleja, al suponer una separación primaria (segregación de residuos orgánicos e inorgánicos) para posteriormente, de los residuos inorgánicos, separar los que sean susceptibles de ser valorizados.

Con la finalidad de transitar hacia la separación de residuos sólidos urbanos como una función de manejo integral a cargo de los municipios, en lugar de quedarse en la simple promoción de ello, pero sensibles al hecho de que la separación secundaria supone mayores capacidades técnicas que muchos gobiernos municipales no podrían cumplir, se estima apropiado distinguir a la separación primaria y a la promoción de la separación secundaria como funciones de manejo integral de residuos sólidos urbanos, por lo cual se propone que el párrafo primero del artículo 10 de la Ley General de Residuos quede en los siguientes términos:

> *"Artículo 10.- Los municipios tienen a su cargo las funciones de manejo integral de residuos sólidos urbanos, que consisten en la* ***separación primaria,*** *promoción de* ***la*** *separación* ***secundaria****, recolección, traslado, tratamiento, y su disposición final, conforme a las siguientes facultades:"*

En otro orden de ideas, de las facultades de los municipios enlistadas en el artículo 10 se deriva la formulación de los Programas Municipales para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (fracción I), los cuales constituyen un instrumento de la política de prevención y gestión integral de los residuos regulado en el Capítulo I del Título Cuarto de la Ley General de Residuos.

En tal sentido, el artículo 26 de la multicitada Ley prevé el contenido mínimo de dichos planes, a saber:

> *"I. El diagnóstico básico para la gestión integral de residuos de su competencia, en el que se precise la capacidad y efectividad de la infraestructura disponible para satisfacer la demanda de servicios;*
>
> *II. La política local en materia de residuos sólidos urbanos y de manejo especial;*
>
> *III. La definición de objetivos y metas locales para la prevención de la generación y el mejoramiento de la gestión de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, así como las estrategias y plazos para su cumplimiento;*
>
> *IV. Los medios de financiamiento de las acciones consideradas en los programas;*
>
> *V. Los mecanismos para fomentar la vinculación entre los programas municipales*

correspondientes, a fin de crear sinergias, y

VI. La asistencia técnica que en su caso brinde la Secretaría."

Con la finalidad de fortalecer el objetivo de la presente iniciativa, en materia de separación de residuos sólidos urbanos, se estima adecuado que la política local en la materia que deban contener los Programas Municipales para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, describan de manera particular lo relativo a la prevención de su generación, así como su recolección, traslado, tratamiento, y disposición final, garantizando, por lo menos, su separación primaria.

De acuerdo a lo descrito en el párrafo anterior, se propone reformar la fracción II del artículo 26 de la Ley General de Residuos, para quedar de la siguiente forma:

*II. La política local en materia de residuos sólidos urbanos y de manejo especial**, particularmente lo relativo a la prevención de su generación, así como su recolección, traslado, tratamiento, y disposición final, garantizando, por lo menos, su separación primaria**;*

Por otra parte, el Título Sexto de la Ley General de Residuos establece la regulación de la prevención y manejo integral de residuos sólidos urbanos; de manera particular, el artículo 96 señala una serie de acciones a cargo de los gobiernos locales, con el propósito de promover la reducción de su generación, así como su segregación, valorización y gestión integral, a fin de proteger la salud y prevenir y controlar la contaminación ambiental producida por su manejo.

La fracción X del artículo que nos ocupa establece como parte de dichas actividades, "*Organizar y promover actividades de comunicación, educación, capacitación, investigación y desarrollo tecnológico para prevenir la generación, valorizar y lograr el manejo integral de los residuos*". Sin embargo, en atención al objeto de la presente iniciativa, se estima apropiado adicionar a esta disposición la separación, pues ésta también puede ser fomentada mediante actividades de educación, capacitación, investigación y desarrollo tecnológico.

Finalmente, el artículo 99 de la Ley General de Residuos contiene una serie de aspectos que los municipios deben considerar en las acciones que llevarán a cabo para la prevención de la generación, valorización y la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, a saber:

"*I. Las obligaciones a las que se sujetarán los generadores de residuos sólidos urbanos;*

II. Los requisitos para la prestación de los servicios para el manejo integral de los residuos sólidos urbanos, y

III. Los ingresos que deberán obtener por brindar el servicio de su manejo integral."

En atención al objeto de la presente iniciativa, y tomando en consideración que la separación de residuos constituye un requisito para hacer posible su valorización, se estima adecuado:

1. Obligar a los generadores de residuos sólidos urbanos a llevar a cabo, por lo menos, su separación primaria, en la fracción I, y

2. Que dentro de los requisitos que se establezcan para la prestación de los servicios para el manejo integral de los residuos sólidos urbanos se garantice, por lo menos, la separación primaria en su recolección, traslado, tratamiento y disposición final, en la fracción II.

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman el párrafo primero del artículo 10, la fracción II del artículo 26, la fracción X del artículo 96 y las fracciones I y II del artículo 99 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:

Artículo 10.- Los municipios tienen a su cargo las funciones de manejo integral de residuos sólidos urbanos, que consisten en la **separación primaria, promoción de la separación secundaria,** recolección, traslado, tratamiento, y su disposición final, conforme a las siguientes facultades:

I. a XII. …

Artículo 26.- …

I. …

II. La política local en materia de residuos sólidos urbanos y de manejo especial**, particularmente lo relativo a la prevención de su generación, así como su recolección, traslado, tratamiento, y disposición final, garantizando, por lo menos, su separación primaria**;

III. a VI. …

Artículo 96.- Las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, con el propósito de promover la reducción de la generación, valorización y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, a fin de proteger la salud y prevenir y controlar la contaminación ambiental producida por su manejo, deberán llevar a cabo las siguientes acciones:

I. a IX. …

X. Organizar y promover actividades de comunicación, educación, capacitación, investigación y desarrollo tecnológico para prevenir la generación, **separar,** valorizar y lograr el manejo integral de los residuos;

XI. a XIII. …

Artículo 99.- …

I. Las obligaciones a las que se sujetarán los generadores de residuos sólidos urbanos**, incluyendo, por lo menos, su separación primaria**;

II. Los requisitos para la prestación de los servicios para el manejo integral de los residuos sólidos urbanos, **los cuales deberán garantizar, por lo menos, la separación primaria en su recolección, traslado, tratamiento y disposición final,** y

III. …

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el recinto del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los veinticinco días del mes de agosto del año dos mil quince.

SENADOR JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con aval de grupo, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Los que suscriben, legisladoras y legisladores federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara Senadores de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Soberanía la presente **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL**, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La corrupción es un fenómeno corrosivo para las naciones y México no es ajeno a sus efectos, por el contrario, se ha convertido en una problemática galopante, creciente y extendida, que se encuentra arraigada desde el plano individual hasta el familiar, desde lo comunitario y lo local hasta el ámbito nacional y transnacional.

Las causas que la originan, así como sus consecuencias se explican desde una multiplicidad de factores: una estructura económica oligopólica y su influencia en la toma de decisiones de políticas públicas (licitaciones públicas concertadas, concesiones pactadas); un marco institucional débil en coordinación, supervisión, sanciones, transparencia, presupuesto, y además, la lentitud en la impartición de justicia. Todo esto hace de la corrupción un fenómeno omnipresente -manifiesto mediante tráfico de influencias, contrabando, soborno, peculado, uso privado de bienes públicos, sanciones al contribuyente, altos costos de trámites, castigo al consumidor- que hace de la impunidad parte de nuestra vida pública.

De acuerdo al último informe del Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por la organización Transparencia Internacional en 2014, nuestro país ocupa el lugar número 103 del índice de corrupción de 175 naciones, lo que hace necesario redoblar esfuerzos en el establecimiento de medidas institucionales tendientes a prevenir, detectar y sancionar las conductas relacionadas con actos de corrupción en los diversos ámbitos de gobierno.

Este lacerante mal emana de un sistema político y económico que se aprovecha de la fragmentación y dispersión de los órganos reguladores y de supervisión, que si bien, están facultados para garantizar la transparencia y el correcto ejercicio de los recursos públicos, en la práctica, la falta de claridad en los mandatos presupuestales, facultades dispersas entre poderes y los distintos órdenes de gobierno, alimentan la cultura de la corrupción, promovida, a nivel institucional, por un sistema que se encuentra dividido y en un estado caótico, con amplias lagunas jurídicas en la regulación de actos de corrupción tanto de servidores públicos como de particulares, haciendo del sistema de procuración de justicia, existente para el caso, algo completamente ineficaz en la disuasión e investigación de dichos actos.

Necesitamos un nuevo diseño institucional que desarrolle la rendición de cuentas en todos los órdenes de gobierno y que implemente un sistema que active mecanismos de prevención, control externo e investigación, y sanción, que generen una rendición de cuentas horizontal, en el cual el poder se disperse y no exista un monopolio legal de ninguna institución.

Por esta razón, el pasado veintisiete de mayo de dos mil quince se constituye como una fecha histórica para nuestro país, ese día se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Reforma Constitucional en materia de combate a la corrupción de la cual el Partido Acción Nacional fue el principal orquestador e impulsor, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores.

Ese día se inscribieron las bases de un nuevo orden jurídico tendiente a prevenir, detectar y sancionar hechos de corrupción en todos órdenes de gobierno, ese día vio la luz el Sistema Nacional Anticorrupción.

Si bien en México tenemos un marco normativo que rige la conducta de los servidores públicos y se han realizado importantes avances en su implementación, también es cierto que no se han alcanzado los resultados que se esperan, de ahí la imperiosa necesidad de realizar cambios sustanciales, ya que el control de la corrupción es una condición indispensable para el correcto desarrollo del ejercicio público en todos los órdenes de gobierno.

Por esta razón la Reforma Constitucional en materia de combate a la corrupción, creó el Sistema Nacional Anticorrupción, entendido como un conjunto de instituciones que con absoluta independencia se coordinan entre sípara cumplir con las políticas en materia de prevención, detección, control de la corrupción, promoción de la integridad y participación ciudadana.

Es un Sistema "horizontal", en el cual el poder se dispersa, no existe un monopolio legal de ninguna institución y donde cada una de ellas es individualmente responsable. Es decir, un sistema de contrapesos diseñado para que todos los órganos de gobierno, en sus tres niveles, y los servidores públicos que los integran, sean responsables entre ellos.

Nuestro país a través de los años ha realizado el ejercicio público a través de un sistema "vertical", es decir, el ejercicio del poder y sus responsabilidades no se comparten de igual forma en todos los ámbitos de gobierno lo que ha resultado en un sistema ineficiente. Por tanto el Sistema Nacional Anticorrupción pretende crear un esquema donde se impongan límites y se vigile a los servidores públicos y particulares, en su caso, estableciendo las bases necesarias para la exitosa coordinación de las instituciones responsables de la transparencia, fiscalización, rendición de cuentas, combate a la corrupción y a la ineficiencia administrativa.

La meta general del Sistema Nacional Anticorrupción es que todos los servidores públicos realicen sus atribuciones dentro del marco de legalidad, donde los ciudadanos estén protegidos de la arbitrariedad y pueda realizarse el fin último del estado de derecho: la justicia. Lo que busca es convertir la corrupción en un acto de alto riesgo y de bajos rendimientos.

Por esta razón el Sistema se integra por instancias competentes y afines, cuyo objeto es coordinar sus respectivos esfuerzos a fin de implementar políticas transversales en materia de prevención, control y sanción de la corrupción, así como la promoción de la integridad, y la participación ciudadana, en los términos que establezca la Ley General de Responsabilidades.

En Acción Nacional reconocemos el gran logro alcanzado por el mandato constitucional que le da vida al Sistema, pero sabemos que se requiere de una legislación secundaria eficiente que le permita funcionar de manera adecuada, y así alcanzar los objetivos para los que fue creado.

Por tal motivo, proponemos la creación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo objetivo es establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar que los distintos

Poderes, órganos e instituciones del Estado Mexicano, de todos los órdenes de gobierno, cuenten con un sistema adecuado para identificar y prevenir aquellos hechos de corrupción.

Con esta Ley se pretende estructurar el Sistema, estableciendo su composición, atribuciones, herramientas, objetivos, funcionamiento y administración, destacando lo siguiente:

1) Establece la composición, atribuciones y objetivos del Comité Coordinador del Sistema, que se constituye como la instancia responsable de establecer e implementar, políticas públicas, bases generales y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección de hechos de corrupción, disuasión de faltas administrativas, fiscalización y control de recursos públicos y de los mecanismos de suministro e intercambio, sistematización y actualización de la información sobre estas materias.

El cual por voluntad constitucional se integra por el titular de la Auditoría Superior de la Federación, el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el titular de la Secretaría de la Función Pública; el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; quien presida del organismo garante de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; un representante del Consejo de la Judicatura Federal; un representante del Comité de Participación Ciudadana.

2) Para el buen funcionamiento del Sistema Nacional, se instituye la figura del Presidente quien será designado de manera rotativa y fungirá como representante del Sistema, vigilando el cumplimiento de los acuerdos generados; así mismo, a propuesta del Presidente el Pleno del Comité Coordinador elegirá al Secretario Ejecutivo el cual se constituye como el órgano operativo del Sistema y gozará de autonomía técnica, de gestión y presupuestal.

3) Establece las atribuciones, funcionamiento, selección y composición del Comité de Participación Ciudadana cuyo objetivo principal es vigilar, prevenir y detectar actos de corrupción y faltas administrativas, así como coordinar y encausar los esfuerzos de la sociedad civil en el combate contra la corrupción.

4) Instaura las bases mínimas de integración, funcionamiento y coordinación que habrán de seguir los Sistemas Locales Anticorrupción, tanto a nivel Estatal como Municipal, para de esta forma erradicar el control histórico del Gobernador o del Presidente Municipal sobre los órganos encargados del combate a la corrupción.

5) Determina el diseño, alcances, facultades y formas mínimas de operación de los órganos encargados del Control Interno, para lograr alcanzar los objetivos institucionales, la salvaguarda de los recursos públicos, así como prevenir la corrupción y la ineficiencia administrativa.

6) Dentro del Sistema, la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción se instituyen como Órganos de Control Externo, la primera, constituida como el órgano responsable de vigilar la cuenta pública para identificar posibles irregularidades en los recursos y participaciones federales que se ejercen en la federación, los estados y municipios, y la segunda, como el órgano investigador con las más amplias facultades que, en su caso, consignará ante jueces federales posibles delitos relacionados con actos de corrupción.

7) Instituye el servicio profesional de carrera de los servidores públicos que participan en el Sistema Nacional Anticorrupción y en el Sistema Nacional de Fiscalización, para que sea el mérito y la capacidad

lo que rija el servicio público y no así el compadrazgo y la camaradería.

8) Crea el Sistema Nacional de Fiscalización que coordina las acciones de los órganos de fiscalización en el país para generar condiciones que permitan un mayor alcance en sus revisiones, evite duplicidades, permita un intercambio efectivo de información, homologue los criterios de planeación, ejecución y reporte de auditorías, estableciendo una serie de deberes para quienes conforman el Sistema, entre otras cosas.

9) Crea la plataforma digital del Sistema Nacional Anticorrupción, la cual estará compuesta, por al menos el Sistema de Evolución Patrimonial y de declaración de intereses, el Sistema de Información de Compras Públicas, el Sistema Nacional de Servidores Públicos Sancionados, el Sistema de información y comunicación del Sistema Nacional de Fiscalización, el Sistema de denuncias públicas de actos de corrupción.

Así mismo, se establecen los objetivos, descripción, estructura, y operación de los Sistemas antes mencionados.

10) Establece las bases mínimas que todos los órganos, instituciones, dependencias y entidades del Estado mexicano, deben seguir con relación a las políticas de prevención, detección de la corrupción.

11) Implementa, como atribución del Sistema Anticorrupción el establecer las distintas formas de evaluación de las políticas y medidas de combate a la corrupción en todo el Estado mexicano, así como el diseño de indicadores que midan, tanto el fenómeno de la corrupción, así como las medidas que el Estado toma para combatirlo.

12) Establece los mecanismos de participación ciudadana en el combate a la corrupción, destacando las figuras del testigo social, las auditorías sociales y las redes de participación ciudadana.

Sistema Nacional Anticorrupción

El Sistema Nacional Anticorrupción tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de hechos de corrupción y faltas administrativas, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Es una instancia deliberativa cuya finalidad es establecer y articular la política en la materia. Además debe garantizar que los distintos Poderes, órganos e instituciones del Estado Mexicano, de todos los órdenes de gobierno, cuenten con un sistema adecuado para identificar y prevenir aquellos hechos de corrupción.

Así mismo y toda vez que la corrupción es un fenómeno que se da en redes y no es una conducta individualizada se consideran sujetos de esta ley los Servidores Públicos en términos del artículo 108 constitucional, así como los particulares. Lo que se busca con esta disposición es regular y sancionar a todos los sujetos que participan en actos de corrupción.

Comité Coordinador

El Sistema Nacional Anticorrupción se coordinará a través del Comité Coordinador que será la instancia responsable de establecer e implementar, políticas públicas, bases generales y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención,

detección de hechos de corrupción, disuasión de faltas administrativas, fiscalización y control de recursos públicos y de los mecanismos de suministro e intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre estas materias.

Sus principales atribuciones son coordinar al sistema nacional y los sistemas locales, promover políticas públicas en materia de prevención de la corrupción, establecer mecanismos de intercambio, sistematización e información de la corrupción, formular un sistema de indicadores sobre gestión y desempeño del Comité Coordinador; elaborar un informe anual que contenga los avances y resultados de la aplicación de las políticas y programas implementados por las instituciones que lo integran, así como desarrollar inteligencia institucional.

El Comité coordinador estará conformado por los titulares de los siguientes entes públicos:

I. Auditoria Superior de la Federación: será el órgano responsable de vigilar la cuenta pública para identificar posibles irregularidades en ingresos o gastos de recursos federales, podrá realizar investigaciones y fiscalizaciones en tiempo real y fiscalizar ejercicios anteriores al de la cuenta pública en revisión. Además tendrá facultad de fiscalizar los recursos y participaciones federales que se ejercen en los estados y municipios.

En caso de detectar irregularidades promoverá acciones de responsabilidad ante el Tribunal de Cuentas o presentará denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, también podrá interponer recursos de revisión fiscal contra determinaciones del Tribunal o de la Fiscalía.

II. Fiscalía Especializada en actos de Corrupción: creada con la reciente reforma política que otorga autonomía a la PGR y la transforma en la Fiscalía General de la República, tendrá las más amplias facultades de investigación y esta facultada para consignar ante jueces federales posibles delitos relacionados con actos de corrupción.

III. Secretaría de la función pública: se encargará del control interno de todas las dependencias del gobierno federal y será responsable de investigar, substanciar y perseguir ante el Tribunal las faltas administrativas graves. Si las faltas no fueran graves, será la responsable de investigar, substanciar y resolver.

IV. Tribunal Federal de Justicia Administrativa: tendrá las mas amplias facultades para la resolución de expedientes; impondrá sanciones a servidores públicos federales y de órganos constitucionales autónomos por responsabilidades administrativas graves; sancionará a servidores públicos locales por irregularidades en el manejo de recursos federales; impondrá las responsabilidades resarcitorias, así como indemnizaciones y sanciones pecuniarias; también sancionará a particulares que incurran en las faltas administrativas relacionadas con corrupción.

V. Instituto Federal de Acceso a la Información: será el órgano garante del derecho al acceso a la información, sus funciones son importantes para promover la transparencia y así poder prevenir actos de corrupción.

VI. Consejo de la Judicatura será el órgano encargado de promover la rendición de cuentas, fiscalizar el ejercicio de los recursos y garantizar el buen desempeño del Poder Judicial de la Federación, entre otras cosas.

VII. Además estara integrado por un representante del Comité de Participación Ciudadana.

Con el fin de evitar sesgos políticos en el Comité Coordinador su Presidente será designado de manera rotativa y el cargo será ocupado por un año.

La designación se hará conforme al orden de prelación de los integrantes del Sistema Nacional que aparece en el artículo 113 de la Constitución, salvo por el representante del Comité de Participación Ciudadana quien no podrá ser electo presidente del Sistema Nacional.

Las atribuciones del Presidente del Sistema serán de carácter representativo y consisten en presidir las sesiones del Sistema, representar al Sistema, convocar a las sesiones, vigilar que los objetivos del Sistema sean cumplidos, proponer al Pleno del Sistema al Secretario Ejecutivo.

Para efectos de operación y administración del Sistema Nacional Anticorrupción y para su buen funcionamiento éste contará con un Secretario Ejecutivo del Sistema, el cual es el órgano operativo del Sistema y gozará de autonomía técnica, de gestión y presupuestal. Este contará con el personal necesario para la realización de sus atribuciones, objetivos y fines.

Sus principales funciones serán ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Sistema y de su Presidente, realizar las acciones necesarias para la debida ejecución y seguimientos de los acuerdos del Sistema, proponer al Sistema el contenido del Programa para e Combate a la Corrupción, administrar, controlar, vigilar y sistematizar los instrumentos y redes de información que se generen en el seno del Sistema, proponer las medidas necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento del Sistema, entregar los recursos financieros asignados al Comité de Participación Ciudadana para el cumplimiento de sus atribuciones.

Toda vez que el cargo que desempeñara el Secretario Ejecutivo es de gran responsabilidad dentro del Sistema el procedimiento para determinar la responsabilidad administrativa del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional iniciará de oficio o a petición de parte, por queja o denuncia, presentada por cualquier persona, por el servidor público que tenga conocimiento de los hechos o, en su caso por el Ministerio Público Federal y sustanciará en términos de lo que mandata la Ley General de ResponsabilidadesAdministrativas de los Servidores Públicos y Combate a la Corrupción.

Comité de Participación Ciudadana

La corrupción se combate no sólo con el esfuerzo de las autoridades, es indispensable la participación ciudadana como el ingrediente más importante para el funcionamiento del Sistema. Cuanto más hagamos partícipe al ciudadano de los asuntos coyunturales del haber público, avanzaremos hacía un México más incluyente, ordenado y democrático.

La reforma constitucional en materia de anticorrupción ha validado la participación del ciudadano dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, ha dotado de mayor contenido democrático al involucrar a la ciudadanía, titulares del poder público, en la generación de instrumentos que profesionalicen el actuar de los involucrados con los recursos públicos.

El artículo 113 constitucional establece un gran precedente al incluir al ciudadano como uno de los integrantes de la coordinación del Sistema Nacional de Anticorrupción, a través de la creación de un Comité de Participación Ciudadana integrado por cinco ciudadanos especializados en transparencia, rendición de cuentas o el combate a la corrupción, con ello estamos seguros que la vigilancia, prevención y detección de la corrupción será todo un éxito.

Derivado de lo anterior, en la presente iniciativa se pretende encausar los esfuerzos de la sociedad civil en el combate contra la corrupción a través del Comité de Participación Ciudadana creado por mandato constitucional.

Es importante que el Comité de Participación Ciudadana, sea un órgano dinámico y con representación plenamente ciudadana, que sus integrantes no permanezcan demasiado tiempo en el encargo para que el propio sistema no los termine contaminando, por lo que se propone que duren dos años en el cargo y que sean designados de manera escalonada y con ello no se pierda la continuidad de sus decisiones.

Está comprobado que en nuestro sistema político, todo aquello que recibe recurso público se vuelve parte del sistema perverso de la corrupción, es por ello que los integrantes del Comité de Participación Ciudadana no recibirán pago alguno por llevar a cabo sus actividades, sin embargo, consideramos importante que tengan los recursos administrativos suficientes para la realización de sus atribuciones.

Se considera que cada uno de los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana tengan el mismo rango y que ninguno esté por encima del otro, por lo que se propone que sólo se elija al representante que acudirá al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, sin otorgarle el nivel de Presidente.

Asimismo, consideramos que para que el Comité no pierda su naturaleza ciudadana, deberá crearse el Consejo Consultivo del Comité de Participación Ciudadana, el cual se integrará hasta por quince representantes ciudadanos, ya sean parte de organizaciones de la sociedad civil o académicos que acrediten más de 3 años en la materia. La función principal del Consejo Consultivo será el designar y en su caso, sustituir a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, así también actuará como instancia de consulta, asesoría y apoyo.

Derivado de lo anterior, se incluye el procedimiento para la designación de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana a través de convocatoria pública para seleccionar veinte candidatos con sus respectivos suplentes, entre los que se designarán los cinco integrantes que cubrirán el encargo en el Comité. Dándole con ello una naturaleza exclusivamente ciudadana y sin participación de ningún ente gubernamental o legislativo.

De la misma manera, se considera importante incluir en la presente iniciativa, disposición expresa con las atribuciones del Comité de Participación Ciudadana, sin que ninguna de ellas sea de carácter ejecutivo, entre las que destacan las siguientes: emitir las recomendaciones públicas a las autoridades correspondientes; coordinarse con el Comité Coordinador en las diferentes áreas creadas para el desempeño de sus funciones; aprobar la propuesta del nombramiento del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción; objetar el nombramiento de los Titulares de los Órganos Internos de Control; aprobar las política públicas para la prevención, detección y combate de hechos de corrupción y faltas administrativas; Llevar un registro voluntario de organizaciones de la sociedad civil que deseen colaborar con el Comité y establecer una red de participación ciudadana; entre otros.

De los Sistemas Locales Anticorrupción

Con el fin de lograr los objetivos de esta ley en todos los niveles de gobierno en las entidades federativas se establecerán Sistemas Locales Anticorrupción encargados de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción en sus respectivos ámbitos de competencia.

Además se prevé la participación de los municipios en los Sistemas Locales Anticorrupción de las entidades federativas en los términos de la legislación de estas.

Toda vez que la finalidad de los Sistemas Locales Anticorrupción es garantizar la rendición de cuentas y la transparencia a nivel local, deberán replicar con sus especificaciones el modelo Nacional en su integración, diseño, facultades, etc.

Órganos de Control Interno

Como parte de los mecanismos de control del Sistema Nacional Anticorrupción se crean órganos internos de control dentro de los entes públicos que serán los responsables de asegurar, con el apoyo de unidades especializadas y el establecimiento de líneas de responsabilidad, que su institución cuenta con un control interno apropiado.

Así mismo se define el control interno como un proceso efectuado por el Órgano de Gobierno, el Titular, la Administración y los demás servidores públicos de una Institución, con objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir la corrupción.

Dentro del proceso de control interno deben establecerse áreas de riesgo para su identificación oportuna, su administración y solución. Por tanto la Administración debe identificar, analizar y responder a los riesgos relacionados con el cumplimiento de los objetivos institucionales.

La identificación de riesgos debe considerar tanto elementos internos como externos y se desarrollará se forma individual y de acuerdo a las características de cada institución.

Así mismo, con el fin de garantizar la prevención de la corrupción deberá de identificar como un posible riesgo la probabilidad de ocurrencia de actos corruptos, fraudes, abuso, desperdicio y otras irregularidades que atentan contra la apropiada salvaguarda de los bienes y recursos públicos.

Para tales efectos deberá realizarse un programa de promoción de la integridad que considere la administración de riesgos de corrupción permanente en la institución, así como los mecanismos para que cualquier servidor público o tercero pueda informar de manera confidencial y anónima sobre la incidencia de actos corruptos probables u ocurridos dentro de la institución.

La Administración diseñará una propuesta general de riesgos y acciones específicas para atender este tipo de irregularidades. Esto posibilita la implementación de controles anti- corrupción en la institución.

Órganos de Control Externo

Para efectos de control externo el Sistema Nacional Anticorrupción establecerá todos los mecanismo que aseguren y fortalezcan la debida actuación de los servidores públicos a través de órganos autónomos que no forma parte de la administración pública federal y que garanticen la división de poderes dentro del Sistema.

Serán órganos de control externo para efectos del Sistema Nacional Anticorrupción la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Servicio Profesional de Carrera del Sistema Nacional Anticorrupción y en el Sistema Nacional de Fiscalización.

Para fomentar la transparencia deberá crearse un servicio profesional de carrera de los servidores públicos que participan en el Sistema Nacional Anticorrupción y en el Sistema Nacional de Fiscalización.

El servicio profesional de carrera buscará cumplir con los criterios basados en el mérito para el reclutamiento, la selección, la evaluación y el desarrollo de los servidores públicos que participan en el Sistema Nacional Anticorrupción y en el Sistema Nacional de Fiscalización.

Su finalidad será el desarrollo técnico de acuerdo a las necesidades del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización. Así mismo su funcionamiento será regulado de forma interna.

Sistema Nacional de Fiscalización

El Sistema Nacional de Fiscalización tendrá como principal finalidad crear un sistema que permita ampliar la cobertura e impacto de la fiscalización de los recursos federales y locales, mediante la construcción de un modelo de coordinación, de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal

Tendrá por objeto establecer acciones y mecanismos de colaboración mediante los cuales los integrantes del Sistema, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán el intercambio de conocimientos, ideas y experiencias encaminadas a avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos.

Algunas de sus principales atribuciones serán crear un sistema electrónico del Sistema Nacional Anticorrupción e informar al Sistema Nacional Anticorrupción sobre los avances en la fiscalización de recursos federales y locales.

Serán integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización:
- La Auditoría Superior de la Federación;
- La Secretaría de la Función Pública y los órganos de control interno dependientes de ésta;
- Las entidades de fiscalización superior locales; y
- Los órganos estatales de control.

Plataforma Digital del Sistema Nacional Anticorrupción

Para efectos de inteligencia del sistema se creará la plataforma digital del Sistema Nacional Anticorrupción.

Una de las mejores soluciones para el combate ala corrupción es la digitalización de los procedimientos o herramientas que los entes públicos utilizan en sus procesos diarios ya que limita la interacción entre ciudadanos y servidores públicos, obligando a la transparencia.

El desarrollo de inteligencia permite generar información de forma ordenada y actualizada que alimente al Sistema Nacional Anticorrupción y le permita cumplir con sus obligaciones de forma eficaz.

La Plataforma digital del Sistema Nacional Anticorrupción estará conformada por, al menos, los siguientes sistemas:

I. Sistema de Evolución Patrimonial y de declaración de intereses.

Para que el Estado y la sociedad puedan cerciorarse en todo momento de que un servidor público cumple con los principios constitucionales y responde al mandato democrático depositado en su función, cada servidor público estará obligado a rendir la Declaración Patrimonial y la Declaración de Intereses, que deberán ser públicas.

Para asegurar la veracidad y el cumplimiento de la obligación de declarar el ocultamiento, mentira o engaño en la información declarada sobre sus intereses o patrimonio, o el de sus dependientes económicos, será sancionada como un acto de corrupción grave.

La finalidad de la declaración patrimonial es conocer a detalle la situación patrimonial y económica de los servidores públicos al ingresar a su cargo para así poder realizar una adecuada vigilancia y asegurar que no exista ningún tipo de acto de corrupción y la información otorgada corresponda a sus ingresos como servidor público.

La declaración de intereses tiene como finalidad identificar aquellas actividades o relaciones que podrían interferir con el ejercicio de las funciones o la toma de decisiones de un servidor público además permite evitar que, en caso de existir un conflicto de intereses, se privilegie el interés privado sobre el público, generando un beneficio indebido para el servidor público o sus familiares.

II. Sistema de Compras Públicas.

El Sistema Nacional de Compras Públicas es una plataforma transaccional creada con el objeto de digitalizar todos los procesos de compras públicas buscando que todos los trámites y procedimientos entre los proveedores y autoridades se realicen de forma electrónica.

Así mismo el Sistema Nacional de Compras Públicas deberá crear mercados virtuales, es decir, plataformas electrónicas donde las dependencias gubernamentales informan sobre sus necesidades de compra, eligen las mejores ofertas registradas por los proveedores y realizan la transacción en línea, donde se concentran compras de montos menores, “compras de escaso valor”, que se adquieren mediante adjudicación directa.

El Sistema Nacional de compras publicas promoverá la eficiencia y la transparencia y contará con aplicaciones dirigidas tanto a los participantes, como a los funcionarios y a la ciudadanía en general.

III. Sistema Nacional de Servidores Públicos Sancionados.

El Sistema Nacional de Servidores Públicos Sancionados tiene como finalidad que aquellos servidores públicos que hayan sido sancionados por faltas graves de corrupción determinadas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Combate a la Corrupción, sean del conocimiento público con el objeto de que no vuelvan a cometer actos de corrupción en otros órganos, instituciones, dependencias y entidades del Estado mexicano.

IV. Sistema de información y comunicación del Sistema Nacional de Fiscalización

El Sistema de información y comunicación del Sistema Nacional de Fiscalización será la herramienta digital que permita centralizar la información de todos los órganos de auditoría gubernamental del país, incluidos los órdenes federal, estatal y, eventualmente, municipal.

Con éste sistema se busca que las instituciones de auditoría gubernamental del país en los tres ordenes de

gobierno puedan procesar apropiadamente la información de las diversas instituciones relativas a cada uno de los procesos operativos de la fiscalización para fortalecer el control interno y externo.

V. Sistema de denuncias públicas de actos de corrupción.

En el Sistema de denuncias públicas contra actos de corrupción se encontrará la información completa de todas las denuncias contra actos de corrupción o faltas administrativas, presentadas por cualquier medio previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Combate a la Corrupción.

Políticas de prevención, detección y sanción de la corrupción

Uno de los principales objetivos del Sistema Nacional Anticorrupción es la creación de políticas públicas que regulen la actuación de particulares y servidores públicos dando a conocer a la sociedad en general los criterios esperados en relación al tema de la corrupción. En la medida que estas políticas públicas permeen en nuestra sociedad se podrá generar una cultura cívica en donde la corrupción no tenga cabida.

Al ser el combate a las distintas formas de corrupción una tarea principal del Estado Mexicano en su conjunto. Todos los órganos, instituciones, dependencias y entidades del Estado mexicano, sus titulares, y servidores públicos que los conforman, están obligados a diseñar, crear y construir estructuras, normas, procesos y políticas públicas que minimicen los riesgos de corrupción, y hagan posible su identificación y administración.

El Sistema Nacional Anticorrupción será el titular principal de esta responsabilidad y función de Estado. A su cargo estarán los sistemas de identificación, investigación, sanción y prevención de la corrupción.

Evaluación de la política de combate a la corrupción

El Sistema Nacional será el encargado de establecer las distintas formas de evaluación de las políticas y medidas de combate a la corrupción en todo el Estado mexicano. Los indicadores deberán diseñarse con el objeto de medir tanto el fenómeno de la corrupción, así como las medidas que el Estado toma para combatirlo. Los resultados de estas evaluaciones serán públicos.

Tanto las autoridades que conforman el Sistema Nacional, así como todos y cada uno de los órganos, dependencias y entidades valoradas, deberán atender con diligencia los resultados de estas evaluaciones y tomar medidas concretas para minimizar los riesgos de corrupción.

Mecanismos de participación ciudadana

Resulta imprescindible empoderar a la sociedad civil para que a través de la participación ciudadana se realice una adecuada vigilancia en el uso de los recursos públicos. Esta ley tiene como dotar al ciudadano de instrumentos eficaces que permitan su eficiente participación.

Para promover la efectiva participación de la sociedad en el combate a la corrupción, se utilizarán, entre otros, los siguientes mecanismos:
- El Testigo Social;
- Las Auditorías Sociales para proyectos de alto impacto comunitario;
- Las Redes de participación ciudadana.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Con el fin de lograr un nuevo sistema de control gubernamental la presente administración propuso ddesaparecer la Secretaría de la Función Pública, distribuyendo sus facultades en distintas dependencias y órganos, principalmente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Así mismo propuso la creación de la Unidad de Auditoría Preventiva, para lo cual se distribuyen facultades de la Secretaría de la Función Pública en distintas estructuras y órganos, principalmente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,integrando las funciones de la Secretría de la Función Pública "bajo una concepción moderna de la administración, toda vez que no se considera que los vicios burocráticos se deban enfrentar con más burocracia."

Las Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública señalan en el dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que es adecuada "la propuesta de reasignar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las competencias que hasta la fecha ha tenido la Secretaría de la Función Pública, en materia de Servicio Civil de Carrera; transparencia en las compras de gobierno; administración de inmuebles federales y generación de indicadores de gestión de las dependencias federales, buscando la necesaria congruencia en la asignación, control y rendición de cuentas del Presupuesto de Egresos de la Federación, y la necesaria coordinación, para los fines del combate a la corrupción, entre los Poderes federales y los tres órdenes de gobierno de las República. "

Para lograr los objetivos del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción que contempla a la Secretaría de la Función Pública como un órgano de control interno dentro del Sistema, es necesario restablecer formalmente a la Secretaría de la Función Pública y dotarla de las atribuciones que le fueron eliminadas para que pueda ejercer los mecanismo de control necesarios que permitan el adecuado funcionamiento del Sistema y una distribución de competencias donde el combate a la corrupción se realice a través de subsistemas que aseguren su eficacia.

Es el momento de generar las condiciones necesarias que permitan darle a los mexicanos el gobierno que verdaderamente se merecen.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con:

Proyecto de Decreto, por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Artículo Primero.- Se expide la Ley General del Sistema Anticorrupción para quedar como sigue:

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

TÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales

Capítulo I. Objeto de la ley

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, es reglamentaria de los artículos 73 fracción XXIV y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Sistema Nacional Anticorrupción.

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar que los distintos Poderes, órganos e instituciones del Estado Mexicano, de todos los órdenes de gobierno, cuenten con un sistema adecuado para identificar, prevenir y sancionar aquellos hechos de corrupción.

Artículo 2. Son objetivos de esta Ley:

I. Establecer mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate a la corrupción en la Federación, las entidades federativas y los municipios.

II. Establecer las bases mínimas de la prevención, detección y sanción de hechos de corrupción, faltas administrativas, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos.

III. Establecer políticas públicas integrales en el combate a la corrupción.

V. Regular la organización y funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, así como establecer las bases de coordinación entre sus integrantes.

VII. Establecer las bases y políticas para la promoción, fomento y difusión de la cultura de integridad en el servicio público, el combate a la corrupción, así como de la rendición de cuentas, de la transparencia, de la fiscalización y del control de los recursos públicos.

VIII. Establecer las acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos, así como crear las bases mínimas para que todo órgano del Estado mexicano establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público;

IX. Establecer las bases del Sistema Nacional de Fiscalización.

X. Establecer las bases mínimas para crear e implementar sistemas de información de seguimiento de la evolución patrimonial y declaración de intereses, compras públicas; así como la vinculación con demás sistemas de información para la detección de hechos de corrupción y faltas administrativas, así como para sustentar investigaciones y para captación de denuncias, protección de denunciantes y testigos, y recompensas para denunciantes.

XI. Implementar medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción.

XII. Establecer las bases para el funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana y propiciar la participación de la sociedad civil para prevenir y detectar hechos de corrupción, y faltas administrativas.

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

I. Administración: mandos superiores y medios del personal, diferentes del Titular, directamente responsables de todas las actividades en la institución, incluyendo el diseño, la implementación y la eficacia operativa del control interno, a que hace referencia el Título tercero de la presente ley.

II. Auditoría Superior de la Federación: la entidad de Fiscalización de la Federación a que hacen referencia los artículos 74, fracciones II y VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

III. Comité Coordinador: Instancia administrativa a la que hace referencia el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encargada de la coordinación y eficacia del Sistema Nacional Anticorrupción en su conjunto.

IV. Comité de Participación Ciudadana: Órgano ciudadano encargado de vigilar, prevenir y detectar actos de corrupción y faltas administrativas, así como coordinar y encausar los esfuerzos de la sociedad civil en el combate contra la corrupción.

V. Consejo Consultivo: Consejo Consultivo del Comité de Participación Ciudadana.

VI. Contralores internos y titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de responsabilidades: A los titulares de las contralorías internas y a los de las áreas de auditoría, de quejas y de responsabilidades.

VII. Dependencias: Las secretarías de Estado y sus órganos desconcentrados, así como la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, las empresas productivas del Estado y las unidades administrativas de la Presidencia

de la República.
VIII. Entidades Federativas: Las partes integrantes de la Federación que son los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el Distrito Federal.
IX. Fiscalía: Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Procuraduría General de la República.
X. Instituto: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
XI. Ley: Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
XII. Órgano de gobierno/titular: Secretarios, Directores Generales, Coordinadores, Delegados, Jefes, Procuradores o cualquier otro funcionario de primer nivel de las instituciones del Sector Público, con independencia del término con el que se identifique su cargo o puesto, encargados de vigilar la dirección estratégica de la institución y el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la rendición de cuentas.
XIII. Órganos Internos de Control: Los órganos internos de control en las dependencias y entidades, de la empresas productivas del Estado, así como de los órganos constitucionales autónomos.
XIV. Secretaría: La Secretaría de la Función Pública.
XV. Servidores públicos: Cualquier persona que se ubique en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
XVI. Sistema Nacional: Sistema Nacional Anticorrupción.
XVII. Sistemas locales: Sistemas Anticorrupción de las entidades federativas a que se refiere el Capítulo IV del Título Segundo de la presente ley.
XVIII. Tribunal: Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Capítulo II. Sujetos de la ley

Artículo 4. Son sujetos de la presente Ley, los Servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, de los tres Poderes de la Unión, de los Organismos Constitucionales Autónomos y los Constitucionales Autónomos señalados en las Constituciones Locales, así como los particulares.

Capítulo III. Principios que rigen el Servicio Público

Artículo 5. Son Principios rectores que rigen el servicio público los siguientes: legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, transparencia, economía e integridad.

Todos los órganos, instituciones, dependencias y entidades del Estado mexicano están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable de cada servidor público.

TÍTULO SEGUNDO.
Del Sistema Nacional Anticorrupción

Capítulo I. Del Objeto del Sistema Nacional Anticorrupción

Artículo 6. El Sistema Nacional Anticorrupción tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de hechos de corrupción y faltas administrativas, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Es una instancia cuya finalidad es establecer y articular la

política en la materia.

Las políticas públicas que establezca el sistema deberán ser implementadas por todos los órganos, instituciones, dependencias y entidades del Estado mexicano.

Capítulo II. Comité Coordinador

Artículo 7. El Comité Coordinador es la instancia responsable de establecer e implementar políticas públicas, bases generales y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y disuasión de hechos de corrupción y de faltas administrativas; así como de la fiscalización y control de recursos públicos y de los mecanismos de suministro e intercambio, sistematización y actualización de la información sobre estas materias.

Artículo 8. Corresponde al Comité Coordinador del Sistema las siguientes atribuciones:
a) El establecimiento de mecanismos de coordinación con los sistemas locales anticorrupción;
b) El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan;
c) La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno;
d) El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los recursos;
e) La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia.
f) Emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno.
g) Establecer una plataforma digital única que integre y conecte los diversos sistemas que posean datos e información necesaria para verificar no sólo los intereses y patrimonio de los servidores públicos, sino también para monitorear el adecuado manejo y uso de los recursos públicos, así como lo de sanciones servidores públicos, adquisiciones, licitaciones, bienes, arrendamientos, auditoría y fiscalización. Para esto, tendrá facultades para establecer convenios con las distintas autoridades de todo el Estado mexicano que tengan a su disposición datos, información o documentos que puedan servir para verificar la información declarada por los servidores públicos.
h) Establecer los sistemas digitales de recepción de declaraciones, de control de datos, y de verificación de la información declarada por los servidores públicos.
i) Designar o remover por unanimidad de votos de sus integrantes al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional.
j) Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema Nacional.
k) Evaluar del cumplimiento de las políticas, estrategias y acciones del Sistema Nacional en los términos de ley.
l) Destinar por conducto el Secretario Ejecutivo, recursos financieros para el gasto corriente del Comité de Participación Ciudadana para el cumplimiento de sus atribuciones.
m) Las demás que señalen las leyes que sean necesarias para cumplir las anteriores.

Artículo 9. Son integrantes de Comité Coordinador:

I. El titular de la Auditoría Superior de la Federación;

II. El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción;
III. El titular de la Secretaría de la Función Pública;
IV. El presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa;
V. Quien presida del organismo garante de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales;
VI. Un representante del Consejo de la Judicatura Federal, y
VII. Un representante del Comité de Participación Ciudadana.

Artículo 10. Para el adecuado funcionamiento del Sistema, será designado de manera rotativa un Presidente, cargo que será ocupado por un periodo de un año.

La designación se hará sólo de entre las instituciones públicas que conforman el Sistema Nacional y conforme al orden de prelación previsto en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 11. Son atribuciones del Presidente del Sistema Nacional:
a) Presidir las sesiones del Sistema Nacional;
b) Representar al Sistema Nacional;
c) Convocar a las sesiones;
d) Vigilar que los objetivos del Sistema Nacional sean cumplidos; y
e) Proponer al Pleno del Sistema Nacional, al Secretario Ejecutivo.

Artículo 12. El Comité Coordinador se reunirá en sesión ordinaria cada tres meses. El Secretario Ejecutivo podrá convocar a sesión extraordinaria cuando lo estime necesario o a petición que le sea formulada por la mayoría de los integrantes del Sistema Nacional.

Para que el Comité Coordinador l pueda sesionar es necesario que esté presente la mayoría de sus integrantes.

Las determinaciones se tomarán por mayoría de votos, salvo en el caso del diseño y promoción de políticas públicas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción las que deberán ser aprobadas por unanimidad de sus integrantes.

Capítulo III. Del Secretariado Ejecutivo

Artículo 13. Para el buen funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, éste contará con un Secretario Ejecutivo, el cual es el órgano operativo del Sistema y gozará de autonomía técnica, de gestión y presupuestal. Contará con el personal necesario para la realización de sus atribuciones, objetivos y fines.

El cargo de Secretario Ejecutivo durará siete años y no podrá reelegirse.

Artículo 14. Para ser Secretario Ejecutivo se requiere:
a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad, además de estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y que se haya destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción.
b) Tener más de treinta años de edad, el día de la designación.
c) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel

licenciatura y contar con los conocimientos y experiencia relacionadas con la materia de esta Ley que les permitan el desempeño de sus funciones.

d) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por algún delito.

e) Haber residido en el país durante los últimos dos años, salvo el caso de ausencia en servicio de la República por un tiempo menor de seis meses.

f) No haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la designación.

g) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a la designación.

h) No ser secretario de Estado, ni Fiscal General de la República o Procurador de Justicia de alguna entidad federativa, subsecretario u oficial mayor en la Administración Pública Federal o estatal, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ni Gobernador, ni secretario de Gobierno, a menos que se haya separado de su cargo con dos años antes del día de su designación.

Artículo 15. Son causales de remoción del Secretario Ejecutivo las siguientes:

a) Utilizar en beneficio propio o de terceros la documentación e información confidencial relacionada con las atribuciones que le corresponden en términos de la presente Ley y de la legislación en la materia;

b) Dejar sin consecuencia las revisiones e investigaciones que realice en el ejercicio de sus atribuciones;

c) Sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente la documentación e información que por razón de su cargo tenga a su cuidado o custodia con motivo del ejercicio de sus atribuciones; y

d) Incurrir en alguna de las infracciones mencionadas en la Ley General de Combate a la Corrupción y ResponsabilidadesAdministrativas de los Servidores Públicos.

La remoción requerirá de 5 votos del Comité Coordinador incluido el voto del representante del Comité de Participación Ciudadana. El Presidente del Comité Coordinador deberá notificar la resolución correspondiente y ejecutar la remoción, sin perjuicio de cualquier otra sanción a que hubiere lugar de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 15. El procedimiento para determinar la responsabilidad administrativa del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional iniciará de oficio o a petición de parte, por queja o denuncia, presentada por cualquier persona, por el servidor público que tenga conocimiento de los hechos o, en su caso por el Ministerio Público Federal y sustanciará en términos de lo que mandata laLey General de Combate a la Corrupción y Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Artículo 16. Corresponde al Secretario Ejecutivo del Sistema:

a) Actuar como Secretario del Sistema Nacional, al que asistirá con voz pero sin voto.

b) Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Sistema Nacional y de su Presidente.

c) Elaborar y certificar los acuerdos que se tomen en el Sistema Nacional, llevar su archivo y el de los instrumentos jurídicos que se generen en el seno del mismo.

d) Realizar las acciones necesarias para la debida ejecución y seguimientos de los acuerdos del Sistema.

e) Realizar el trabajo técnico para la preparación de documentos que se llevarán como propuestas de Acuerdo al Sistema Nacional.

f) Proponer al Sistema Nacional las políticas, lineamientos y acciones para la prevención, detección de hechos de corrupción, disuasión de faltas administrativas, fiscalización y control de recursos públicos.

g) Proponer al Sistema el contenido del Programa para e Combate a la Corrupción.

h) Preparar el orden del día de las sesiones del Sistema Nacional.

i) Elaborar los informes de actividades que ordene el Comité.

j) Administrar, controlar, vigilar y sistematizar los instrumentos y redes de información que se generen en el

seno del Sistema.
k) Preparar el proyecto de calendario de los trabajos del Sistema Nacional.
l) Realizar estudios especializados en materias relacionadas con la prevención, detección y disuasión de hechos de corrupción y de faltas administrativas, fiscalización y control de recursos públicos por acuerdo del Sistema Nacional.
m) Impulsar mejoras para los instrumentos de información del Sistema Nacional.
n) Informar periódicamente al Sistema Nacional y a su Presidente de sus actividades.
ñ) Verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, los convenios generales y específicos en la materia, así como las demás disposiciones aplicables e informar lo conducente al Sistema Nacional.
o) Preparar la evaluación del cumplimiento de las políticas, estrategias y acciones del Sistema Nacional en los términos de ley.
p) Proponer las medidas necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional.
q) Entregar los recursos financieros asignados al Comité de Participación Ciudadana para el cumplimiento de sus atribuciones.
r) Observar que las denuncias que se presenten reúnan los requisitos establecidos en el capítulo VI del Título Quinto de la presente ley.
s) Clasificar las denuncias en actos de corrupción o faltas administrativas, turnándolas a la instancia correspondiente en un plazo no mayor a 10 días hábiles.
t) Hacer público el procedimiento de denuncia en la plataforma única de información de manera inmediata, protegiendo la identidad del denunciante en términos de lo dispuesto el capítulo VI del Título Quinto de la presente ley.
u) Dar seguimiento a la denuncia a la que hace referencia el capítulo VI del Título Quinto de la presente ley, realizando un informe mensual con los resultados obtenidos.
v) Evaluar por lo menos dos veces al año, los informes generados en virtud del seguimiento de las denuncias a las que hace referencia capítulo VI del Título Quinto de la presente ley, presentadas en el periodo correspondiente.
w) Las demás que le encomienden el Comité Coordinador.
x) Las demás que señalen las leyes que sean necesarias para cumplir las anteriores.

Capítulo III. Comité de Participación Ciudadana

Artículo 18. El Comité de Participación Ciudadana es un órgano integrante del Sistema Nacional y su objetivo principal es vigilar, prevenir y detectar actos de corrupción y faltas administrativas, así como coordinar y encausar los esfuerzos de la sociedad civil en el combate contra la corrupción.

Artículo 19. El Comité de Participación Ciudadana se integra por cinco ciudadanos que durarán en el cargo dos años y serán designados de manera escalonada. El encargo de sus integrantes será honorario, pero tendrán los recursos suficientes para llevar a cabo sus atribuciones.

Artículo 20. Para ser integrante del Comité de Participación Ciudadana, se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano, además de estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y que se haya destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción;
II. Haberse desempeñado cuando menos tres años en actividades profesionales, de servicio público o académicas, relacionadas con la materia de esta Ley, y
III. No haber ocupado cuando menos cuatro años antes de su designación, algún cargo de elección popular, ni haber militado en algún partido político.

Artículo 21. El representante del Comité del Participación Ciudadana en el Comité Coordinador del Sistema

Nacional será electo con el voto de la mayoría de sus integrantes.

Artículo 22. El Comité de Participación Ciudadana se reunirá públicamente, previa convocatoria de su representante ante el Comité Coordinador, en sesiones ordinarias cuando menos una vez al mes y de forma extraordinaria cuando así se requiera a petición de la mayoría de sus integrantes. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes y en caso de empate, se volverá a someter a votación y en caso de persistir el empate se enviará el asunto a la siguiente sesión.

En caso de ausencia de alguno de los integrantes podrá asistir su suplente debidamente acreditado, quien participará con voz y voto.

Artículo 23. El Comité de Participación Ciudadana contará con un Consejo Consultivo cuya principal función será designar y en su caso sustituir a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana; asimismo actuará como instancia de consulta, asesoría y apoyo en los términos establecidos en la presente ley y en su normatividad interna.

Artículo 24. El Consejo Consultivo del Comité de Participación Ciudadana se integra de manera honoraria por un número impar no menor a cinco y hasta quince representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil cuyo objeto social esté relacionado con el combate a la corrupción, la rendición de cuentas y el monitoreo de la operación gubernamental, o por miembros de la academia e instituciones de investigación y que acrediten, mediante la documentación correspondiente, la experiencia de cuando menos tres años en la materia. Su organización, funcionamiento y administración quedarán establecidos en las normas de carácter interno que para tales efectos emitan.

Artículo 25. El Consejo Consultivo deberá emitir convocatoria pública, cuando así lo requiera, para seleccionar hasta veinte candidatos con sus respectivos suplentes, entre los que se designarán a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana conforme a la presente Ley y las normas de carácter interno que para tales efectos se emitan.

El Comité de Participación Ciudadana, antes de la terminación del período de alguno de sus integrantes, informará a su Consejo Consultivo de la vacante para que en treinta días realice el nombramiento respectivo de entre los candidatos a los que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 26. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana podrán ser sustituidos por solicitud del Consejo Consultivo conforme a las normas de carácter interno que para tales efectos emitan.

Artículo 27. El Comité de Participación Ciudadana tendrá las siguientes atribuciones:

I. Aprobar sus normas de carácter interno;

II. Diseñar los mecanismos para que la sociedad participe en la prevención, denuncia y detección de hechos de corrupción y faltas administrativas, así como la evaluación del desempeño y supervisión del Sistema Nacional;

III. Proponer al Comité Coordinador los lineamientos generales de actuación del Sistema Nacional;

IV. Emitir opinión respecto de los informes que emitan los integrantes del Sistema Nacional a los Poderes de la Unión;

V. Emitir opinión respecto del registro y designación de testigos sociales, así como de los informes que generen;

VI. Llevar un registro voluntario de las organizaciones de la sociedad civil que deseen colaborar de manera coordinada con el Comité de Participación Ciudadana para establecer una red de participación ciudadana,

conforme a sus normas de carácter interno;
VII. Celebrar convenios de colaboración con instituciones en la materia, con el propósito de elaborar investigaciones sobre las políticas públicas para la prevención, detección y combate de hechos de corrupción o faltas administrativas.
VIII. Proponer al Comité Coordinador las políticas públicas para la prevención, detección y combate de hechos de corrupción o faltas administrativas;
IX. Aprobar las políticas públicas propuestas por el Comité Coordinador en materia de prevención y detección de hechos de corrupción o faltas administrativas;
X. Elaborar un informe anual de carácter público que contenga los avances y los resultados del ejercicio de sus atribuciones y de la aplicación de políticas públicas en la materia;
XI. Objetar la selección de nombramientos de los Titulares de los Órganos Internos de Control, en un plazo no mayor a treinta días;
XII. Aprobar la propuesta del Comité Coordinador del nombramiento del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional;
XIII. Coordinarse con el Secretario Ejecutivo para vigilar el desempeño de sus funciones en sus diferentes áreas administrativas; y
XIV. Emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades correspondientes.

Artículo 28. Del dinero recuperado por actos de corrupción, deberá crearse un fondo para que el Comité de Participación Ciudadana pueda elaborar estudios e investigaciones en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil, sobre las materias objeto de esta Ley.

Artículo 29. El Comité Coordinador, por conducto de su Secretario Ejecutivo, destinará recursos financieros para el gasto corriente del Comité de Participación Ciudadana para el cumplimiento de las atribuciones que le confieren esta Ley.

Capítulo IV. De los Sistemas Locales Anticorrupción

Artículo 30. En las entidades federativas se establecerán Sistemas Locales Anticorrupción encargados de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción en sus respectivos ámbitos de competencia.

La Constituciones de las entidades federativas preverán el mecanismo de participación de los municipios en los Sistemas Locales Anticorrupción.

Los Sistemas Locales Anticorrupción se organizarán, de modo que permita el cumplimiento de sus fines, tomando como base la estructura, integración y funciones del Sistema Nacional Anticorrupción y el contenido de esta Ley.

Artículo 31. Los Sistemas Locales Anticorrupción se integrarán por un Comité Coordinador y por un Comité de Participación Ciudadana.

El Comité Coordinador será el órgano responsable de establecer e implementar, políticas públicas, bases generales y procedimientos para la coordinación entre las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción y de los mecanismos de suministro e intercambio, sistematización y actualización de la información sobre estas materias.

Estará integrado por los titulares de las Entidades de Fiscalización Superior, de las Fiscalías Especializadas en Combate a la Corrupción, de las Contralorías, de los Tribunales de Justicia Administrativa y de los organismos garantes de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de las entidades federativas, así como por un representante del Consejo de la Judicatura Local y un representante del Comité de Participación Ciudadana.

Artículo 32. Los Comités Estatales de Participación Ciudadana se integrarán por entre tres y cinco ciudadanos que durarán en el cargo dos años y serán designados de manera escalonada. El encargo de sus integrantes será honorario, pero tendrán los recursos suficientes para llevar a cabo sus atribuciones.

Los Consejos Consultivos de los Comités Estatales de Participación Ciudadana se integran de manera honoraria por un número impar no menor a tres y hasta nueve representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil cuyo objeto social esté relacionado con el combate a la corrupción, la rendición de cuentas y el monitoreo de la operación gubernamental, o por miembros de la academia e instituciones de investigación y que acrediten, mediante la documentación correspondiente, la experiencia de cuando menos tres años en la materia. Su organización, funcionamiento y administración quedarán establecidos en las normas de carácter interno que para tales efectos emitan.

Los Consejos Consultivos de los Comités Estatales de Participación Ciudadana deberán emitir convocatoria pública para la selección de hasta doce candidatos con sus respectivos suplentes, entre los que se designarán a los integrantes del Comité Estatales de Participación Ciudadana conforme a la presente Ley, las leyes locales y las normas de carácter interno que para tales efectos se emitan.

Artículo 33. Los Sistemas Locales Anticorrupción podrán proponer al Sistema Nacional Anticorrupción acuerdos, programas específicos y convenios sobre las materias de la coordinación.

TÍTULO TERCERO
De los órganos de control interno y externo

Capítulo I. Órganos de control interno

Artículo 34. El control interno es un proceso efectuado por el Órgano de Gobierno, el Titular, la Administración y los demás servidores públicos de una Institución, con objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir la corrupción.

El Sistema Nacional será responsable de crear las condiciones materiales y presupuestales para que los órganos de control interno cuenten con todas las herramientas y sistemas que requieran para realizar las investigaciones que correspondan.

Artículo 35. El Órgano de Gobierno y/o el Titular serán los responsables de diseñar las políticas y procedimientos que se ajusten a las disposiciones jurídicas y normativas y a las circunstancias específicas de la institución, así como de incluirlos como una parte inherente a sus operaciones; así como de instruir la implementación y optimización de las mismas.

La administración diseñará, implementará y operará dichas políticas de ser necesario con apoyo de unidades especializadas, así mismo deberá supervisar con apoyo de la auditoría interna que el diseño del control interno sea apropiado, eficiente y eficaz.

Los demás servidores públicos que conformen la institución, distintos al Titular y a la Administración deberán apoyar el diseño, implementación y operación del control interno, y serán responsables de informar sobre cuestiones o deficiencias relevantes que hayan identificado en relación con los objetivos institucionales de operación, información, cumplimiento legal, salvaguarda de los recursos y prevención de la corrupción.

Artículo 36. El Órgano de Gobierno, en su caso, el Titular y la Administración deben mostrar una actitud de respaldo y compromiso con la integridad, los valores éticos, las normas de conducta y la prevención de irregularidades administrativas y la corrupción.

El Titular debe formular un plan estratégico que de manera coherente y ordenada oriente los esfuerzos institucionales hacia la consecución de los objetivos relativos a su mandato y las disposiciones jurídicas y normativas aplicables, asegurando además que dicha planeación estratégica contempla la alineación institucional a los Planes nacionales, regionales, sectoriales y todos los demás instrumentos y normativas vinculatorias que correspondan.

La Administración debe identificar, analizar y responder a los riesgos relacionados con el cumplimiento de los objetivos institucionales.

La administración de riesgos es la identificación y análisis de riesgos asociados con el mandato institucional, su plan estratégico, los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo, los Programas Sectoriales, Especiales y demás planes y programas aplicables de acuerdo con los requerimientos y expectativas de la planeación estratégica, y de conformidad con las disposiciones jurídicas y normativas aplicables.

Para identificar riesgos, la Administración considerará los tipos de eventos que impactan a la institución, además de todas las interacciones significativas dentro de la institución y con las partes externas, cambios en su ambiente interno y externo y otros factores.

Los métodos de identificación de riesgos pueden incluir una priorización cualitativa y cuantitativa de actividades, previsiones y planeación estratégica, así como la consideración de las deficiencias identificadas a través de auditorías y otras evaluaciones.

La Administración estimará la relevancia de los riesgos identificados para evaluar su efecto sobre el logro de los objetivos, tanto a nivel institución como a nivel transacción y la importancia de un riesgo al considerar la magnitud del impacto, la probabilidad de ocurrencia y la naturaleza de riesgo.

Así mismo, la Administración diseñará respuestas a los riesgos analizados de tal modo que éstos se encuentren dentro de la tolerancia definida para los objetivos, con base en la relevancia del riesgo y la tolerancia establecida. Estas respuestas al riesgo pueden aceptar, evitar, mitigar o compartir el riesgo.

Con base en la respuesta al riesgo seleccionada, diseñará acciones específicas de atención y efectuará evaluaciones periódicas de riesgos con el fin de asegurar la efectividad de las acciones de respuesta.

Artículo 37. La Administración, con el apoyo, en su caso, de las unidades especializadas considerará la probabilidad de ocurrencia de actos corruptos, fraudes, abuso, desperdicio y otras irregularidades que atentan contra la apropiada salvaguarda de los bienes y recursos públicos al identificar, analizar y responder a los riesgos.

El programa de promoción de la integridad considerará la administración de riesgos de corrupción

permanente en la institución, así como los mecanismos para que cualquier servidor público o tercero pueda informar de manera confidencial y anónima sobre la incidencia de actos corruptos probables u ocurridos dentro de la institución.

La Administración será responsable de que dichas denuncias sean investigadas oportunamente y, en su caso, se corrijan las fallas que dieron lugar a la presencia del riesgo de corrupción. El Órgano de Gobierno, en su caso, o el Titular debe evaluar la aplicación efectiva del programa de promoción de la integridad por parte de la Administración y evaluar si el mecanismo de denuncias anónimas es eficaz, oportuno y apropiado.

Así mismo, debe considerar los factores de riesgo de corrupción, fraude, abuso, desperdicio y otras irregularidades. Este tipo de factores incluyen incentivos o presiones; circunstancias, como la ausencia de controles, controles inefectivos o la capacidad de determinados servidores públicos para eludir controles en razón de su posición en la institución; la racionalización o justificación de los actos corruptos, fraudes y otras irregularidades.

La Administración diseñará una propuesta general de riesgos y acciones específicas para atender este tipo irregularidades. Esto posibilita la implementación de controles anti- corrupción en la institución.

Además de responder a los riesgos de corrupción, fraude, abuso, desperdicio y otras irregularidades, deberá desarrollar respuestas más avanzadas para identificar los riesgos relativos a que el Titular y personal de la Administración eludan los controles.

Artículo 38. Los entes públicos tendrán órganos internos de control que serán los responsables de asegurar, con el apoyo de unidades especializadas y el establecimiento de líneas de responsabilidad, que su institución cuenta con un control interno apropiado.

Así mismo serán responsables de establecer una estructura de vigilancia adecuada y una estructura organizacional necesaria que permita la planeación, ejecución, control y evaluación de la institución en la consecución de sus objetivos y que prevenga, disuada y detecte actos de corrupción, que brinde información confiable y de calidad.

Los titulares de los órganos internos de control y de las unidades especializadas que los conformen deberán ser nombrados por la Secretaría de la Función Pública de entre los miembros del sistema profesional de carrera con la no objeción de Comité de Participación Ciudadana, la cual deberá emitirse dentro de los treinta días siguientes al nombramiento y sólo podrán ser removidos o destituidos del cargo por causas graves.

Artículo 39. Los órganos internos de control tendrán las siguientes facultades:
I. Prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas;
II. Conocer, resolver y sancionar las faltas y sanciones administrativas no graves distintas a las que son competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa;
III. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y participaciones federales;
IV. Presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción;
V. Investigar y substanciar faltas administrativas graves que serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa para lo cual le turnará el expediente directamente actuando como órgano acusador ante este.

Los entes públicos de las entidades federativas y los municipales contarán con órganos internos de control, que tendrán, en su ámbito de competencia local, las atribuciones a que se refiere este título y cuyos titulares deberán ser nombrados, removidos o destituidos de conformidad con el procedimiento contemplado en el artículo 35 de esta ley.

Capítulo II. Órganos de control externo

Artículo 40. Serán órganos de control externo del Sistema Nacional Anticorrupción la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Artículo 41. La Auditoría será el órgano responsable de vigilar la cuenta pública para identificar posibles irregularidades en los recursos y participaciones federales que se ejercen en la federación, los estados y municipios.

Además de lo dispuesto en el artículo anterior y la demás legislación aplicable, son atribuciones de la Auditoría las siguientes:
I. Investigar y sustanciar las faltas administrativas graves ante el Tribunal de Justicia Administrativa.
II. Promover las acciones que correspondan ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o las autoridades competentes derivadas del informe que rinda a la Cámara de Diputados.
III. Promover las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para la imposición de las sanciones que correspondan a los servidores públicos federales y, en el caso del párrafo segundo de la fracción I de este artículo, a los servidores públicos de los estados, municipios, del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, y a los particulares.

Artículo 42. La Fiscalía investigará con las más amplias facultades y consignará ante jueces federales posibles delitos relacionados con actos de corrupción. Así mismo conocerá:
I. De las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito.
II. De las acciones presentadas por la Auditoría Superior de la Federación derivadas del informe rendido a la Cámara de Diputados.
III. De las responsabilidades promovidas por la Auditoría Superior de la Federación para la imposición de las sanciones que correspondan a los servidores públicos.

Las Auditorías Superiores y las Fiscalías Especializadas en Combate a la Corrupción de las entidades federativas serán los órganos externos de control de los entes públicos de las entidades federativas, que tendrán, en su ámbito de competencia local, las atribuciones a que se refiere este capítulo.

Capítulo III. Del servicio profesional de carrera de los servidores públicos que participan en el Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización

Artículo 43. El funcionamiento del servicio profesional de carrera estará regulado conforme a las reglas de operación y disposiciones normativas aplicables para cada uno de sus procesos, en las cuales se describirán los procedimientos para su ejecución.

El Sistema Nacional será responsable de crear sistemas de capacitación de personal para crear cuerpos de especialistas en las distintas materias que requiere la prevención, investigación y sanción de los actos de

corrupción, así como de fiscalización y control de los recursos públicos.

Artículo 44. Para incorporarse al servicio profesional de carrera se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

I. Presentar a la Dirección General de Recursos Humanos o equivalente, solicitud de incorporación firmada por el trabajador de confianza.

II. Contar con nombramiento vigente, que acredite la condición de trabajador de confianza dentro del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización.

III. Contar con la Certificación Superior Profesional, que al efecto realice el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.

Artículo 45. La relación laboral del personal de carrera, estará regida en términos del artículo 123, Apartado B, fracción XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 46. La permanencia en el servicio profesional de carrera estará sujeta a:

I. Presentar y aprobar las evaluaciones del desempeño realizadas por una Institución de Educación Superior de reconocido prestigio.

II. Mantener vigente la Certificación Superior Profesional.

III. Acreditar las actividades de capacitación y las demás que requieran lo normatividad aplicable.

IV. Cumplir con las condiciones establecidas en la presente ley y las reglas de operación del servicio profesional de carrera.

Artículo 47. El personal de carrera susceptible de una promoción de puesto deberá:

I. Cumplir los requisitos del perfil de puesto vacante.

II. Tener vigente la Certificación Superior Profesional.

III. Acreditar las actividades de capacitación que correspondan.

IV. Contar con resultados aprobatorios de las evaluaciones del desempeño que resulten aplicables.

Artículo 48. Los miembros del servicio profesional de carrera dejarán de pertenecer a éste cuando:

I. Ocupen un puesto distinto al de trabajador de confianza dentro del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización.

II. No cumplan con los requisitos de permanencia.

III. Concluyan su relación laboral con el Sistema Nacional Anticorrupción o el Sistema Nacional de Fiscalización, con independencia de la causa que la origine.

Artículo 49. Los Sistemas Locales Anticorrupción deberán contar con un servicio profesional de carrera que estará regulado conforme a las reglas de operación y disposiciones normativas aplicables para cada uno de sus procesos y que deberá cumplir con lo dispuesto en este capítulo.

TÍTULO CUARTO.
Del Sistema Nacional de Fiscalización

Capítulo I. Del Sistema Nacional de Fiscalización

Artículo 50. El Sistema Nacional de Fiscalización tiene por objeto establecer acciones y mecanismos de colaboración mediante los cuales los integrantes del mismo, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán el intercambio de conocimientos, ideas y experiencias encaminadas a avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos.

Artículo 51. Para el cumplimiento del objeto a que se refiere el artículo anterior los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización deberán:

I. Crear un sistema en términos del Capítulo V del Título Quinto de la presente Ley, que permita ampliar la cobertura e impacto de la fiscalización de los recursos federales y locales, mediante la construcción de un modelo de coordinación, de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

II. Informar al Sistema Nacional Anticorrupción sobre los avances en la fiscalización de recursos federales y locales.

Todos los entes fiscalizadores y fiscalizados deberán apoyar en todo momento al Sistema Nacional de Fiscalización para la implementación de mejoras para la fiscalización de los recursos federales y locales.

Artículo 52. Los integrantes del sistema deberán homologar los procesos, procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, programas y normas profesionales en materia de auditoría y fiscalización.

Artículo 53. El Sistema Nacional de Fiscalización implementará las normas profesionales para la fiscalización, las cuales serán obligatorias para todos los integrantes del mismo.

Artículo 54. El Sistema Nacional de Fiscalización impulsará la creación de capacidades de sus personal auditor considerando las habilidades, los conocimientos y la forma de trabajar que hacen que una organización sea efectiva y términos de lo que dispone el servicio profesional de carrera de los servidores públicos que participan en los Sistemas Nacionales Anticorrupción y de Fiscalización.

Crear capacidades significa desarrollar cada uno de estos elementos, utilizando conocimiento las fortalezas existentes y enfrentando deficiencias.

Artículo 55. El Sistema Nacional de Fiscalización fomentará el establecimiento de un programa de capacitación coordinado, que permita incrementar la calidad profesional del personal auditor y mejorar los resultados de la auditoría y fiscalización, en términos de lo establecido en el servicio profesional de carrera de los servidores públicos que participan en el Sistemas Nacionales Anticorrupción y de Fiscalización.

Artículo 56. El Sistema Nacional de Fiscalización propiciará el intercambio de información que coadyuve al desarrollo de sus respectivas funciones, conforme a lo dispuesto en título quinto de esta Ley.

Artículo 57. Los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización en el ámbito de sus respectivas facultades y atribuciones:
a) Identificarán áreas comunes de auditoría y fiscalización para que contribuyan a la definición de sus respectivos programas anuales de trabajo y el cumplimiento de los mismos de manera coordinada.
b) Revisarán de los ordenamientos legales que regulan su actuación, para que, en su caso, realicen propuestas de mejora a los mismos y que permita un mayor impacto el combate a la corrupción.
c) Elaborarán y adoptarán un marco de referencia que contenga criterios generales para la prevención, detección, disuasión y aplicación en su caso, de sanciones que correspondan de actos de corrupción e incorporar las mejores practicas para fomentar la transparencia y rendición de cuentas en la gestión gubernamental.

Artículo 58. Para el fortalecimiento del papel de la fiscalización, la Auditoría y las entidades de fiscalización superior locales deberán promover la determinación y fincamiento de responsabilidades a los funcionarios públicos, a fin de contribuir a la mejora gubernamental y la rendición cuentas a nivel nacional, bajo el principio de que debe haber consecuencias para quien deje de cumplir con su responsabilidad pública.

Artículo 59. Para efectos del artículo anterior, los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización privilegiaran lo siguiente:
a) La coordinación de trabajo efectiva.
b) El fortalecimiento institucional.
c) Evitar duplicidades y omisiones en el trabajo de los órganos de fiscalización, en un ambiente de profesionalismo y transparencia.
d) Mayor cobertura de la fiscalización de los recursos públicos.
e) Emitir información relevante en los reportes de auditoría y fiscalización, con lenguaje sencillo y accesible, que contribuyan a la toma de decisiones públicas, la mejora de la gestión gubernamental, y a que el ciudadano común conozca cómo se gasta el dinero de sus impuestos, así como la máxima publicidad en los resultados de la fiscalización.

Artículo 60. Para el buen funcionamiento del Sistema Nacional de Fiscalización, los integrantes de éste Sistema celebraran reuniones ordinarias cada seis meses y extraordinarias cuantas veces sea necesario, a fin de dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y acciones planteados en la presente Ley y demás legislación aplicable.

Capítulo II. Integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización

Artículo 61. Son integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización:

I. La Auditoría Superior de la Federación;
II. La Secretaría de la Función Pública y los órganos de control interno dependientes de ésta;
III. Las entidades de fiscalización superior locales, y
IV. Los órganos estatales de control.

TÍTULO QUINTO
De la plataforma digital del Sistema Nacional Anticorrupción

Capítulo I. Disposiciones Generales

Artículo 62. El Sistema Nacional Anticorrupción, por conducto de su Secretario Ejecutivo desarrollará, administrará, implementará y pondrá en funcionamiento la plataforma digital única que permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas en la presente Ley y la Ley General de Combate a la Corrupción y Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos de los integrantes del Sistema Nacional y los Sistemas Locales, así como para los sujetos de la Ley, de conformidad con la normatividad que establezca el Sistema Nacional, atendiendo a las necesidades de accesibilidad de los usuarios.

Artículo 63. La Plataforma digital del Sistema Nacional Anticorrupción estará conformada por, al menos, los siguientes sistemas:
I. Sistema de Evolución Patrimonial y de declaración de intereses.
II. Sistema de Compras Públicas;
III. Sistema Nacional de Servidores Públicos Sancionados;
IV. Sistema de información y comunicación del Sistema Nacional de Fiscalización;

VI. Sistema de denuncias públicas de actos de corrupción.

Artículo 64. Los integrantes del Sistema y de los Sistemas Locales promoverán la publicación de la información en formato de datos abiertos, conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la demás normatividad aplicable.

Artículo 65. El Sistema Nacional establecerá las medidas necesarias para garantizar la estabilidad y seguridad de la plataforma, promoviendo la homologación de procesos y la simplicidad del uso de los sistemas por parte de los usuarios.

Artículo 66. Para el adecuado funcionamiento de la plataforma a la que hace referencia el artículo anterior, el Sistema Nacional contará con un responsable de la operación de la misma dependiente del Secretariado Ejecutivo y que tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:

I. Establecer, administrar y resguardar las bases de datos de actos de corrupción, faltas administrativas, sanciones a las mismas; fiscalización y control de recursos públicos; declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos;

II. Determinar los criterios técnicos y de homologación de las bases de datos de los integrantes del Sistema Nacional y de los Sistemas Locales;

III. Emitir los protocolos de interconexión, acceso y seguridad de estas bases de datos;

IV. Vigilar el cumplimiento de los criterios de acceso a la información y hacer del conocimiento de las instancias competentes cualquier irregularidad detectada, y

VI. Brindar asesoría a los integrantes del Sistema Nacional y de los Sistemas Locales para la integración de información, interconexión, acceso, uso, intercambio y establecimiento de medidas de seguridad para las bases de datos.

Capítulo II. Sistema de Evolución Patrimonial y de declaración de intereses

Artículo 67. Para que el Estado y la sociedad puedan cerciorarse en todo momento de que un servidor público cumple con los principios constitucionales y responde al mandato democrático depositado en su función, cada servidor público estará obligado a rendir:

I. La Declaración Patrimonial.

II. La Declaración de Intereses.

Estas dos declaraciones, así como la Declaración Anual de Impuestos, estarán disponibles al público, con excepción de datos personales sensibles, conforme a la ley de la materia.

El ocultamiento, mentira o engaño en la información declarada sobre sus intereses o patrimonio, o el de sus dependientes económicos, será sancionada como un acto de corrupción grave, de acuerdo con la Ley General en la materia.

Artículo 68. Los servidores públicos estarán obligados a rendir las declaraciones a que hace referencia el artículo anterior una vez al año, con las modificaciones correspondientes si las hubiere y dentro de los 30 días siguientes a al inicio o conclusión del cargo que ocupen o hayan desempeñado.

Artículo 69. El Comité Coordinador dará seguimiento cada año a la evolución patrimonial de los servidores públicos. En caso de que se evidencien inconsistencias u omisiones con la intención de ocultar información, se hará del conocimiento de la Fiscalía para el ejercicio de las acciones jurídicas correspondientes..

Artículo 70. Los servidores públicos deberán realizar las declaraciones patrimoniales y de intereses en el formulario establecido en el plataforma digital a la que hace referencia el artículo fracción I mismo que será aprobado por el Consejo Coordinador del Sistema Nacional con la aprobación expresa del Comité de Participación Ciudadana.

Artículo 71. En la declaración patrimonial se deberá informar de forma completa y veraz el nombre del funcionario publico y el cargo que ocupa y la fecha de la declaración, también sobre los activos y pasivos tanto, en el país como en el extranjero, del declarante, sus familiares en primer grado por consanguinidad o afinidad y dependientes económicos, así como sobre aquellos bienes que usa, goza, aprovecha o administra frutos sin que sean de su propiedad y sobre las distintas fuentes de ingreso con las que cuenta.

Artículo 72. La declaración patrimonial deberá al menos contener:

a) El detalle de las cuentas corrientes y de ahorros del declarante, sus familiares en primer grado por consanguinidad o afinidad y dependientes económicos, en bancos e instituciones nacionales del sistema financiero de los sectores público y privado; cooperativas de ahorro y crédito público; cajas de ahorros; en su caso también las cuentas bancarias en el extranjero en cualquier moneda. Esta información deberá contener el nombre de la entidad, el número de la cuenta, identificación del titular y el saldo a la fecha de presentación de la declaración.

b) El detalle de las inversiones, depósitos a plazo, valores bursátiles, fideicomisos en el país y en el extranjero, fondos de inversión en organizaciones privadas, en monedas y metales y otras inversiones financieras en los que el declarante, sus familiares en primer grado por consanguinidad o afinidad y dependientes económicos, sean beneficiarios, con la identificación de la institución o razón social, monto o saldo a la fecha de la declaración y la identificación del titular.

c) El detalle de acciones y participaciones en sociedades o empresas, fundaciones nacionales o extranjeras, con la identificación del valor nominal y de mercado del declarante, de sus familiares en primer grado por consanguinidad o afinidad y dependientes económicos.

d) El detalle de derechos fiduciarios, derechos adquiridos por herencia, activos obtenidos en virtud de derechos de propiedad intelectual del declarante, sus familiares en primer grado por consanguinidad o afinidad y dependientes económicos identificando al titular del derecho.

e) Detalle de cuentas por cobrar, el valor del crédito, garantías otorgadas, y el saldo a la fecha de la declaración, del declarante, de sus familiares en primer grado por consanguinidad o afinidad y dependientes económicos identificando al titular del crédito.

f) Detalle de vehículos del declarante, de sus familiares en primer grado por consanguinidad o afinidad y dependientes económicos, que incluirá: identificación del titular, tipo, número de serie, de placa o número de chasis, marca, modelo, año de fabricación, fecha y valor de adquisición, valor actual.

h) Detalle de otros bienes muebles del declarante, de sus familiares en primer grado por consanguinidad o afinidad y dependientes económicos, en el que incluirá obras de arte, joyas, colecciones, menaje de casa, equipo de oficina, semovientes, inventarios, mercaderías, maquinaria y equipo, y otros.

i) Detalle, descripción y valor de los bienes inmuebles, del declarante, de sus familiares en primer grado por consanguinidad o afinidad y dependientes económicos, de acuerdo al avalúo municipal que incluirá el tipo del bien, dirección, número y fecha de inscripción en el registro público de la propiedad, superficie del terreno y/o construcción, forma, fecha y valor de la adquisición. Adicionalmente se identificará el titular y el derecho del declarante en el inmueble. Se detallará las adiciones y mejoras realizadas en los bienes inmuebles declarados.

j) Identificación del usufructo legal o de hecho sobre bienes muebles e inmuebles que el declarante, sus familiares en primer grado por consanguinidad o afinidad y dependientes económicos, usan, gozan, aprovechan o administran frutos y que sean propiedad de personas físicas o morales, del patrimonio familiar o de parientes hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad;

k) Detalle de pasivos del declarante, sus familiares en primer grado por consanguinidad o afinidad y dependientes económicos, identificando: nombre del acreedor, tipo de obligación, fecha de otorgamiento del crédito, plazo, monto original del gravamen, cuota mensual, saldo a la fecha de la declaración. Si el crédito no fue otorgado por una institución financiera autorizada, deberá manifestar si la persona física o moral otorgante ha sido contratista durante la realización del cargo público del declarante, siempre que el declarante sea susceptible de influir por cualquier medio en alguna etapa de su contratación.
l) Detalle de tarjetas de crédito del declarante, sus familiares en primer grado por consanguinidad o afinidad y dependientes económicos, identificando la fecha de expedición, el límite de crédito otorgado y saldo a la fecha de la declaración.

Artículo 73. La declaración de intereses tiene como finalidad identificar aquellas actividades o relaciones que podrían interferir con el ejercicio de las funciones o la toma de decisiones de un servidor público además permite evitar que, en caso de existir un conflicto de intereses, se privilegie el interés privado sobre el público, generando un beneficio indebido para el servidor público o sus familiares.

Artículo 74. En la declaración de intereses se deberá informar de forma completa y veraz el nombre del funcionario publico, el cargo que ocupa y la fecha de la declaración, también sobre los intereses económicos y financieros, actividades profesionales y empresariales y otros intereses tanto del declarante como de sus familiares hasta el segundo grado y dependientes económicos.

Artículo 75. La declaración de intereses deberá contener al menos:
a) Información detallada sobre la participación en direcciones y consejos de administración, participación accionaria en sociedades; préstamos, créditos y obligaciones financieras; bienes inmuebles; y otros convenios, contratos y compromisos económicos y financieros, entendiéndose por esto la participación en direcciones, consejos de administración y/o en órganos directivos o de gobierno en organizaciones con fines de lucro, es decir cargos o funciones que el declarante, sus familiares por consanguinidad o afinidad hasta en cuarto grado y dependientes económicos desempeñan o ha desempeñado en los últimos cinco años, de los cuales hayan recibido o no una remuneración por esta participación.
b) Información detallada sobre la participación accionaria en sociedades del declarante, entendiéndose esta como las a las acciones, inversiones o títulos de valor que el declarante posee en organizaciones con fines de lucro, es decir, empresas, al día de la presentación de la declaración.

c) Información detallada de la participación accionaria en sociedades de familiares por consanguinidad o afinidad hasta en cuarto grado y dependientes económicos, refiriéndose esta a las acciones, inversiones o títulos de valor que sus familiares por consanguinidad o afinidad hasta en cuarto grado y dependientes económicos del declarante posee en organizaciones con fines de lucro.
d) Información detallada de préstamos, créditos y obligaciones financieras del declarante, sus familiares por consanguinidad o afinidad hasta en cuarto grado y dependientes económicos, es decir cualquier préstamo, crédito u obligación financiera vigente que tenga que ser cubierta por el declarante, independientemente de la entidad con la que se tenga el compromiso financiero.
e) Bienes inmuebles del declarante, sus familiares por consanguinidad o afinidad hasta en cuarto grado y dependientes económicos, tales como centros comerciales, edificios o terrenos y que por tal circunstancia podrían ser percibidos o susceptibles de influir en el desempeño del encargo.
f) Otros intereses económicos o financieros del declarante, sus familiares por consanguinidad o afinidad hasta en cuarto grado y dependientes económicos, se refiere a aquellos convenios, contratos, compromisos o acuerdos con un valor económico presente o futuro que en la opinión del declarante podrían ser percibidos o susceptibles de estar en un conflicto de interés y que estén incluidas en la fracciones anteriores.

g) Información detallada sobre actividades profesionales y/o empresariales desempeñadas como persona física por el declarante, sus familiares por consanguinidad o afinidad hasta en cuarto grado y dependientes económicos en los últimos cinco años por los cuáles recibió, recibieron o reciben una remuneración, de forma permanente u ocasional. Este tipo de actividades incluye consultorías.
i) Información detallada sobre diversos tipos de intereses relacionados con actividades honorarias o sin fines de lucro tales como posiciones y cargos honorarios; participación en consejos y actividades filantrópicas; viajes financiados por terceros; patrocinios y donativos; y donativos realizados, tanto del declarante como de sus familiares por consanguinidad o afinidad hasta en cuarto grado.
j) Información detallada de otros intereses que en la opinión del declarante, sus familiares por consanguinidad o afinidad hasta en cuarto grado y dependientes económicos no pueden ser incluidos en alguna de las categorías anteriores pero que considera que ante una duda de interpretación deben ser declarados para evitar que sean percibidos o susceptibles de influenciar el desempeño del encargo o las decisiones públicas.

Artículo 76. Toda la información contenida en los formularios de las declaraciones patrimonial y de intereses deberá tener sustento en la respectiva documentación de soporte, la cual no se adjuntará a la declaración, pero tendrá que ser exhibida cuando así se requiera por el Comité Coordinador del Sistema Nacional en virtud de alguna investigación.

Capítulo III. Sistema de Compras Públicas

Artículo 77. El Sistema Nacional de Compras Públicas es una plataforma transaccional creada con el objeto de digitalizar todos los procesos de compras públicas buscando que todos los trámites y procedimientos entre los proveedores y autoridades se realicen de forma electrónica.
Será obligación de todos los entes públicos favorecer el uso del Sistema Nacional de Compras Públicas y los procedimientos de licitaciones públicas electrónicas.
Así mismo el Sistema Nacional de Compras Públicas deberá crear mercados virtuales, es decir, plataformas electrónicas donde las dependencias gubernamentales informan sobre sus necesidades de compra, eligen las mejores ofertas registradas por los proveedores y realizan la transacción en línea, donde se concentran compras de montos menores, “compras de escaso valor”, que se adquieren mediante adjudicación directa.
El Sistema Nacional de compras públicas promoverá la eficiencia y la transparencia y contará con aplicaciones dirigidas tanto a los participantes, como a los funcionarios y a la ciudadanía en general.

Artículo 78. El Sistema nacional de Compras Públicas deberá seguir los siguientes criterios:
I. Dispondrá de formularios en línea para que los usuarios puedan realizar sugerencias o reclamos. Esta herramienta debe permitir guardar la confidencialidad de las personas que denuncian.
II. Ofrecerá la posibilidad de realizar los pagos y entregar el recibo correspondiente de manera electrónica.
III. Dispondrá de manuales de uso para el sitio web o alguna herramienta para facilitar el uso del sistema electrónico.
IV. Deberán crearsecatálogos de Compra que informen a las dependencias públicas acerca de cuales son los convenios vigentes y las características de los mismos.
V. Los Convenios Marco se publicaran en el sistema electrónico de compras públicas y deberá indicarse específicamente qué unidades de compra formarán parte del Convenio.

Artículo 79. El Sistema de Información de Compras Públicas deberá digitalizar todos los procesos de compras y contendrá al menos:
I. Padrón de proveedores. Listado actualizado y clasificado de las personas físicas o morales que cumplen con los siguientes requisitos: cuentan con la capacidad para proveer el bien o servicio, no se encuentran

inhabilitados y cuentan con su documentación en regla y los demás que señalen las disposiciones aplicables. Será obligación de los proveedores y contratistas estar inscritos en el Padrón de Proveedores del Sistema de Información de Compras Públicas para poder participar en un procedimiento de contratación.

II. Normatividad de compras públicas. Legislación vigente en el tema de compras públicas y aquellos documentos que no estánexplícitamente vinculados a las compras públicas pero tienen impacto en éstas.

III. Definición de requerimientos y Plan Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios.

Contenido mínimo del programa anual :

1. Información general de la dependencia, entidad o unidad administrativa,
2. Modificaciones realizadas,
3. Descargo de responsabilidad (el programa anual puede sufrir modificaciones),
4. Ubicación de los documentos necesarios para participación en las licitaciones públicas,
5. Postura estratégica del ente en el tema de compras públicas,
6. Última fecha de actualización,
7. Breve descripción del bien o servicio a adquirir (sin tecnicismos y muy general),
8. Método de compra (incluyendo convenios marco),
9. Propósito del proyecto de compra (qué necesidad va a satisfacer),
10. Fecha aproximada en que se llevará a cabo el proceso de compra,
11. Tamaño de la licitación (cantidad de bienes o servicios requeridos),
12. Lugar geográfico a proveer los bienes y servicios,
13. La duración del contrato (tentativa),
14. Nombre del proyecto de compra o contratación,
15. Categoría del bien o servicio,
16. Comentarios acerca del proyecto,
17. Status (ya cuenta con convocatoria, cancelado, adelantado, postergado),
18. El monto estimado destinado a cada proyecto de compra; sin embargo, no es recomendable que esta información se haga pública porque los proveedores interesados pueden tener una estimación de cuánto está dispuesto a gastar el gobierno, lo que hace menos competido el procedimiento en general.

IV. Todas las licitaciones que la dependencia, entidad o unidad administrativa tenga proyectadas durante el año.

V. Convocatorias y bases (en su caso, modificaciones).- Las bases de participación y convocatorias a la licitaciónpública o invitación restringida debe ser pública, sujetarse a los plazos dispuestos por las distintas leyes de adquisiciones y estar disponible en medios de divulgación oficial y Periódicos oficiales estatales, según el tipo de recurso involucrado, en medios de circulación comercial.

VI. Junta de aclaraciones.- La información sobre preguntas y respuestas debe ser difundida a todos los licitantes para asegurar condiciones equitativas de participación. Las aclaraciones deberán realizarse de manera electrónica, así los funcionarios contestan las aclaraciones por medio del sitio web y las publican para que todos los participantes tengan la misma información.

En caso de que exista alguna participación o junta que no se realice mediante el sitio web deberá publicarse un acta final de la junta, en la que se asientan las preguntas y las respuestas, y que además es firmada por los participantes y se pondrá a disposición de los licitantes que no hayan asistido, para efectos de su notificación.

VII. Información sobre proveedores incumplidos o sancionados.- Los marcos normativos en materia de adquisiciones normalmente establecen que las dependencias y entidades no deben asignar contratos a proveedores inhabilitados.

VIII. Fallo de la adjudicación.- En el fallo de adjudicación deberán establecerse claramente las razones por las cuales el proveedor o proveedores obtuvieron el contrato de adquisición de bienes o de prestación de servicios, en correspondencia con los requisitos previamente establecidos en la convocatoria y deberá firmarse un acta del evento por las autoridades participantes como por los licitantes.

Además deberá publicarse el nombre del ganador de la licitación, así como las evaluaciones con base en las cuales se determinó que ese participante ofrecía la mejor propuesta.
IX. Información de los contratos.- Una vez asignado el ganador se deberá publicar el contrato
X. Publicación del padrón y de los reportes de los testigos sociales. - En el caso de que durante la licitación efectivamente participen testigos sociales, sus reportes deben ser puestos a disposición del público .
XI. Publicación de auditorías.- Los documentos de los procesos de auditoría se publiquen para que tanto los participantes como los ciudadanos se familiaricen con el procedimiento y, al mismo tiempo, puedan monitorear estas operaciones.
XII. Publicación de estadísticas. Es importante para la rendición de cuentas que las autoridades publiquen una serie de indicadores que permitan supervisar el funcionamiento del sistema de compras públicas.
XIII. Participación de actores externos en los procedimientos de contratación.- Deberán las comunicaciones entre la autoridad contratante, las partes interesadas, los proveedores potenciales y los demás participantes del proceso de compras públicas.
XIV. Presupuesto disponible.- Deberá publicarse información por áreasegún los proyectos y metas de las dependencias y su vinculación al techo presupuestal disponible.
XV. Investigaciones de mercado.- La base de datos debe estar disponible sólo a nivel interno, para evitar que los proveedores potenciales puedan conocer el precio de referencia y cualquier otra información sensible.
XVI. Evaluación de las propuestas.- Deberá publicarse la propuesta económica de los oferentes, las evaluaciones que se hagan dentro del procedimiento, los motivos por los cuales se rechazó a ciertos participantes, así como las causas por las cuales se asigna el contrato a algún proveedor en particular.
XVII. Las contrataciones que se hayan celebrado en términos de la legislación aplicable detallando por cada contrato:
a) Las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y los servicios contratados; en el caso de estudios o investigaciones deberá señalarse el tema específico;
b) El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien se haya celebrado el contrato, y
c) El monto;
d) Los plazos de cumplimiento de los contratos.

Capítulo IV. Sistema Nacional de Servidores Públicos Sancionados

Artículo 80. El Sistema Nacional de Servidores Públicos Sancionados tiene como finalidad que aquellos servidores públicos que hayan sido sancionados por faltas graves de corrupción determinadas en la Ley General de Combate a la Corrupción y Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, sean del conocimiento público con el objeto de que no vuelvan a cometer actos de corrupción en otros órganos, instituciones, dependencias y entidades del Estado mexicano.

Artículo 81. Todos los órganos, instituciones, dependencias y entidades del Estado mexicano, sus titulares, y servidores públicos que los conforman, están obligados previo a hacer cualquier contratación de algún servidor público, revisar el Sistema Nacional de Servidores Públicos Sancionados, y no podrán contratar a alguien que aparezca en dicho sistema.

Los servidores públicos que no cumplan con lo establecido en esta disposición serán sancionados en términos de los dispuesto por la Ley General de Combate a la Corrupción y Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Artículo 82. El Sistema Nacional de Servidores Públicos Sancionados deberá al menos contener la siguiente información detallada:

a) Nombre del servidor público sancionado.
b) Órgano, institución, dependencia o entidad del Estado mexicano en la que laboraba o prestaba algún tipo de servicio.
c) Causal de la sanción y fecha de la resolución de la misma.
d) Tipo de sanción y vigencia de la misma.
e) Monto de la caución impuesta, en caso de multa.

Artículo 83. El Sistema Nacional de Servidores Públicos Sancionados deberá de actualizarse cada mes y la información deberá estar disponible en cualquier momento para que los servidores públicos de cualquier órgano, institución, dependencia y entidades del Estado mexicano pueda consultarla.

Capítulo V. Sistema de información y comunicación del Sistema Nacional de Fiscalización

Artículo 84. El Sistema de información y comunicación del Sistema Nacional de Fiscalización será la herramienta digital que permita centralizar la información de todos los órganos de auditoría gubernamental del país, incluidos los órdenes federal, estatal y, eventualmente, municipal.

Artículo 85. Con este sistema se busca que las instituciones de auditoría gubernamental del país en los tres ordenes de gobierno puedan procesar apropiadamente la información de las diversas instituciones relativas a cada uno de los procesos operativos de la fiscalización para fortalecer el control interno y externo.

Artículo 86. El Sistema de información y comunicación del Sistema Nacional de Fiscalización deberá contemplar al menos, lo siguiente:
I. Programa anual de auditorías.
II. Informe de resultados, estatus de observaciones y acciones emitidas.
III. Funciones para la recopilación de la información.
IV. La integración de una base de datos única con parámetros de confidencialidad que permita emitir reportes.
Toda la información contenida en éste Sistema deberá estar vinculado con el Sistema Nacional de Transparencia.

Capítulo VI. Sistema de denuncias públicas de actos de corrupción

Artículo 87. Toda denuncia contra actos de corrupción o faltas administrativas iniciará un procedimiento de investigación ante la autoridad competente, siempre y cuando cumpla con los requisitos y procedimientos establecidos en la presente Ley y la Ley General de Combate a la Corrupción y Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Artículo 88. En el Sistema de denuncias públicas contra actos de corrupción se encontrará la información completa de todas las denuncias contra actos de corrupción o faltas administrativas, presentadas por cualquier medio previsto en la Ley General de Combate a la Corrupción y Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Artículo 89. El Sistema de denuncias públicas contra actos de corrupción será administrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional, mismo que tendrá a su cargo el registro, clasificación, turno, seguimiento y evaluación de las denuncias presentadas contra actos de corrupción o faltas administrativas, conforme a lo establecido en la Ley General de Combate a la Corrupción y Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Artículo 90. El Comité de Participación Ciudadana se coordinará con el Secretario Ejecutivo para vigilar, verificar y evaluar los procedimientos que realicen las áreas correspondientes respecto del registro, clasificación, turno, seguimiento y evaluación de las denuncias contra actos de corrupción o faltas administrativas.

Artículo 91. En todo momento se protegerá la identidad del denunciante conforme a los mecanismos establecidos en las disposiciones aplicables.

Artículo 92. El registro de las denuncias contra actos de corrupción será la instancia encargada de recibir de manera oral, por escrito o electrónicamente, la denuncia contra actos de corrupción o faltas administrativas.

Artículo 93. Con objeto de promover la denuncia ciudadana, el Sistema Nacional deberá establecer:
I. Un sistema de recompensas para la denuncia en casos relevantes;
II. Mecanismos eficaces para la protección de denunciantes, y
III. Mecanismos eficaces para la protección de testigos.

TÍTULO SEXTO.
De las políticas de prevención, detección y sanción de la corrupción

Capítulo I. Política de combate a la corrupción

Artículo 94. Al ser el combate a las distintas formas de corrupción una tarea principal del Estado Mexicano en su conjunto, todos los órganos, instituciones, dependencias y entidades del Estado mexicano, sus titulares, y servidores públicos que los conforman, están obligados a diseñar, crear y construir estructuras, normas, procesos y políticas públicas que minimicen los riesgos de corrupción, y hagan posible su identificación y administración.

El Sistema Nacional Anticorrupción será el titular principal de esta responsabilidad y función de Estado. A su cargo estarán los sistemas de identificación, investigación, sanción y prevención de la corrupción.

Artículo 95. La Rendición de Cuentas es una función básica de todos los órganos, instituciones, dependencias y entidades del Estado mexicano, de sus titulares y de cada servidor público que las integra. Se trata de la herramienta principal en el combate a la corrupción.
La Rendición de Cuentas implica:
I. Transparencia en el ejercicio diario de sus funciones;
II. Documentación y registro de las funciones básicas;
III. Evaluación periódica del desempeño y de los resultados obtenidos;
IV. Informes periódicos, sistemáticos y detallados sobre sus funciones y resultados;
V. Asignación de consecuencias institucionales y personales por faltas u omisiones relacionadas con las fracciones anteriores, en términos de los que señala la Ley General de Combate a la Corrupción y Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Artículo 96. La cooperación internacional y la participación activa en los foros más importantes sobre combate a la corrupción, será función principal del Estado Mexicano. Esta participación deberá establecer condiciones para conocer y compartir las mejores prácticas internacionales, para colaborar en el combate global del fenómeno, y para invitar a la comunidad internacional a evaluar las políticas anticorrupción del Estado Mexicano.

Artículo 97. Es de orden público el establecimiento de políticas integrales de educación y capacitación, tanto en el servicio público, como para niñas, niños y adolecentes, en los distintos niveles del sistema educativo mexicano, sobre los distintos tipos de corrupción, sus características, las circunstancias en las que se presentan, y sus consecuencias.

Artículo 98. Es también de orden público la generación de estudios y acervos académicos sobre las distintas formas de corrupción, y sobre las mejores maneras de prevenirla, identificarla e investigarla.

Artículo 99. Las recomendaciones a las que hace referencia el artículo 8 inciso f) serán públicas y no tendrán carácter imperativo para la autoridad o servidor público a los cuales se dirigirá y, en consecuencia, no podrá por sí misma anular, modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos contra los cuales se hubiese presentado la queja o denuncia.

En todo caso, una vez recibida, la autoridad o servidor público de que se trate informará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, si acepta dicha Recomendación. Una vez aceptada entregará, en su caso, en otros quince días adicionales, las pruebas correspondientes de que ha cumplido con la Recomendación. Dicho plazo podrá ser ampliado cuando la naturaleza de la Recomendación así lo amerite.

Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas, se procederá conforme a lo siguiente:
a) La autoridad o servidor público de que se trate deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa, y atender los llamados de la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, a comparecer ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.
b) El Comité Coordinador determinará, previa consulta con los órganos legislativos referidos en el inciso anterior, en su caso, si la fundamentación y motivación presentadas por la autoridad o servidor público que se hubiese negado a aceptar o cumplir las recomendaciones emitidas, son suficientes, y hará saber dicha circunstancia por escrito a la propia autoridad o servidor público y, en su caso, a sus superiores jerárquicos, para los efectos del siguiente inciso.
c) Las autoridades o servidores públicos, a quienes se les hubiese notificado la insuficiencia de la fundamentación y motivación de la negativa, informarán dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación del escrito referido en el inciso que antecede, si persisten o no en la posición de no aceptar o no cumplir la recomendación.
d) Si persiste la negativa, el Comité Coordinador podrá denunciar ante el Ministerio Público o la autoridad administrativa que corresponda a los servidores públicos señalados en la recomendación como responsables.

Artículo 100. En contra de las recomendaciones, acuerdos o resoluciones definitivas del Comité Coordinador, no procederá ningún recurso.

Capítulo II. Evaluación de la política de combate a la corrupción

Artículo 101. El Sistema Nacional será el encargado de establecer las distintas formas de evaluación de las políticas y medidas de combate a la corrupción en todo el Estado mexicano. Los indicadores deberán diseñarse con el objeto de medir tanto el fenómeno de la corrupción, así como las medidas que el Estado toma para combatirlo.

Artículo 102. Tanto las autoridades que conforman el Sistema Nacional, así como todos y cada uno de los órganos, dependencias y entidades valoradas, deberán atender con diligencia los resultados de estas

evaluaciones y tomar medidas concretas para minimizar los riesgos de corrupción.

El Sistema Nacional será el encargado de dar seguimiento a estas medidas y emitir recomendaciones.

Capítulo III. Mecanismos de participación ciudadana

Artículo 103. Para promover la efectiva participación de la sociedad en el combate a la corrupción, se utilizarán, entre otros, los siguientes mecanismos:

I. El Testigo Social;
II. Las Auditorías Sociales para proyectos de alto impacto comunitario, o
III. Las Redes de participación ciudadana.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO. El Sistema Nacional Anticorrupción entrará en funcionamiento 30 días posteriores a la entrada en vigor la presente Ley.

ARTÍCULO TERCERO. El Comité Coordinador deberá emitir una convocatoria pública en un plazo no mayor a los 60 días de la instalación del mismo con el propósito de constituir el Consejo Consultivo del Comité de Participación Ciudadana en los términos que establece la presente ley.

ARTICULO CUARTO. La forma de determinar el escalonamiento de la integración por primera vez del Comité de Participación Ciudadana será: 2 por 3 años y 3 por 2 años.

ARTICULO QUINTO. El Consejo Consultivo del Comité de Participación Ciudadana deberá aprobar, en un plazo no mayor a 30 días, sus normas de carácter interno.

ARTÍCULO SEXTO. El Consejo Consultivo del Comité de Participación Ciudadana, una vez emitidas sus normas internas, deberá emitir una convocatoria pública en un plazo no mayor a 60 días de la instalación del mismo con el propósito de integrar a los candidatos del Comité de Participación Ciudadana en los términos establecidos de la presente ley.

ARTÍCULO SÉPTIMO. El Comité Coordinador deberá en un plazo no mayor a 30 días de haber iniciado su funcionamiento deberá designar al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional.

ARTÍCULO OCTAVO. Los Sistemas a los que hace referencia el Título Quinto de la presente Ley, deberán entrar en operación a más tardar 90 días posteriores a la instalación del Sistema Nacional Anticorrupción.

Artículo Segundo.- Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Artículo 25. Cuando alguna Secretaría de Estado necesite informes, datos o la cooperación técnica de

cualquier otra dependencia, ésta tendrá la obligación de proporcionarlos, atendiendo en lo correspondiente a las normas que determine la Secretaría de la Función Pública.

Artículo 26. Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias:
Secretaría de Gobernación
Secretaría de Relaciones Exteriores
Secretaría de la Defensa Nacional
Secretaría de Marina
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Secretaría de Energía
Secretaría de Economía
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Secretaría de la Función Pública
Secretaría de Educación Pública
Secretaría de Salud
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial yUrbano
Secretaría de Turismo
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal

Artículo 31. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I.- a la IV.- …
V.- a la XVIII.- …
XIX.- Se deroga.
XX.- …
XXI. Se deroga.
XXII. Se deroga.
XXIII.- …
XXIV. **Conducir las políticas, establecer las normas y emitir las autorizaciones y criterios correspondientes en materia de planeación y administración de recursos humanos, contratación y remuneraciones del personal, estructuras orgánicas y ocupacionales, y ejercer el control presupuestario de los servicios personales, con las respectivas normas de control de gasto en ese rubro, las cuales deberán opinarse previo a su implementación o entrada en vigor por la Secretaría de la Función Pública.**
XXV. Se deroga.
XXVI. Se deroga.
XXVII. Se deroga.
XXVIII. Se deroga.
XXIX. Se deroga.
XXX. Se deroga.
XXXI. Se deroga.
XXXII. Se deroga.
XXXIII. Se deroga.
XXXIV. ….

Artículo 37.- A la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I.- Organizar y coordinar el sistema de control y evaluación gubernamental; inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos; coordinar, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la evaluación que permita conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales, así como concertar con las dependencias y entidades de la administración pública federal y validar los indicadores estratégicos, en los términos de las disposiciones aplicables;

II.- Formar parte del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción;

III.- Coordinar políticas de desarrollo de indicadores por dependencia y entidad que estimulen el desempeño, su evaluación y cumplimiento de resultados de los órganos y servidores públicos de la Administración Pública Federal, conforme a las bases que establezca el Sistema Nacional Anticorrupción;

IV.- Expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control de la Administración Pública Federal, para lo cual podrá requerir de las dependencias competentes, la expedición de normas complementarias para el ejercicio del control administrativo, así como aquellas que impulsen la simplificación administrativa;

V.- Vigilar el cumplimiento de las normas de control así como asesorar y apoyar a los órganos de control interno de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

VI.- Vigilar en conjunto con la Auditoría Superior de la Federación el cumplimiento de las normas fiscalización así como asesorar y apoyar a los órganos de control interno de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, conforme a las reglas que emita el Sistema Nacional Anticorrupción;

VII.- Realizar investigaciones y auditorias en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en sustitución o apoyo de sus propios órganos de control, conforme a las reglas y bases generales que emita el Sistema Nacional Anticorrupción.

VIII.- Vigilar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos y valores, en términos de las disposiciones aplicables;

IX.- Organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y emitir conforme a las bases que determine el Sistema Nacional Anticorrupción, las normas para que los recursos humanos, patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados con criterios de eficiencia, buscando en todo momento la eficacia, descentralización, desconcentración y simplificación administrativa. Para ello, podrá realizar o encomendar las investigaciones, estudios y análisis necesarios sobre estas materias, y dictar las disposiciones administrativas que sean necesarias al efecto, tanto para las dependencias como para las entidades de la Administración Pública Federal;

X.- Dirigir, organizar y operar el Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal conforme a lo que establezca el Sistema Nacional Anticorrupción, y en los términos de las disposiciones aplicables;

XI.- Realizar, por sí o a solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de la coordinadora del sector correspondiente, auditorías y evaluaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con el objeto de promover la eficiencia en su gestión y propiciar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas;

XII.- Emitir políticas, normas, lineamientos y procedimientos, así como Inspeccionar y vigilar, directamente o a través de los órganos de control, que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios, y ejecución de obra pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales de la Administración Pública Federal, conforme a las bases que establezca el Sistema Nacional Anticorrupción y las disposiciones aplicables;

XIII.- Opinar previo a su entrada en vigor, sobre las las políticas, normas y criterios correspondientes en materia de programación, presupuestación, administración de recursos humanos, materiales y financieros, así como sobre los proyectos de normas en materia de contratación de deuda y de manejo de fondos y valores que formule la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

XIV.- Designar, llevar a cabo el registro y mantener un padrón actualizado de los auditores externos de las entidades, así como normar y controlar su desempeño;

XV.- Designar, para el mejor desarrollo del sistema de control y evaluación gubernamentales, delegados de la propia Secretaría ante las dependencias y órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal centralizada, y comisarios en los órganos de gobierno o vigilancia de las entidades de la Administración Pública Paraestatal, conforme a los perfiles que establezca el Sistema Nacional Anticorrupción y las disposiciones aplicables;

XVI.- Designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y de la Procuraduría General de la República, así como a los de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades de tales órganos, conforme a lo que determine la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, quienes dependerán jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de la Función Pública, tendrán el carácter de autoridad y realizarán la defensa jurídica de las resoluciones que emitan en la esfera administrativa y ante los Tribunales Federales, representando al Titular de dicha Secretaría

XVII.- Colaborar y coordinarse con la Auditoría Superior de la Federación para el establecimiento de los procedimientos necesarios que permitan a ambos órganos el mejor cumplimiento de sus respectivas responsabilidades en términos de las disposiciones aplicables;

XVIII.- Informar periódicamente al Sistema Nacional Anticorrupción y al Ejecutivo Federal, sobre el resultado de la evaluación respecto de la gestión de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de aquellas que hayan sido objeto de investigación y fiscalización, e informar a las autoridades competentes, cuando proceda del resultado de tales intervenciones, así mismo proponer y dar seguimiento a cumplimiento de las acciones que deban desarrollarse para corregir las irregularidades detectadas conforme a las bases que dicte el Sistema Nacional Anticorrupción;

XIX. Llevar y normar el registro de servidores públicos de la Administración Pública Federal, conforme a las bases que determine el Sistema Nacional Anticorrupción en donde se incluirán, las declaraciones patrimoniales, de intereses y su evolución, así como la información sobre las sanciones administrativas que, en su caso, les hayan sido impuestas, en los términos de los ordenamientos aplicables;

XX.- Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales y de intereses que deban presentar los servidores públicos de la Administración Pública Federal, en la plataforma que para los efectos se determine por el Sistema Nacional Anticorrupción, y verificar y dar seguimiento a la evolución patrimonial de los mismos, mediante las investigaciones que fueren pertinentes de acuerdo con las disposiciones aplicables;

XXI.- Atender las quejas e inconformidades que presenten los particulares con motivo de convenios o contratos que celebren con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como informar al Sistema Nacional Anticorrupción del seguimiento de las mismas, en términos de las disposiciones aplicables;

XXII.- Implementar las acciones de participación ciudadana que acuerde el Sistema Nacional Anticorrupción en la celebración de convenios o contratos que celebren con los particulares, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en términos de las disposiciones aplicables;

XXIII.- Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos, que puedan constituir responsabilidades administrativas leves; aplicar las sanciones que correspondan en los términos de ley y, en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, prestándose para tal efecto la colaboración que le fuere requerida;

XXIV.- Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos, que puedan constituir responsabilidades administrativas graves y remitir para su sanción al Tribunal Superior de Justicia Administrativa y, en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, prestándose para tal efecto la colaboración que le fuere requerida;
XXV.- Aprobar y registrar las estructuras orgánicas y ocupacionales de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y sus modificaciones;
XXVI.- Establecer normas y lineamientos en materia de planeación y administración de personal;
XXVII.- Emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.
XXVIII.- Conducir la política inmobiliaria de la Administración Pública Federal salvo por lo que se refiere a las playas, zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar o cualquier depósito de aguas marítimas y demás zonas federales;
XXIX.- Expedir normas técnicas, autorizar y, en su caso, proyectar, construir, rehabilitar, conservar o administrar, directamente o a través de terceros, los edificios públicos y, en general, los bienes inmuebles de la Federación, a fin de obtener el mayor provecho del uso y goce de los mismos. Para tal efecto, la Secretaría podrá coordinarse con estados y municipios, o bien con los particulares y con otros países;
XXX.- Administrar los inmuebles de propiedad federal, cuando no estén asignados a alguna dependencia o entidad;
XXXI.- Regular la adquisición, arrendamiento, enajenación, destino o afectación de los bienes inmuebles de la Administración Pública Federal y, en su caso, representar el interés de la Federación; expedir las normas y procedimientos para la formulación de inventarios, para la realización y actualización de los avalúos sobre dichos bienes, así como expedir normas técnicas, autorizar y, en su caso, proyectar, construir, rehabilitar, conservar o administrar, directamente o a través de terceros, los edificios públicos y, en general, los bienes inmuebles de la Federación, en términos de las disposiciones aplicables;
XXXII.- Llevar el registro público de la propiedad inmobiliaria federal y el inventario general correspondiente, y
XXXIII.- Reivindicar los bienes propiedad de la nación, por conducto del Procurador General de la República;
XXXIV.- Formular y conducir la política general de la Administración Pública Federal para establecer acciones que propicien la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso por parte de los particulares a la información que aquélla genere, conforme a lo que establezca el Sistema de Transparencia y el Sistema Nacional anticorrupción en términos de las disposiciones aplicables;
XXXV.- Promover y coordinarse las estrategias necesarias para establecer políticas de gobierno electrónico, en términos de las disposiciones aplicables;
XXXVI. Las demás que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos.

El nombramiento que someta el titular del Ejecutivo Federal a ratificación del Senado de la República, deberá precisar si existen relaciones de amistad ente el nombrado y el Presidente de la República o cualquiera de sus Secretarios de Estado.

Para ser nombrado Secretario de la Función Pública, se requiere:

- **a) No ser, ni haber sido miembro del mismo partido político o de alguno de la coalición, en su caso, que haya postulado al titular del ejecutivo en funciones;**
- **b) No haber sido candidato por el partido político o coalición que haya postulado al titular del ejecutivo en funciones;**
- **c) No tener relaciones de afecto o amistad estrecha ni con el Presidente o con los titulares de las**

dependencias del Ejecutivo Federal.

Artículo 44.- Se deroga.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. Las reformas y adiciones de las disposiciones anteriores entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se deroga toda disposición en contrario.

ARTÍCULO TERCERO. El Presidente de la República deberá en un plazo no mayor a 30 posteriores a la entrada en vigor de la presente ley, deberá someter a consideración del Senado la ratificación del Secretario de la Función Pública.

De la Dip. Raquel Jiménez Cerrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición de Personas.

RAQUEL JIMÉNEZ CERRILLO en mi carácter de Diputada proponente integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 6, numeral 1, fracción I y artículo 77, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Soberanía la **INICIATIVA de "LEY GENERAL PARA PREVENIR, INVESTIGAR, SANCIONAR Y REPARAR LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS.",** con base a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Acorde con el artículo 1° Constitucional, en México todas las personas Gozan de los derechos humanos y garantías para su protección reconocidas en la Carta Magna y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la misma Constitución establece.

2. Las normas relativas a los derechos humanos deben interpretarse de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia y todas las autoridades, en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Por lo tanto deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

3. La Tutoría de los Derechos Humanos para todos los individuos que se encuentran en nuestro territorio, es obligación del estado conferida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, correspondiéndole la persecución de delitos, ejecución de penas y sanciones a la Federación, Estado y Municipios, preservando la integridad, orden, libertad y paz social.

4. El día 3 de febrero de 1981, el Estado Mexicano firmó y se adhirió a la **Convención Americana en materia de Derechos Humanos**, suscrita en San José, Costa Rica, el día 22 de noviembre de 1969, comprometiéndose con ello a respetar los derechos y libertades contemplados y reconocidos, así como a garantizarlos. Dentro del documento encontramos derechos esenciales del hombre tales como la vida, la libertad personal y la integridad personal.

5. El día 2 de abril de 2002, México ratificó **La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas**, suscrita en la Ciudad de Belem, Brasil el 9 de junio de 1994, Convención que en sus artículos primero y tercero, establece el compromiso de los estados firmantes, de adoptar las medidas de carácter legislativo necesarias para tipificar y sancionar en el ámbito de su jurisdicción el delito de Desaparición Forzada.

6. El día 15 de enero de 2008, México ratificó **La Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas**, que en sus artículos primero, segundo, tercero y cuarto compromete a los Estados parte para que tomen las medidas necesarias para que la Desaparición Forzada y la Desaparición cometida entre Particulares, sean tipificadas como delitos en el marco de la Legislación local.

7. La Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 1.1, establece el deber de

respetar y garantizar los derechos humanos reconocidos ella. Respecto a la obligación de Garantía la Corte Interamericana ha establecido que puede ser cumplida de diversas maneras, las cuales tienen que ver con el derecho específico que el propio Estado debe garantizar a los particulares y de las particulares necesidades de protección.

> "Esta Obligación implica el deber de los Estados de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifieste el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como parte de dicha Obligación, el Estado está en el deber jurídico de "Prevenir, razonablemente las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la victima una adecuada reparación. Lo decisivo es dilucidar "si una determinada violación […] ha tenido lugar con el apoyo o la tolerancia del poder público o si peste ha actuado de manera que la transgresión se haya cumplido en defecto de toda prevención o impunemente"[8]
>
> La corte reitera que no basta que los Estados se abstengan de violar los derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición persona o por la situación específica en que se encuentre.[9]

8. En tal tenor, la obligación de un Estado, en casos específicos de desaparición, implica la obligación de prevenir e investigar las posibles desapariciones, implementando "todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito que, como tal, es susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales"[10]

9. En el contexto de desapariciones de personas que ocurre en el país, se puede llegar a considerar que en circunstancias de una violación grave generada por la delincuencia, la falta de investigación inmediata y seria por parte del Estado hace considerar que la autoridad, al menos permite o tolera las desapariciones. En ese sentido es necesario seguir los criterios de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones Forzadas, a partir del deber previsto en el artículo 3 que al efecto establece:

> Los Estados partes tomarán las medidas apropiadas para investigar sobre las conductas definidas en el artículo 2 que sean obras de personas o grupos de personas que actúan sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, y para procesar a los responsables

[8]Corte IDH. Caso González y otras ("campo algodonero") vs México. Sentencia de de noviembre de 2009(excepción preliminar fondo, reparaciones y costas), parr. 236
[9]Corte IDH. Caso Baldeón García vs Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de 2006
[10]Corte IDH. Caso González y otras ("campo algodonero") vs México. Sentencia de de noviembre de 2009(excepción preliminar fondo, reparaciones y costas), parr. 252

10. El actuar del Estado deberá en todo momento estar regido por la preservación de los Derechos Humanos, instrumentando las leyes necesarias a fin de fortalecer la estructura legal que garantice el correcto desarrollo de la sociedad, armonizando las leyes promulgadas con los compromisos internacionales a los que el estado mexicano sea parte.

11. El Estado tiene la obligación de proteger al individuo de los actos de particulares y de agentes estatales que obstaculicen el ejercicio de sus derechos, al respecto la Corte Interamericana ha señalado:

    "…los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones necesarias para que no se produzcan violaciones a los derechos humanos, así como el deber de impedir que sus agentes o particulares atenten contra ellos…"[11]
    Los Estados deben adoptar las medidas necesarias para crear un marco normativo adecuado que disuada cualquier amenaza a los derechos humanos; establecer un sistema de justicia efectivo capaz de investigar, castigar y dar reparación por la privación de la vida y libertad por parte de agentes estatales o particulares; y salvaguardar el derecho a que no se impida el acceso a las condiciones que garanticen una existencia digna.[12]

    De lo anterior, se concluye que el Estado tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias, tanto a nivel legislativo, administrativo y judicial, mediante la emisión de normas penales y el establecimiento de un sistema de justicia para prevenir, suprimir y castigar la participación de los agentes del Estado en actos criminales, así como también para prevenir y proteger a los individuos de actos criminales de otros individuos e investigar efectivamente estas situaciones.

12. Por otra parte la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal , ha señalado que la desaparición es una violación que atenta de diversas formas a los derechos humanos, manifestando al efecto:

    "Es importante considerar que una desaparición constituye una de las violaciones más graves a los derechos humanos que afecta la violación de otros derechos como:
    - El derecho a la seguridad y libertad personales;
    - El derecho a la dignidad de la persona
    - El derecho a la integridad personal, a no sufrir tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante;
    - El derecho a la vida familiar y de amistad, y
    - Cuando la persona desaparecida es asesinada, el de derecho a la vida."[13]

13. En este contexto legal, tenemos el compromiso internacional de legislar en la materia, sancionando la conducta delictiva de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida entre particulares, que cuenta con elementos distintivos que la separan de las conductas penales que se contemplan actualmente en nuestro Código Penal Federal, dentro del Libro Segundo, Titulo Décimo **Delitos Cometidos por Servidores Públicos,** Capítulo III Bis **Desaparición Forzada de Personas**.

14. Al respecto, el pasado 05 de junio de 2013, el **C. Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huertadel**

[11]Corte IDH. Caso Myrna Mack Chang vs Guatemala. Sentencia de 25 de noviembre de 2003 (fondo , reparaciones y costas), párr. 152 y Caso Juan Humberto Sánchez vs Honduras. Sentencia de 29 de abril de 2004, párr. 110.
[12]Corte IDH. Caso Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007, Serue C, No. 166 párrs. 79 y 81
[13]CDHDF, Caso "Falta de protocolos específicos para la investigación y atención de casos de desapariciones de personas en la Ciudad de México", Recomendación 19/2013, pág. 18

grupo parlamentario del PRD, presentó la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, a fin de tipificar el delito de desaparición involuntaria de personas.

15. Así mismo, el 22 de octubre de 2013 el C. Presidente de la República **Enrique Peña Nieto, presentó** iniciativa a efecto de reformar al Código Penal Federal, para adecuar el delito de desaparición forzada de personas a los estándares internacionales

16. En tal tenor, a fin de conjugar esfuerzos retomando las iniciativas señaladas en los numerales anteriores, resulta imperante generar una Ley General para Prevenir, Combatir y Sancionar la Desaparición de Personas; Ley que contempla la figura de Desaparición Forzada y la Desaparición de Personas entre Particulares, y cumplir con los compromisos Internacionales de los que forma parte el Estado Mexicano.

17. Las conductas a sancionar en la modalidad de Desaparición Forzada, contempla los siguientes elementos; como agentes activos de la conducta: **funcionarios públicos o ciudadanos que actúen por órdenes de funcionarios públicos, con permiso o consentimiento de éstos;** mientras que la conducta contiene **1.- La privación ilegal o en un principio privación legal de la libertad, 2.- La sustracción de la víctima de la protección de la ley, 3.- La negativa de la detención o paradero de la víctima,** mientras que la modalidad de Desaparición de personas entre particulares, contiene los mismos elementos **pero sin la participación de Servidores Públicos o sin conocimiento de éstos, de la comisión de la conducta**, elementos que la distinguen a los tipos penales ya existente y tutelados dentro de nuestro Código Penal Federal.

18. En los inicios de la vida independiente de nuestro país, las Agencias Policíacas servían a los intereses de un sector privilegiado de políticos en el poder, cobrando a través de éstas, las venganzas políticas o neutralizando a los adversarios políticos, motivos que llevaban a los Servidores Públicos a cometer conductas en contra de los ciudadanos, conductas que se encuadraban con el tipo penal propuesto en esta iniciativa y en algunos caso extremos llegando a la comisión de crímenes de lesa humanidad.

19. En la actualidad la Desaparición Forzada cometida por los Agentes o Servidores Públicos, no se ha erradicado en su totalidad, teniendo a los sectores más desprotegidos o en situación de vulnerabilidad, proclives a la violación de los Derechos Humanos y abusos por parte de las autoridades, inclusive convirtiéndose en víctimas de la comisión del delito de Desaparición Forzada.

20. Mientras que la conducta de desaparición cometida entre de particulares, se ha vuelto una modalidad muy recurrida por los delincuentes, aprovechando el vacío legal en que se encuentran las personas reportadas como desaparecidas, pues las autoridades no se encuentran hoy en día obligadas jurídicamente a iniciar Averiguación Previa, ya que no hay delito que perseguir por la autoridad, hasta en tanto no se configure alguno de los delitos existentes en el Código Penal Federal, conducta ha sido una constante sobre todo en los últimos años ejecutada por individuos o grupos delictivos. Lo que vuelve urgente legislar en la materia, reconociendo y sancionado la conducta, a fin de que la Procuraduría General de la República Justicia, persiga, sancione y prevenga el delito de desaparición entre particulares.

21. A nivel nacional se registraron 4,007 desapariciones tan sólo en el 2012, lo que se desprende de estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), con base en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE), 2013, es la primera vez que se detalla el número de desapariciones forzadas, ejercicio que se aplica desde el 2010.

22. Debido a la ubicación geográfica del país, éste se ha vuelto trayecto obligado de muchos extranjeros que en su camino hacia los Estados Unidos de Norte América, se encuentran de paso; personas que por encontrarse en tránsito se ven expuestas a ser víctimas de la comisión de diversos delitos, entre ellos a ser privados de la liberta por servidores públicos o cualquier otra persona con el objeto de sustraerlos de la protección de la ley y negando la privación o paradero de las víctimas, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad en que se encuentran, por lo que considerando la portabilidad de los Derechos Humanos, de conformidad con el artículo 6 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el que se establece que todo ser humano tiene derecho, en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica, sin importar su calidad migratoria en el país o situación de transito por el Estado, el que deberá de estar obligado a proteger y salvaguardar los Derechos Humanos de todas las personas, lo que nos compromete a legislar y sancionar la conducta de Desaparición.

23. Con el objeto de brindar la más amplia protección de la Ley, a las víctimas de la comisión de esta conducta delictiva, se propone la persecución del delito por denuncia anónima, con el propósito de que cualquier persona que conozca o se entere de la comisión de este delito, se encuentre facultado de denunciarlo y con ello activar el órgano jurisdiccional para que se investiguen los hechos presuntamente constitutivos de delito, sin la necesidad de que sea denunciado por quien o quienes tiene el derecho legal de denunciarlo, es decir el familiar directo o familiares de la víctima, debido a que existen caso en los que las victimas no cuentan con familiares.

24.Es de destacarse las modalidades adoptadas por la delincuencia para cometer delitos, las cuales no deben de escapar de ser sancionadas, como lo es la desaparición de Personas sin la participación o anuencia de Servidores Públicos, en la que personas o grupo de personas privan de la liberta a otra u otras, negando la privación, sustrayendo a la victima de la protección de la ley, sin pedir nada a cambio de la liberación lo que separa esta conducta del tipo penal de secuestro, pues este último tiene como fin el obtener un beneficio para el delincuente a cambio de la liberación de la víctima; de igual forma se distingue del tipo penal de Privación de la Libertad, debido a que esta última solo busca privar de la libertad a la víctima, mientras que la conducta de Desaparición entre particulares, busca que la víctima desaparezca física y jurídicamente, no quedando solo en la privación de la libertad, elementos que nos llevan a separar las conductas mencionadas y a combatir y sancionar por separado.

25.La Ley propuesta contempla un capítulo sobre los derechos de las víctimas, ofendidos y testigos, en términos de la Ley General de Víctimas y aplicables durante el proceso penal para asegurar su bienestar, su seguridad y la de sus familiares y personas cercanas y evitar la revictimización, incluso innovando con medios tecnológicos las formas de emitir sus declaraciones; además establece la obligación de adoptar medidas y protocolos de protección, asistencia y atención a la víctima, ofendidos y testigos, incluso cuando éstos sean de procedencia extranjera y no cuenten con documentos migratorios que comprueben su legal estancia en el país; estableciendo otro capítulo para la Persecución, Investigación y Sanción del delito considerando la creación de una Fiscalía Especializada adscrita a la Procuraduría para tales fines y en el Capítulo subsecuente se establece la preparación de policías especializados en la materia para la investigación de los delitos establecidos en esta Ley.

26. Adicionalmente se propone la creación de una base de datos que contengan los registros de ADN de restos corpóreos encontrados y los de los familiares de las víctimas de desaparición con la finalidad de cotejarlos y en su momento determinar la identificación de alguna víctima.

27. Durante los procesos de investigación, la víctima y/o los ofendidos suelen sufrir múltiples afectaciones emocionales, económicas, laborales, sociales, educativas y otras, por lo que la presente Ley establece un Capítulo dedicado a la reparación integral, misma que podrá ser garantizada con los bienes de los inculpados y/o mediante el Fondo Estatal de Desaparición que se integrará por recursos gubernamentales, fianzas y otros rubros.

28. Debido al compromiso del Estado en la persecución y sanción de las conductas delictivas en el marco del Estado de Derecho que nos debe de regir, aunado al rezago en el que se encuentra nuestro actual Código Penal Federal, de conformidad con nuestra Carta Magna y los Tratados Internacionales de los que forma parte el Estado Mexicano, nos encontramos con el deber de incluir y tipificar la conducta delictiva de la Desaparición de Personas, en beneficio de la tutelar la integridad y la libertad de las personas.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la iniciativa siguiente:

"LEY GENERAL PARA PREVENIR, INVESTIGAR, SANCIONAR Y REPARAR LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS."

TÍTULO PRIMERO
Parte General
Disposiciones Generales
Capítulo Único
Generalidades

Artículo 1.-La presente Ley general es de orden público de interés social y observancia en todo el territorio nacional, en términos de lo dispuesto por el artículo 1o, párrafo tercero, inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados Internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano.

Esta Ley se interpretará de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, la jurisprudencia y recomendaciones de los órganos de protección de los derechos humanos creados por Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea Parte y en la Ley General de Víctimas, para lo que en su caso proceda, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de los derechos de las personas.

Artículo 2.-La presente Ley tiene por objeto:

I.- Prevenir la desaparición de personas;

II.- Establecer los tipos y punibilidades en materia de desaparición de personas.

III.- Inhibir la práctica de la desaparición de personas, así como no permitir, ni tolerar ésta bajo ninguna circunstancia, incluyendo bajo situaciones de posible emergencia, peligro, disturbio público, catástrofe natural o cualquiera otra.

IV.- Sancionar a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición de personas, así como la tentativa de comisión del mismo;

V.- Dar pleno reconocimiento y efectividad a los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, conforme a lo que a este respecto establece la normatividad aplicable.

VI.- Establecer las reglas básicas para la investigación, persecución, procesamiento, sanción y ejecución de las penas, por los delitos descritos en la presente Ley; y

VII.- Reparar el daño a las víctimas de desaparición de manera integral, adecuada, eficaz y efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación sufrida.

Artículo3.-Para efectos de esta Ley se entenderá por:

I. **ADN:** Ácido Desoxirribonucleico;
II. **Autoridades:** Cualquier Dependencia Federal, de los Estados y Municipios.
III. **Ley:** Ley General para Prevenir, Combatir y Sancionar la Desaparición de Personas;
IV. **Procuraduría:** Procuraduría Generalde la República;
V. **Servidor Público:** los señalados con tal carácter en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 4.- Serán aplicables en forma supletoria y en lo que se refiera a la materia de esta Ley, las disposiciones del Código Penal Federal, Código Federal de Procedimientos Penales, Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Víctimas, las Resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 1º y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicando siempre las normas que sean más favorables para las personas.

Artículo 5.- La interpretación, aplicación y definición de las acciones para el cumplimiento de la presente Ley; el diseño e implementación de acciones de prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos objeto del presente ordenamiento legal, así como para la protección y asistencia a las víctimas, ofendidos y testigos, se orientarán, además de lo previsto en el orden jurídico nacional, particularmente por lo dispuesto en el artículo 1º constitucional y el artículo 5º de la Ley General de Víctimas, por los siguientes principios:

I. Máxima protección: Obligación de cualquier autoridad, de velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos humanos de las víctimas y los ofendidos de los delitos previstos por esta ley. Las autoridades adoptarán, en todo momento, medidas para garantizar su seguridad, protección, bienestar físico y psicológico, su intimidad y el resguardo de su identidad y datos personales.

II. Interés superior de la infancia: Entendido como la obligación del Estado de proteger los derechos de la niñez y la adolescencia, y de velar por las víctimas, ofendidos y testigos menores de 18 años de edad, atendiendo a su protección integral y su desarrollo armónico.

Los procedimientos señalados en esta Ley reconocerán sus necesidades como sujetos de derecho en desarrollo.

El ejercicio de los derechos de los adultos no podrá condicionar el ejercicio de los derechos de las

niñas, niños y adolescentes.

III. Debida diligencia: Obligación de los servidores públicos de dar respuesta inmediata, oportuna, eficiente, eficaz y responsable en la prevención, investigación, persecución y sanción, así como en la reparación del daño de los delitos previstos por esta Ley, incluyendo la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos.

IV. Derecho a la reparación del daño: Entendida como la obligación del Estado y los Servidores Públicos de tomar todas las medidas necesarias para garantizar a la víctima la restitución de sus derechos, indemnización y rehabilitación por los daños sufridos, así como de vigilar la garantía de no repetición, que entre otros incluye la garantía a la víctima y a la sociedad de que el crimen que se perpetró no volverá a ocurrir en el futuro, el derecho a la verdad que permita conocer lo que verdaderamente sucedió, la justicia que busca que los criminales paguen por lo que han hecho, y a la reparación integral.

V. No victimización secundaria: Obligación del Estado y los servidores públicos, en los ámbitos de sus competencias, de tomar todas las medidas necesarias para evitar que las víctimas sean revictimizadas en cualquier forma, y a remover obstáculos para que tengan acceso efectivo a sus derechos.

VI. Presunción de minoría de edad: En los casos que no pueda determinarse o exista duda sobre la minoría de edad o documentos de identificación y no se cuente con dictamen médico, se presumirá ésta.

VII. Las medidas de atención, asistencia y protección, beneficiarán a todas las víctimas de los delitos previstos por esta Ley, con independencia de si el sujeto activo ha sido identificado, aprehendido, juzgado o sentenciado, así como de la relación familiar, de dependencia, laboral o económica que pudiera existir entre éste y la víctima.

Artículo 6.-LaFederación será competente para investigar, perseguir y sancionar los delitos establecidos en esta Ley cuando:

I. Se apliquen las reglas de competencia previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

II. El delito se inicie, prepare o cometa en el extranjero, siempre y cuando produzca o se pretenda que produzca efecto en el territorio nacional, o cuando se inicie, prepare o cometa en el territorio nacional, siempre y cuando produzca o se pretenda que tengan efectos en el extranjero, en términos de los artículos 2o, 3o, 4o, 5o y 6o del Código Penal Federal;

III. Existan indicios de que en el hecho constitutivo de delito hubiere participado algún servidor público de los órdenes estatal o municipal.

IV. Se actualice cualquiera de las hipótesis previstas en el artículo 20 del Código Nacional de Procedimientos Penales;

V. El Ministerio Público de la Federación solicite a la autoridad competente de una entidad federativa la atracción del asunto, atendiendo a las características propias del hecho, así como las

circunstancias de ejecución o a la relevancia social del mismo.

VI. Que sean cometidos por la delincuencia organizada, en los términos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Para tal efecto la autoridad local deberá coadyuvar en todo momento con la autoridad federal en la integración de la investigación por delincuencia organizada.

El Distrito Federal y los Estados serán competentes para investigar, procesar y sancionar los delitos establecidos en esta ley cuando no se den los supuestos previstos anteriormente.

La ejecución de las penas por los delitos previstos en esta Ley se regirá conforme a los ordenamientos aplicables en la Federación, el Distrito Federal y los Estados, en lo que no se oponga a la presente Ley.

Artículo 7.- La Federación, los estados, los municipios y el Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, estarán obligados a coordinarse, en el ámbito de sus competencias, y en función de las facultades exclusivas y concurrentes previstas en esta Ley, con el objeto de generar prevención general, especial y social, en los términos y reglas establecidas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la presente Ley.

TÍTULO SEGUNDO

De los Delitos en Materia de Desaparición de Personas

Capítulo Primero

De los Delitos en Materia de Desaparición de Personas

Artículo 8.- Los delitos descritos en la presente Ley, serán calificados como graves y no son susceptibles de indulto, amnistía o figuras análogas, ni se le considerará de carácter político para los efectos de extradición.

Artículo 9.- Las conductas delictivas descritas en la presente Ley se perseguirán de oficio, y se considerarán permanentes hasta en tanto no se establezca el paradero o destino de la víctima, por tanto, los delitos previstos en esta Ley serán imprescriptibles.

Artículo 10.- Las instituciones públicas de protección de los Derechos Humanos federal y de las entidades federativas, así como las instancias implementadas conforme a la Ley General de Víctimas, en los términos de sus respectivas Leyes y Reglamentos, estarán facultadas para que oficiosamente o mediante petición de parte ofendida denuncien y coadyuven ante el Ministerio Público en la investigación y persecución del delito de desaparición de personas.

Artículo 11.- Las autoridades encargadas de la investigación y persecución de los delitos descritos en la presente Ley tienen la obligación oficiosa de iniciar de manera eficaz y urgente las acciones para lograr la localización y el rescate de la víctima que haya sido reportada como desaparecida. Toda víctima de desaparición tiene derecho a que las autoridades desplieguen las acciones pertinentes para su protección con el objetivo de preservar, al máximo posible, su vida y su integridad física y psicológica.

Esta obligación incluye la instrumentación de protocolos de búsqueda conforme a la legislación aplicable y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, así como la realización de las

exhumaciones de cementerios, fosas clandestinas o de otros sitios en los que se encuentren o se tengan razones fundadas para creer que se encuentran cuerpos u osamentas de las víctimas. Las exhumaciones deberán realizarse con la debida diligencia y competencia y conforme a las normas y protocolos internacionales sobre la materia, buscando garantizar siempre la correcta ubicación, recuperación y posterior identificación de los cuerpos u osamentas bajo estándares científicos reconocidos internacionalmente.

Los familiares de las víctimas tienen el derecho a estar presentes en las exhumaciones, por sí o a través de sus asesores jurídicos o representantes; a ser informadas sobre los protocolos y procedimientos que serán aplicados y a designar peritos independientes, acreditados ante organismo nacional o internacional de protección a los derechos humanos o expertos en el mismo campo, que contribuyan al mejor desarrollo de las mismas.

Con independencia de los derechos previstos en esta Ley, el reconocimiento de la personalidad jurídica de las víctimas de desaparición de personas y el procedimiento para conocer y resolver de las acciones judiciales de declaración especial de ausencia por desaparición se sujetarán a lo que dispongan las leyes aplicables, a fin de que las víctimas indirectas ejerzan de manera expedita los derechos patrimoniales y familiares del ausente para salvaguardar los intereses esenciales del núcleo familiar.

Incurrirán en responsabilidad administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad de otra naturaleza a que hubiera lugar, los servidores públicos que:

I. Impidan u obstaculicen el acceso de las víctimas y sus representantes a la información, no sujeta a reserva legal, sobre sus casos;

II. Manipulen, pierdan o alteren las pruebas o datos de investigación;

III. Proporcionen información falsa sobre los hechos;

IV. Se nieguen a cumplir con sus obligaciones en materia de investigación y persecución del delito, por la causa que sea; o

V. Se nieguen a cumplir con las reparaciones a las que sus instituciones estén obligadas, incluyendo el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades.

Artículo 12.- Se impondrá de tres a nueve años de prisión y de doscientos a setecientos cincuenta días de multa, a la persona que en relación con las conductas sancionadas en la presente Ley:

I.- Obstruya la actuación de las autoridades.

II.- A los servidores públicos que teniendo la obligación de investigar las conductas tipificadas en la presente Ley, omitan efectuar dicha investigación.

III.- Intimide a la víctima, a sus familiares o a sus representantes durante o después de la desaparición, para que no realicen la denuncia correspondiente o no colaboren con las autoridades competentes.

IV.- Conociendo los planes para la comisión del delito de desaparición, sin ser partícipe, no diere aviso a la autoridad.

Artículo 13.- A quien mantenga oculto o no entregue a su familia niños o niñas que nazcan durante el período de desaparición forzada de la madre, se le impondrá una pena de quince a veinticinco años de prisión y ciento doscientos a quinientos cincuenta días de multa.

A quien conociendo el paradero o destino final de niños o niñas que nazcan durante el período de la desaparición de la madre, no proporcione información para su localización se le aplicará una pena de cinco a diez años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días de multa.

Artículo 14.- Se impondrá de tres a cinco años de prisión y multa de doscientos a quinientos días de salarios mínimos vigentes, a las autoridades o particulares que teniendo a su cargo edificios, locales, recintos o instalaciones de carácter oficial o cualquier otro inmueble de su propiedad permitan por acción u omisión a sabiendas el ocultamiento de la víctima y el despliegue de las conductas descritas de en la presente Ley.

Artículo 15.- Las autoridades o particulares que tengan en propiedad o posesión o tengan a su cargo inmuebles o instalaciones en donde se presuma la ejecución de cualquiera de los delitos descritos en la presente Ley, deberán de permitir el acceso inmediato y libre a las autoridades competentes.

Capítulo Segundo

Del Delito de Desaparición Forzada

Artículo 16.- Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que actúe con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de servidores públicos, que prive de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona.

Artículo 17.- A quien cometa el delito de desaparición forzada de persona se le impondrá una pena de cuarenta a setenta años de prisión y de seis mil a nueve mil días de multa, y quedará impedido para desempeñar cualquier cargo, comisión o empleo públicos.

Artículo 18.- Cuando en la comisión de las conductas descritas en el presente capítulo concurran las siguientes circunstancias, las penas previstas en estecapítulo se aumentarán hasta en una mitad, sin perjuicio del concurso de delitos:

I. Que el Servidor Público en su carácter de superior jerárquico sabiendo de la participación de sus subordinados en la comisión del delito, no ejerciere su autoridad para evitarlo;

II. Que por la comisión de las conductas descritas en el presente capítulo, sobrevenga la muerte de la víctima.

III. Que la víctima sea menor de edad, o que por cualquier otra circunstancia no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo

IV. Que la víctima haya sido sometida a tortura, tratos crueles e inhumanos o lesiones.

V. Que la víctima sea violentada sexualmente.

VI. Que la víctima sea una persona con discapacidad, migrante, menor de dieciocho años, mayor de sesenta años, indígena, mujer embarazada o cualquier persona en situación de vulnerabilidad;

VII. Que las conductas descritas en el presente capítulo, sea ejecutada por más de una persona;

VIII. Que la conducta sea ejecutada con el propósito de ocultar o asegurar la impunidad de otro delito; o

IX. Como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

Las sanciones señaladas en el presente artículo se impondrán, sin perjuicio o con independencia de las que correspondan por otros delitos que de las conductas a las que se aplican resulten.

Artículo 19.-Al Servidor Público que haya sido condenado por el delito de desaparición de personas, además de las penas previstas en esta Ley, se le destituirá del cargo y se le inhabilitará permanentemente para desempeñar cualquier cargo, comisión o empleo públicos.

Artículo 20.- No serán excluyentes o atenuantes de responsabilidad para quien cometa los delitos descritos en la presente Ley, la obediencia por razones de jerarquía, así como las órdenes o instrucciones recibidas por superiores.

Artículo 21.- Las sanciones previstas en el presente capítulo se disminuirán en una tercera parte, cuando:

I.- La víctima de desaparición de personas fuere liberada espontáneamente durante los quince días siguientes a su privación de libertad;

II.- Los autores o partícipes proporcionen información que conduzca a la liberación de la víctima o a dar con el paradero de los restos corpóreos de la misma; y

III.- Los autores materiales del delito de desaparición de personas, que proporcionen información relativa a la responsabilidad y paradero de los autores intelectuales.

Capítulo Tercero

Del Delito de Desaparición de Personas Perpetrada por Particulares.

Artículo 22.- Comete el delito de desaparición de persona perpetrada por particulares quienprive de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona y actúe sin la autorización, la ayuda, el consentimiento o tolerancia de servidores públicos.

Artículo 23.-Al que cometa el delito de desaparición de personas por particulares, se le impondrá una pena de veinticinco a cincuenta y cinco años de prisión y de tres mil a siete mil días de multa.

Estas penas podrán ser disminuidas hasta una tercera parte en beneficio de aquel que hubiere participado en la comisión del delito, cuando suministre información que permita esclarecer los hechos, y hasta en una mitad, cuando contribuya a lograr la aparición con vida de la víctima.

Artículo 24.- Se aplicará una pena de veintisiete a cincuenta y siete años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa, si en la desaparición de personas por particulares concurre alguna o algunas de las circunstancias siguientes:

a) Que quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas;

b) Que la víctima sea menor de edad, o que por cualquier otra circunstancia no tenga capacidad para

comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo;

c) Que la víctima sea una mujer en estado de gravidez;

d) Que la víctima sea obligada a prestar servicios ilícitos dentro de una organización criminal.

Artículo 25.- Se aplicará una pena de veintisiete a cincuenta y siete años de prisión y de cinco mil a ocho mil días multa, si en la comisión del ilícito de desaparición de persona perpetrada por particulares concurre cualquiera de las circunstancias siguientes:

a) Que el o los autores tengan vínculos de parentesco, amistad, gratitud, confianza o relación laboral con la víctima o persona relacionada con ésta;

b) Que durante la desaparición de la persona se cause a la víctima alguna lesión de las previstas en los artículos 291 a 293 del Código Penal Federal;

c) Que en contra de la víctima se hayan ejercido actos de tortura o violencia sexual;

d) Que durante o después de su desaparición, la víctima muera debido a cualquier alteración de su salud que sea consecuencia de la desaparición, o por enfermedad previa que no hubiere sido atendida en forma adecuada por los autores o partícipes del delito.

Las sanciones señaladas en el presente artículo se impondrán, sin perjuicio o con independencia de las que correspondan por otros delitos que de las conductas a las que se aplican resulten.

Artículo 26.- Si la víctima del delito de desaparición de personas perpetrada por particulares, es privada de la vida por los autores o partícipes de los mismos, se impondrá a éstos una pena de cuarenta a setenta años de prisión y nueve mil días multa.

Si espontáneamente se entrega a la víctima del delito de desaparición de personas perpetrada por particulares dentro de los tres días siguientes de que fuera perpetrada, sin que se haya presentado alguna de las circunstancias agravantes del delito, la pena será de dos a seis años de prisión y de cincuenta a ciento cincuenta días de multa.

La misma pena se aplicará a aquél que habiendo participado en la planeación de alguna de las conductas a que hace referencia el presente Capítulo, dé noticia de ese hecho a la autoridad y la víctima sea rescatada con vida.

La pena señalada en el párrafo segundo de este artículo se aplicará a aquél que habiendo participado en la comisión de alguna de las conductas a que hace referencia el presente Capítulo, dé noticia de ese hecho a la autoridad para evitar que se cometa el delito y proporcione datos fehacientes o suficientes elementos de convicción contra los demás participantes del hecho o, ya cometido, antes de que aparezca la víctima, proporcione, los datos o elementos referidos, además dé información eficaz para liberar o localizar a la víctima.

No obstante lo anterior, si a la víctima se le hubiere causado alguna lesión de las previstas en los artículos 291 a 293 del Código Penal Federal, la pena será de nueve a dieciséis años de prisión y de trescientos a quinientos días multa, así como la colocación de los dispositivos de localización y vigilancia por la autoridad policial hasta por los cinco años posteriores a su liberación.

En caso de que espontáneamente se entregue a la víctima dentro de los primeros diez días, sin que se haya presentado alguna de las circunstancias agravantes del delito, la pena de prisión aplicable será de ocho a quince años y de doscientos cincuenta hasta quinientos días multa.

Artículo 27.-Los bienes que sean instrumento, objeto o producto de los delitos previstos en esta Ley, y que sean decomisados como resultado del ejercicio de la extinción de dominio, formarán parte de los Fondos de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral federales, o de los estados y el Distrito Federal, según corresponda por la jurisdicción del caso, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Víctimas.

Al imponer las consecuencias jurídicas accesorias previstas en este artículo, el Juez, oficiosamente, tomará las medidas pertinentes para dejar a salvo los derechos de los trabajadores y terceros, así como aquellos otros derechos que sean exigibles frente a otras personas, derivados de actos celebrados con la persona sancionada. Toda omisión de la autoridad judicial será sancionada en los términos de las leyes aplicables.

Capítulo Cuarto

De los principios para la investigación, procesamiento e imposición de las sanciones.

Artículo 28.- Para dar cumplimiento a esta Ley, en materia de investigación, procesamiento y sanción, se deberá observar y atender lo siguiente:

I. La Procuraduría General de la República, coordinara la elaboración de una base de datos nacional con los registros del material genético (ADN) de los restos corpóreos que se levanten por los Servicios Médico Forense de los Estados y el Distrito Federal, mismos que deberán de ser cruzados con los registros de material genético (ADN) de los familiares consanguíneos de las personas denunciadas como desaparecidas, con el objeto de identificar los restos corpóreos.

Para alimentar la base de datos a la que se refiere el párrafo anterior, las Procuradurías Generales de Justicia de los Estado y el Distrito Federal, remitirán de forma diaria a la Procuraduría General de la República los datos y actualizaciones de los registros de material genético (ADN) de los restos corpóreos levantados por el Servicio Médico Forense de la Entidad Federativa de la que se trate; así como de los familiares que han denunciado la desaparición de personas en éstas.

II. El Ministerio Público y los Poderes Judiciales de la Federación, de los estados y del Distrito Federal, garantizarán en todo momento los derechos de las víctimas, con el fin de brindar asistencia, protección, seguridad y acceso a la justicia.

III. En todos los casos, la sentencia condenatoria que se dicte por los delitos previstos en esta Ley, deberán contemplar la reparación del daño a las víctimas, cuyo monto fijará el Juez de la causa, con los elementos que el Ministerio Público o la víctima aporten, o aquellos que se consideren procedentes, en términos de Ley.

IV. Las policías, el Ministerio Público y las autoridades jurisdiccionales adoptarán medidas adecuadas para asegurar la eficacia de la investigación y el enjuiciamiento de los delitos previstos en esta Ley. A esos efectos, respetarán los intereses y las circunstancias personales de víctimas y testigos, entre otros la edad, el género y la salud, y tendrán en cuenta la naturaleza de los delitos, en particular los de violencia sexual, violencia por razones de género, violencia contra los niños, niñas y adolescentes, u otras motivadas por cualquier forma de discriminación.

Artículo 29.- Las policías, Ministerio Público y autoridades jurisdiccionales harán una consideración especial en el desarrollo de sus actividades, cuando la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad por haber sufrido algún daño físico o emocional que requieran tomar medidas especiales.

Artículo 30.- Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento por cualquier medio de la comisión de alguno de los delitos en materia de desaparición de personas asumirá la función de la dirección de

investigación a que se refiere el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 31.- El Ministerio Público convocará a una reunión de planeación de la investigación a la que asistirán todas las áreas requeridas, en la que se deberá fijar por lo menos:

I. El Ministerio Público responsable del caso;

II. Los policías de investigación asignados;

III. Integrar a funcionarios encargados de las investigaciones patrimoniales y financieras;

IV. El mando policial responsable;

V. El análisis y estrategia básica de la investigación;

VI. El control de riesgo y manejo de crisis;

VII. El control de manejo de información;

VIII. Lugar en el que deberá ser alojada la víctima, en caso de ser necesario;

IX. La relación con el personal encargado de la atención y apoyo a la víctima u ofendidos, y

X. Periodicidad de las reuniones del grupo en las fases críticas y en la continuación de la investigación.

Artículo 32.- Las policías y el Ministerio Público en el respectivo ámbito de sus competencias deberán tener como metas de la investigación, por lo menos las siguientes:

I. Extracción segura de la víctima del lugar de los hechos o de donde se encuentra;

II. Identificación del modus operandi de los involucrados;

III. Obtención de elementos probatorios antes, durante y posterior a la extracción segura de la víctima;

IV. Aseguramiento de elementos probatorios conforme a los lineamientos de cadena de custodia;

V. Detención de las personas que cometieron o participaron en la comisión;

VI. Identificación y aseguramiento de los recursos económicos obtenidos por el responsable del delito;

VII. Identificación de bienes relacionados con los hechos o propiedad de los responsables del delito que pueda ser objeto de extinción de dominio;

VIII. En caso de que el delito sea cometido por más de dos personas, identificar, determinar las actividades que realiza y detener a cada integrante del grupo criminal, y

IX. Obtener sentencias definitivas contra los responsables del delito.

Artículo 33.- Las policías que actuarán bajo la dirección y conducción del Ministerio Público, además de las facultades que les confieren otros ordenamientos, durante la fase de investigación podrán:

I. Recabar información en lugares públicos, mediante la utilización de medios e instrumentos y cualquier herramienta que resulten necesarias para la generación de inteligencia. En el ejercicio de esta atribución se deberá respetar los derechos particulares de los ciudadanos;

II. Recabar información de bases de datos públicos, con el objeto de identificar a las víctimas, testigos, lugares de los hechos, forma de operar, sujetos involucrados o bienes de estos;

III. Realizar análisis técnico táctico o estratégico de la información obtenida para la generación de inteligencia;

IV. Verificar la información que reciba sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito o delitos para, en su caso, informarlo al Ministerio Público;

V. Efectuar el procesamiento del lugar de los hechos, para lo cual deberán fijar, señalar, levantar, embalar y entregar la evidencia física al Ministerio Público, conforme al procedimiento previamente establecido por éste y en términos de las disposiciones aplicables, en caso de contar con personal calificado para tal fin.

Artículo 34.- El Ministerio Público, además de las facultades que les confieren otros ordenamientos, durante la fase de investigación podrá:

I. Solicitar la intervención de comunicaciones, en términos de la legislación federal o local aplicable;

II. Solicitar información a las empresas telefónicas y de comunicación, en términos de la legislación federal o local aplicable;

III. Autorizar el seguimiento de personas hasta por un período de un mes, el cual podrá ser prorrogado siempre que existan motivos suficientes, sin que la misma tenga una duración mayor a seis meses, en términos de la normatividad aplicable;

IV. Solicitar información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre la actividad financiera de las personas sujetas a investigación, en términos de la legislación federal o local aplicable;

V. Autorizar la colaboración de informantes, en los términos de los lineamientos mínimos que emita el Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como demás disposiciones;

VI. Autorizar la utilización de cualquier medio, instrumentos o herramienta para la obtención de pruebas, siempre que ésta no contravenga los derechos humanos no violente el orden jurídico, y

VII. Toda aquella que determinen las leyes aplicables.

En los casos en que las autoridades locales carezcan de normatividad para el ejercicio de cualquiera de las atribuciones anteriores, la Procuraduría coadyuvará en la investigación.

Artículo 35.- Por informante se entenderá toda persona que de forma directa o indirecta tiene

conocimiento de la comisión de delitos, y por su situación o actividad que realiza, provee dicha información a las instancias de gobierno para la investigación

Artículo 36.- El juzgador que conozca de algún caso del delito de desaparición de personas, pondrá especial énfasis en la reparación integral del daño, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

I.- Que la simple substracción del desaparecido de su núcleo social y la manutención en ocultamiento, en sí mismos constituyen una afectación psicológica y social;

II.- Que la desaparición forzada es ejecutada directamente por autoridades que forman parte de la estructura del Estado, o en su defecto por personas que actúan con el apoyo o aquiescencia de funcionarios públicos;

III.- Que la desaparición forzada de personas y entre particulares, es un tratamiento cruel e inhumano que corre en perjuicio de los familiares del o de los desaparecidos;

IV.- Que la reparación del daño respecto de esta grave violación de los derechos humanos, no debe ser limitada a una cuantificación material, sino que debe ser integral en los términos de la Ley General de Víctimas, y por tanto incluir medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición;

V.- Que la reparación del daño respecto de esta grave violación a los derechos humanos debe incluir el análisis de los efectos en el ámbito:

A) Personal del desaparecido;

B) Familiar del desaparecido;

C) Comunitario del desaparecido y;

D) Organizativo, si el desaparecido pertenecía a una organización ya sea cultural, social o política o de cualquier índole.

VI.- Que la reparación del daño respecto de esta grave violación a los derechos humanos, también debe tomar en cuenta la obstaculización del proyecto de vida de las víctimas de la desaparición forzada y entre particulares;

VII.- El Juzgador además de los elementos señalados anteriormente, deberá tomar en cuenta para la reparación del daño la modalidad del delito de desaparición forzada y entre particulares que se encuentra acreditada, con sus respectivas agravantes, como se enuncian en la presente Ley; y

VIII. Fijar en sus resoluciones medidas de reparación integral a favor de las víctimas, en los términos de la Ley General de Víctimas.

Artículo 37.- En todo lo no previsto en materia de investigación, procedimientos y sanciones de los delitos materia de esta Ley, las autoridades federales, estatales y del Distrito Federal, aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Penal Federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de Ley General de Víctimas, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada,

del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Federal de Extinción de Dominio y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

TÍTULO TERCERO

De las Víctimas, Ofendidos y Testigos de los Delitos en Materia de Desaparición de Personas

Capítulo Único

Derechos de las Víctimas y Testigos Durante el Procedimiento Penal y Medidas de Protección a su Favor

Artículo 38. - Para los efectos de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral, además de los derechos sustantivos y procesales de las víctimas y el derecho a las medidas de atención, ayuda de emergencia, protección y reparación integral del daño, se estará a lo dispuesto en la Ley General de Víctimas. Todas las autoridades de la Federación y las Entidades Federativas están obligadas a garantizar todos los derechos y medidas en beneficio de las víctimas contempladas en esta Ley y en la Ley General de Víctimas, sin condicionamiento alguno y bajo los principios de actuación que ellas establecen.

Artículo 39. Bastará la denuncia de hechos constitutivos de los delitos descritos en esta Ley ante las autoridades públicas de procuración o impartición de justicia, o a las de protección de los derechos humanos o protección de los derechos de las víctimas, para que toda persona que acredite su condición de víctima de los hechos denunciados tenga acceso a medidas de ayuda inmediata de emergencia, incluyendo la atención médica y psicológica de urgencia y medidas de protección a la seguridad de su persona. Ninguna persona que alegue ser víctima de los delitos descritos en esta Ley deberá ser discriminada por ningún motivo, ni deberá ser criminalizada o responsabilizada por su situación de víctima. Una vez que se hubieran demostrado los hechos, con independencia de si el sujeto activo ha sido identificado, aprehendido, juzgado o sentenciado, toda víctima tendrá pleno derecho a recibir reparaciones integrales, en los términos de la Ley General de Víctimas y demás disposiciones aplicables.

Artículo 40. Las autoridades que deban aplicar esta Ley ofrecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantías especiales y medidas de protección a los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas y niños, mujeres, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, migrantes, miembros de pueblos indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas, personas en situación de desplazamiento interno y cualquier otro grupo de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad y otros.

Este principio incluye la adopción de medidas que respondan a la atención de dichas particularidades y grado de vulnerabilidad, reconociendo igualmente que ciertos daños sufridos requieren, por su gravedad, de un tratamiento especializado para dar respuesta a su rehabilitación y reintegración a la sociedad.

Artículo 41. La garantía de las medidas de reparación incluye la compensación en los términos fijados por la Ley General de Víctimas, a cargo del responsable de los hechos, o bien, en los casos y en los términos previstos por dicho ordenamiento legal, a cargo del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, pero no se agota en los aspectos económicos o materiales sino que debe impactar de un modo favorable a la plena reinserción de la víctima en la sociedad y a transformar las condiciones que pudieron ser causa de los hechos.

El Estado adoptará las medidas necesarias para contar con los mecanismos y recursos económicos necesarios para garantizar estos derechos en los términos de la legislación en la materia y adoptará todo

tipo de medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y no repetición contempladas en la Ley General de Víctimas a fin de reparar el daño de un modo integral, que permita a la víctima realizar su proyecto de vida del mejor modo posible, así como erradicar las causas de la afectación bajo un enfoque transformador.

TÍTULO CUARTO

Del procedimiento de declaración de ausencia por desaparición

Capítulo Único

Del procedimiento de declaración de ausencia por desaparición

Artículo 42.- Se crea el procedimiento de declaración especial de ausencia por desaparición, que se sujetará a lo dispuesto en la presente Ley, con el propósito de dar pleno reconocimiento a la personalidad jurídica de las víctimas de los delitos previstos en esta Ley, independientemente de que se conozca la identidad del responsable, o del estado procesal del caso.

Este procedimiento podrá intentarse en cualquier momento a partir de ocurridos los hechos, sin que se requiera que medie ningún plazo de tiempo entre la última noticia que el solicitante hubiera tenido de la persona desaparecida.

Artículo 43.-La declaración de ausencia por desaparición deberá incluir por lo menos la siguiente información:

I. El nombre, edad y domicilio del solicitante y su relación con la persona desaparecida;

II. El Estado civil de la persona desaparecida;

III. La relación de los bienes de la persona desaparecida que estén relacionados con la solicitud;

IV. El nombre y la edad de los hijos de la persona desaparecida, si procede;

V. El nombre del cónyuge, concubina, concubino o pareja sentimental estable de la persona desaparecida.

Artículo 44.- Están facultados para solicitar la declaración de ausencia por desaparición:

I. El cónyuge, el concubino o concubina de la persona desaparecida o la persona que tenga una relación afectiva inmediata y cotidiana con la víctima;

II. Los parientes consanguíneos hasta el tercer grado de la persona desaparecida;

III. Los parientes por afinidad hasta el segundo grado de la persona desaparecida;

IV. El adoptante o adoptado con parentesco civil con la persona desaparecida;

V. La pareja del mismo sexo que hubiere convivido con la víctima durante el último año contado desde la fecha en que la víctima fue vista por última vez;

VI. Los representantes legales de las familias de personas desaparecidas, incluyendo los Asesores Jurídicos Victimales;

VII. Las Organizaciones de la Sociedad Civil; y

VIII. El Ministerio Público.

Artículo 45.- Será competente para conocer del procedimiento de declaración especial de ausencia por desaparición el juez de lo civil del domicilio del solicitante o del último domicilio convencional de la persona desaparecida.

Una vez recibida la solicitud de declaración de ausencia por desaparición, el juez requerirá a la autoridad competente, ante el cual se formuló la denuncia de la desaparición, o en su defecto, información sobre la veracidad formal del acto.

Artículo 46.-Si el juez encuentra elementada la solicitud de ausencia, dispondrá que se publique en tres ocasiones, con intervalos de quince días, y sin costo alguno, en el Periódico Oficial que corresponda, y en los principales del último domicilio del ausente. Se dispondrá, asimismo, de una página en la red mundial de Internet, dentro de la página de la Procuraduría General de Justicia de la Entidad Federativa de que se trate, así como dentro de la página electrónica de la Procuraduría General de la República, en las que se harán públicas dichas comunicaciones.

Artículo 47.- Una vez iniciado el procedimiento especial de declaración de ausencia, el Juez ordenará las medidas provisionales necesarias que considere convenientes, de conformidad con la Ley General de Víctimas.

Artículo 48.- Transcurridos seis meses desde la fecha de la última publicación de edictos, si no hubiere noticias del ausente ni oposición de algún interesado, y siempre y cuando el juez cuente con pruebas suficientes que le permitan presumir de manera fundada que el ausente ha sido víctima de desaparición, declarará en forma la ausencia por cualquiera de dichas causas.

Artículo 49.- La sentencia judicial firme nacional o extranjera, las recomendaciones emitidas por los organismos públicos de Derechos Humanos de las Entidades Federativas y el Distrito Federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o cualquier organismo Estatal de Protección de los Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva prevista en la Ley General de Víctimas y su equivalente de cualquier estado de la República, así como las resoluciones de tribunales federales o estatales, organismos y tribunales internacionales cuya competencia haya sido reconocida por el Estado mexicano, que determinen la desaparición, constituirán prueba plena de la desaparición para los efectos del presente capítulo. En caso contrario, el Juez deberá allegarse de todas las pruebas necesarias que le permitan presumir de manera fundada que la persona ausente ha sido víctima de alguno de los delitos previstos en esta Ley.

Artículo 50.- Si hubiere cualquier noticia del ausente u oposición, el juez no declarará la ausencia sin repetir las publicaciones y hacer la averiguación por los medios que el oponente proponga, y por los que el mismo juez crea oportunos.

Artículo 51.- La declaración de ausencia por desaparición podrá ser impugnada mediante los recursos que la Ley aplicable prevea para el caso.

Artículo 52.-La Declaración de Ausencia por Desaparición Forzada de Personas tendrá los siguientes efectos:

I. Garantizar y asegurar la continuidad de la personalidad jurídica de la persona desaparecida;

II. Garantizar la conservación de la patria potestad de la persona desaparecida en relación con los hijos menores bajo el principio superior de la niñez;

III. Garantizar la protección del patrimonio civil y mercantil de la persona desaparecida, incluyendo los bienes adquiridos a crédito y cuyos plazos de amortización se encuentren vigentes;

IV. Garantizar la protección de los derechos de la familia y de los hijos menores a percibir los salarios, así como demás derechos humanos de las personas desaparecidas y sus familias de naturaleza civil, política, social, económica o cultural;

V. El Juez competente fijará como fecha de la Ausencia por Desaparición de Forzada de Personas, el día del hecho consignado en la denuncia o queja, salvo prueba fehaciente en contrario.

VI. Declarar la inexigibilidad temporal de deberes o responsabilidades que la persona desaparecida tenía a su cargo, cuando se ejerciten acciones jurídicas que afecten los intereses o derechos de la persona desparecida.

VII. Toda medida apropiada que resulte necesaria y útil para salvaguardar los derechos de la persona desaparecida y su círculo familiar o personal afectivo.

Artículo 53.- Declarada la ausencia por desaparición, se abrirá la sucesión del ausente y los herederos y demás interesados entrarán en la posesión provisional de los bienes. De igual forma, el Juez ordenará la inscripción de la persona ausente en el Registro contemplado en la Ley General de Víctimas y su homóloga en las Entidad Federativa de que se trate.

Artículo 54.- Si el ausente se presentare o se probare su existencia después de otorgada la posesión provisional, recobrará sus bienes en el estado en que se hallen, el precio de los enajenados, o los que se hubieren adquirido con el mismo precio, pero no podrá reclamar frutos ni rentas.

Artículo 55.- Cuando hecha la declaración de ausencia por desaparición de una persona, se hubieren aplicado sus bienes a los que por testamento o sin él se tuvieren por heredados, y después se presentaren otros pretendiendo que ellos deben ser preferidos en la herencia, y así se declara por sentencia que cause ejecutoria, la entrega de los bienes se hará a éstos en los mismos términos que disponga la Ley aplicable al caso.

Artículo 56.- Los poseedores provisionales darán cuenta al ausente y a sus herederos. El plazo legal correrá desde el día en que el primero se presente por sí o por apoderado legítimo, o desde aquel en que por sentencia que cause ejecutoria se haya deferido la herencia.

Artículo 57.- La posesión provisional termina:

I. Con el regreso del ausente;

II. Con la noticia cierta de su existencia;

III. Con la certidumbre de su muerte;

IV. Con la sentencia que cause ejecutoria.

Artículo 58.- Terminada la posesión provisional, por cualquiera de los supuestos previstos en las fracciones

II y IV del artículo anterior, se procederá a declarar la posesión definitiva conforme a la legislación civil de la entidad federativa que corresponda.

Artículo 59.- La sentencia que declare la ausencia por desaparición de un ausente casado, pone término a la sociedad conyugal. Para con respecto a los hijos nacidos con posterioridad a los hechos motivo de la declaración de ausencia por desaparición, el Registro Civil reconocerá su filiación para con la persona declarada desaparecida con todos los efectos legales a que haya lugar, cuando éstos hubieran nacido en un plazo máximo de nueve meses posteriores a los hechos.

Artículo 60.- En el caso de que el cónyuge del ausente no fuere heredero, ni tuviere bienes propios, sólo tendrá derecho a los alimentos.

Artículo 61.- Para fines del cumplimiento de obligaciones de carácter mercantil, crediticio, fiscal o parafiscal la declaración de ausencia por desaparición tendrá efectos suspensivos. Los Poderes Ejecutivos de las Entidades Federativas y el Distrito Federalpromoverán convenios de coordinación con instituciones públicas o privadas de carácter federal para proteger los bienes jurídicos de las víctimas de los delitos previstos en esta Ley que se encuentren bajo efectos de la acción de declaración de ausencia contemplada en este capítulo.

TÍTULO QUINTO
De la Comisión Intersecretarial y El Programa Nacional

Capítulo Primero
De la Comisión intersecretarial

Artículo 62. El Gobierno Federal, conforme al Artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establecerá una Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas, que tendrá por objeto:

I. Definir y coordinar la implementación de una Política de Estado en materia de D de Personas y demás objeto previstos en esta Ley;

II. Impulsar y coordinar en toda la República la vinculación interinstitucional para prevenir y sancionar los delitos objeto de esta Ley;

III. Inspección y vigilancia de los programas, acciones y tareas;

IV. Evaluación, rendición de cuentas y transparencia sin perjuicio de las atribuciones que en dichas materias correspondan a otras instancias.

Artículo 63. La Comisión estará integrada por los titulares de las siguientes dependencias:

I. Secretaría de Gobernación;

II. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

III. Procuraduría General de la República;

IV. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia;

V. Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito;

VI. Instituto Nacional de las Mujeres;

VII. Instituto Nacional de Migración, y

VIII. Instituto Nacional de Ciencias Penales.

Por cada miembro propietario habrá un suplente designado por el titular, quien en su caso deberá tener nivel inmediato inferior o equivalente.

En las reuniones el suplente contará con las mismas facultades que los propietarios.

Artículo 64. Podrán participar en las reuniones de la Comisión Intersecretarial, con derecho a voz pero sin voto:

I. Un representante de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, designado por los respectivos Plenos camarales;

II. Un representante del Poder Judicial de la Federación, designado por el Consejo de la Judicatura Federal;

III. Tres Gobernadores, designados por la Conferencia Nacional de Gobernadores;

IV. Un representante de cada una de las organizaciones de municipios, designados por el Pleno de las propias organizaciones;

V. Un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;

VI. Un representante del Consejo Nacional de Población;

VII. Tres representantes de la Organización de Organismos Oficiales de Defensa de los Derechos Humanos;

VIII. Tres representantes de la Conferencia Nacional de Procuradores Generales de Justicia;

IX. Un representante del Consejo Nacional de Seguridad Pública;

X. Tres representantes de organizaciones de la sociedad civil;

XI. Tres expertos académicos con conocimiento y trabajo relevante sobre el tema de desaparición de personas.

Artículo 65. La Comisión será presidida por el Secretario de Gobernación.

La Secretaría Técnica será ocupada por la persona Titular de la Unidad de Promoción y Defensa de los

Derechos Humanos de dicha Secretaría.

Artículo 66. La Comisión tendrá las siguientes facultades y competencias:

I. Proponer su Reglamento Interno;

II. Elaborar el proyecto de Programa Nacional, que contendrá la política del Estado Mexicano en relación a estos delitos.

Este Programa deberá incluir las estrategias y políticas del Estado Mexicano de prevención, protección y asistencia, y persecución.

Deberá contener, también, políticas generales y focalizadas en materia de prevención, investigación, persecución y sanción, así como de protección, asistencia y resocialización de víctimas, ofendidos y testigos;

III. Establecer las bases para la coordinación nacional entre los tres poderes y órdenes de gobierno, organismos oficiales de defensa de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, organismos e instancias internacionales e instituciones académicas, en el diseño y la aplicación del Programa Nacional;

IV. Adoptar políticas y programas que incluyan la cooperación de organizaciones civiles, a fin de:

a) Elaborar el Programa Nacional;

b) Establecer lineamientos de coordinación para la aplicación del Programa;

c) Coordinar la recopilación y el intercambio de datos de los delitos previstos en esta Ley, respetando la confidencialidad de las víctimas.

V. Desarrollar campañas de prevención y educación, así como programas de desarrollo local que permitan prevenir los delitos en materia de desaparición de personas;

VI. Impulsar, promover y suscribir convenios de colaboración interinstitucional y suscribir acuerdos de coordinación:

a) Con los gobiernos de las entidades federativas y el Distrito Federal, en materia de diseño y operación de programas de asistencia inmediata a las víctimas de los delitos previstos en esta Ley en materia de seguridad, tránsito o destino, con el propósito de atenderlas o asistirlas en su regreso a su lugar de origen, así como para la detección de víctimas y posibles víctimas.

b) Interinstitucionales entre dependencias del gobierno federal, en materia de seguridad, para prevenir los delitos objeto de esta Ley en todo el territorio nacional y perseguir y sancionar a quienes intervengan en su comisión.

VII. Los convenios de colaboración interinstitucional y acuerdos deberán ajustarse, en lo conducente, a las bases previas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en la Ley General de Migración.

Estos convenios y acuerdos podrán suscribirse con organizaciones de la sociedad civil y la academia, con los siguientes fines:

a) Informar y capacitar con perspectiva de género, de derechos humanos y conforme al interés superior de la niñez, sobre los conceptos fundamentales y las implicaciones de los delitos previstos en esta Ley y de los instrumentos internacionales relacionados con la materia al personal de la administración pública federal relacionado con este fenómeno delictivo;

b) Promover la investigación científica y el intercambio de experiencias entre organismos e instituciones a nivel nacional e internacional.

c) Informar a la población acerca de los riesgos e implicaciones de los delitos previstos en esta Ley, los mecanismos para prevenir su comisión o revictimización, así como de las diversas modalidades de sometimiento para cometerlos;

d) Informar y advertir al personal de empresas de todos los sectores susceptibles de ser medios para la comisión de estos delitos, acerca de la responsabilidad en que pueden incurrir en caso de facilitar o no impedir las conductas inherentes a ellos, así como orientarlos en la prevención.

VIII. Recopilar, con la ayuda del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Conferencia Nacional de Procuradores y demás instituciones y organismos pertinentes, los datos estadísticos relativos a la incidencia delictiva en materia de los delitos previstos en esta Ley, con la finalidad de publicarlos periódicamente.

Dicha información deberá contener de manera desagregada:

a) El número de víctimas, su sexo, estado civil, edad, nacionalidad o lugar de origen, forma de reclutamiento, modalidad de victimización, lugares de destino y, en su caso, calidad migratoria, cuando proceda;

b) Los datos correspondientes a las rutas y los métodos de transportación que utilizan las personas y organizaciones delictivas que cometen los delitos previstos en esta Ley, y

c) Aquélla referente al tránsito fronterizo internacional relacionado con las víctimas de los delitos previstos en esta Ley.

IX. Promover acuerdos con asociaciones, fundaciones y demás organismos no gubernamentales que tengan como objetivo prevenir y combatir los delitos objeto de esta Ley y proteger a las víctimas, con el fin de poner en marcha proyectos estratégicos dirigidos a alcanzar los objetivos de la presente Ley;

X. Establecer programas de asistencia y apoyo para la reunificación familiar y social de las víctimas del delito objeto de esta Ley;

XI. Realizar campañas para promover la denuncia de los delitos objeto de esta Ley y lograr la detección, persecución y desarticulación de las redes delictivas de los delitos previsto en esta Ley;

Artículo 67. Las dependencias integrantes de la Comisión tendrán las siguientes obligaciones:

I. La Secretaría de Gobernación coordinará los trabajos de la Comisión y servirá de enlace con los titulares de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de los tres órdenes de gobierno, en materia de las políticas públicas de necesaria implementación, con el objeto de fortalecer la prevención y sanción de los delitos previstos en esta Ley, así como de la protección y asistencia de las víctimas de este delito, incluyendo apoyar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en materia de protección de testigos y sus familias y demás agentes vinculados a la comisión del delito;

II. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública recabará la información relativa a la incidencia delictiva en materia de los delitos previstos en esta Ley y generará un banco de datos que contendrá, como mínimo, la nacionalidad, edad, estado civil y sexo de los sujetos activo y pasivo, así como el modo de operar de las redes vinculadas a la delincuencia organizada y la forma en que sus miembros fueron detectados, detenidos y remitidos ante el Ministerio Público competente, ya sea del fuero común o federal;

III. La Procuraduría elaborará y ejecutará programas de prevención delos delitosprevistos en esta Ley, con la finalidad de fortalecer la denuncia ciudadana y la solidaridad social; promoverá en la Conferencia Nacional de Procuradores las políticas públicas necesarias para la prevención del delito a escala nacional y propondrá la armonización legislativa de los tipos penales vinculados a esta materia en todo el país; se coordinará con la Secretaría de Seguridad Pública con el objeto de actualizar los datos relativos a la incidencia delictiva en todo el país con la finalidad de dar seguimiento al estado en el que se encuentren los procesos penales de aquellos sujetos detenidos y consignados por la comisión de delitos en materia de desaparición de personas; será responsable de establecer una Fiscalía Especializada para la persecución de estos delitos, cuyos sujetos activos se sospeche pertenecen a la delincuencia organizada nacional o internacional, e implementará mecanismos de investigación de inteligencia, una Unidad de Protección a Víctimas y Testigos de la desaparición de personas y promoverá las medidas de protección procesal a su favor;

IV. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia se encargará de la protección y atención antes, durante y después del proceso, de todas aquellas víctimas del delito menores de 18 años cuidando que sus necesidades especiales sean satisfechas en los albergues para víctimas del ilícito de desaparición de personas;

V. La Procuraduría Social de Atención a las Víctimas del Delito, brindará atención oportuna e integral a las víctimas u ofendidos de delitos, por sí misma o en coordinación con instituciones especializadas, en términos de la normativa aplicable; coadyuvará al eficaz desempeño de las autoridades con competencia en esta materia, y diseñará y ejecutará políticas, programas y esquemas de colaboración y coordinación interinstitucional de atención a víctimas u ofendidos de delitos;

VI. El Instituto Nacional de Migración, en coordinación con las Secretarias de Gobernación, de Relaciones Exteriores y el Consejo Nacional de Población implementará las medidas necesarias para garantizar la estancia de las víctimas del delito de desaparición de personas en territorio nacional por el tiempo necesario y hasta antes de su regreso voluntario a su lugar de origen o de residencia permanente;

VII. El Instituto Nacional de las Mujeres se encargará de la protección y atención antes, durante y después del proceso, de todas aquellas mujeres víctimas del delito, cuidando que sus necesidades especiales sean satisfechas en los albergues para víctimas de los delitos previstos en esta Ley;

VIII. El Instituto Nacional de Ciencias Penales diseñará e implementará programas de capacitación, formación y actualización en materia de prevención y sanción de la desaparición de personas, dirigidos, como mínimo, a los Agentes Federales de Investigación y a los Agentes del Ministerio Público de la Federación.

Artículo 68. La Comisión deberá diseñar y supervisar el funcionamiento de modelos únicos de asistencia y protección para las víctimas, posibles víctimas, ofendidos y testigos de los delitos objeto de esta Ley, mismos que serán desarrollados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, que deberán comprender como mínimo:

I. Orientación jurídica, incluida la migratoria, asistencia social, educativa y laboral a las víctimas de los delitos previstos en esta Ley.

En el caso de que las víctimas pertenezcan a algún pueblo o comunidad indígena o hablen un idioma diferente al español, se les designará un traductor que les asistirá en todo momento.

II. Asistencia social, humanitaria, médica, psicológica, psiquiátrica, aparatos ortopédicos y prótesis a las víctimas de los delitos objeto de esta Ley, hasta su total recuperación;

III. Oportunidades de empleo, educación y capacitación para el trabajo a las víctimas del delito a través de su integración en programas sociales.

En aquellos casos en que el o los sujetos activos de los delitos formen parte de la delincuencia organizada, se deberán diseñar programas especiales que no pongan en riesgo su vida, su seguridad y su integridad, incluyendo el cambio de identidad y su reubicación.

IV. Construcción de albergues, refugios y casas de medio camino especializados para las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos previstos en esta Ley, donde se garantice un alojamiento digno por el tiempo necesario, asistencia material, médica, psiquiátrica, psicológica, social, alimentación y cuidados atendiendo a sus necesidades y a su evolución;

V. Garantizar que la estancia en los refugios, albergues, y casas de medio camino o en cualquier otra instalación diseñada para la asistencia y protección de las víctimas de los delitos previstos en la presente Ley sea de carácter voluntario y cuenten con medios para poder comunicarse, siempre y cuando el o los sujetos activos del delito no se presuman integrantes de la delincuencia organizada y estas medidas pongan en peligro su vida, su integridad y su seguridad y las de las demás víctimas con las que comparta las medidas de protección y asistencia;

VI. Garantizar que bajo ninguna circunstancia se alberge a víctimas nacionales o extranjeras, en centros preventivos, penitenciarios o estaciones migratorias, ni lugares habilitados para ese efecto;

VII. Garantizar protección frente a posibles represalias, intimidaciones, agresiones o venganzas de los responsables del delito o de quienes estén ligados con ellos a:

a) Las víctimas;

b) Los familiares o personas que se encuentren unidas a la víctima por lazos de amistad o de estima;

c) Los testigos y personas que aporten información relativa al delito o que colaboren de alguna otra forma con las autoridades responsables de la investigación, así como a sus familias;

d) A los miembros de la sociedad civil o de organizaciones no gubernamentales que se encuentran brindando apoyo a la víctima, sus familiares o testigos.

VIII. Medidas para garantizar la protección y asistencia, incluyendo, por lo menos, protección física, adjudicación a cargo de la Procuraduría de un nuevo lugar de residencia, cambio de identidad, ayuda en la obtención de empleo, así como aquellas medidas humanitarias que propicien la unificación familiar, también a cargo de la Procuraduría.

A fin de llevar a cabo las medidas de protección antes citadas, podrá hacerse uso de los recursos del Fondo, sujetándose a las disposiciones aplicables.

Artículo 69. La Comisión fomentará acciones tendientes a fortalecer la solidaridad y prevención social del delito conforme a los siguientes criterios:

I. Sensibilizar a la población, sobre los delitos previstos en esta Ley, los riesgos, causas, consecuencias, los fines y medidas de protección, así como los derechos de las víctimas y posibles víctimas;

II. Realizar campañas de información acerca de los métodos utilizados por los responsables de los delitos previstos en esta Ley.

III. Informar sobre las consecuencias y daños que sufren las víctimas de la desaparición de los delitos previstos en esta Ley, tales como daños físicos, psicológicos, entre otros;y

IV. Establecer medidas destinadas a proteger los derechos y la identidad de las víctimas por parte de los medios de comunicación, para que en caso de no respetar sus derechos, incurran en responsabilidad. Se exceptúa cuando la información sea en torno a los sujetos activos y las consecuencias de este delito, de forma comprometida para su prevención y no su promoción y fomento.

Capítulo Segundo
Del Programa Nacional

Artículo 70. La Comisión diseñará el proyecto del Programa Nacional, que definirá la Política del Estado Mexicano frente a los delitos previstos en esta Ley, que deberá contemplar, como mínimo, los siguientes rubros:

I. Diagnóstico de la incidencia, modalidades, causas y consecuencias y su comportamiento delictivo, así como los grupos afectados o en mayor grado de vulnerabilidad;

II. Compromisos adquiridos por el Gobierno de México sobre la materia frente a la comunidad internacional;

III. Estrategias y la forma en que el Estado Mexicano se coordinará y actuará uniformemente, la distribución de competencias y las instituciones gubernamentales responsables de la prevención, protección, asistencia y persecución;

IV. Elaboración de un Inventario de Recursos Existentes;

V. Protocolos de Atención para la Coordinación Interinstitucional;

VI. Ruta Crítica con tiempos, atribuciones y obligaciones;

VII. Políticas Públicas para cumplir con las Estrategias de Prevención, Protección y Asistencia y Persecución;

VIII. Normas Oficiales de Coordinación Interinstitucional;

IX. Formas y necesidades de coordinación e intercambio de información internacional y nacional;

X. Programas de Capacitación y Actualización permanente para los tres poderes y los tres órdenes de gobierno.

Artículo 71. Las autoridades judiciales y ministeriales darán a conocer a la sociedad los resultados de las evaluaciones que realicen, así como la demás información global que permita medir el desarrollo y los avances de la evolución nacional y estatal de los delitos previstos en esta Ley, así como su prevención, combate y sanción.

La Comisión Intersecretarial elaborará, con la información que reciba de todas las dependencias participantes de los tres órdenes de gobierno, un informe anual el cual contendrá los resultados obtenidos por el Programa Nacional.

Este informe será remitido al C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y las dos Cámaras del Congreso de la Unión y se le dará una amplia difusión en los medios de comunicación en todo el territorio nacional.

Artículo 72. Corresponderá a la Comisión Intersecretarial, a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría, en el ámbito de sus competencias, la evaluación de avances y resultados de los programas para la prevención, combate y sanción de los delitos previstos en esta Ley, y de la protección y asistencia a las víctimas, sin perjuicio de la que las autoridades locales realicen en sus respectivas evaluaciones.

Dicha evaluación y la de las autoridades locales, serán sistemáticas y permanentes.

Sus resultados serán tomados como base para que las autoridades ministeriales y judiciales, en el ámbito de su competencia, adopten las medidas procedentes.

Artículo 73. En el seguimiento y evaluación de los resultados que se obtengan en la ejecución de los convenios y acuerdos señalados en las fracciones VI y VII del artículo 66 de esta Ley, intervendrán la

Conferencia Nacional de Procuradores, el Consejo Nacional de Seguridad Pública y la Comisión Intersecretarial.

Los convenios y acuerdos deberán ajustarse, en lo conducente, a las bases previas en la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en la Ley General de Población, y podrán suscribirse con organizaciones de la sociedad civil y la academia con los fines y criterios señalados en la fracción VII del artículo 34 de esta Ley.

Capítulo Tercero
De la Evaluación del Programa Nacional

Artículo 74. Sin menoscabo de lo señalado en los párrafos anteriores, las instituciones a que se refiere este artículo están obligadas a generar indicadores sobre su avance en la aplicación de métodos para prevenir y eliminar cualquier modalidad de los delitos previstos en esta Ley, con la finalidad de que sean sujetas a evaluación sobre la materia.

Tales indicadores serán de dominio público y se difundirán por los medios disponibles.

Artículo 75. Las autoridades federales, estatales, municipales y del Distrito Federal responsables de prevenir, perseguir y sancionar el delito de desaparición de personas y demás delitos objeto de esta Ley, así como las responsables de prestar asistencia y protección a las víctimas, se reunirán periódicamente con el propósito de analizar e intercambiar opiniones sobre el desarrollo del Programa Nacional, así como de los estados, municipios y del Distrito Federal, con el fin de formular recomendaciones y convenir acciones para apoyar la lucha por la erradicación de este fenómeno social en todas sus manifestaciones y modalidades.

Estas reuniones serán presididas por la Secretaría y convocadas por la Comisión Intersecretarial.

TÍTULO SEXTO
De la Prevención de los Delitos Previstos en esta Ley

Capítulo Primero
De las Políticas y Programas de Prevención

Artículo 76. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias y de las facultades y obligaciones establecidas en esta Ley, establecerán y ejecutarán políticas, programas, acciones y otras medidas, con la finalidad de contribuir a erradicar los delitos objeto de la presente Ley.

Artículo 77. La Secretaría de Gobernación y sus instancias equivalentes en las entidades federativas aplicarán medidas tales como actividades de investigación y campañas de información y difusión, así como coordinar el diseño y puesta en marcha de iniciativas sociales y económicas, con miras a prevenir y combatir los delitos previstos en la presente Ley.

Artículo 78. Las políticas, los programas y demás medidas que se adopten para la prevención de los ilícitos contenidos en esta Ley incluirán, cuando proceda, la cooperación con organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y otros sectores de la sociedad.

Artículo 79. Las autoridades de los distintos órdenes de gobierno implementarán medidas legislativas,

educativas, sociales y culturales, a fin de desalentar los delitos objeto de esta Ley.

Artículo 80. Las autoridades de procuración de justicia y policiales de los distintos órdenes de gobierno, procederán a la búsqueda inmediata de cualquier mujer, niña, niño o adolescente o cualquier persona que le sea reportado como extraviado, sustraído o ausente, librando una alerta general a todas las instancias de procuración de justicia y policiales en todo el territorio nacional y fuera de éste, así como al Instituto Nacional de Migración y a la Secretaría de Relaciones Exteriores para impedir que la persona reportada pueda ser sacada del país.

Capítulo Segundo

Atención Preventiva a Zonas y Grupos de Alta Vulnerabilidad

Artículo 81. Para cumplir con lo dispuesto en el Capítulo anterior, las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, y tomando en cuenta las necesidades particulares de cada localidad, llevarán a cabo las siguientes actividades:

I. Atenderán de manera especial a las localidades aisladas y zonas urbanas que se les haya identificado como potencialmente con mayor posibilidad de que su población sea víctima de los delitos previstos en esta Ley, y las que tengan mayor incidencia de estos delitos;

II. Promoverán centros de desarrollo, asistencia y demás establecimientos que apoyen en forma continua y estable a las víctimas y su reinserción segura a la vida social;

III. Otorgarán apoyos a grupos en riesgo con requerimientos específicos;

IV. Realizarán campañas que tiendan a elevar los niveles culturales, sociales, de bienestar social y sensibilización de la población sobre el problema en todas sus manifestaciones;

V. Efectuarán programas para las familias, que les permitan dar mejor atención a sus hijas e hijos en la prevención de este delito;

VI. Otorgarán estímulos a las asociaciones civiles que se dediquen a la prevención de este delito y a la atención, protección y asistencia a las víctimas y sus familias;

VII. Promoverán la participación de la sociedad en la prevención de este delito y en la atención, protección y asistencia a las víctimas y sus familias, así como el apoyo de los particulares al financiamiento y a las actividades a que se refiere este Capítulo;

VIII. Concederán reconocimientos y distinciones a quienes contribuyan a la consecución de los propósitos mencionados en el artículo anterior, y

IX. Realizarán las demás actividades que permitan ampliar la calidad y la cobertura de los servicios de prevención de este delito y a la atención, protección y asistencia a las víctimas y sus familias y posibles víctimas, y alcanzar los propósitos mencionados en el artículo anterior.

Capítulo Tercero

De la Evaluación de los Programas de Prevención

Artículo 82. Las autoridades federales, estatales y del Distrito Federal, en los ámbitos de sus respectivas competencias, en términos de las disposiciones aplicables, estarán obligadas a generar indicadores sobre la aplicación y resultados de los programas para prevenir los delitos en materia de desaparición de personas, con la finalidad de que los avances puedan ser sujetos a evaluación.

Tales indicadores serán de dominio público y se difundirán por los medios disponibles.

Artículo 83. Las autoridades federales, estatales, municipales y del Distrito Federal, responsables de prevenir, perseguir y sancionar el delito de desaparición de personas y de prestar asistencia y protección a las víctimas, se reunirán periódicamente con el propósito de analizar e intercambiar opiniones sobre el desarrollo del Programa, formular recomendaciones y convenir acciones para apoyar la lucha por la erradicación de este fenómeno social en todas sus manifestaciones y modalidades.

Estas reuniones serán presididas por la Secretaría de Gobernación y convocadas por la Comisión Intersecretarial.

Capítulo Cuarto
De la Atención a Rezagos

Artículo 84. El Estado apoyará la implementación de programas en las regiones que muestren mayores rezagos en materia de prevención de delito de Desaparición de Personas, previa celebración de convenios.

Artículo 85. Las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, tomando en cuenta las necesidades particulares de cada región o localidad que en las evaluaciones de los programas muestren rezagos en la atención de estos delitos, llevarán a cabo actividades complementarias a las de prevención previstas en esta Ley, para combatir los rezagos detectados en los ámbitos de sus respectivas competencias.

TÍTULO SÉPTIMO
Facultades Y Competencias De Las Autoridades De Los Tres Órdenes De Gobierno

Capítulo Primero
Del Gobierno Federal

Artículo 86. Además de las competencias para investigar, perseguir y sancionar los delitos objeto de esta Ley establecidas en el título primero y en el Programa, corresponden de manera exclusiva a las autoridades federales las siguientes atribuciones:

I. Determinar para toda la República la Política de Estado para prevenir, investigar, perseguir y sancionar los delitos previstos en esta Ley, así como para la asistencia y protección de las víctimas, los ofendidos y testigos, a cuyo efecto considerará la opinión de las autoridades de los tres poderes y los tres órdenes de gobierno, así como de los diversos sectores sociales involucrados;

II. Desarrollar mecanismos de coordinación entre la federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, con la finalidad de erradicar los delitos previstos en esta Ley;

III. Impulsar acuerdos de coordinación entre dependencias del Gobierno Federal y los estados y el Distrito Federal que permitan prestar asistencia y protección integral a las víctimas, ofendidos y testigos;

IV. Regular un sistema nacional de formación, actualización, capacitación y profesionalización de los servidores públicos que participen en los procesos de prevención y sanción de los delitos previstos en esta Ley y de la asistencia y protección de las víctimas y posibles víctimas, ofendidos y testigos de dichos delitos;

V. Promover en coordinación con los Gobiernos Federal, de las entidades federativas y del Distrito Federal cursos de capacitación a las personas que atienden a las víctimas, posibles víctimas, ofendidos y testigos de los delitos objeto de esta Ley;

VI. Crear, regular y operar un sistema nacional de vigilancia y observación de los delitos objeto de esta Ley, que permita evaluar los avances y resultados de las acciones del Estado y la sociedad en su combate y prevención;

VII. Fijar los lineamientos generales de las evaluaciones a las que se someterán las acciones y programas desarrollados por el Gobierno Federal, las entidades federativas, los municipios, el Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales y la sociedad;

VIII. Apoyar la creación de refugios, albergues y casas de medio camino para las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos que esta Ley define como del fuero federal, o apoyar a las organizaciones de la sociedad civil, para la creación y operación de los mismos, hasta la total recuperación de las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos previstos en esta Ley;

IX. En función de los resultados de la observación y evaluación de la evolución de los delitos previstos en esta Ley en el país y la evaluación periódica de resultados, así como en función de recursos que las entidades federativas y municipios destinen para el cumplimiento de lo previsto en la presente Ley, sujeto a disponibilidades presupuestarias, apoyar a las entidades federativas que se encuentren en mayor riesgo o rezago, con recursos técnicos, humanos y financieros;

X. Fijar los protocolos únicos para el uso de procedimientos y recursos para el rescate, asistencia y protección de las víctimas y posibles víctimas;

XI. Fijar los requisitos mínimos de los programas y planes que formulen las autoridades federales, de las entidades federativas, los municipios, el Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales;

XII. Fijar requisitos mínimos de los proyectos y programas que formulen las organizaciones de la sociedad civil involucradas en el combate a los delitos previstos en esta Ley y la atención y protección a las víctimas, cuyas actividades cuenten con apoyos oficiales;

XIII. Llevar un registro nacional de dependencias, instituciones y organizaciones de la sociedad civil que realicen acciones en el combate a los delitos previstos en esta Ley y la asistencia y protección a las víctimas;

XIV. Fomentar, en coordinación con las autoridades competentes, relaciones internacionales e intervenir en la formulación de programas de cooperación en la materia;

XV. Establecer las bases de la coordinación para la aplicación del Programa Nacional;

XVI. Facilitar la cooperación e intercambio de información con las autoridades migratorias y de seguridad de otras naciones y organismos internacionales sobre la materia;

XVII. Recopilar e intercambiar los datos y las estadísticas delictivas de los delitos previstos en esta Ley, respetando la confidencialidad de los datos personales de las víctimas;

XVIII. Promover la cooperación entre países, mediante mecanismos bilaterales, regionales, interregionales e internacionales, para prevenir, perseguir, sancionar, monitorear, y erradicar los delitos previstos en esta Ley;

XIX.A través de la Procuraduría General de la República, elaborar el registro de personas desaparecidas, mismo que contendrá una base de datos nacional de información genética de los restos humanos encontrados y de los familiares consanguíneos de los posibles desaparecidos.

XX. Las demás que establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables.

Capítulo Segundo
De las Autoridades Estatales, Municipales y del Distrito Federal

Artículo 87. Corresponden de manera exclusiva a las autoridades de los estados y el Distrito Federal, en sus respectivos ámbitos de competencia, las atribuciones siguientes:

I. En concordancia con el Programa Nacional, formular políticas e instrumentar programas estatales para prevenir, sancionar y erradicar los delitos previstos en esta Ley, así como para la protección, atención, rehabilitación y recuperación del proyecto de vida de las víctimas y posibles víctimas, ofendidos y testigos de los mismos;

II. Proponer a la Comisión Intersecretarial contenidos nacionales y regionales, para ser incorporados al Programa Nacional;

III. Prestar servicios de formación, actualización, capacitación y profesionalización para las y los actores institucionales que participan en los procesos de prevención y combate a los delitos previstos en esta Ley y de asistencia y protección de las víctimas, de conformidad con las disposiciones generales que las autoridades federales determinen;

IV. Implementar, en coordinación con la Federación, programas y proyectos de atención, educación, capacitación e investigación en materia de desaparición de personas.

V. Impulsar programas para prevenir los factores de riesgo para posibles víctimas de los delitos previstos en esta Ley que incluyan programas de desarrollo local;

VI. Creación de refugios, albergues y casas de medio camino para las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos que esta Ley define como del fuero común, o apoyar a las organizaciones de la sociedad civil, para la creación y operación de los mismos, hasta la total recuperación de las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos contenidos en la presente Ley;

VII. Revisar y evaluar la eficacia de las políticas, programas y acciones con base en los lineamientos que para tal efecto desarrollen las autoridades federales;

VIII. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas, la información necesaria para su elaboración;

IX. Impulsar reformas legales para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley,

X. Establecer las estrategias de coordinación institucional para el registro de personas desaparecidas, mismo que deberá remitirse al Registro Nacional de Víctimas por las autoridades Estatales y del Distrito Federal, a fin de que la Federación, a través de la Procuraduría General de la República, genere una base de datos nacional de información genética de los restos humanos encontrados y de los familiares consanguíneos de los posibles desaparecidos.

XI. Las demás aplicables a la materia, que les confiera esta Ley u otros ordenamientos legales.

Artículo 88. Corresponde a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal en el ámbito de sus respectivas facultades y competencias, de conformidad con esta Ley, la legislación aplicable en la materia y las políticas y programas federales, estatales y del Distrito Federal:

I. Instrumentar políticas y acciones para prevenir y erradicar los delitos previstos en esta Ley;

II. Apoyar la creación de programas de sensibilización y capacitación para las y los servidores públicos y funcionarios que puedan estar en contacto con posibles víctimas de los delitos previstos en esta Ley;

III. Apoyar la creación de refugios o modelos de protección y asistencia de emergencia, hasta que la autoridad competente tome conocimiento del hecho y proceda a proteger y asistir a la víctima, ofendido o testigo de los delitos previstos en esta Ley;

IV. Las demás aplicables sobre la materia y las que les confiera esta Ley y otros ordenamientos jurídicos.

Artículo 89. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas de los gobiernos Federal, de las entidades federativas, municipios y del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, les corresponde de manera concurrente las atribuciones siguientes:

I. Editar y producir materiales de difusión para la prevención de los delitos previstos en esta Ley en todas sus formas y modalidades;

II. Promover la investigación de los delitos previstos en esta Ley, en todas sus manifestaciones y modalidades, para que los resultados sirvan de base para el desarrollo de nuevas políticas y programas para su prevención y combate, así como para desarrollar nuevas medidas de atención, protección y asistencia a las víctimas;

III. Fomentar y difundir actividades de conocimiento y prevención de los delitos previstos en esta Ley en todas sus formas y manifestaciones;

IV. Impulsar y fortalecer en sus tareas a las instituciones y organizaciones privadas que prestan atención a las víctimas y posibles víctimas, ofendidos y testigos de los delitos contenidos en la presente Ley y en su prevención;

V. Desarrollar mecanismos para que las instituciones de seguridad pública se coordinen, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública para:

a) Realizar estudios sobre las causas estructurales, distribución geodelictiva, estadística, tendencias históricas y patrones de comportamiento, lugares de origen, tránsito y destino, modus operandi, entre otros, que permitan actualizar y perfeccionar la investigación para la prevención de los delitos tipificados en esta Ley;

b) Obtener, procesar e interpretar la información geodelictiva por medio del análisis de los factores que generan conductas antisociales previstas en esta Ley con la finalidad de identificar las zonas, sectores y grupos de alto riesgo, así como sus correlativos factores de protección;

c) Suministrar e intercambiar la información obtenida mediante los sistemas e instrumentos tecnológicos respectivos;

d) Llevar a cabo campañas orientadas a prevenir y evitar los factores y causas que originan los fenómenos delictivos tipificados en esta Ley, así como difundir su contenido;

e) Establecer relaciones de colaboración con las autoridades competentes, así como con organizaciones de la sociedad civil y privadas, con el objetivo de orientar a la sociedad en las medidas que debe adoptar para prevenir los delitos tipificados en esta Ley.

VI. Crear mecanismos y proveer recursos para que las instituciones policiales y de procuración de justicia desarrollen métodos de recopilación y sistematización de información con el fin de aplicar las estrategias necesarias para hacer eficaz la investigación preventiva, con base en los siguientes criterios:

a) Diseñar y operar sistemas de recolección, clasificación, registro, análisis, evaluación y explotación de información relativa a las conductas previstas en esta Ley, con el objeto de conformar una base de datos nacional que sustente el desarrollo de planes y programas que sirvan para garantizar la seguridad pública en esta materia,

b) Sistematizar y ejecutar los métodos de análisis de información estratégica que permita identificar a personas, grupos, organizaciones, zonas prioritarias y modos de operación vinculados con las conductas previstas en el presente ordenamiento, y

c) Las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables.

VII. El gobierno de cada entidad federativa, el Distrito Federal, los ayuntamientos y las jefaturas delegacionales podrán celebrar convenios para coordinar o unificar sus actividades en la materia de esta Ley, para cumplir de mejor manera las responsabilidades a su cargo.

Artículo 90.- Las instituciones encargadas de registro civil, brindarán a los familiares de la persona

desaparecida, una constancia de presunción de ausencia por desaparición al denunciar el hecho, misma que deberá ser ratificada al iniciar la investigación correspondiente las autoridades ministeriales por los delitos objeto de esta Ley, para los fines que a la misma convenga.

Capítulo Tercero

Del Financiamiento a la Prevención, Sanción y Erradicación de los Delitos Previstos en esta Ley y de la Asistencia y Protección a las Víctimas, Ofendidos y Testigos

Artículo 91. El Gobierno Federal y los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, con sujeción a las disposiciones de sus respectivas leyes de ingresos y decretos de egresos que resulten aplicables, concurrirán en el financiamiento de la prevención, sanción y erradicación de los delitos previstos en esta Ley y de los servicios para la asistencia y protección a las víctimas y ofendidos.

Los recursos federales recibidos para ese fin por cada entidad federativa, no serán transferibles y deberán aplicarse exclusivamente en la prestación de servicios y demás actividades previstas en esta Ley en la propia entidad.

Los gobiernos de las entidades federativas y el Distrito Federal prestarán todas las facilidades y colaboración para que, en su caso, la Auditoría Superior de la Federación verifique la correcta aplicación de dichos recursos.

En el evento de que tales recursos se utilicen para fines distintos, se estará a lo previsto en la legislación aplicable sobre las responsabilidades administrativas, civiles y penales que procedan.

Artículo 92. Los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, de conformidad con las disposiciones aplicables, proveerán lo conducente para que cada ayuntamiento y demarcación territorial reciba recursos para el cumplimiento de las responsabilidades que estén a su cargo.

Artículo 93. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos anteriores, el Gobierno Federal, los gobiernos de los estados y el del Distrito Federal, tomarán en cuenta el carácter prioritario de la prevención, combate y sanción de los delitos previstos en esta Ley, y de la protección y asistencia a las víctimas de este delito, para la seguridad nacional.

Artículo 94. La Procuraduría General de la República, a través de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, contará con una Coordinación General para la investigación y persecución de los delitos objeto de esta Ley, cuando sean cometidos por la delincuencia organizada, que contará como mínimo con un coordinador general, Fiscales, Ministerios Públicos y policías ministeriales especializados, los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para su efectiva operación. Esta Coordinación General se integrará con servicios periciales y técnicos especializados para el ejercicio de su función, de conformidad con lo establecido en la normatividad respectiva.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO.-La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

SEGUNDO.-El Ejecutivo Federal contará con 90 días a partir de la publicación de esta Ley para emitir el

Reglamento de la misma.

TERCERO.-Las Entidades Federativas contarán con un plazo de seis meses para expedir sus respectivas leyes en la materia o adecuar las ya existentes conforme a la presente Ley, a partir del día en que entre en vigor el presente Decreto.

CUARTO.-la Comisión Intersecretarial deberá instalarse a los 30 días naturales a partir de la publicación de la presente Ley y deberán publicar el Programa Nacional en un plazo no mayor a 90 días naturales a partir de su conformación.

QUINTO.-La presente Ley deroga los delitos objeto de la misma, en el Código Penal Federal y Leyes Federales; así como las demás disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a esta Ley.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el día___ de _____ de 2014.

Atentamente

_____

DIP. RAQUEL JIMÉNEZ CERRILLO

Del Dip. Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

El suscrito, diputado federal **CARLOS FERNANDO ANGULO PARRA**, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72, inciso H, 78, fracción III, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 6, numeral 1, fracción I, 77, numerales 1 y 3, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete por conducto del pleno de esta Comisión Permanente a consideración de la Cámara de Diputados la presente **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,**al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

I. INTRODUCCION Y MARCO CONCEPTUAL

El auténtico acceso a la información pública, la transparencia y la rendición de cuentas, son pilares fundamentales del buen gobierno, y se constituyen como elementos fundamentales para analizar con precisión los niveles de la calidad democrática de cualquier país, con plena independencia de su ubicación en el contexto de las naciones y de la región en donde se encuentren geográficamente.

En esta tesitura**,** entenderemos como **acceso a la información** al reconocimiento del derecho de los ciudadanos a conocer la información producida y controlada por los poderes públicos[14], y por **transparencia**, a la prestación activa de información, de manera accesible y pertinente de forma que los procedimientos, estructuras y procesos estén a disposición para su valoración.[15]

Así, la **rendición de cuentas,** se entenderá como aquella que consiste en informar y explicar a los ciudadanos las acciones realizadas por las autoridades de manera transparente y clara para dar a conocer sus estructuras, funcionamiento, y por consecuencia, ser sujeto de la opinión pública. O dicho de otra manera y atendiendo a la definición tradicional de este importante elemento, encontramos que se relaciona con la obligación del poder, en concreto de políticos y funcionarios públicos, de responder por sus acciones ante los ciudadanos.

Por otro lado tenemos que para César Calderón, **los Gobiernos Abiertos** son aquellos que pueden "conversar" con las personas y evolucionar desde un gobierno electrónico hacia uno donde la colaboración, la participación y la transparencia sean los ejes centrales en la elaboración de las políticas públicas. En este sentido un gobierno abierto actúa como una gran plataforma dispuesta para disponer de miles de aplicaciones tecnológicas que deben ser útiles y hacer más fácil la vida a los ciudadanos y empresas.

En cuanto a **la capacidad de buen gobierno**, encontramos que es la forma de ejercicio del poder en un país, caracterizada por rasgos como la eficiencia, la transparencia, la rendición de cuentas, la participación de la sociedad civil y el estado de derecho que revela la determinación de las autoridades para utilizar los recursos disponibles a favor del desarrollo económico y social.

[14] Llob Ribalda, Ma. Dolores, "*Informe transparencia, acceso a la Información Pública y Buen Gobierno en los Parlamentos*", Cuadernos Manuel Giménez, Bilbao España, Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamentarios del Estado Autonómico, No. 4, Diciembre del 2012.

[15] *Idem.*

Para empezar este nuevo milenio, nos encontramos inevitablemente frente a nuevas realidades en donde la información es un valioso recurso y encontrarla o generarla a tiempo proporciona una gran ventaja porque implica que están abiertas una serie de opciones para contar con el acceso a un número impresionante de datos, que inciden en las actividades diarias de la población.

En este escenario, emerge el impacto que implica para la sociedad, la posibilidad de utilizar todos esos beneficios traduciéndolos a la gestión pública, pasando de la forma de tradicional de la burocratización con el modelo burocrático heredado por Max Weber direccionada hacia la especialización, la fragmentación de tareas y la subordinación jerárquica al Nuevo Gerencialismo o Nueva Gerencia Pública, conocida porque intenta incorporar con buenos resultados algunos elementos de la lógica de la iniciativa privada a las organizaciones públicas y más recientemente al modelo burocrático de "la gobernanza" en donde ya se empiezan a utilizar nuevos conceptos como la transparencia, la rendición de cuentas, los sistemas de mérito, la responsabilidad en el uso de los recursos públicos y lo que por más de una década se ha venido asumiendo como **gobierno electrónico**, asumiéndose éste como una mejora técnica e instrumental de los procesos administrativos al ampliarse el modo de relacionarse entre la administración y la ciudadanía, dando lugar más allá de la participación, teniendo como factor determinante la colaboración, siendo ésta una evolución que tal vez surgió de la capacidad y recursos limitados de los estados, de una ciudadanía cada vez más informada, exigente y con necesidades cambiantes que buscan ser atendidas.[16]

Como se desprende de lo anterior, la evolución del concepto de gobierno electrónico, también va cambiando paralelamente[17] a la de gobierno abierto en tanto se considera con mayor direccionalidad hacia la modificación de la cultura de gobierno y de la forma de gobernarse y se extiende decididamente, al intentar alinear este fenómeno en la interacción más personalizada y directa y con fuertes acentos en la retroalimentación que va más allá de los límites de la realidad digital.

Por todo esto, surge la inquietud de que aún resultando plausibles los avances que se han generado en esta materia al interior de nuestro país, aún falta un buen trecho por avanzar al respecto, por lo que se está presentando este proyecto que pretende abonar en la constante búsqueda del perfeccionamiento de nuestro marco jurídico. Para tal efecto se intentarán explicar a continuación algunos de los antecedentes más relevantes en la materia, que seguramente brindarán un mayor entendimiento del camino avanzado, para luego transitar a la propuesta.

II. ANTECEDENTES NACIONALES RECIENTES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

Uno de los antecedentes más relevantes en materia de transparencia, lo constituyó el hecho de que como parte de las Reformas Estructurales que han sido logradas durante la legislatura que está por concluir, El 07 de Febrero del 2014, se promulgó la Reforma Constitucional en materia de Transparencia y Acceso a la Información, después del acostumbrado proceso legislativo que arrancó desde el primer periodo ordinario de sesiones, misma que permitió que se reformara y adicionara la Carta Magna, estableciendose que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que recibiera y ejerciera recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, debería ser considerada comode carácter público,

[16] Concha, Gastón y Naser Alejandra*, "El desafío hacia el gobierno abierto en la hora de la igualdad"*, Colección documentos de Proyecto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, (CEPAL) Santiago de Chile, Impreso en Naciones Unidas, 2012.
[17] Algunos autores refieren los términos de gobierno electrónico y gobierno abierto, no con significados idénticos sino complementarios.

puesto que se ubica en el contexto de que el ciudadano ya pagó con antelación sus impuestos para contar de manera decidida con ese tipo de servicios y sólo podrá ser reservada de manera temporal por razones de interés público y seguridad nacional plenamente justificados en los términos que debieran fijar con posterioridad las leyes secundarias que al respecto serían diseñadas.

De esta manera, y como consecuencia del mandato Constitucional, fue para el 04 de Mayo del 2015, cuando finalmente fue promulgada y publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública que fue apreciada como un elemento legislativo de suma importancia, puesto que pretende contribuir al acceso pleno a la información, como una política transversal en todos los niveles y órdenes, así como de las otras entidades que hacen uso de los recursos que provienen del erario federal, sentando las bases para la creación de un sistema nacional de transparencia.

En esta oportunidad se concluyó el primer diseño de la legislación secundaria, finalizando así una etapa de intensos debates que se realizaron en los distintos ámbitos del poder legislativo, contando para esto con la participación de los distintos sectores de la población interesados en este rubro, pero dejando aún importantes inquietudes, puesto que quedaron pendientes algunos elementos torales dentro del Proyecto, mismos que pretenden ser rescatados en parte en esta Iniciativa.

III. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES SUSCRITOS EN EL CONTEXTO DE GOBIERNO ABIERTO.

Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción (2003)

La Organización de las Naciones Unidas ONU ha llevado adelante iniciativas decisivas para promover que los Estados adopten medidas para fortalecer la integridad de los funcionarios públicos, la transparencia y la buena gestión pública. En tal sentido, la negociación y aprobación en 2003 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), es el acuerdo internacional de mayor alcance en este campo, mismo que se constituye como su mayor logro.[18]

Sesión de las Naciones Unidas donde se proyectó al mundo la iniciativa “Open Goverment Partnership” (2011)

Un antecedente importante al respecto, lo encontramos en Septiembre del 2011, en el 66º. Periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se proyectó al mundo una iniciativa encabezada por los Estados Unidos de Norteamérica y por el Gobierno de Brasil denominada el “Open Government Partnership”, a la que en el mes de Octubre se adhirieron varios países, encontrándose entre los latinoamericanos por supuesto Brasil como promotor del Proyecto, Uruguay, Chile, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú y México.

Alianza para el Gobierno Abierto –AGA-(2013)

Presentada como una oportunidad incomparable para consolidar el movimiento por el gobierno abierto, más de 1,000 delegados de más de 60 países se reunieron en Londres el 31 octubre y 1 noviembre de 2013 para participar en la Cumbre Anual de la Alianza para el Gobierno Abierto, que es considerada el organismo multilateral más importante en la materia, y que ha crecido exponencialmente en dos años al pasar de 8 miembros a más de 60 países.

Los participantes de la Cumbre - incluyendo representantes de organizaciones de la sociedad civil, el sector

[18] Penalillo, Miguel, “*Programa anticorrupción en América Latina y el Caribe: Estudios sobre tendencias anticorrupción y proyectos del PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 2011,”* Centro Regional para América Latina y el Caribe, Panamá, 2011.

privado y el gobierno - compartieron experiencias de sus respectivos países y proporcionaron ejemplos reales de cómo la apertura puede mejorar los servicios públicos, impulsar el crecimiento económico, reducir la pobreza y la corrupción y restaurar la confianza pública en el gobierno.

Por su parte el Centro latinoamericano para la Administración y Desarrollo CLAD, ha presentado la "Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública", que en su punto No. 22, habla sobre el Principio de transparencia y acceso a la información de interés general, en donde se detalla que el funcionamiento, actuación y estructura de la Administración Pública deberá ser accesible a todos los ciudadanos, de manera que éstos, de acuerdo con la protección del derecho a la intimidad y de las declaraciones motivadas de reserva por razones de interés general, puedan conocer en todo momento, gracias a la existencia de archivos adecuados, la información generada por las Administraciones Públicas, por las organizaciones sociales que manejen fondos públicos y por todas aquellas instituciones que realicen funciones de interés general de acuerdo con la legislación respectiva.

En este contexto, las autoridades deberán impulsar de oficio los procedimientos y procurarán usar las TICS a los efectos de que los procedimientos se tramiten con diligencia y sin dilaciones injustificadas de acuerdo con los enunciados de la Carta iberoamericana del Gobierno Electrónico. Igualmente, se procurará potenciar el uso de estándares abiertos para facilitar la difusión y reutilización de la información pública o de interés general.

Copresidencia de México en la Alianza para el Gobierno Abierto

Así pues, México comparte con Indonesiadespués de variadas acciones previas de la anterior Administración del Ejecutivo Federal,la copresidencia de **la Alianza para el gobiernoabierto**que datadesde Octubre del 2013**.**[19]Esto significó en su oportunidad, que México, al acogerse a esta iniciativa de manera directiva, debería construir bajo mecanismos en línea y presenciales de consulta pública, un plan de acción que contuviera los compromisos en materia de transparencia, participación ciudadana, la rendición de cuentas, la tecnología y la innovación. Aunado esto a al mandato de los países miembros de la CEPAL de contribuir al desarrollo económico de América Latina, y en particular de apoyar en la ejecución de recomendaciones en el contexto de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. [20]

Con este nivel tan alto de compromiso internacional y después de un compás de espera[21] determinado por el cambio de administración del Poder Ejecutivo Federal en México, finalmente fue presentada por el Presidente Enrique Peña Nieto el 29 de Enero del 2014, el Plan de Acción 2013, 2015[22], como resultado de los esfuerzos de la sociedad civil, el sector privado, el académico y de los funcionarios públicos en donde se formularon las líneas de acción de la Alianza para el Gobierno Abierto, considerándose éste como un espacio de diálogo e intercambio de ideas que en colaboración con la sociedad civil, permite que el

[19]Es el principal antecedente para la definición de la Alianza para el parlamento abierto en este contexto el Senado de la República en coordinación con diversas organizaciones de la sociedad civil, han propuesto esta referencia para que se incorpore esfuerzos emanados de los 32 Congresos Locales y permita un movimiento nacional que amplíe la confianza de los ciudadanos en sus cuerpos de representación democrática.

[20]*Idem.*

[21] La presentación de este Plan de Acción era indispensable puesto que México comparte junto con Indonesia la responsabilidad de la copresidencia de la Organización denomina Alianza para el Gobierno Abierto –AGA- y a cada gobierno que participó en Londres le fue solicitado el anuncio de un nuevo y ambicioso compromiso de gobierno abierto que se integrará en su plan de acción de OGP. La Alianza también dio la bienvenida a nuevos países participantes y cuatro alianzas estratégicas con organizaciones multilaterales, así como la convocatoria al Premio de Gobierno.

[22] Se percibe un desfase en las fechas, toda vez que es un documento que señala como fecha de su ejecución del año 2013 al 2015, fue signado finalmente a inicios del 2014.

gobierno asuma el compromiso de manera gradual, pretendiendo transformar la calidad de vida de las personas, al ser un gobierno direccionado hacia la ciudadanía presentado mediante cuatro ejes principales, como lo son el presupuesto abierto y participativo, los datos abiertos para el desarrollo, el empoderamiento y participación ciudadana y la gobernanza de recursos naturales.

Con esta gran premisa, estos ejes debieran estar siendo desarrollados en 26 compromisos, incluyendo uno de manera relevante, como lo es el de conformar una ventanilla única que permita unificar los sitios de gobierno en un solo portal, digitalizando y simplificando más de siete mil trámites del gobierno para que estén disponibles sencillamente a cualquier hora y en cualquier lugar. Se señaló en su presentación que también se trabajaría en el padrón único y abierto de los programas sociales que integran la Cruzada Nacional contra el Hambre porque se necesitaba contar con un solo registro en formatos abiertos que incluyera el registro de las personas que permitiera conocer de primera mano quienes reciben los apoyos y dónde se encuentran; con esto podría darse seguimiento al esfuerzo realizado en administraciones anteriores para disminuir la corrupción y el control político o clientelismo.

Así pues, a estas acciones o esfuerzos de los organismos internacionales, se une esta iniciativa que pretende ser coincidente en el sentido de avanzar con las expectativas de la gobernanza nacional e internacional puesto que se direcciona a lograr un mejor desarrollo de los principios y bases en materia de transparencia y acceso a la información pública que actualmente se están manejando en muchas naciones del mundo.

IV. VENTAJAS DE MEJORAR EL MARCO JURIDICO EN MATERIA DE GOBIERNO ABIERTO

Con todos estos antecedentes, podemos resumir de manera preponderante quelos objetivos de esta propuesta, pretenden alinearse a contribuir con esos grandes retos, considerando como algunas de las asignaturas pendientes en la materia las siguientes:

1. CAMBIAR FINALMENTE EL PARADIGMA DE LA TRANSPARENCIA EN MEXICO. Esto significa volver la mirada, con mayores elementos de carácter legal, para vislumbrar la añeja aspiración mexicana, en el sentido de que por regla general, las autoridades gubernamentales deben transparentar toda la información, como un requisito sine qua non, para que el acto administrativo y de gobierno se encuentre dotado de la validez necesaria y los efectos vinculatorios que brinden la certeza a la sociedad de que se puede lograr una disminución significativa de la cooptación y corrupción con una adecuada planeación de la gestión para un periodo prolongado incluyendo para lograr este gran objetivo a los avances tecnológicos con los que se cuentan y que están disponibles actualmente.

2. QUE SE INCLUYA EN LOS DATOS ABIERTOS LAS EVALUACIONES GUBERNAMENTALES Y EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. Con esto se pretende lograr que el derecho del ciudadano de atraerse información para sí mismo o para un grupo de personas, incluya necesariamente las facultades de acceso a los archivos, registros y documentos públicos que refieran de manera precisa cuales son las apreciaciones de los ciudadanos y de otros sectores respecto de la administración que esté en funciones, inclusive las anteriores; así como se integren elementos importantes que permitan al ciudadano conocer como se podría integrar un presupuesto verdaderamente participativo, donde no obstante que esta sea facultad reconocida Constitucionalmente al Poder Legislativo, sin embargo cuenta de facto con la participación de diferentes sectores del Poder Ejecutivo, y el ciudadano interesado en este tipo de temáticas, debiera contar con todos los elementos informativos para participar en el momento que así lo desee.

3. MAYOR CONCIENCIA PUBLICA COLECTIVA DE LOS DOCUMENTOS A LOS QUE SE PUEDE TENER ACCESO. Esto se puede lograr a través del pleno conocimiento de todos los datos, de los procesos, de las evaluaciones, las licitaciones, las normas oficiales mexicanas, los formatos de trámites y sus requisitos, etc.

Esto significa que puedan ser visualizados aún más documentos como parte de una ampliación del alcance y del compromiso indispensable para que se pueda logra una colaboración abierta. Para lograr este objetivo, se está proponiendo que el término documento, contemple una gama de posibilidades más amplia, además de lograr que la información que pueda considerarse como clasificada como reservada, lo sea solamente de manera excepcional y algunos casos temporalmente; evitando que en muchas de las situaciones se abuse de esta posibilidad cuando no resulta necesaria.

4. MAYOR DIMENSIONAMIENTO A LA PLATAFORMA ELECTRONICA NACIONAL. De esta forma se pretende que el Estado efectivamente garantice la efectiva publicación en este importante medio, para que el derecho a ser informado incluya información objetiva, veraz, y sobretodo oportuna, completa y accesible, haciendo efectiva con estos hechos que el principio de Máxima Publicidad realmente se lleve a cabo como un derecho más de la ciudadanía, toda vez que la información debe estar disponible de manera inmediata sin necesidad de ser solicitada mediante trámite alguno, con la excepción de los casos ya previstos en la propia legislación.

5. PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACION DE CASOS DE EXCEPCION. Lainiciativa incluye un mecanismo para que los sujetos obligados soliciten autorización a las Unidades de Transparencia, cuando consideren que la realización de un acto administrativo o de gobierno no deba publicitarse por estar contenido dentro de los casos de excepción que marca la propia Ley.

6. DENTRO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS SE INTEGRA A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS. Con esta propuesta, estamos cumpliendo el principio de que el buen juez por su casa empieza, por lo que la administración y forma de trabajo de los diseñadores de las leyes y del control gubernamental, deberán estar a la mano de la ciudadanía. Esta inclusión viene aparejada con la intencionalidad de lograr una disminución en el problema de representatividad que se vive en nuestro país, donde los ciudadanos no saben lo que está pasando realmente con sus representantes, por lo que con la adición de este supuesto se estará abonando de manera definitiva a lograr avanzar en los niveles de democracia nacional.

7. LOGRAR UNA MAYOR INTERACCION DE LA CIUDADANIA CON EL GOBIERNO. Para este supuesto se está proponiendo que los órganos garantes para lograr una interacción cotidiana de los ciudadanos con el gobierno, desarrollen mecanismos para el pleno establecimiento de políticas públicas mayormente consensuadas con el ciudadano.

8. AMPLIAR LA DIMENSION DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA COMUNES. Al respecto se está proponiendo que no exista limitación de la información de los actos administrativos, de gobierno y de las cuentas del erario público, así como fideicomisos y fondos, salvo los casos previstos por la propia ley, adicionando que la lista que se detalla se considere de manera enunciativa más no limitativa.

9. QUE EN ALGUNOS SUPUESTOS, LA INFORMACION SE PRESTE DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA. Con esto se pretendeque lalista con la que ya cuenta la Ley, no se vea limitada y por tal razón no se pueda contar con algún referente informativo importante, en organizaciones como las Instituciones de Educación Superior, los Partidos Políticos Nacionales y Locales, las Agrupaciones Políticas Nacionales y las Personas Morales constituidas en Asociación Civil, las Autoridades Administrativas y Jurisdiccionales en Materia Laboral, y los de la rama energética, todos como parte de los sujetos obligados en la materia.

10. SE AMPLIA EL ALCANCE DE CLASIFICACION Y DE LA DEFINICION DE LOS INDICES DE LOS EXPEDIENTES ENFATIZANDO LA PARTICIPACION DE LOS ORGANISMOS GARANTES. De estaforma se destaca que dichas actividades deben estar sujetas al escrutinio y autorización de los organismos garantes y

en algunos casos a los Comités de Transparencia.

11. SE BUSCA UN AHORRO DE TIEMPO Y DE COSTOS PARA EL CIUDADANO. Así se propone que la Ley sea muy específica en el sentido de que únicamente en el caso de que la persona requiera información que no se encuentre en las plataformas de internet y la misma se solicite en formatos que implique un costo, estos deberán cubrirse de manera previa, enfocándose a una mayor efectividad, y esto puede enfatizarse porque partimos del paradigma de que el ciudadano ya pago vía impuestos por la actividad que el servidor público desarrolla y no debiera duplicar dicha erogación.

12. SE ADICIONAN SANCIONES. Una de las partes torales de la propuesta, se refiere a que partiendo del punto de vista de que se pretende que la mayor parte de la información se integre a la plataforma electrónica nacional de transparencia, se están adicionando como sanciones el incumplimiento de la obligación de publicar en tiempo y forma toda la información que genere o tengan en su posesión cualquiera de los sujetos obligados, así como publicar información incomprensible, incompleta, en un formato no accesible, en una modalidad de envío de entrega diferente a la solicitud previamente en su solicitud de acceso a la información, al responder sin la debida motivación y fundamentación establecidas en la propia Ley.

En resumen, se pretende que con todas modificaciones, estemos en condiciones de lograr un aumento en la cultura de la percepción de la responsabilidad de los gobernantes, enfocándose con una mayor direccionalidad hacia las acciones dirigidas a brindar información oportuna de alto valor y alto impacto.
Todo esto en concordancia con que la premisa de que un sistema abierto, reduce la discrecionalidad de los políticos en el manejo de la administración Pública, sobre todo si se encuentran las condiciones necesarias para lograrel fortalecimiento de las capacidades tecnológicas, que no deben ser consideradas más como un gasto sino como una muy buena inversión, significándose en el valor del gran esfuerzo que representa para todos los que contribuyen con sus impuestos a lograr el diseño e implementación de una organización eficiente de gestión gubernamental que contemple en mayor medidacaracterísticas de moderna apertura.
De esta forma, se reafirma el anhelo de promover una cultura de transparencia, como una aspiración a la que ninguna institución debiera renunciar. Así recordamos que la información pertenece al público, por lo que deberá ser utilizada y publicada por los ciudadanos con restricciones mínimas que promuevan un entorno propicio que reconozca y proteja el derecho de acceso a la información pública gubernamental.

Por otro lado, vale la pena destacar el porqué del principal cambio de“forma” de la Iniciativa que también se presenta en el cuadro varias veces, que básicamente tienen que ver con el cambio del sustantivo común “información” por el sustantivo propio “Información”, en razón de que con éste último no se está identificando cualquier información de la especie genérica, sino que el Proyecto se está refiriendo a una información muy particular,que da vida al principal referente de la legislación a modificar, por lo que debe distinguirse o identificarse del resto con una letra inicial mayúscula.

En este sentido, se propone adecuar la Ley General de Transparencia y de Acceso a la Información Pública mediante los cambios que se enuncian en el cuadro siguiente, que incluyen las modificaciones de fondo y de forma ya expresadas.

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

DICE	DEBE DECIR
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, es reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia y acceso a la información. Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios.	**Artículo 1. …** Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso, ***publicación y disponibilidad permanente de toda*** la ***Información*** en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios.
Artículo 2. Son objetivos de esta Ley: I. Distribuir competencias entre los Organismos garantes de la Federación y las Entidades Federativas, en materia de transparencia y acceso a la información; II. Establecer las bases mínimas que regirán los procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información; III. Establecer procedimientos y condiciones homogéneas en el ejercicio del derecho de acceso a la información, mediante procedimientos sencillos y expeditos; IV. Regular los medios de impugnación y procedimientos para la interposición de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales por parte de los Organismos garantes; V. Establecer las bases y la información de interés público que se debe difundir proactivamente; VI. Regular la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como establecer las bases de coordinación entre sus integrantes; VII. Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso a la información, la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas, a través del establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, que se difunda en los formatos más adecuados y accesibles para todo el público y atendiendo en todo momento las	**Artículo 2.** Son objetivos de esta Ley: I. I. al IV. .. V. V. Establecer las bases y la ***Información*** de interés público que se debe difundir proactivamente; VI. … VI. II. VII. Promover fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso a la información, la participación ciudadana***, evaluación gubernamental, el presupuesto participativo,*** así como la rendición de cuentas, a través del establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de ***Información*** oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, que se difunda en los formatos más adecuados y accesibles para todo el público y atendiendo en todo momento las

condiciones sociales, económicas y culturales de cada región; VIII. Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas a fin de contribuir a la consolidación de la democracia, y IX. Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas de apremio y las sanciones que correspondan.	condiciones sociales, económicas y culturales de cada región; VIII. al IX. …
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: I. **Ajustes Razonables:** Modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de los derechos humanos; II. **Áreas:** Instancias que cuentan o puedan contar con la información. Tratándose del sector público, serán aquellas que estén previstas en el reglamento interior, estatuto orgánico respectivo o equivalentes; III. **Comisionado:** Cada uno de los integrantes del Pleno del Instituto y de los Organismos garantes de los Estados y del Distrito Federal; IV. **Comité de Transparencia:** Instancia a la que hace referencia el artículo 43 de la presente Ley; V. **Consejo Nacional**: Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales al que hace referencia el artículo 32 de la presente Ley; VI. **Datos abiertos**: Los datos digitales de carácter público que son accesibles en línea que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado y que tienen las siguientes características: a) **Accesibles**:Los datos están disponibles para la gama más amplia de usuarios, para cualquier propósito; b) **Integrales**: Contienen el tema que describen a detalle y con los metadatos necesarios; c) **Gratuitos**:Se obtienen sin entregar a cambio contraprestación alguna; d) **No discriminatorios**: Los datos están disponibles para cualquier persona, sin necesidad de registro; e) **Oportunos:** Son actualizados, periódicamente, conforme se generen; f) **Permanentes:** Se conservan en el tiempo, para lo cual, las versiones históricas relevantes para uso público se mantendrán disponibles con identificadores adecuados al efecto; g) **Primarios:** Provienen de la fuente de origen con el máximo nivel de desagregación posible;	**Artículo 3.** Para los efectos de la presente Ley se entenderá, ***tanto en sus acepciones singulares y plurales,*** por: I al VI. …

h) **Legibles por máquinas:** Deberán estar estructurados, total o parcialmente, para ser procesados e interpretados por equipos electrónicos de manera automática; i) **En formatos abiertos:** Los datos estarán disponibles con el conjunto de características técnicas y de presentación que corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos en un archivo digital, cuyas especificaciones técnicas están disponibles públicamente, que no suponen una dificultad de acceso y que su aplicación y reproducción no estén condicionadas a contraprestación alguna; j) **De libre uso**: Citan la fuente de origen como único requerimiento para ser utilizados libremente;	
VII. **Documento:** Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados, sus Servidores Públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico;	VII. **Documento:** Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares***, actos***, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas***, licitaciones, normas oficiales Mexicanas, formatos de trámites, requisitos de trámites, resoluciones judiciales, resoluciones administrativas, resoluciones de órganos reguladores*** o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados, sus Servidores Públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico;
VIII. **Entidades Federativas:** Las partes integrantes de la Federación que son los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el Distrito Federal;	VIII al IX.
IX. **Expediente:** Unidad documental constituida por uno o varios documentos de archivo, ordenados y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de los sujetos obligados;	
X. **Formatos Abiertos**: Conjunto de características técnicas y de presentación de la información que corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos de forma integral y facilitan su procesamiento digital, cuyas especificaciones están disponibles públicamente y que permiten el acceso sin restricción de uso por parte de los usuarios;	X. **Formatos Abiertos**: Conjunto de características técnicas y de presentación de la ***Información*** que corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos de forma integral y facilitan su procesamiento digital, cuyas especificaciones están disponibles públicamente y que permiten el acceso sin restricción de uso por parte de los usuarios;
XI. **Formatos Accesibles:** Cualquier manera o forma alternativa que dé acceso a los solicitantes de información, en forma tan viable y cómoda como la de las personas sin discapacidad ni otras dificultades para acceder a cualquier texto impreso y/o cualquier otro formato convencional en el que la información pueda encontrarse;	XI. **Formatos Accesibles:** Cualquier manera o forma alternativa que dé acceso a los solicitantes de información, en forma tan viable y cómoda como la de las personas sin discapacidad ni otras dificultades para acceder a cualquier texto impreso y/o cualquier otro formato convencional en el que la ***Información*** pueda encontrarse;
XII. **Información de interés público:** Se refiere a la	XII. **Información:** Se refiere a ***toda*** la información, ***Documentos y Archivos*** que ***genere y esté en posesión de los sujetos obligados;***
	XIII al XV. …

información que resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados; XIII. **Instituto:** El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; XIV. **Ley:** La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; XV. **Ley Federal:** La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; XVI. **Organismos garantes:** Aquellos con autonomía constitucional especializados en materia de acceso a la información y protección de datos personales en términos de los artículos 6o., 116, fracción VIII y 122, apartado C, BASE PRIMERA, Fracción V, inciso ñ) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; XVII. **Plataforma Nacional:** La Plataforma Nacional de Transparencia a que hace referencia el artículo 49 de la presente Ley; XVIII. **Servidores Públicos:** Los mencionados en el párrafo primero del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus correlativos de las Entidades Federativas y municipios que establezcan las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; XIX. **Sistema Nacional:** Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; XX. **Unidad de Transparencia:** Instancia a la que hace referencia el artículo 45 de esta Ley, y XXI. **Versión Pública:** Documento o Expediente en el que se da acceso a información eliminando u omitiendo las partes o secciones clasificadas.	XVI. **Organismos garantes:** Aquellos con autonomía constitucional especializados en materia de acceso a la ***Información*** y protección de datos personales en términos de los artículos 6o., 116, fracción VIII y 122, apartado C, BASE PRIMERA, Fracción V, inciso ñ) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; XVII al XX. … XXI. **Versión Pública:** Documento o Expediente en el que se da acceso a ***Información*** eliminando u omitiendo las partes o secciones clasificadas.
Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley Federal, las leyes de las Entidades Federativas y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos dispuestos por esta Ley.	**Artículo 4.** El derecho humano de acceso a la ***Información*** comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. ***Como regla general, la Información generada***, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona. ***La Información sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por las razones y casos que esta Ley establece.***
Artículo 5. No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho	**Artículo 5.** No podrá clasificarse como reservada aquella ***Información*** que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los tratados

nacional o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Ninguna persona será objeto de inquisición judicial o administrativa con el objeto del ejercicio del derecho de acceso a la información, ni se podrá restringir este derecho por vías o medios directos e indirectos.	internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. …
Artículo 6. El Estado garantizará el efectivo acceso de toda persona a la información en posesión de cualquier entidad, autoridad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos; así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito de la Federación, de las Entidades Federativas y los municipios.	**Artículo 6.** El Estado garantizará **la *efectiva publicación en la plataforma electrónica nacional de transparencia, concediendo*** acceso ***y disponibilidad a*** toda persona, ***de*** la ***Información*** en posesión de cualquier entidad, autoridad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos; así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito de la Federación, de las Entidades Federativas y los municipios.
Artículo 7. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente Ley. En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia.	**Artículo 7.** El derecho de acceso ***y publicación*** a la **Información** o la clasificación de la **Información** se interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente Ley. … … ***Para que los actos administrativos y de gobierno tengan validez legal y efectos vinculatorios, deberánser publicitados en los términos de esta ley, salvo los actos que deban permanecer reservados en los términos de esta ley.***
Capítulo II **De los Principios Generales** **Sección Primera** **De los principios rectores de los Organismos garantes** **Artículo 8.** Los Organismos garantes del derecho de acceso a la información deberán regir su funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios: I. **Certeza:** Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los	**Capítulo II** **De los Principios Generales** **Sección Primera** **De los principios rectores de los Organismos garantes** **Artículo 8.** Los Organismos garantes del derecho de acceso a la ***Información*** deberán regir su funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios: I. I. al V. …

procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables; II. **Eficacia:** Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información; III. **Imparcialidad:** Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas; IV. **Independencia:** Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna; V. **Legalidad:** Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus resoluciones y actos en las normas aplicables; VI. **Máxima Publicidad:** Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática; VII. **Objetividad:** Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales; VIII. **Profesionalismo:** Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y IX. **Transparencia:** Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.	VI. **Máxima** **VI Máxima Publicidad:** Toda la ***Informaciónque esté*** en posesión **y sea generada*por*** los sujetos obligados ***será publicada en la plataforma electrónica nacional de transparencia y estará disponible de manera inmediata sin necesidad de ser solicitada. Dicha Informaciónserá pública, completa, oportuna y accesible.*** **VII. Objetividad:** Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales; VIII. al IX. …
Sección Segunda **De los Principios en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública** **Artículo 10.** Es obligación de los Organismos garantes otorgar las medidas pertinentes para asegurar el acceso a la información de todas las personas en igualdad de condiciones con las demás. Está prohibida toda discriminación que menoscabe o anule la transparencia o acceso a la información pública en posesión de los sujetos obligados.	**Sección Segunda** **De los Principios en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública** **Artículo 10.** Es obligación de los Organismos garantes otorgar las medidas pertinentes para asegurar el acceso, ***publicación en la plataforma electrónica nacional de transparencia y disponibilidad a la Información*** a todas las personas en igualdad de condiciones con las demás. Está prohibida toda discriminación que menoscabe o anule la transparencia o acceso a la ***Información*** pública en posesión de los sujetos obligados.
Artículo 11. Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que	**Artículo 11.** Toda ***la Información*** en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna***, disponible***, accesible ***y publicada en la plataforma***

deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática.	***electrónica nacional de transparencia sin necesidad de solicitud alguna.***
Artículo 12. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley Federal y las correspondientes de las Entidades Federativas, así como demás normas aplicables.	**Artículo 12.** Toda la ***Información*** pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública, disponible***, publicada sin necesidad de solicitud alguna*** y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley Federal y las correspondientes de las Entidades Federativas, así como demás normas aplicables.
Artículo 13. En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona. Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga un lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida de lo posible, su accesibilidad y traducción a lenguas indígenas.	**Artículo 13.** En la generación, publicación y entrega de ***Información*** se deberá garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del derecho de acceso a la ***Información*** de toda persona. Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la ***Información*** generada tenga un lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida de lo posible, su accesibilidad y traducción a lenguas indígenas.
Artículo 16. El ejercicio del derecho de acceso a la información no estará condicionado a que el solicitante acredite interés alguno o justifique su utilización, ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad.	**Artículo 16.** El ejercicio del derecho de acceso a la ***Información*** no estará condicionado a que el solicitante acredite interés alguno o justifique su utilización, ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad***, así como no deberá ser necesaria solicitud o trámite alguno, con excepción de los casos previstos en la ley.***
Artículo 17. El ejercicio del derecho de acceso a la información es gratuito y sólo podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada. En ningún caso los Ajustes Razonables que se realicen para el acceso de la información de solicitantes con discapacidad, será con costo a los mismos.	**Artículo 17.** El ejercicio del derecho de acceso a la ***Información*** es gratuito y sólo podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada. En ningún caso los Ajustes Razonables que se realicen para el acceso de la ***Información*** de solicitantes con discapacidad, será con costo a los mismos.
Artículo 18. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones.	**Artículo 18.** Los sujetos obligados deberán documentar ***y publicar*** todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones.
Artículo 19. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados. En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia.	**Artículo 19.** Se presume que la ***Información*** debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados. En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia.
Artículo 20. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones contenidas en esta Ley o,	**Artículo 20. Los sujetos obligados deberán solicitar autorización a las Unidades de Transparencia, cuando consideren que a la realización de un acto administrativo o de gobierno, los mismos no deban**

en su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones.	**publicitarse, porque se encuentran en alguno de los casos de excepción previstos en esta Ley. Al efecto, las Unidades de Transparencia, si resuelven a favor la solicitud, la misma deberá ratificarse por los organismos garantes. Las resoluciones de la Unidades de Transparencia en favor de publicitar la información podrán ser únicamente recurridas por los particulares que tengan legitimación para hacerlo, que se sientan afectados.**
Artículo 21. Todo procedimiento en materia de derecho de acceso a la información deberá sustanciarse de manera sencilla y expedita, de conformidad con las bases de esta Ley.	**Artículo 21.** Todo procedimiento en materia de derecho de acceso a la ***Información***deberá sustanciarse de manera sencilla y expedita, de conformidad con las bases de esta Ley.
Artículo 22. En el procedimiento de acceso, entrega y publicación de la información se propiciarán las condiciones necesarias para que ésta sea accesible a cualquier persona, de conformidad con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.	**Artículo 22.** En el procedimiento de acceso, entrega y publicación de la ***Información*** se propiciarán las condiciones necesarias para que ésta sea accesible a cualquier persona, de conformidad con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Capítulo III **De los Sujetos Obligados** **Artículo 23.** Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal.	**Capítulo III** **De los Sujetos Obligados** **Artículo 23.** Son sujetos obligados a ***publicar en la plataforma electrónica nacional de transparencia,*** transparentar y permitir el acceso a su ***Información***y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos***, incluyendo sus grupos parlamentarios,*** fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal.
Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza: I. Constituir el Comité de Transparencia, las Unidades de Transparencia y vigilar su correcto funcionamiento de acuerdo a su normatividad interna; II. Designar en las Unidades de Transparencia a los titulares que dependan directamente del titular del sujeto obligado y que preferentemente cuenten con experiencia en la materia; III. Proporcionar capacitación continua y especializada al personal que forme parte de los Comités y Unidades de Transparencia; IV. Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental, conforme a la normatividad aplicable; V. Promover la generación, documentación y	**Artículo 24.** Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza: I. I. al V. … VI. VI. Proteger y resguardar la ***Información***clasificada como reservada o confidencial;

publicación de la información en Formatos Abiertos y Accesibles; VI. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial; VII. Reportar a los Organismos garantes competentes sobre las acciones de implementación de la normatividad en la materia, en los términos que éstos determinen; VIII. Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que, en materia de transparencia y acceso a la información, realicen los Organismos garantes y el Sistema Nacional; IX. Fomentar el uso de tecnologías de la información para garantizar la transparencia, el derecho de acceso a la información y la accesibilidad a éstos; X. Cumplir con las resoluciones emitidas por los Organismos garantes; XI. Publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de transparencia; XII. Difundir proactivamente información de interés público; XIII. Dar atención a las recomendaciones de los Organismos garantes, y XIV. Las demás que resulten de la normatividad aplicable.	VII. al VIII. IX. Fomentar el uso de tecnologías de la ***información***para garantizar la transparencia, el derecho de acceso a la ***Información*** y la accesibilidad a éstos; X. Cumplir con las resoluciones emitidas por los Organismos garantes; XI. Publicar y mantener actualizada la ***Información***relativa a las obligaciones de transparencia; XII. Difundir proactivamente ***Información***de interés público; XIII al XIV. …
TÍTULO SEGUNDO **RESPONSABLES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN** **Capítulo I** **Del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales** **Artículo 28.** El Sistema Nacional se integra por el conjunto orgánico y articulado de sus miembros, procedimientos, instrumentos y políticas, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano. Tiene como finalidad coordinar y evaluar las acciones relativas a la política pública transversal de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, así como establecer e implementar los criterios y lineamientos, de conformidad con lo señalado en la presente Ley y demás normatividad aplicable.	**TÍTULO SEGUNDO** **RESPONSABLES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN** **Capítulo I** **Del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales** **Artículo 28.** El Sistema Nacional se integra por el conjunto orgánico y articulado de sus miembros, procedimientos, instrumentos y políticas, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano. Tiene como finalidad coordinar y evaluar las acciones relativas a la política pública transversal de transparencia, acceso a la ***Información***y protección de datos personales, así como establecer e implementar los criterios y lineamientos, de conformidad con lo señalado en la presente Ley y demás normatividad aplicable.
Artículo 29. El Sistema Nacional se conformará a partir de la coordinación que se realice entre las distintas instancias que, en razón de sus ámbitos de competencia, contribuyen a la vigencia de la transparencia a nivel nacional, en los tres órdenes de	**Artículo 29.** El Sistema Nacional se conformará a partir de la coordinación que se realice entre las distintas instancias que, en razón de sus ámbitos de competencia, contribuyen a la vigencia de la transparencia a nivel nacional, en los tres órdenes de

gobierno. Este esfuerzo conjunto e integral, contribuirá a la generación de información de calidad, a la gestión de la información, al procesamiento de la misma como un medio para facilitar el conocimiento y evaluación de la gestión pública, la promoción del derecho de acceso a la información y la difusión de una cultura de la transparencia y su accesibilidad, así como a una fiscalización y rendición de cuentas efectivas.	gobierno. Este esfuerzo conjunto e integral, contribuirá a la generación de ***Información*** de calidad, a la gestión de la información, al procesamiento de la misma como un medio para facilitar el conocimiento y evaluación de la gestión pública, la promoción del derecho de acceso a la ***Información***y la difusión de una cultura de la transparencia y su accesibilidad, así como a una fiscalización y rendición de cuentas efectivas.
Artículo 31. El Sistema Nacional tiene como funciones: I. Establecer lineamientos, instrumentos, objetivos, indicadores, metas, estrategias, códigos de buenas prácticas, modelos y políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a cumplir con los objetivos de la presente Ley; II. Promover e implementar acciones para garantizar condiciones de accesibilidad para que los grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de condiciones, el derecho de acceso a la información; III. Desarrollar y establecer programas comunes de alcance nacional, para la promoción, investigación, diagnóstico y difusión en materias de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y apertura gubernamental en el país; IV. Establecer los criterios para la publicación de los indicadores que permitan a los sujetos obligados rendir cuentas del cumplimiento de sus objetivos y resultados obtenidos; V. Coadyuvar en la elaboración, fomento y difusión entre los sujetos obligados de los criterios para la sistematización y conservación de archivos que permitan localizar eficientemente la información pública de acuerdo a la normatividad en la materia; VI. Establecer lineamientos para la implementación de la Plataforma Nacional de Transparencia de conformidad con lo señalado en la presente Ley; VII. Establecer políticas en cuanto a la digitalización de la información pública en posesión de los sujetos obligados y el uso de tecnologías de información y la implementación de Ajustes Razonables, que garanticen el pleno acceso a ésta; VIII. Diseñar e implementar políticas en materia de generación, actualización, organización, clasificación, publicación, difusión, conservación y accesibilidad de la información pública de conformidad con la normatividad aplicable; IX. Promover la participación ciudadana a través de mecanismos eficaces en la planeación, implementación y evaluación de políticas en la materia; X. Establecer programas de profesionalización, actualización y capacitación de los Servidores Públicos e integrantes de los sujetos obligados en materia de transparencia, acceso a la información pública, así	**Artículo 31.** El Sistema Nacional tiene como funciones: I. I. al IV. … V. V. Coadyuvar en la elaboración, fomento y difusión entre los sujetos obligados de los criterios para la sistematización y conservación de archivos que permitan localizar eficientemente la ***Información***pública de acuerdo a la normatividad en la materia; VI. … VI. … VII. Establecer políticas en cuanto a la digitalización de la ***Información*** pública en posesión de los sujetos obligados y el uso de tecnologías de **Información**y la implementación de Ajustes Razonables, que garanticen el pleno acceso a ésta; VIII. Diseñar e implementar políticas en materia de generación, actualización, organización, clasificación, publicación, difusión, conservación y accesibilidad de la ***Información***pública de conformidad con la normatividad aplicable; IX. … X. Establecer programas de profesionalización, actualización y capacitación de los Servidores Públicos e integrantes de los sujetos obligados en materia de transparencia, acceso a la ***Información*** pública, así como de protección de datos personales;

como de protección de datos personales; XI. Emitir acuerdos y resoluciones generales para el funcionamiento del Sistema Nacional; XII. Aprobar, ejecutar y evaluar el Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información; XIII. Promover el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en toda la República mexicana; XIV. Promover la coordinación efectiva de las instancias que integran el Sistema Nacional y dar seguimiento a las acciones que para tal efecto se establezcan, y XV. Las demás que se desprendan de esta Ley. En el desarrollo de los criterios a que se refiere la fracción IV participará, al menos, un representante de cada uno de los integrantes del Sistema Nacional, así como un representante del Consejo Nacional de Armonización Contable, previsto en el artículo 6 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que tendrá derecho a voz y podrá presentar observaciones por escrito a dichos criterios, las cuales serán consideradas, pero no tendrán carácter obligatorio. Una vez que el Consejo Nacional apruebe los criterios, éstos serán obligatorios para todos los sujetos obligados.	XI al XII. … XIII. Promover el ejercicio del derecho de acceso a la ***Información*** pública en toda la República mexicana; XIV y XV. … …
Capítulo II **De los Organismos garantes** **Artículo 37.** Los Organismos garantes son autónomos, especializados, independientes, imparciales y colegiados, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsables de garantizar, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales, conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo previsto en esta Ley y demás disposiciones aplicables. En la Ley Federal y en la de las Entidades Federativas se determinará lo relativo a la estructura y funciones de los Organismos garantes, así como la integración, duración del cargo, requisitos, procedimiento de selección, régimen de incompatibilidades, excusas, renuncias, licencias y suplencias de los integrantes de dichos Organismos garantes, de conformidad con lo señalado en el presente Capítulo.	**Capítulo II** **De los Organismos garantes** **Artículo 37.** Los Organismos garantes son autónomos, especializados, independientes, imparciales y colegiados, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsables de garantizar, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de los derechos de acceso a la ***Información*** y la protección de datos personales, conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo previsto en esta Ley y demás disposiciones aplicables. **…**
Artículo 38. El Congreso de la Unión, los Congresos de las Entidades Federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de garantizar la integración	**Artículo 38.** El Congreso de la Unión, los Congresos de las Entidades Federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de garantizar la integración

colegiada y autónoma de los Organismos garantes, deberán prever en su conformación un número impar y sus integrantes se denominarán Comisionados. Procurarán en su conformación privilegiar la experiencia en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, así como procurar la igualdad de género. La duración del cargo no será mayor a siete años y se realizará de manera escalonada para garantizar el principio de autonomía. En los procedimientos para la selección de los Comisionados se deberá garantizar la transparencia, independencia y participación de la sociedad.	colegiada y autónoma de los Organismos garantes, deberán prever en su conformación un número impar y sus integrantes se denominarán Comisionados. Procurarán en su conformación privilegiar la experiencia en materia de acceso a la ***Información***pública y protección de datos personales, así como procurar la igualdad de género. La duración del cargo no será mayor a siete años y se realizará de manera escalonada para garantizar el principio de autonomía. …
Artículo 41. El Instituto, además de lo señalado en la Ley Federal y en el siguiente artículo, tendrá las siguientes atribuciones: I. Interpretar, en el ámbito de sus atribuciones, esta Ley; II. Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos obligados en el ámbito federal en términos de lo dispuesto en el Capítulo I del Título Octavo de la presente Ley; III. Conocer y resolver los recursos de inconformidad que interpongan los particulares, en contra de las resoluciones emitidas por los Organismos garantes de las Entidades Federativas que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información en términos de lo dispuesto en el Capítulo II, del Título Octavo de la presente Ley; IV. Conocer y resolver de oficio o a petición de los Organismos garantes de las Entidades Federativas los recursos de revisión que, por su interés o trascendencia, así lo ameriten, en términos de lo dispuesto en el Capítulo III del Título Octavo de la presente Ley; V. Encabezar y coordinar el Sistema Nacional de Transparencia; VI. Interponer, cuando así lo aprueben la mayoría de sus Comisionados, acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal, estatal o del Distrito Federal, así como de los tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho de acceso a la información; VII. Promover, cuando así lo aprueben la mayoría de sus Comisionados, las controversias constitucionales en términos del artículo 105, fracción I, inciso l), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; VIII. Establecer y ejecutar las medidas de apremio y sanciones, según corresponda, de conformidad con lo	**Artículo 41.** El Instituto, además de lo señalado en la Ley Federal y en el siguiente artículo, tendrá las siguientes atribuciones: I. I. al II. .. III. III. Conocer y resolver los recursos de inconformidad que interpongan los particulares, en contra de las resoluciones emitidas por los Organismos garantes de las Entidades Federativas que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la ***Información*** en términos de lo dispuesto en el Capítulo II, del Título Octavo de la presente Ley; IV. IV. a la IX. … X.

señalado en la presente Ley; IX. Suscribir convenios de colaboración con los Organismos garantes de las Entidades Federativas o con los sujetos obligados, con el objeto de vigilar el cumplimiento de la presente Ley y promover mejores prácticas en la materia; X. Elaborar y presentar un informe anual de actividades y de la evaluación general en materia de acceso a la información pública en el país, así como del ejercicio de su actuación y presentarlo ante la Cámara de Senadores, dentro de la segunda quincena del mes de enero, y hacerlo público, y XI. Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones en la materia.	X. Elaborar y presentar un informe anual de actividades y de la evaluacióngeneral en materia de acceso a la ***Información***pública en el país, así como del ejercicio de su actuación y presentarlo ante la Cámara de Senadores, dentro de la segunda quincena del mes de enero, y hacerlo público, y XI. …
Artículo 42. Los Organismos garantes tendrán, en el ámbito de su competencia, las siguientes atribuciones: I. Interpretar los ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de esta Ley y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos obligados en el ámbito local, en términos de lo dispuesto en el Capítulo I del Título Octavo de la presente Ley; III. Imponer las medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones; IV. Presentar petición fundada al Instituto para que conozca de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten; V. Promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información; VI. Promover la cultura de la transparencia en el sistema educativo; VII. Capacitar a los Servidores Públicos y brindar apoyo técnico a los sujetos obligados en materia de transparencia y acceso a la información; VIII. Establecer políticas de transparencia proactiva atendiendo a las condiciones económicas, sociales y culturales; IX. Suscribir convenios con los sujetos obligados que propicien la publicación de información en el marco de las políticas de transparencia proactiva; X. Suscribir convenios de colaboración con particulares o sectores de la sociedad cuando sus actividades o productos resulten de interés público o relevancia social; XI. Suscribir convenios de colaboración con otros	**Artículo 42.** Los Organismos garantes tendrán, en el ámbito de su competencia, las siguientes atribuciones: I. al VIII. … IX. Suscribir IX. Suscribir convenios con los sujetos obligados que propicien la publicación de ***Información*** en el marco de las políticas de transparencia proactiva; X. al XII. .X. al XII. … XIII.

Organismos garantes para el cumplimiento de sus atribuciones y promover mejores prácticas en la materia;	
XII. Promover la igualdad sustantiva;	
XIII. Coordinarse con las autoridades competentes para que en los procedimientos de acceso a la información, así como en los medios de impugnación, se contemple contar con la información necesaria en lenguas indígenas y Formatos Accesibles, para que sean sustanciados y atendidos en la misma lengua y, en su caso, se promuevan los Ajustes Razonables necesarios si se tratara de personas con discapacidad;	XIII. Coordinarse con las autoridades competentes para que en los procedimientos de acceso a la ***Información***, así como en los medios de impugnación, se contemple contar con la ***Información*** necesaria en lenguas indígenas y Formatos Accesibles, para que sean sustanciados y atendidos en la misma lengua y, en su caso, se promuevan los Ajustes Razonables necesarios si se tratara de personas con discapacidad;
XIV. Garantizar condiciones de accesibilidad para que los grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de circunstancias, su derecho de acceso a la información;	XIV. ..
XV. Según corresponda, interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que vulneren el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales;	XV.Según corresponda, interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que vulneren el derecho de acceso a la ***Información***pública y la protección de datos personales;
XVI. Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el conocimiento sobre la materia de acceso a la información;	XVI. al XXII. …
XVII. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás disposiciones aplicables;	
XVIII. Determinar y ejecutar, según corresponda, las sanciones, de conformidad con lo señalado en la presente Ley;	
XIX. Promover la participación y colaboración con organismos internacionales, en el análisis y mejores prácticas en materia de acceso a la información pública;	
XX. Los Organismos garantes, en el ejercicio de sus atribuciones y para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, fomentarán los principios de gobierno abierto, la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la accesibilidad y la innovación tecnológica;	
XXI. Los Organismos garantes podrán emitir recomendaciones a los sujetos obligados para diseñar, implementar y evaluar acciones de apertura gubernamental que permitan orientar las políticas internas en la materia, y	
XXII. Las demás que les confieran esta Ley y otras disposiciones aplicables	

Capítulo III **De los Comités de Transparencia**	**Capítulo III** **De los Comités de Transparencia**
Artículo 43. En cada sujeto obligado se integrará un Comité de Transparencia colegiado e integrado por un número impar.	**Artículo 43. …** …
El Comité de Transparencia adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. A sus sesiones podrán asistir como invitados aquellos que sus integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz pero no voto.	…
Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender jerárquicamente entre sí, tampoco podrán reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando se presente el caso, el titular del sujeto obligado tendrá que nombrar a la persona que supla al subordinado.	
Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la información para determinar su clasificación, conforme a la normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda de la información.	Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la ***Información***para determinar su clasificación, conforme a la normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda de la información. …
El Centro de Investigación y Seguridad Nacional; el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia; el Centro Federal de Protección a Personas; la Dirección de Coordinación de Inteligencia de la Comisión Nacional de Seguridad; la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; la Unidad de Inteligencia Financiera; el Estado Mayor Presidencial, el Estado Mayor de la Defensa Nacional, el Estado Mayor General de la Armada, la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica y la del Instituto Federal de Telecomunicaciones o bien, las unidades administrativas que los sustituyan, no estarán sujetos a la autoridad de los Comités de Transparencia a que se refiere el presente artículo, siendo sus funciones responsabilidad exclusiva del titular de la propia entidad o unidad administrativa. La clasificación, desclasificación y acceso a la información que generen o custodien las instancias de inteligencia e investigación deberá apegarse a los términos previstos en la presente Ley y a los protocolos de seguridad y resguardo establecidos para ello.	La clasificación, desclasificación y acceso a la ***Información***que generen o custodien las instancias de inteligencia e investigación deberá apegarse a los términos previstos en la presente Ley y a los protocolos de seguridad y resguardo establecidos para ello.
Artículo 44. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:	**Artículo 44.** Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:
I. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la	I. I. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la ***implementación de los mecanismos*** en materia de

información; II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; III. Ordenar, en su caso, a las Áreas competentes que generen la información que derivado de sus facultades, competencias y funciones deban tener en posesión o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga, de forma fundada y motivada, las razones por las cuales, en el caso particular, no ejercieron dichas facultades, competencias o funciones; IV. Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho de acceso a la información; V. Promover la capacitación y actualización de los Servidores Públicos o integrantes adscritos a las Unidades de Transparencia; VI. Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales, para todos los Servidores Públicos o integrantes del sujeto obligado; VII. Recabar y enviar al organismo garante, de conformidad con los lineamientos que estos expidan, los datos necesarios para la elaboración del informe anual; VIII. Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información a que se refiere el artículo 101 de la presente Ley, y IX. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable.	acceso a la información; II. II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la ***Información***y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; III. III. Ordenar, en su caso, a las Áreas competentes que generen la ***Información***que derivado de sus facultades, competencias y funciones deban tener en posesión o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga, de forma fundada y motivada, las razones por las cuales, en el caso particular, no ejercieron dichas facultades, competencias o funciones; IV. IV. Establecer políticas para facilitar ***la plena publicidad de laInformaciónde la dependencia de que se trate, para garantizar debidamente*** el ejercicio del derecho de acceso a la información; V. V. al VII. … VIII. VIII. Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la I***nformación***a que se refiere el artículo 101 de la presente Ley, y IX. . …
Capítulo IV **De las Unidades de Transparencia** **Artículo 45.** Los sujetos obligados designarán al responsable de la Unidad de Transparencia que tendrá las siguientes funciones: I. Recabar y difundir la información a que se refieren los Capítulos II, III, IV y V del Título Quinto de esta Ley, así como la correspondiente de la Ley Federal y de las Entidades Federativas y propiciar que las Áreas la actualicen periódicamente, conforme la normatividad aplicable; II. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; III. Auxiliar a los particulares en la elaboración de	**Capítulo IV** **De las Unidades de Transparencia** **Artículo 45.** Los sujetos obligados designarán al responsable de la Unidad de Transparencia que tendrá las siguientes funciones: I. I. Recabar y difundir la **Información** a que se refieren los Capítulos II, III, IV y V del Título Quinto de esta Ley, así como la correspondiente de la Ley Federal y de las Entidades Federativas y propiciar que las Áreas la actualicen periódicamente, conforme la normatividad aplicable; II. II. ***Implementar los sistemas*** de acceso a la información;

solicitudes de acceso a la información y, en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable; IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la información; V. Efectuar las notificaciones a los solicitantes; VI. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la normatividad aplicable; VII. Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; VIII. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, costos de reproducción y envío; IX. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad; X. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado; XI. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás disposiciones aplicables, y XII. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable. Los sujetos obligados promoverán acuerdos con instituciones públicas especializadas que pudieran auxiliarles a entregar las repuestas a solicitudes de información, en la lengua indígena, braille o cualquier formato accesible correspondiente, en forma más eficiente.	III. III. Auxiliar a los particulares ***para la obtención de la Información pertinente que deseen*** obtener ***Información*** y, en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable; IV. IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de ***la máxima publicidada que los sujetos obligados deben llevar a cabo;*** V. ***Llevar a cabo las comunicaciones con los solicitantes;*** VI. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en la gestión de acceso a la información, conforme a la normatividad aplicable; VII. . … VII. … VIII. VIII. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas y resultados. IX. IX. Promover e implementar **las** políticas de transparencia, ***en cumplimiento con los mandatos de máxima publicidad establecidos en esta Ley;*** X. X. ***Llevar a cabo las acciones necesarias parala máxima*** transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado; XI. XII. al XII. … Los sujetos obligados promoverán acuerdos con instituciones públicas especializadas que pudieran auxiliarles ***a implementar las obligaciones de máxima publicidad establecidas en esta Ley, así como los mecanismos para proporcionar Información*** en la lengua indígena, braille o cualquier formato accesible correspondiente, en forma más eficiente.
Artículo 46. Cuando alguna Area de los sujetos obligados se negare a colaborar con la Unidad de Transparencia, ésta dará aviso al superior jerárquico para que le ordene realizar sin demora las acciones conducentes. Cuando persista la negativa de colaboración, la Unidad de Transparencia lo hará del conocimiento de la	**Artículo 46.** Cuando alguna Area de los sujetos obligados se negar**a** a colaborar con la Unidad de Transparencia, ésta dará aviso al superior jerárquico para que le ordene realizar sin demora las acciones conducentes. **…**

autoridad competente para que ésta inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad respectivo.	
Artículo 48. Los Consejos Consultivos contarán con las siguientes facultades: I. Opinar sobre el programa anual de trabajo y su cumplimiento; II. Opinar sobre el proyecto de presupuesto para el ejercicio del año siguiente; III. Conocer el informe de los Organismos garantes sobre el presupuesto asignado a programas y el ejercicio presupuestal y emitir las observaciones correspondientes; IV. Emitir opiniones no vinculantes, a petición de los Organismos garantes o por iniciativa propia, sobre temas relevantes en las materias de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales; V. Emitir opiniones técnicas para la mejora continua en el ejercicio de las funciones sustantivas de los Organismos garantes; VI. Opinar sobre la adopción de criterios generales en materia sustantiva, y VII. Analizar y proponer la ejecución de programas, proyectos y acciones relacionadas con la materia de transparencia y acceso a la información y su accesibilidad.	**Artículo 48.** Los Consejos Consultivos contarán con las siguientes facultades: I. al VI. … VII. Analizar y proponer la ejecución de programas, proyectos y acciones relacionadas con la materia de transparencia y acceso a la ***Información*** y su accesibilidad.
TÍTULO TERCERO **PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA** **Artículo 51.** Los Organismos garantes promoverán la publicación de la información de Datos Abiertos y Accesibles.	**TÍTULO TERCERO** **PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA** **Artículo 51.** Los Organismos garantes promoverán la publicación de la ***Información*** de Datos Abiertos y Accesibles.
TÍTULO CUARTO **CULTURA DE TRANSPARENCIA Y APERTURA GUBERNAMENTAL** **Capítulo I** **De la promoción de la transparencia y el derecho de acceso a la información** **Artículo 53.** Los sujetos obligados deberán cooperar con los Organismos garantes competentes para capacitar y actualizar, de forma permanente, a todos sus Servidores Públicos en materia del derecho de acceso a la información, a través de los medios que se considere pertinente. Con el objeto de crear una cultura de la transparencia y acceso a la información entre los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos, los Organismos garantes deberán promover, en colaboración con instituciones educativas y culturales del sector público o privado,	**TÍTULO CUARTO** **CULTURA DE TRANSPARENCIA Y APERTURA GUBERNAMENTAL** **Capítulo I** **De la promoción de la transparencia y el derecho de acceso a la *Información*** **Artículo 53.**… Con el objeto de crear una cultura de la transparencia y acceso a la ***Información*** entre los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos, los Organismos garantes deberán promover, en colaboración con instituciones educativas y culturales del sector público o privado, actividades, mesas de trabajo, exposiciones y concursos relativos a la transparencia y acceso a la información.

actividades, mesas de trabajo, exposiciones y concursos relativos a la transparencia y acceso a la información.	
Artículo 54. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus respectivas competencias o a través de los mecanismos de coordinación que al efecto establezcan, podrán: I. Proponer, a las autoridades educativas competentes que incluyan contenidos sobre la importancia social del derecho de acceso a la información en los planes y programas de estudio de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y para la formación de maestros de educación básica en sus respectivas jurisdicciones; II. Promover, entre las instituciones públicas y privadas de educación media superior y superior, la inclusión, dentro de sus programas de estudio, actividades académicas curriculares y extracurriculares, de temas que ponderen la importancia social del derecho de acceso a la información y rendición de cuentas; III. Promover, que en las bibliotecas y entidades especializadas en materia de archivos se prevea la instalación de módulos de información pública, que faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información y la consulta de la información derivada de las obligaciones de transparencia a que se refiere esta Ley; IV. Proponer, entre las instituciones públicas y privadas de educación superior, la creación de centros de investigación, difusión y docencia sobre transparencia, derecho de acceso a la información y rendición de cuentas; V. Establecer, entre las instituciones públicas de educación, acuerdos para la elaboración y publicación de materiales que fomenten la cultura del derecho de acceso a la información y rendición de cuentas; VI. Promover, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, la participación ciudadana y de organizaciones sociales en talleres, seminarios y actividades que tengan por objeto la difusión de los temas de transparencia y derecho de acceso a la información; VII. Desarrollar, programas de formación de usuarios de este derecho para incrementar su ejercicio y aprovechamiento, privilegiando a integrantes de sectores vulnerables o marginados de la población; VIII. Impulsar, estrategias que pongan al alcance de los diversos sectores de la sociedad los medios para el ejercicio del derecho de acceso a la información,	**Artículo 54.** … I. I. Proponer, a las autoridades educativas competentes que incluyan contenidos sobre la importancia social del derecho de acceso a la ***Información*** en los planes y programas de estudio de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y para la formación de maestros de educación básica en sus respectivas jurisdicciones; II. II. Promover, entre las instituciones públicas y privadas de educación media superior y superior, la inclusión, dentro de sus programas de estudio, actividades académicas curriculares y extracurriculares, de temas que ponderen la importancia social del derecho de acceso a la ***Información*** y rendición de cuentas; III. III. Promover, que en las bibliotecas y entidades especializadas en materia de archivos se prevea la instalación de módulos de información pública, que faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la ***Información*** y la consulta de la ***Información***derivada de las obligaciones de transparencia a que se refiere esta Ley; IV. IV. Proponer, entre las instituciones públicas y privadas de educación superior, la creación de centros de investigación, difusión y docencia sobre transparencia, derecho de acceso a la ***Información***y rendición de cuentas; V. V. Establecer, entre las instituciones públicas de educación, acuerdos para la elaboración y publicación de materiales que fomenten la cultura del derecho de acceso a la ***Información*** y rendición de cuentas; VI. a. IX. …

acordes a su contexto sociocultural, y IX. Desarrollar, con el concurso de centros comunitarios digitales y bibliotecas públicas, universitarias, gubernamentales y especializadas, programas para la asesoría y orientación de sus usuarios en el ejercicio y aprovechamiento del derecho de acceso a la información.	
Artículo 55. Para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley, los sujetos obligados podrán desarrollar o adoptar, en lo individual o en acuerdo con otros sujetos obligados, esquemas de mejores prácticas que tengan por objeto: I. Elevar el nivel de cumplimiento de las disposiciones previstas en la presente Ley; II. Armonizar el acceso a la información por sectores; III. Facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información a las personas, y IV. Procurar la accesibilidad de la información.	**Artículo 55.** … I. … I. … II. II. Armonizar el acceso a la ***Información*** por sectores; III. III. Facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la ***Información***a las personas, y IV. IV. Procurar la accesibilidad de la ***Información.***
Capítulo II **De la *Implementación de la Máxima Publicidad*** **Artículo 56.** Los Organismos garantes emitirán políticas de transparencia proactiva, en atención a los lineamientos generales definidos para ello por el Sistema Nacional, diseñadas para incentivar a los sujetos obligados a publicar información adicional a la que establece como mínimo la presente Ley. Dichas políticas tendrán por objeto, entre otros, promover la reutilización de la información que generan los sujetos obligados, considerando la demanda de la sociedad, identificada con base en las metodologías previamente establecidas.	**Capítulo II** **De la *Implementación de la Máxima Publicidad*** **Artículo 56.** Los Organismos garantes emitirán políticas para ***el establecimiento de la máxima publicidad y plena transparencia en todos los sujetos obligados***, en atención a los lineamientos generales definidos para ello por el Sistema Nacional, diseñadas para incentivar a los sujetos obligados a publicar I***nformación***. Dichas políticas tendrán por objeto, entre otros, promover la reutilización de la ***Información***que generan los sujetos obligados, considerando la demanda de la sociedad, identificada con base en las metodologías previamente establecidas.
Artículo 57. La información publicada por los sujetos obligados, en el marco de la política de transparencia proactiva, se difundirá en los medios y formatos que más convengan al público al que va dirigida.	**Artículo 57.** La ***Información*** publicada por los sujetos obligados, en el marco de la política de máxima publicidad, se difundirá en los medios y formatos que más convengan al público al que va dirigida.
Artículo 58. El Sistema Nacional emitirá los criterios para evaluar la efectividad de la política de la transparencia proactiva, considerando como base, la reutilización que la sociedad haga a la información. La información que se publique, como resultado de las políticas de transparencia, deberá permitir la generación de conocimiento público útil, para disminuir asimetrías de la información, mejorar los accesos a trámites y servicios, optimizar la toma de decisiones de autoridades o ciudadanos y deberá tener un objeto claro enfocado en las necesidades de sectores de la sociedad determinados o determinables.	**Artículo 58.** El Sistema Nacional emitirá los criterios para evaluar la efectividad de la política de ***máxima publicidad***, considerando como base, la reutilización que la sociedad haga a la información. La ***Información*** que se publique, como resultado de las políticas de ***máxima publicidad***, deberá permitir la generación de conocimiento público útil, para ***eliminar*** asimetrías de la información, mejorar los accesos a trámites y servicios, optimizar la toma de decisiones de autoridades o ciudadanos y deberá tener un objeto claro enfocado en las necesidades de sectores de la sociedad determinados o determinables.

Capítulo III **Del Gobierno Abierto** **Artículo 59.** Los Organismos garantes, en el ámbito de sus atribuciones coadyuvarán, con los sujetos obligados y representantes de la sociedad civil en la implementación de mecanismos de colaboración para la promoción e implementación de políticas y mecanismos de apertura gubernamental.	**Capítulo III** **Del Gobierno Abierto** **Artículo 59.** Los Organismos garantes, en el ámbito de sus atribuciones coadyuvarán, con los sujetos obligados y representantes de la sociedad civil en la implementación de mecanismos de colaboración para la promoción e implementación de políticas y mecanismos de apertura gubernamental, ***para generar una interacción cotidiana de la ciudadanía con el gobierno, a fin de desarrollar mecanismos para el establecimiento de políticas públicas generadas por la interacción mencionada anteriormente.***
TÍTULO QUINTO **OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA** **Capítulo I** **De las disposiciones generales** **Artículo 60.** Las leyes en materia de transparencia y acceso a la información, en el orden federal y en las Entidades Federativas, establecerán la obligación de los sujetos obligados de poner a disposición de los particulares la información a que se refiere este Título en los sitios de Internet correspondientes de los sujetos obligados y a través de la Plataforma Nacional.	**TÍTULO QUINTO** **OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA** **Capítulo I** **De las disposiciones generales** **Artículo 60.** Las leyes en materia de transparencia y acceso a la información, en el orden federal y en las Entidades Federativas, establecerán la obligación de los sujetos obligados de poner a disposición de los particulares la ***Información***a que se refiere este Título en los sitios de Internet correspondientes de los sujetos obligados y a través de la Plataforma Nacional.
Artículo 61. Los lineamientos técnicos que emita el Sistema Nacional establecerán los formatos de publicación de la información para asegurar que la información sea veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible, verificable. Estos lineamientos contemplarán la homologación en la presentación de la información a la que hace referencia este Título por parte de los sujetos obligados.	**Artículo 61.** Los lineamientos técnicos que emita el Sistema Nacional establecerán los formatos de publicación de la ***Información*** para asegurar que la ***Información*** sea veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible, verificable. Estos lineamientos contemplarán la homologación en la presentación de la ***Información***a la que hace referencia este Título por parte de los sujetos obligados.
Artículo 62. La información correspondiente a las obligaciones de transparencia deberá actualizarse por lo menos cada tres meses, salvo que en la presente Ley o en otra disposición normativa se establezca un plazo diverso. El Sistema Nacional emitirá los criterios para determinar el plazo mínimo que deberá permanecer disponible y accesible la información, atendiendo a las cualidades de la misma. La publicación de la información deberá indicar el sujeto obligado encargado de generarla, así como la fecha de su última actualización.	**Artículo 62.** La ***Información*** correspondiente a las obligaciones de ***reserva de Información***deberá actualizarse por lo menos cada tres meses, salvo que en la presente Ley o en otra disposición normativa se establezca un plazo diverso. El Sistema Nacional emitirá los criterios para determinar el plazo ***máximo*** que deberá permanecer ***bajo reserva*** la Información, atendiendo a ***los casos específicos establecidos por esta Ley.***
Artículo 63. Los Organismos garantes, de oficio o a petición de los particulares, verificarán el cumplimiento que los sujetos obligados den a las disposiciones previstas en este Título. Las denuncias presentadas por los particulares podrán realizarse en cualquier momento, de conformidad con	**Artículo 63.** Los Organismos garantes, de oficio o a petición de los ***sujetos*** obligados, ***verificarán los casos en que se la Información deba ser reservada, así como*** el cumplimiento que los sujetos obligados den a las disposiciones previstas en este Título. …

el procedimiento señalado en la presente Ley.	
Artículo 64. La página de inicio de los portales de Internet de los sujetos obligados tendrá un vínculo de acceso directo al sitio donde se encuentra la información pública a la que se refiere este Título, el cual deberá contar con un buscador. La información de obligaciones de transparencia deberá publicarse con perspectiva de género y discapacidad, cuando así corresponda a su naturaleza.	**Artículo 64.** La página de inicio de los portales de Internet de los sujetos obligados tendrá un vínculo de acceso directo al sitio donde se encuentra la I***nformación***pública a la que se refiere este Título, el cual deberá contar con un buscador. La ***Información*** de transparencia deberá publicarse con perspectiva de género y discapacidad, cuando así corresponda a su naturaleza.
Artículo 65. Los Organismos garantes y los sujetos obligados establecerán las medidas que faciliten el acceso y búsqueda de la información para personas con discapacidad y se procurará que la información publicada sea accesible de manera focalizada a personas que hablen alguna lengua indígena. Por lo que, por sí mismos o a través del Sistema Nacional, deberán promover y desarrollar de forma progresiva, políticas y programas tendientes a garantizar la accesibilidad de la información en la máxima medida posible. Se promoverá la homogeneidad y la estandarización de la información, a través de la emisión de lineamientos y de formatos por parte del Sistema Nacional.	**Artículo 65.** Los Organismos garantes y los sujetos obligados establecerán las medidas que faciliten el acceso y búsqueda de la ***Información***para personas con discapacidad y se procurará que la ***Información***publicada sea accesible de manera focalizada a personas que hablen alguna lengua indígena. Por lo que, por sí mismos o a través del Sistema Nacional, deberán promover y desarrollar de forma progresiva, políticas y programas tendientes a garantizar la accesibilidad de la ***Información*** en la máxima medida posible. **. …**
Artículo 66. Los sujetos obligados pondrán a disposición de las personas interesadas equipos de cómputo con acceso a Internet, que permitan a los particulares consultar la información o utilizar el sistema de solicitudes de acceso a la información en las oficinas de las Unidades de Transparencia. Lo anterior, sin perjuicio de que adicionalmente se utilicen medios alternativos de difusión de la información, cuando en determinadas poblaciones éstos resulten de más fácil acceso y comprensión.	**Artículo 66.** Los sujetos obligados pondrán a disposición de las personas interesadas equipos de cómputo con acceso a Internet, que permitan a los particulares consultar la ***Información***o utilizar el sistema de solicitudes de acceso a la ***Información***en las oficinas de las Unidades de Transparencia. Lo anterior, sin perjuicio de que adicionalmente se utilicen medios alternativos de difusión de la información, cuando en determinadas poblaciones éstos resulten de más fácil acceso y comprensión.
Artículo 67. La información publicada por los sujetos obligados, en términos del presente Título, no constituye propaganda gubernamental. Los sujetos obligados, incluso dentro de los procesos electorales, a partir del inicio de las precampañas y hasta la conclusión del proceso electoral, deberán mantener accesible la información en el portal de obligaciones de transparencia, salvo disposición expresa en contrario en la normatividad electoral.	**Artículo 67.** La ***Información*** publicada por los sujetos obligados, en términos del presente Título, no constituye propaganda gubernamental. Los sujetos obligados, incluso dentro de los procesos electorales, a partir del inicio de las precampañas y hasta la conclusión del proceso electoral, deberán mantener accesible la ***Información***en el portal de obligaciones de transparencia, salvo disposición expresa en contrario en la normatividad electoral.
Artículo 68. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión y, en relación con éstos, deberán: I. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de	**Artículo 68. …** I. I. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de datos, en los casos que sea procedente, así como

datos, en los casos que sea procedente, así como capacitar a los Servidores Públicos y dar a conocer información sobre sus políticas en relación con la protección de tales datos, de conformidad con la normatividad aplicable; II. Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los propósitos para los cuales se hayan obtenido o dicho tratamiento se haga en ejercicio de las atribuciones conferidas por ley; III. Poner a disposición de los individuos, a partir del momento en el cual se recaben datos personales, el documento en el que se establezcan los propósitos para su tratamiento, en términos de la normatividad aplicable, excepto en casos en que el tratamiento de los datos se haga en ejercicio de las atribuciones conferidas por ley; IV. Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados; V. Sustituir, rectificar o completar, de oficio, los datos personales que fueren inexactos, ya sea total o parcialmente, o incompletos, en el momento en que tengan conocimiento de esta situación, y VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la información de acuerdo a la normatividad aplicable. Lo anterior, sin perjuicio a lo establecido por el artículo 120 de esta Ley.	capacitar a los Servidores Públicos y dar a conocer ***Información*** sobre sus políticas en relación con la protección de tales datos, de conformidad con la normatividad aplicable; II. II. al VI. …. Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la ***Información*** de acuerdo a la normatividad aplicable. Lo anterior, sin perjuicio a lo establecido por el artículo 120 de esta Ley.
Capítulo II **De las obligaciones de transparencia comunes** **Artículo 70.** En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: I. El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, políticas,	**Capítulo II** **De las obligaciones de transparencia comunes** **Artículo 70.** En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información***, todos*** los temas, documentos y políticas ***públicas ,incluyendo, sin limitación de toda la Informaciónde los actos administrativos, de gobierno y de las cuentas del erario público, así como fideicomisos y fondos. A manera enunciativa más no limitativa, incluirá la siguiente información:***

entre otros; II. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables; III. Las facultades de cada Área; IV. Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas operativos; V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus funciones, deban establecer; VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados; VII. El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales; VIII. La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración; IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente; X. El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa; XI. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación; XII. La información en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales de los Servidores Públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la normatividad aplicable; XIII. El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de la dirección electrónica donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la información; XIV. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos; XV. La información de los programas de subsidios,	I. I al XI. .. XII. XII. La ***Información*** en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales de los Servidores Públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la normatividad aplicable; XIII. XIII. al XIV. .. XV. La ***Información*** de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, en los

estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente: a) Área; b) Denominación del programa; c) Periodo de vigencia; d) Diseño, objetivos y alcances; e) Metas físicas; f) Población beneficiada estimada; g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación presupuestal; h) Requisitos y procedimientos de acceso; i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; j) Mecanismos de exigibilidad; k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones; l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo; m) Formas de participación social; n) Articulación con otros programas sociales; o) Vínculo a las reglas de operación o Documento equivalente; p) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas, y q) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso, edad y sexo; XVI. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos; XVII. La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto; XVIII. El listado de Servidores Públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la causa de sanción y la disposición; XIX. Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos; XX. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen; XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral	que se deberá contener lo siguiente: a) a) al q). … b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) w) x) y) z) aa) bb) XVI. … … XVII. XVII. La ***Información*** curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto; XVIII. XVIII al XX. … XXI. XXI. La ***Información*** financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable; XXII. XXII. La ***Información*** relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable;

del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable;	XXIII. XXIII al XXVII. …
XXII. La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable;	XXVIII.
XXIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña;	
XXIV. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan;	
XXV. El resultado de la dictaminación de los estados financieros;	
XXVI. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos;	XXVIII. La ***Información*** sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente:
XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos;	a) a) al b). …
XXVIII. La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente:	b)
a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:	c)
1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;	d)
2. Los nombres de los participantes o invitados;	e)
3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican;	f)
4. El Área solicitante y la responsable de su ejecución;	g)
5. Las convocatorias e invitaciones emitidas;	h)
6. Los dictámenes y fallo de adjudicación;	i)
7. El contrato y, en su caso, sus anexos;	j)
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda;	k)
9. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el caso de ser	l)
	m)
	n)
	o)
	p)
	q)
	r)
	s)
	t)
	u)
	v)
	w)
	x)
	y)
	z)
	aa)

aplicable; 10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, así como el tipo de fondo de participación o aportación respectiva; 11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de celebración; 12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados; 13. El convenio de terminación, y 14. El finiquito; b) De las adjudicaciones directas: 1. La propuesta enviada por el participante; 2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo; 3. La autorización del ejercicio de la opción; 4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y los montos; 5. El nombre de la persona física o moral adjudicada; 6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra; 8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda; 9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados; 10. El convenio de terminación, y 11. El finiquito; XXIX. Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados; XXX. Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación posible; XXXI. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero; XXXII. Padrón de proveedores y contratistas; XXXIII. Los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado; XXXIV. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad; XXXV. Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos, así como las acciones que han llevado a cabo para su atención; XXXVI. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio; XXXVII. Los mecanismos de participación ciudadana;	bb) cc) dd) ee) ff) gg) hh) ii) jj) kk) ll) mm) nn) oo) pp) qq) rr) ss) tt) uu) XXIX al XXXVII. .. XXIX.al XVIII. LoXXXVIII. programas que ofrecen, incluyendo ***Información***sobre la población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos; XXXIX. XXXIX al XLVII. …XLVII

XXXVIII. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos; XXXIX. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados; XL. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas financiados con recursos públicos; XLI. Los estudios financiados con recursos públicos; XLII. El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben; XLIII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos; XLIV. Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie; XLV. El catálogo de disposición y guía de archivo documental; XLVI. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos consultivos; XLVII. Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para la intervención de comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicaciones y la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, que contenga exclusivamente el objeto, el alcance temporal y los fundamentos legales del requerimiento, así como, en su caso, la mención de que cuenta con la autorización judicial correspondiente, y XLVIII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público. Los sujetos obligados deberán informar a los Organismos garantes y verificar que se publiquen en la Plataforma Nacional, cuáles son los rubros que son aplicables a sus páginas de Internet, con el objeto de que éstos verifiquen y aprueben, de forma fundada y motivada, la relación de fracciones aplicables a cada sujeto obligado.	CualquieXLVIII Cualquier otra ***Información*** que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, con base en la ***Información*** estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público. Los sujetos obligados deberán informar a los Organismos garantes y verificar que se publiquen en la Plataforma Nacional, cuáles son ***todos los rubros de la administración pública***, a sus páginas de Internet, con el objeto de que éstos verifiquen y aprueben, de forma fundada y motivada, la relación de fracciones aplicables a cada sujeto obligado.
Capítulo III **De las obligaciones de transparencia específicas de los sujetos obligados** **Artículo 71.** Además de lo señalado en el artículo anterior de la presente Ley, los sujetos obligados de los	**Capítulo III** **De las obligaciones de transparencia específicas de los sujetos obligados** **Artículo 71.** Además de lo señalado en el artículo anterior de la presente Ley, los sujetos obligados de los Poderes Ejecutivos Federal, de las Entidades Federativas

Poderes Ejecutivos Federal, de las Entidades Federativas y municipales, deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:	y municipales, deberán poner a disposición del público y actualizar ***todos los temas, documentos y políticas públicas, incluyendo, sin limitación, toda la Informaciónde los actos administrativos, de gobierno y de las cuentas del erario público, así como fideicomisos y fondos. A manera enunciativa más no limitativa, incluirá*** la siguiente información:
I. En el caso del Poder Ejecutivo Federal, los poderes ejecutivos de las Entidades Federativas, el Órgano Ejecutivo del Distrito Federal y los municipios:	I. …
a) El Plan Nacional de Desarrollo, los planes estatales de desarrollo o el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, según corresponda;	a) al c) …
b) El presupuesto de egresos y las fórmulas de distribución de los recursos otorgados;	I.I. Id)
c) El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya, cuando menos, la fecha de expropiación, el domicilio y la causa de utilidad pública y las ocupaciones superficiales;	
d) El nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de los contribuyentes a los que se les hubiera cancelado o condonado algún crédito fiscal, así como los montos respectivos. Asimismo, la información estadística sobre las exenciones previstas en las disposiciones fiscales;	El no d) El nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de los contribuyentes a los que se les hubiera cancelado o condonado algún crédito fiscal, así como los montos respectivos. Asimismo, la ***Información***estadística sobre las exenciones previstas en las disposiciones fiscales;
e) Los nombres de las personas a quienes se les habilitó para ejercer como corredores y notarios públicos, así como sus datos de contacto, la información relacionada con el proceso de otorgamiento de la patente y las sanciones que se les hubieran aplicado;	e) Loe) e) Los nombres de las personas a quienes se les habilitó para ejercer como corredores y notarios públicos, así como sus datos de contacto, la ***Información***relacionada con el proceso de otorgamiento de la patente y las sanciones que se les hubieran aplicado;
f) La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de uso y construcción otorgadas por los gobiernos municipales, y	f) f) La ***Información***detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de uso y construcción otorgadas por los gobiernos municipales, y
g) Las disposiciones administrativas, directamente o a través de la autoridad competente, con el plazo de anticipación que prevean las disposiciones aplicables al sujeto obligado de que se trate, salvo que su difusión pueda comprometer los efectos que se pretenden lograr con la disposición o se trate de situaciones de emergencia, de conformidad con dichas disposiciones.	ggggg). …
II. Adicionalmente, en el caso de los municipios:	II. …
a) El contenido de las gacetas municipales, las cuales deberán comprender los resolutivos y acuerdos aprobados por los ayuntamientos, y	II.II… II. …
b) Las actas de sesiones de cabildo, los controles de asistencia de los integrantes del Ayuntamiento a las sesiones de cabildo y el sentido de votación de los miembros del cabildo sobre las iniciativas o acuerdos.	

Artículo 72. Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, los sujetos obligados de los Poderes Legislativos Federal, de las Entidades Federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:	**Artículo 72.** ***De manera enunciativa más no limitativa, a***demás de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, los sujetos obligados de los Poderes Legislativos Federal, de las Entidades Federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:
I. Agenda legislativa;	I. I. al X. …
II. Gaceta Parlamentaria;	
III. Orden del Día;	XI.
IV. El Diario de Debates;	
V. Las versiones estenográficas;	
VI. La asistencia de cada una de sus sesiones del Pleno y de las Comisiones y Comités;	
VII. Las iniciativas de ley o decretos, puntos de acuerdo, la fecha en que se recibió, las Comisiones a las que se turnaron, y los dictámenes que, en su caso, recaigan sobre las mismas;	
VIII. Las leyes, decretos y acuerdos aprobados por el órgano legislativo;	
IX. Las convocatorias, actas, acuerdos, listas de asistencia y votación de las comisiones y comités y de las sesiones del Pleno, identificando el sentido del voto, en votación económica, y por cada legislador, en la votación nominal y el resultado de la votación por cédula, así como votos particulares y reservas de los dictámenes y acuerdos sometidos a consideración;	
X. Las resoluciones definitivas sobre juicios políticos y declaratorias de procedencia;	
XI. Las versiones públicas de la información entregada en las audiencias públicas, comparecencias y en los procedimientos de designación, ratificación, elección, reelección o cualquier otro;	XI. Las versiones públicas de la ***Información*** entregada en las audiencias públicas, comparecencias y en los procedimientos de designación, ratificación, elección, reelección o cualquier otro;
XII. Las contrataciones de servicios personales señalando el nombre del prestador del servicio, objeto, monto y vigencia del contrato de los órganos de gobierno, Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación;	XII. XII al XV. …
XIII. El informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos financieros de los órganos de gobierno, Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación;	
XIV. Los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza económica, política y social que realicen los centros de estudio o investigación legislativa, y	

XV. El padrón de cabilderos, de acuerdo a la normatividad aplicable.	
Artículo 73. Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, los sujetos obligados de los Poderes Judiciales Federal y de las Entidades Federativas deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información: I. I. Las tesis y ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación o en la Gaceta respectiva de cada tribunal administrativo, incluyendo, tesis jurisprudenciales y aisladas; II. II. Las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público; III. III. Las versiones estenográficas de las sesiones públicas; IV. IV. La relacionada con los procesos por medio de los cuales fueron designados los jueces y magistrados, y V.V. V. La lista de acuerdos que diariamente se publiquen.	**Artículo 73.** ***De manera enunciativa más no limitativa, además*** de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, los sujetos obligados de los Poderes Judiciales Federal y de las Entidades Federativas deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información: I. I al V. …
Artículo 74. Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, los órganos autónomos deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información: I. Instituto Nacional Electoral y organismos públicos locales electorales de las Entidades Federativas: a) Los listados de partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos registrados ante la autoridad electoral; b) Los informes que presenten los partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos; c) La geografía y cartografía electoral; d) El registro de candidatos a cargos de elección popular; e) El catálogo de estaciones de radio y canales de televisión, pautas de transmisión, versiones de spots de los institutos electorales y de los partidos políticos; f) Los montos de financiamiento público por actividades ordinarias, de campaña y específicas otorgadas a los partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos y demás asociaciones políticas, así como los montos autorizados de financiamiento privado y los topes de los gastos de campañas;	**Artículo 74.** ***De manera enunciativa más no limitativa, además*** de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, los órganos autónomos deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información: I. I. … a) a la k) … a)

g) La metodología e informes sobre la publicación de encuestas por muestreo, encuestas de salida y conteos rápidos financiados por las autoridades electorales competentes;	
h) La metodología e informe del Programa de Resultados Preliminares Electorales;	
i) Los cómputos totales de las elecciones y procesos de participación ciudadana;	l)
j) Los resultados y declaraciones de validez de las elecciones;	
k) Las franquicias postales y telegráficas asignadas al partido político para el cumplimiento de sus funciones;	l) La ***Información***sobre votos de mexicanos residentes en el extranjero;
l) La información sobre votos de mexicanos residentes en el extranjero;	m) m) al n) …
m) Los dictámenes, informes y resoluciones sobre pérdida de registro y liquidación del patrimonio de los partidos políticos nacionales y locales, y	II.
n) El monitoreo de medios;	
II. Organismos de protección de los derechos humanos Nacional y de las Entidades federativas:	II. II. Organismos de protección de los derechos humanos Nacional y de las Entidades federativas:
a) El listado y las versiones públicas de las recomendaciones emitidas, su destinatario o autoridad a la que se recomienda y el estado que guarda su atención, incluyendo, en su caso, las minutas de comparecencias de los titulares que se negaron a aceptar las recomendaciones;	III. a) al d) e)
b) Las quejas y denuncias presentadas ante las autoridades administrativas y penales respectivas, señalando el estado procesal en que se encuentran y, en su caso, el sentido en el que se resolvieron;	
c) Las versiones públicas del acuerdo de conciliación, previo consentimiento del quejoso;	
d) Listado de medidas precautorias, cautelares o equivalentes giradas, una vez concluido el Expediente;	
e) Toda la información con que cuente, relacionada con hechos constitutivos de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, una vez determinados así por la autoridad competente, incluyendo, en su caso, las acciones de reparación del daño, atención a víctimas y de no repetición;	Tode) Toda la ***Información***con que cuente, relacionada con hechos constitutivos de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, una vez determinados así por la autoridad competente, incluyendo, en su caso, las acciones de reparación del daño, atención a víctimas y de no repetición; f)
f) La información relacionada con las acciones y resultados de defensa, promoción y protección de los derechos humanos;	f) Laf) f) La ***Información***relacionada con las acciones y resultados de defensa, promoción y protección de los derechos humanos;
g) Las actas y versiones estenográficas de las sesiones del consejo consultivo, así como las opiniones	

que emite; h) Los resultados de los estudios, publicaciones o investigaciones que realicen; i) Los programas de prevención y promoción en materia de derechos humanos; j) El estado que guardan los derechos humanos en el sistema penitenciario y de readaptación social del país; k) El seguimiento, evaluación y monitoreo, en materia de igualdad entre mujeres y hombres; l) Los programas y las acciones de coordinación con las dependencias competentes para impulsar el cumplimiento de tratados de los que el Estado mexicano sea parte, en materia de Derechos Humanos, y m) Los lineamientos generales de la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y recomendaciones emitidas por el Consejo Consultivo; III. Organismos garantes del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales: a) La relación de observaciones y resoluciones emitidas y el seguimiento a cada una de ellas, incluyendo las respuestas entregadas por los sujetos obligados a los solicitantes en cumplimiento de las resoluciones; b) Los criterios orientadores que deriven de sus resoluciones; c) Las actas de las sesiones del pleno y las versiones estenográficas; d) Los resultados de la evaluación al cumplimiento de la presente Ley por parte de los sujetos obligados; e) Los estudios que apoyan la resolución de los recursos de revisión; f) En su caso, las sentencias, ejecutorias o suspensiones judiciales que existan en contra de sus resoluciones, y g) El número de quejas, denuncias y recursos de revisión dirigidos a cada uno de los sujetos obligados.	g) al m) … III. III. Organismos garantes del derecho de acceso a la ***Información***y la protección de datos personales: a) a) al g) …
Artículo 75. Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, las instituciones de educación superior públicas dotadas de autonomía deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información: I. Los planes y programas de estudio según el	**Artículo 75*. De manera enunciativa más no limitativa, además*** de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, las instituciones de educación superior públicas dotadas de autonomía deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información: I. I. …

sistema que ofrecen, ya sea escolarizado o abierto, con las áreas de conocimiento, el perfil profesional de quien cursa el plan de estudios, la duración del programa con las asignaturas, su valor en créditos; II. Toda la información relacionada con sus procedimientos administrativos; III. La remuneración de los profesores, incluyendo los estímulos al desempeño, nivel y monto; IV. La lista con los profesores con licencia o en año sabático; V. El listado de las becas y apoyos que otorgan, así como los procedimientos y requisitos para obtenerlos; VI. Las convocatorias de los concursos de oposición; VII. La información relativa a los procesos de selección de los consejos; VIII. Resultado de las evaluaciones del cuerpo docente, y IX. El listado de instituciones incorporadas y requisitos de incorporación.	II. II. Toda la ***Información*** relacionada con sus procedimientos administrativos; III. III. al VI. … VII. VII. La Información relativa a los procesos de selección de los consejos; VIII. al IX. …
Artículo 76. Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, los partidos políticos nacionales y locales, las agrupaciones políticas nacionales y las personas morales constituidas en asociación civil creadas por los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente, según corresponda, deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información: I. El padrón de afiliados o militantes de los partidos políticos, que contendrá, exclusivamente: apellidos, nombre o nombres, fecha de afiliación y entidad de residencia; II. Los acuerdos y resoluciones de los órganos de dirección de los partidos políticos; III. Los convenios de participación entre partidos políticos con organizaciones de la sociedad civil; IV. Contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios; V. Las minutas de las sesiones de los partidos políticos; VI. Los responsables de los órganos internos de finanzas de los partidos políticos; VII. Las organizaciones sociales adherentes o similares a algún partido político;	**Artículo 76.** ***De manera enunciativa más no limitativa, además*** de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, los partidos políticos nacionales y locales, las agrupaciones políticas nacionales y las personas morales constituidas en asociación civil creadas por los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente, según corresponda, deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información: I. I. Al XXX. …

VIII. Los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por sus militantes; IX. Los montos autorizados de financiamiento privado, así como una relación de los nombres de los aportantes vinculados con los montos aportados; X. El listado de aportantes a las precampañas y campañas políticas; XI. El acta de la asamblea constitutiva; XII. Las demarcaciones electorales en las que participen; XIII. Los tiempos que les corresponden en canales de radio y televisión; XIV. Sus documentos básicos, plataformas electorales y programas de gobierno y los mecanismos de designación de los órganos de dirección en sus respectivos ámbitos; XV. El directorio de sus órganos de dirección nacionales, estatales, municipales, del Distrito Federal y, en su caso, regionales, delegacionales y distritales; XVI. El tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes de los órganos a que se refiere la fracción anterior y de los demás funcionarios partidistas, que deberá vincularse con el directorio y estructura orgánica; así como cualquier persona que reciba ingresos por parte del partido político, independientemente de la función que desempeñe dentro o fuera del partido; XVII. El currículo con fotografía reciente de todos los precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, con el cargo al que se postula, el distrito electoral y la entidad federativa; XVIII. El currículo de los dirigentes a nivel nacional, estatal y municipal; XIX. Los convenios de frente, coalición o fusión que celebren o de participación electoral que realicen con agrupaciones políticas nacionales; XX. Las convocatorias que emitan para la elección de sus dirigentes o la postulación de sus candidatos a cargos de elección popular y, en su caso, el registro correspondiente; XXI. Los responsables de los procesos internos de evaluación y selección de candidatos a cargos de elección popular, conforme a su normatividad interna; XXII. Informes sobre el gasto del financiamiento público ordinario recibido para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres;	

XXIII. Las resoluciones dictadas por los órganos de control; XXIV. Los montos de financiamiento público otorgados mensualmente, en cualquier modalidad, a sus órganos nacionales, estatales, municipales y del Distrito Federal, así como los descuentos correspondientes a sanciones; XXV. El estado de situación financiera y patrimonial; el inventario de los bienes inmuebles de los que sean propietarios, así como los anexos que formen parte integrante de los documentos anteriores; XXVI. Las resoluciones que emitan sus órganos disciplinarios de cualquier nivel, una vez que hayan causado estado; XXVII. Los nombres de sus representantes ante la autoridad electoral competente; XXVIII. Los mecanismos de control y supervisión aplicados a los procesos internos de selección de candidatos; XXIX. El listado de fundaciones, asociaciones, centros o institutos de investigación o capacitación o cualquier otro que reciban apoyo económico de los partidos políticos, así como los montos destinados para tal efecto, y XXX. Las resoluciones que dicte la autoridad electoral competente respecto de los informes de ingresos y gastos.	
Artículo 77. Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, los fideicomisos, fondos públicos, mandatos o cualquier contrato análogo, deberán poner a disposición del público y mantener actualizada y accesible, en lo que resulte aplicable a cada contrato, la siguiente información: I. El nombre del servidor público y de la persona física o moral que represente al fideicomitente, al fiduciario y al fideicomisario; II. La unidad administrativa responsable del fideicomiso; III. El monto total, el uso y destino del patrimonio fideicomitido, distinguiendo las aportaciones públicas y fuente de los recursos, los subsidios, donaciones, transferencias, excedentes, inversiones realizadas y aportaciones o subvenciones que reciban; IV. El saldo total al cierre del ejercicio fiscal, sin perjuicio de los demás informes que deban presentarse en los términos de las disposiciones aplicables; V. Las modificaciones que, en su caso, sufran los	**Artículo 77.** ***De manera enunciativa más no limitativa, además*** de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, los fideicomisos, fondos públicos, mandatos o cualquier contrato análogo, deberán poner a disposición del público y mantener actualizada y accesible, en lo que resulte aplicable a cada contrato, la siguiente información: I. I. al VIII. ..

contratos o decretos de constitución del fideicomiso o del fondo público; VI. El padrón de beneficiarios, en su caso; VII. Causas por las que, en su caso, se inicie el proceso de constitución o extinción del fideicomiso o fondo público, especificando, de manera detallada, los recursos financieros destinados para tal efecto, y VIII. Los contratos de obras, adquisiciones y servicios que involucren recursos públicos del fideicomiso, así como los honorarios derivados de los servicios y operaciones que realice la institución de crédito o la fiduciaria.	
Artículo 78. Las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral deberán poner a disposición del público y mantener actualizada y accesible**,** la siguiente información de los sindicatos: I. Los documentos del registro de los sindicatos, que deberán contener, entre otros: a) El domicilio; b) Número de registro; c) Nombre del sindicato; d) Nombre de los integrantes del comité ejecutivo y comisiones que ejerzan funciones de vigilancia; e) Fecha de vigencia del comité ejecutivo; f) Número de socios; g) Centro de trabajo al que pertenezcan, y h) Central a la que pertenezcan, en su caso; II. Las tomas de nota; III. El estatuto; IV. El padrón de socios; V. Las actas de asamblea; VI. Los reglamentos interiores de trabajo; VII. Los contratos colectivos, incluyendo el tabulador, convenios y las condiciones generales de trabajo, y VIII. Todos los documentos contenidos en el Expediente de registro sindical y de contratos colectivos de trabajo. Las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral deberán expedir copias de los documentos que obren en los Expedientes de los registros a los solicitantes que los requieran, de conformidad con el procedimiento de acceso a la	**Artículo 78.** ***De manera enunciativa más no limitativa*****,** las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral deberán poner a disposición del público y mantener actualizada y accesible**,** la siguiente ***Información*** de los sindicatos: I. I. al VIII. .. Las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral deberán expedir copias de los documentos que obren en los Expedientes de los registros a los solicitantes que los requieran, de conformidad con el procedimiento de acceso a la ***Información.***

información. Por lo que se refiere a los documentos que obran en el Expediente de registro de las asociaciones, únicamente estará clasificada como información confidencial, los domicilios de los trabajadores señalados en los padrones de socios.	Por lo que se refiere a los documentos que obran en el Expediente de registro de las asociaciones, únicamente estará clasificada como ***Información*** confidencial, los domicilios de los trabajadores señalados en los padrones de socios.
Artículo 79. Los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán mantener actualizada y accesible, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, la información aplicable del artículo 70 de esta Ley, la señalada en el artículo anterior y la siguiente: I. Contratos y convenios entre sindicatos y autoridades; II. El directorio del Comité Ejecutivo; III. El padrón de socios, y IV. La relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos que reciban y el informe detallado del ejercicio y destino final de los recursos públicos que ejerzan. Por lo que se refiere a los documentos que obran en el Expediente de registro de las asociaciones, únicamente estará clasificada como información confidencial, los domicilios de los trabajadores señalados en los padrones de socios. Los sujetos obligados que asignen recursos públicos a los sindicatos, deberán habilitar un espacio en sus páginas de Internet para que éstos cumplan con sus obligaciones de transparencia y dispongan de la infraestructura tecnológica para el uso y acceso a la Plataforma Nacional. En todo momento el sindicato será el responsable de la publicación, actualización y accesibilidad de la información.	**Artículo 79.** Los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán mantener actualizada y accesible, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, la ***Información***aplicable del artículo 70 de esta Ley, la señalada en el artículo anterior y la siguiente: I. I. al IV. … Por lo que se refiere a los documentos que obran en el Expediente de registro de las asociaciones, únicamente estará clasificada como ***Información*** confidencial, los domicilios de los trabajadores señalados en los padrones de socios. …
Artículo 80. Para determinar la información adicional que publicarán todos los sujetos obligados de manera obligatoria, los Organismos garantes deberán: I. Solicitar a los sujetos obligados que, atendiendo a los lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, remitan el listado de información que consideren de interés público; II. Revisar el listado que remitió el sujeto obligado con base en las funciones, atribuciones y competencias que la normatividad aplicable le otorgue, y III. Determinar el catálogo de información que el sujeto obligado deberá publicar como obligación de transparencia.	**Artículo 80.** Para determinar la ***Información***adicional que publicarán todos los sujetos obligados de manera obligatoria, los Organismos garantes deberán: I. I. Solicitar a los sujetos obligados que, atendiendo a los lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, remitan el listado de ***Información***que consideren de interés público; II. II. … III. III. Determinar el catálogo de ***Información***que el sujeto obligado deberá publicar como obligación de transparencia.

Capítulo IV **De las obligaciones específicas de las personas físicas o morales que reciben y ejercen recursos públicos o ejercen actos de autoridad** **Artículo 81.** Los Organismos garantes, dentro de sus respectivas competencias, determinarán los casos en que las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, cumplirán con las obligaciones de transparencia y acceso a la información directamente o a través de los sujetos obligados que les asignen dichos recursos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Los sujetos obligados correspondientes deberán enviar a los Organismos garantes competentes un listado de las personas físicas o morales a los que, por cualquier motivo, asignaron recursos públicos o, en los términos que establezcan las disposiciones aplicables, ejercen actos de autoridad. Para resolver sobre el cumplimento de lo señalado en el párrafo anterior, los Organismos garantes tomarán en cuenta si realiza una función gubernamental, el nivel de financiamiento público, el nivel de regulación e involucramiento gubernamental y si el gobierno participó en su creación.	**Capítulo IV** **De las obligaciones específicas de las personas físicas o morales que reciben y ejercen recursos públicos o ejercen actos de autoridad** **Artículo 81.** Los Organismos garantes, dentro de sus respectivas competencias, determinarán los casos en que las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, cumplirán con las obligaciones de transparencia y acceso a la ***Información***directamente o a través de los sujetos obligados que les asignen dichos recursos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. … …
Artículo 82. Para determinar la información que deberán hacer pública las personas físicas o morales que reciben y ejercen recursos públicos o realizan actos de autoridad, los Organismos garantes competentes deberán: I. Solicitar a las personas físicas o morales que, atendiendo a los lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, remitan el listado de información que consideren de interés público; II. Revisar el listado que remitió la persona física o moral en la medida en que reciban y ejerzan recursos o realicen actos de autoridad que la normatividad aplicable le otorgue, y III. Determinar las obligaciones de transparencia que deben cumplir y los plazos para ello.	**Artículo 82.** Para determinar la ***Información***que deberán hacer pública las personas físicas o morales que reciben y ejercen recursos públicos o realizan actos de autoridad, los Organismos garantes competentes deberán: I. I. Solicitar a las personas físicas o morales que, atendiendo a los lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, remitan el listado de ***Información***que consideren de interés público; II. II. … III. III. …
Capítulo V **De las obligaciones específicas en materia energética** **Artículo 83.** Adicionalmente a la información señalada en el artículo 70 de esta Ley, los sujetos obligados del sector energético deberán garantizar la máxima transparencia de la información relacionada con los	**Capítulo V** **De las obligaciones específicas en materia energética** **Artículo 83*. De manera enunciativa más no limitativa, a***dicionalmente a la ***Información*** señalada en el artículo 70 de esta Ley, ***y de lo señalado en la Ley de Hidrocarburos y otras leyes de la materia***, los sujetos

contratos, asignaciones, permisos, alianzas, sociedades y demás actos que el Estado suscriba u otorgue a particulares, empresas productivas del Estado, subsidiarias y filiales o que se celebren entre ellos en materia de las actividades de planeación y control del sistema eléctrico nacional; del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; de exploración y extracción de hidrocarburos, a través de mecanismos que garanticen su difusión y la consulta pública, por lo que deberán incluir, cuando menos, las bases, reglas, ingresos, costos, límites de costos, contraprestaciones, contribuciones y pagos realizados y de los procedimientos que se lleven a cabo para tal efecto. Lo anterior, de conformidad con las obligaciones de transparencia previstas en la Ley Federal y lo dispuesto en las leyes de Hidrocarburos; de la Industria Eléctrica; de Ingresos sobre Hidrocarburos; de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, en esta materia.	obligados del sector energético deberán garantizar la máxima transparencia de la ***Información***relacionada con los contratos, asignaciones, permisos, alianzas, sociedades y demás actos que el Estado suscriba u otorgue a particulares, empresas productivas del Estado, subsidiarias y filiales o que se celebren entre ellos en materia de las actividades de planeación y control del sistema eléctrico nacional; del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; de exploración y extracción de hidrocarburos, a través de mecanismos que garanticen su difusión y la consulta pública, por lo que deberán incluir, cuando menos, las bases, reglas, ingresos, costos, límites de costos, contraprestaciones, contribuciones y pagos realizados y de los procedimientos que se lleven a cabo para tal efecto. Lo anterior, de conformidad con las obligaciones de transparencia previstas en la Ley Federal y lo dispuesto en las leyes de Hidrocarburos; de la Industria Eléctrica; de Ingresos sobre Hidrocarburos; de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, ***y demás disposiciones*** en esta materia.
Artículo 88. La verificación que realicen los Organismos garantes en el ámbito de sus respectivas competencias, se sujetará a lo siguiente: I. Constatar que la información esté completa, publicada y actualizada en tiempo y forma; II. Emitir un dictamen en el que podrán determinar que el sujeto obligado se ajusta a lo establecido por esta Ley y demás disposiciones, o contrariamente determinar que existe incumplimiento a lo previsto por la Ley y demás normatividad aplicable, en cuyo caso formulará los requerimientos que procedan a efecto de que el sujeto obligado subsane las inconsistencias detectadas dentro de un plazo no mayor a veinte días; III. El sujeto obligado deberá informar al organismo garante sobre el cumplimento de los requerimientos del dictamen, y IV. Los Organismos garantes verificarán el cumplimiento a la resolución una vez transcurrido el plazo y si consideran que se dio cumplimiento los requerimientos del dictamen, se emitirá un acuerdo de cumplimiento. Los Organismos garantes podrán solicitar los informes complementarios al sujeto obligado que requiera para allegarse de los elementos de juicio que considere	**Artículo 88.** La verificación que realicen los Organismos garantes en el ámbito de sus respectivas competencias, se sujetará a lo siguiente: I. Constatar que la I***nformación*** esté completa, publicada y actualizada en tiempo y forma; II. I. al IV. .. … ... … … …

necesarios para llevar a cabo la verificación. Cuando los Organismos garantes consideren que existe un incumplimiento total o parcial de la determinación, le notificarán, por conducto de la Unidad de Transparencia, al superior jerárquico del servidor público responsable de dar cumplimiento, para el efecto de que, en un plazo no mayor a cinco días, se dé cumplimiento a los requerimientos del dictamen. En caso de que los Organismos garantes consideren que subsiste el incumplimiento total o parcial de la resolución, en un plazo no mayor a cinco días, se informará al Pleno para que, en su caso, imponga las medidas de apremio osanciones, conforme a lo establecido por esta Ley.	
Artículo 91. La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberá cumplir, al menos, los siguientes requisitos: I. Nombre del sujeto obligado denunciado; II. Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado; III. El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para respaldar el incumplimiento denunciado; IV. En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberá señalar el domicilio en la jurisdicción que corresponda o la dirección de correo electrónico para recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electrónicos, se entenderá que se acepta que las notificaciones se efectúen por el mismo medio. En caso de que no se señale domicilio o dirección de correo electrónico o se señale un domicilio fuera de la jurisdicción respectiva, las notificaciones, aún las de carácter personal, se practicarán a través de los estrados físicos del Instituto u Organismo garante de las Entidades Federativas o del Distrito Federal competente, y V. El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, únicamente para propósitos estadísticos. Esta información será proporcionada por el denunciante de manera voluntaria. En ningún caso el dato sobre el nombre y el perfil podrán ser un requisito para la procedencia y trámite de la denuncia.	**Artículo 91.** … I. al IV. … V. El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, únicamente para propósitos estadísticos. Esta ***Información*** será proporcionada por el denunciante de manera voluntaria. En ningún caso el dato sobre el nombre y el perfil podrán ser un requisito para la procedencia y trámite de la denuncia.
Artículo 96. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias deben resolver la denuncia, dentro de los veinte días siguientes al término del plazo en que el sujeto obligado debe presentar su informe o, en su caso, los informes complementarios. La resolución debe ser fundada y motivada e invariablemente debe pronunciarse sobre el	**Artículo 96. …** La resolución debe ser fundada y motivada e invariablemente debe pronunciarse sobre el cumplimiento de la publicación de la ***Información***por parte del sujeto obligado.

cumplimiento de la publicación de la información por parte del sujeto obligado.	
TÍTULO SEXTO **INFORMACIÓN CLASIFICADA** **Capítulo I** **De las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la información** **Artículo 100.** La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título. Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en ningún caso, podrán contravenirla. Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar la información, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, la Ley Federal y de las Entidades Federativas.	**TÍTULO SEXTO** **INFORMACIÓN CLASIFICADA** **Capítulo I** **De las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la información** **Artículo 100.** La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina ***sujetar al escrutinio y autorización de los organismos garantes***, que la ***Información*** en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título. … Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables ***de determinar si sujetan al escrutinio y autorización de los organismos garantes, a fin de*** clasificar la Información, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, la Ley Federal y de las Entidades Federativas.
Artículo 101. Los Documentos clasificados como reservados serán públicos cuando: I. I. Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación; II. II. Expire el plazo de clasificación; III. Exista resolución de una autoridad competente que determine que existe una causa de interés público que prevalece sobre la reserva de la información, o IV. El Comité de Transparencia considere pertinente la desclasificación, de conformidad con lo señalado en el presente Título. La información clasificada como reservada, según el artículo 113 de esta Ley, podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de cinco años. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que se clasifica el documento. Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de Transparencia, podrán ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de cinco años adicionales, siempre y cuando justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación, mediante la aplicación de una prueba de daño. Para los casos previstos por la fracción II, cuando se trate de información cuya publicación pueda ocasionar la destrucción o inhabilitación de la infraestructura de carácter estratégico para la provisión de bienes o servicios públicos, o bien se refiera a las circunstancias expuestas en la fracción IV del artículo 113 de esta Ley y que a juicio de un sujeto obligado sea necesario	**Artículo 101.** Los Documentos clasificados como reservados serán públicos cuando: I. I. al IV. … La ***Información*** clasificada como reservada, según el artículo 113 de esta Ley, podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de cinco años. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que se clasifica el documento. Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de Transparencia y ***ratificada por el organismo garante respectivo***, podrán ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de cinco años adicionales, siempre y cuando justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación, mediante la aplicación de una prueba de daño. Para los casos previstos por la fracción II, cuando se trate de ***Información*** cuya publicación pueda ocasionar la destrucción o inhabilitación de la infraestructura de carácter estratégico para la provisión de bienes o servicios públicos, o bien se refiera a las circunstancias expuestas en la fracción IV del artículo 113 de esta Ley y

ampliar nuevamente el periodo de reserva de la información; el Comité de Transparencia respectivo deberá hacer la solicitud correspondiente al organismo garante competente, debidamente fundada y motivada, aplicando la prueba de daño y señalando el plazo de reserva, por lo menos con tres meses de anticipación al vencimiento del periodo	que a juicio de un sujeto obligado sea necesario ampliar nuevamente el periodo de reserva de la información; el Comité de Transparencia, ***con la ratificación del organismo garante*** respectivo deberá hacer la solicitud correspondiente al organismo garante competente, debidamente fundada y motivada, aplicando la prueba de daño y señalando el plazo de reserva, por lo menos con tres meses de anticipación al vencimiento del periodo.
Artículo 102. Cada Área del sujeto obligado elaborará un índice de los Expedientes clasificados como reservados, por Área responsable de la información y tema. El índice deberá elaborarse semestralmente y publicarse en Formatos Abiertos al día siguiente de su elaboración. Dicho índice deberá indicar el Área que generó la información, el nombre del Documento, si se trata de una reserva completa o parcial, la fecha en que inicia y finaliza la reserva, su justificación, el plazo de reserva y, en su caso, las partes del Documento que se reservan y si se encuentra en prórroga. En ningún caso el índice será considerado como información reservada.	**Artículo 102.** Cada Área del sujeto obligado elaborará un índice de los Expedientes clasificados como reservados, por Área responsable de la ***Información*** y tema, ***a fin de someterla a la aprobación del Comité de Transparencia, que deberá de ser ratificada por el organismo garante respectivo.*** El índice deberá ***ser público, y se*****elaborará** semestralmente***. La publicación se hará*** en Formatos Abiertos al día siguiente de su elaboración. Dicho índice deberá indicar el Área que generó la información, el nombre del Documento, si se trata de una reserva completa o parcial, la fecha en que inicia y finaliza la reserva, su justificación, el plazo de reserva y, en su caso, las partes del Documento que se reservan y si se encuentra en prórroga. En ningún caso el índice será considerado como ***Información*** reservada.
Artículo 103. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión. Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de daño. Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva.	**Artículo 103.** ***Los sujetos obligados no podrán negar*** el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, ***sin la aprobación d***el Comité de Transparencia, ***ratificada por el organismo garante competente***. Para motivar la clasificación de la ***Información*** y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de daño. Tratándose de aquella ***Información*** que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva.
Artículo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional; II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se	**Artículo 104.** … I. I. La divulgación de la ***Información*** representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional; II. II. al III. …

difunda, y III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.	
Artículo 105. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las excepciones al derecho de acceso a la información prevista en el presente Título y deberán acreditar su procedencia. La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los sujetos obligados.	**Artículo 105.** Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las excepciones al derecho de acceso a la ***Información*** prevista en el presente Título y deberán acreditar su procedencia. …
Artículo 106. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: I. Se reciba una solicitud de acceso a la información; II. Se determine mediante resolución de autoridad competente, o III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en esta Ley.	**Artículo 106.** La clasificación de la ***Información*** se llevará a cabo en ***cualquier*** momento, ***al ser aprobada por el Comité de Transparencia y ratificado por el órgano de transparencia competente***.
Artículo 108. Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que clasifiquen Documentos o información como reservada. La clasificación podrá establecerse de manera parcial o total de acuerdo al contenido de la información del Documento y deberá estar acorde con la actualización de los supuestos definidos en el presente Título como información clasificada. En ningún caso se podrán clasificar Documentos antes de que se genere la información. La clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño.	**Artículo 108.** Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que clasifiquen Documentos o ***Información*** como reservada. La clasificación ***solo*** podrá establecerse por el ***Comité de Transparencia correspondiente***, ***debidamente*** ratificada por el organismo garante competente, de manera parcial o total de acuerdo al contenido de la ***Información*** del Documento y deberá estar ***debidamente motivada y fundamentada, de acuerdo*** con la actualización de los supuestos definidos en el presente Título como ***Información*** clasificada. … La clasificación de ***Información*** reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño.
Artículo 109. Los lineamientos generales que emita el Sistema Nacional en materia de clasificación de la información reservada y confidencial y, para la elaboración de versiones públicas, serán de observancia obligatoria para los sujetos obligados.	**Artículo 109.** Los lineamientos generales que emita el Sistema Nacional en materia de clasificación de la ***Información*** reservada y confidencial y, para la elaboración de versiones públicas, serán de observancia obligatoria para los sujetos obligados.
Artículo 112. La información contenida en las obligaciones de transparencia no podrá omitirse en las versiones públicas	**Artículo 112**. La ***Información*** contenida en las obligaciones de transparencia no podrá omitirse en las versiones públicas
Capítulo II **De la Información Reservada** **Artículo 113.** Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: I. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un	**Capítulo II** **De la Información Reservada** **Artículo 113.** Como ***Información*** reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: I. I. al III. …

propósito genuino y un efecto demostrable; II. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales; III. Se entregue al Estado mexicano expresamente con ese carácter o el de confidencial por otro u otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional; IV. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistémico o del sistema financiero del país, pueda comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del sector público federal; V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada; IX. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa; X. Afecte los derechos del debido proceso; XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y XIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales.	***IV.*** IV. Pued IV. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; ***V***. V. Obst V. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes; ***VI.*** VI. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; ***VII.*** VII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada; ***VIII***. VIII. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa; ***IX***. IX. Afecte los derechos del debido proceso; ***X***. X. Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; ***XI***. XI. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos

	y se tramiten ante el Ministerio Público, y ***XII***. XII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales.
Artículo 115. No podrá invocarse el carácter de reservado cuando: I. Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, o II. Se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables.	**Artículo 115. …** I. I. … II. II. Se trate de ***Información*** relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables.
Capítulo III **De la Información Confidencial** **Artículo 116.** Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable. La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.	**Capítulo III** **De la Información Confidencial** **Artículo 116.** Se considera ***Información*** confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable. La ***Información*** confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. Se considera como ***Información*** confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional. Asimismo, será ***Información*** confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.
Artículo 117. Los sujetos obligados que se constituyan como fideicomitentes, fideicomisarios o fiduciarios en fideicomisos que involucren recursos públicos, no podrán clasificar, por ese solo supuesto, la información relativa al ejercicio de éstos, como secreto bancario o fiduciario, sin perjuicio de las demás causales de clasificación que prevé la presente Ley.	**Artículo 117.** Los sujetos obligados que se constituyan como fideicomitentes, fideicomisarios o fiduciarios en fideicomisos que involucren recursos públicos, no podrán clasificar, por ese solo supuesto, la ***Información*** relativa al ejercicio de éstos, como secreto bancario o fiduciario, sin perjuicio de las demás causales de clasificación que prevé la presente Ley.
Artículo 118. Los sujetos obligados que se constituyan como usuarios o como institución bancaria en operaciones que involucren recursos públicos, no podrán clasificar, por ese solo supuesto, la información relativa al ejercicio de éstos, como secreto bancario, sin perjuicio de las demás causales de clasificación que	**Artículo 118.** Los sujetos obligados que se constituyan como usuarios o como institución bancaria en operaciones que involucren recursos públicos, no podrán clasificar, por ese solo supuesto, la ***Información*** relativa al ejercicio de éstos, como secreto bancario, sin perjuicio de las demás causales de clasificación que

prevé la presente Ley.	prevé la presente Ley.
Artículo 119. Los sujetos obligados que se constituyan como contribuyentes o como autoridades en materia tributaria, no podrán clasificar la información relativa al ejercicio de recursos públicos como secreto fiscal.	**Artículo 119.** Los sujetos obligados que se constituyan como contribuyentes o como autoridades en materia tributaria, no podrán clasificar la ***Información*** relativa al ejercicio de recursos públicos como secreto fiscal.
Artículo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: I. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; II. Por ley tenga el carácter de pública; III. Exista una orden judicial; IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, se requiera su publicación, o V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos. Para efectos de la fracción IV del presente artículo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la divulgación de la información confidencial y el interés público de la información.	**Artículo 120.** Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a ***Información*** confidencial requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. No se requerirá el consentimiento del titular de la ***Información*** confidencial cuando: I. I. La ***Información*** se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; II. II. al IV. … V. Cuando V. Cuando transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la ***Información*** se utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos. Para efectos de la fracción IV del presente artículo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la ***Información*** confidencial y un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la divulgación de la ***Información*** confidencial y el interés público de la información.
TÍTULO SÉPTIMO **PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA** **Capítulo I** **Del Procedimiento de Acceso a la Información** **Artículo 121.** Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deberán garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para que toda persona pueda ejercer el derecho de acceso a la información, mediante solicitudes de información y deberá apoyar al solicitante en la elaboración de las mismas, de conformidad con las bases establecidas en el presente Título.	**TÍTULO SÉPTIMO** **PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA** **Capítulo I** **Del Procedimiento de Acceso a la Información *no disponible en la Plataforma Electrónica Nacional de Transparencia*** **Artículo 121.** Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deberán garantizar las medidas y condiciones ***para que toda la Informacióneste publicada en la plataforma electrónica nacional de transparencia y que esta Información sea accesible*** para que toda persona pueda ejercer el derecho de acceso a la información, sin ***la necesidad de que medie solicitud alguna*** y deberá apoyar al solicitante en la

	búsqueda de la Información de las mismas ***mediante soporte técnico***, de conformidad con las bases establecidas en el presente Título.
Artículo 122. Cualquier persona por sí misma o a través de su representante, podrá presentar solicitud de acceso a información ante la Unidad de Transparencia, a través de la Plataforma Nacional, en la oficina u oficinas designadas para ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional.	**Artículo 122.** ***Cuando la Información requerida no esté disponible***cualquier persona por sí misma o a través de su representante, podrá presentar solicitud de acceso a ***Información*** ante ***el sujeto obligado o*** la Unidad de Transparencia, a través de la Plataforma Nacional, en la oficina u oficinas designadas para ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional.
Artículo 123. Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la Plataforma Nacional, se asignará automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la Plataforma Nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante, en el que se indique la fecha de recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables.	**Artículo 123.** ***Las*** solicitudes de acceso a ***Información*** formuladas mediante la Plataforma Nacional, se asignará automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. En los demás casos***, el sujeto obligado o*** la Unidad de Transparencia, ***en su caso***, tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la Plataforma Nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante, en el que se indique la fecha de recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables.
Artículo 124. Para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores requisitos que los siguientes: I. Nombre o, en su caso, los datos generales de su representante; II. Domicilio o medio para recibir notificaciones; III. La descripción de la información solicitada; IV. Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización, y V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, mediante la expedición de copias simples o certificadas o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos los electrónicos. En su caso, el solicitante señalará el formato accesible o la lengua indígena en la que se requiera la información de acuerdo a lo señalado en la presente Ley. La información de las fracciones I y IV será proporcionada por el solicitante de manera opcional y, en ningún caso, podrá ser un requisito indispensable para la procedencia de la solicitud.	**Artículo 124. …** **I.** I. al II. … III. III. La descripción de la ***Información*** solicitada; IV. IV. al V. … En su caso, el solicitante señalará el formato accesible o la lengua indígena en la que se requiera la ***Información*** de acuerdo a lo señalado en la presente Ley. La ***Información*** de las fracciones I y IV será proporcionada por el solicitante de manera opcional y, en ningún caso, podrá ser un requisito indispensable para la procedencia de la solicitud.
Artículo 125. Cuando el particular presente su solicitud por medios electrónicos a través de la Plataforma Nacional, se entenderá que acepta que las notificaciones le sean efectuadas por dicho sistema, salvo que señale un medio distinto para efectos de las notificaciones. En el caso de solicitudes recibidas en otros medios, en las que los solicitantes no proporcionen un domicilio o medio para recibir la información o, en su defecto, no	**Artículo 125. …** En el caso de solicitudes recibidas en otros medios, en las que los solicitantes no proporcionen un domicilio o medio para recibir la ***Información*** o, en su defecto, no haya sido posible practicar la notificación, se notificará por estrados en la oficina de la Unidad de

haya sido posible practicar la notificación, se notificará por estrados en la oficina de la Unidad de Transparencia.	Transparencia.
Artículo 127. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de Documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición del solicitante los Documentos en consulta directa, salvo la información clasificada. En todo caso se facilitará su copia simple o certificada, así como su reproducción por cualquier medio disponible en las instalaciones del sujeto obligado o que, en su caso, aporte el solicitante.	**Artículo 127.** De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la ***Información*** solicitada que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de Documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición del solicitante los Documentos en consulta directa, salvo la ***Información*** clasificada. ….
Artículo 128. Cuando los detalles proporcionados para localizar los documentos resulten insuficientes, incompletos o sean erróneos, la Unidad de Transparencia podrá requerir al solicitante, por una sola vez y dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a partir de la presentación de la solicitud, para que, en un término de hasta diez días, indique otros elementos o corrija los datos proporcionados o bien, precise uno o varios requerimientos de información. Este requerimiento interrumpirá el plazo de respuesta establecido en el artículo 132 de la presente Ley, por lo que comenzará a computarse nuevamente al día siguiente del desahogo por parte del particular. En este caso, el sujeto obligado atenderá la solicitud en los términos en que fue desahogado el requerimiento de información adicional. La solicitud se tendrá por no presentada cuando los solicitantes no atiendan el requerimiento de información adicional. En el caso de requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por presentada la solicitud por lo que respecta a los contenidos de información que no formaron parte del requerimiento	**Artículo 128.** Cuando los detalles proporcionados para localizar los documentos resulten insuficientes, incompletos o sean erróneos, ***el sujeto obligadoo*** la Unidad de Transparencia, ***en su caso***, podrá requerir al solicitante, por una sola vez y dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a partir de la presentación de la solicitud, para que, en un término de hasta diez días, indique otros elementos o corrija los datos proporcionados o bien, precise uno o varios requerimientos de información. Este requerimiento interrumpirá el plazo de respuesta establecido en el artículo 132 de la presente Ley, por lo que comenzará a computarse nuevamente al día siguiente del desahogo por parte del particular. En este caso, el sujeto obligado atenderá la solicitud en los términos en que fue desahogado el requerimiento de ***Información*** adicional. La solicitud se tendrá por no presentada cuando los solicitantes no atiendan el requerimiento de ***Información*** adicional. En el caso de requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por presentada la solicitud por lo que respecta a los contenidos de ***Información*** que no formaron parte del requerimiento.
Artículo 129. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita.	**Artículo 129.** Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la ***Información*** o del lugar donde se encuentre así lo permita.

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la misma en Formatos Abiertos.	En el caso de que la ***Información*** solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la misma en Formatos Abiertos.
Artículo 130. Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información en un plazo no mayor a cinco días.	**Artículo 130.** Cuando la ***Información*** requerida por el solicitante ya esté disponible al público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha ***Información*** en un plazo no mayor a cinco días.
Artículo 131. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.	**Artículo 131.** ***Los sujetos obligados o las*** Unidades de Transparencia, ***en su caso***, deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la ***Información*** o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la ***Información*** solicitada.
Artículo 133. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega. En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades.	**Artículo 133.** El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por el solicitante. Cuando la ***Información*** no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega. …
Artículo 134. Los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que darán trámite interno a las solicitudes en materia de acceso a la información. La elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo, procederá una vez que se acredite el pago respectivo. Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado.	**Artículo 134.** Los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que darán trámite interno a las solicitudes en materia de acceso a la ***Información.*** ***Los sujetos obligados y los Comités de Transparencia deberán establecer accesos de toda la Información no reservada a través de las plataformas de Internet.*** ***Cuando el solicitante requiera Información que a un no se encuentre publicada en las plataformas de Internet y requiera la*** elaboración de versiones, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo, procederá una vez que se acredite el pago respectivo. …
Artículo 135. La Unidad de Transparencia tendrá disponible la información solicitada, durante un plazo mínimo de sesenta días, contado a partir de que el solicitante hubiere realizado, en su caso, el pago respectivo, el cual deberá efectuarse en un plazo no mayor a treinta días.	**Artículo 135.** La Unidad de Transparencia tendrá disponible la ***Información*** solicitada, durante un plazo mínimo de sesenta días, contado a partir de que el solicitante hubiere realizado, en su caso, el pago respectivo, el cual deberá efectuarse en un plazo no mayor a treinta días. …

Transcurridos dichos plazos, los sujetos obligados darán por concluida la solicitud y procederán, de ser el caso, a la destrucción del material en el que se reprodujo la información.	
Artículo 136. Cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria incompetencia por parte de los sujetos obligados, dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información, deberán comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y, en caso de poderlo determinar, señalar al solicitante el o los sujetos obligados competentes. Si los sujetos obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información sobre la cual es incompetente se procederá conforme lo señala el párrafo anterior.	**Artículo 136.** Cuando l***os sujetos obligados*** determinen la notoria incompetencia ***de las mismas, relativa a la Información solicitada, notificarán a la Unidad de Transparencia correspondiente para que ratifiquen la misma. Las Unidades de Transparencia***, deberán comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y, en caso de poderlo determinar, señalar al solicitante el o los sujetos obligados competentes. Si los sujetos obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, deberá***nellos o la Unidad de Transparencia, en su caso***, dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la ***Información*** sobre la cual es incompetente se procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
Artículo 137. En caso de que los sujetos obligados consideren que los Documentos o la información deba ser clasificada, se sujetará a lo siguiente: El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para: a) a) Confirmar la clasificación; b) b) Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información, y c) c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información. El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación. La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de respuesta a la solicitud que establece el artículo 132 de la presente Ley	**Artículo 137.** En caso de que los sujetos obligados consideren que los Documentos o la ***Información*** deba ser clasificada, se sujetará a lo siguiente: El Área deberá remitir la solicitud ***a la Unidad de Transparencia correspondiente***, ***con*** un escrito en el que funde y motive la clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver, ***con la ratificación del organismo garante competente***, para: a) a) al b) … c) c) ***Negar*** la clasificación y conceder el acceso a la información. El Comité de Transparencia ***tendrá pleno*** acceso a la ***Información*** que esté en poder del Área correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación. La resolución del ***organismo garante correspondiente*** será notificada al interesado a ***través del Comité de Transparencia respectivo***, en el plazo de respuesta a la solicitud que establece el artículo 132 de la presente Ley.
Artículo 138. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité de Transparencia: I. I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información; II. II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del Documento; III. III. Ordenará, siempre que sea materialmente	**Artículo 138.** Cuando la ***Información*** no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité de Transparencia: I. I. al II. … III. III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la ***Información*** en

posible, que se genere o se reponga la información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de Transparencia, y IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, en su caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda.	caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de Transparencia, y IV …
Artículo 139. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable de contar con la misma.	**Artículo 139.** La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la ***Información*** solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable de contar con la misma.
Capítulo II **De las Cuotas de Acceso** **Artículo 141.** En caso de existir costos para obtener la información, deberán cubrirse de manera previa a la entrega y no podrán ser superiores a la suma de: I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información; II. El costo de envío, en su caso, y III. El pago de la certificación de los Documentos, cuando proceda. Las cuotas de los derechos aplicables deberán establecerse en la Ley Federal de Derechos, los cuales se publicarán en los sitios de Internet de los sujetos obligados. En su determinación se deberá considerar que los montos permitan o faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información, asimismo se establecerá la obligación de fijar una cuenta bancaria única y exclusivamente para que el solicitante realice el pago íntegro del costo de la información que solicitó. Los sujetos obligados a los que no les sea aplicable la Ley Federal de Derechos deberán establecer cuotas que no deberán ser mayores a las dispuestas en dicha ley. La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas simples. Las unidades de transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias socioeconómicas del solicitante.	**Capítulo II** **De las Cuotas de Acceso** **Artículo 141.** ***Únicamente en caso de que la persona requiera Información que aún no se encuentre en las plataformas de Internet y la misma se solicite en formatos que impliquen un costoéstos*** deberán cubrirse de manera previa a la entrega y no podrán ser superiores a la suma de: I. I. al III. … Las cuotas de los derechos aplicables deberán establecerse en la Ley Federal de Derechos, los cuales se publicarán en los sitios de Internet de los sujetos obligados. En su determinación se deberá considerar que los montos permitan o faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información, asimismo se establecerá la obligación de fijar una cuenta bancaria única y exclusivamente para que el solicitante realice el pago íntegro del costo de la ***Información*** que solicitó. … La ***Información*** deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas simples. Las unidades de transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias

	socioeconómicas del solicitante.
Artículo 143. El recurso de revisión procederá en contra de: I. La clasificación de la información; II. La declaración de inexistencia de información; III. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado; IV. La entrega de información incompleta; V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado; VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en la ley; VII. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado; VIII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o no accesible para el solicitante; IX. Los costos o tiempos de entrega de la información; X. La falta de trámite a una solicitud; XI. La negativa a permitir la consulta directa de la información; XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta, o XIII. La orientación a un trámite específico.	**Artículo 143.** … I. I. La clasificación de la ***Información;*** II. II. La declaración de inexistencia ***de Información;*** III. III. … IV. IV. La entrega de ***Información*** incompleta; V. V. La entrega de ***Información*** que no corresponda con lo solicitado; VI. VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la ***Información***dentro de los plazos establecidos en la ley; VII. VII. La notificación, entrega o puesta a disposición de ***Información***en una modalidad o formato distinto al solicitado; VIII. VIII. La entrega o puesta a disposición de ***Información***en un formato incomprensible y/o no accesible para el solicitante; IX. IX. Los costos o tiempos de entrega de la ***Información;*** X. X. … XI. XI. La negativa a permitir la consulta directa de la ***Información;*** XII. XII. al XIII. … XIII. XIV. ***XIV. La determinación de publicar o el publicar datos personales o información confidencial que no se encuentren en los casos de excepción establecidos en esta Ley.*** …
Artículo 147. En todo momento, los Comisionados deberán tener acceso a la información clasificada para determinar su naturaleza según se requiera. El acceso se dará de conformidad con la normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda de la información	**Artículo 147.** En todo momento, los Comisionados deberán tener acceso a la ***Información*** clasificada para determinar su naturaleza según se requiera. El acceso se dará de conformidad con la normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda de la información.
Artículo 148. La información reservada o confidencial que, en su caso, sea consultada por los Comisionados,	**Artículo 148.** La ***Información*** reservada o confidencial que, en su caso, sea consultada por los Comisionados,

por resultar indispensable para resolver el asunto, deberá ser mantenida con ese carácter y no deberá estar disponible en el Expediente, salvo en los casos en los que sobreviniera la desclasificación de dicha información y continuara bajo el resguardo del sujeto obligado en el que originalmente se encontraba o cuando se requiera, por ser violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.	por resultar indispensable para resolver el asunto, deberá ser mantenida con ese carácter y no deberá estar disponible en el Expediente, salvo en los casos en los que sobreviniera la desclasificación de dicha ***Información*** y continuara bajo el resguardo del sujeto obligado en el que originalmente se encontraba o cuando se requiera, por ser violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
Artículo 150. Los Organismos garantes resolverán el recurso de revisión conforme a lo siguiente: I. Interpuesto el recurso de revisión, el Presidente del organismo garante lo turnará al Comisionado ponente que corresponda, quien deberá proceder a su análisis para que decrete su admisión o su desechamiento; II. Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las partes, para que, en un plazo máximo de siete días, manifiesten lo que a su derecho convenga; III. Dentro del plazo mencionado en la fracción II del presente artículo, las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos excepto la confesional por parte de los sujetos obligados y aquéllas que sean contrarias a derecho; IV. El Comisionado ponente podrá determinar la celebración de audiencias con las partes durante la sustanciación del recurso de revisión; V. Concluido el plazo señalado en la fracción II del presente artículo, el Comisionado ponente procederá a decretar el cierre de instrucción; VI. El organismo garante no estará obligado a atender la información remitida por el sujeto obligado una vez decretado el cierre de instrucción, y VII. Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, en un plazo que no podrá exceder de veinte días.	**Artículo 150. …** I. I. al V. … VI. El orgaV VI. El organismo garante no estará obligado a atender la ***Información*** remitida por el sujeto obligado una vez decretado el cierre de instrucción, y VII. VII. …
Artículo 152. En las resoluciones los Organismos garantes podrán señalarle a los sujetos obligados que la información que deben proporcionar sea considerada como obligación de transparencia de conformidad con el Capítulo II del Título Quinto, denominado “De las obligaciones de transparencia comunes” en la presente Ley, atendiendo a la relevancia de la información, la incidencia de las solicitudes sobre la misma y el sentido	**Artículo 152.** En las resoluciones los Organismos garantes podrán señalarle a los sujetos obligados que la ***Información*** que deben proporcionar sea considerada como obligación de transparencia de conformidad con el Capítulo II del Título Quinto, denominado “De las obligaciones de transparencia comunes” en la presente Ley, atendiendo a la relevancia de la información, la incidencia de las solicitudes sobre la misma y el sentido

reiterativo de las resoluciones.	reiterativo de las resoluciones. ***Asimismo, las resoluciones de los Organismos garantes podrán ordenar que no se publique Información que sea considerada como datos personales que están fuera de los casos de excepción establecidos en esta ley, o Información confidencial.***
Artículo 155. El recurso será desechado por improcedente cuando: I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 142 de la presente Ley; II. Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el recurrente; III. No actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 143 de la presente Ley; IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el artículo 145 de la presente Ley; V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; VI. Se trate de una consulta, o VII. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos contenidos.	**Artículo 155.** … I. I. al IV. … V. Se im V. Se impugne la veracidad de la ***Información*** proporcionada, ***o*** VV ***VI.*** VI. al VII. …
Artículo 158. Los particulares podrán impugnar las determinaciones o resoluciones de los Organismos garantes ante el Poder Judicial de la Federación.	**Artículo 158.** ***Salvo lo establecido en el artículo 157 anterior, únicamente los*** particulares podrán impugnar las determinaciones o resoluciones de los Organismos garantes ante el Poder Judicial de la Federación.
Artículo 160. El recurso de inconformidad procede contra las resoluciones emitidas por los Organismos garantes de las Entidades Federativas que: I. Confirmen o modifiquen la clasificación de la información, o II. Confirmen la inexistencia o negativa de información. Se entenderá como negativa de acceso a la información la falta de resolución de los Organismos garantes de las Entidades Federativas dentro del plazo previsto para ello.	**Artículo 160.** … I. I. al II. .. Se entenderá como negativa de acceso a la ***Información***la falta de resolución de los Organismos garantes de las Entidades Federativas dentro del plazo previsto para ello.
Artículo 165. El Instituto resolverá el recurso de inconformidad en un plazo que no podrá exceder de treinta días, plazo que podrá ampliarse por una sola vez y hasta por un periodo igual. Interpuesto el recurso de inconformidad por falta de resolución, en términos del segundo párrafo del	**Artículo 165. …** …

artículo 160 de esta Ley, el Instituto dará vista, en el término de tres días siguientes, contados a partir del día en que fue recibido el recurso, al organismo garante de la Entidad Federativa según se trate, para que alegue lo que a su derecho convenga en un plazo de cinco días. Recibida la contestación, el Instituto deberá emitir su resolución en un plazo no mayor a quince días. En caso de no recibir la contestación por parte del Organismo garante de la Entidad Federativa o que éste no pruebe fehacientemente que dictó resolución o no exponga de manera fundada y motivada, a criterio del Instituto, que se trata de información reservada o confidencial, el Instituto resolverá a favor del solicitante.	Recibida la contestación, el Instituto deberá emitir su resolución en un plazo no mayor a quince días. En caso de no recibir la contestación por parte del Organismo garante de la Entidad Federativa o que éste no pruebe fehacientemente que dictó resolución o no exponga de manera fundada y motivada, a criterio del Instituto, que se trata de ***Información*** reservada o confidencial, el Instituto resolverá a favor del solicitante.
Artículo 167. En todo caso, el Comisionado ponente del Instituto tendrá acceso a la información clasificada para determinar su naturaleza. La información reservada o confidencial que, en su caso, sea consultada por el Comisionado ponente del Instituto, por resultar indispensable para resolver el asunto, deberá ser mantenida con ese carácter y no deberá estar disponible en el Expediente, salvo en los casos en los que sobreviniera la desclasificación de dicha información, continuando bajo el resguardo del sujeto obligado en el que originalmente se encontraba.	**Artículo 167.** En todo caso, el Comisionado ponente del Instituto tendrá acceso a la ***Información*** clasificada para determinar su naturaleza. La ***Información*** reservada o confidencial que, en su caso, sea consultada por el Comisionado ponente del Instituto, por resultar indispensable para resolver el asunto, deberá ser mantenida con ese carácter y no deberá estar disponible en el Expediente, salvo en los casos en los que sobreviniera la desclasificación de dicha información, continuando bajo el resguardo del sujeto obligado en el que originalmente se encontraba.
Artículo 193. Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirma el sentido de la resolución recurrida, el sujeto obligado deberá dar cumplimiento y entregar la información en los términos que establece el artículo 196 de esta Ley. En caso de que se revoque la resolución, el Instituto deberá actuar en los términos que ordene la Suprema Corte de Justicia de la Nación.	**Artículo 193.** Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirma el sentido de la resolución recurrida, el sujeto obligado deberá dar cumplimiento y entregar la ***Información*** en los términos que establece el artículo 196 de esta Ley. **…**
Capítulo V **Del Recurso de Revisión de Asuntos Jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación** **Artículo 194.** En la aplicación de las disposiciones de la presente Ley, relacionadas con la información de asuntos jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se deberá crear un comité especializado en materia de acceso a la información integrado por tres ministros. Para resolver los recursos de revisión relacionados con la información de asuntos jurisdiccionales, dicho comité atenderá a los principios, reglas y procedimientos de resolución establecidos en la presente Ley y tendrá las atribuciones de los Organismos garantes.	**Capítulo V** **Del Recurso de Revisión de Asuntos Jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación** **Artículo 194.** En la aplicación de las disposiciones de la presente Ley, relacionadas con la ***Información*** de asuntos jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se deberá crear un comité especializado en materia de acceso a la ***Información***integrado por tres ministros. Para resolver los recursos de revisión relacionados con la ***Información*** de asuntos jurisdiccionales, dicho comité atenderá a los principios, reglas y procedimientos de resolución establecidos en la presente Ley y tendrá las atribuciones de los Organismos garantes.

Capítulo VI **Del Cumplimiento** **Artículo 196.** Los sujetos obligados, a través de la Unidad de Transparencia, darán estricto cumplimiento a las resoluciones de los Organismos garantes y deberán informar a estos sobre su cumplimiento. Excepcionalmente, considerando las circunstancias especiales del caso, los sujetos obligados podrán solicitar a los Organismos garantes, de manera fundada y motivada, una ampliación del plazo para el cumplimiento de la resolución. Dicha solicitud deberá presentarse, a más tardar, dentro de los primeros tres días del plazo otorgado para el cumplimiento, a efecto de que los Organismos garantes resuelvan sobre la procedencia de la misma dentro de los cinco días siguientes.	**Capítulo VI** **Del Cumplimiento** **Artículo 196. …** Excepcionalmente, considerando las circunstancias especiales del caso, los sujetos obligados, ***con la autorización de la Unidad de Transparencia correspondiente***, podrán solicitar a los Organismos garantes, de manera fundada y motivada, una ampliación del plazo para el cumplimiento de la resolución. …
Artículo 197. Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, el sujeto obligado deberá informar al organismo garante sobre el cumplimento de la resolución. El organismo garante verificará de oficio la calidad de la información y, a más tardar al día siguiente de recibir el informe, dará vista al recurrente para que, dentro de los cinco días siguientes, manifieste lo que a su derecho convenga. Si dentro del plazo señalado el recurrente manifiesta que el cumplimiento no corresponde a lo ordenado por el organismo garante, deberá expresar las causas específicas por las cuales así lo considera.	**Artículo 197. …** El organismo garante verificará de oficio la calidad de la ***Información*** y, a más tardar al día siguiente de recibir el informe, dará vista al recurrente para que, dentro de los cinco días siguientes, manifieste lo que a su derecho convenga. Si dentro del plazo señalado el recurrente manifiesta que el cumplimiento no corresponde a lo ordenado por el organismo garante, deberá expresar las causas específicas por las cuales así lo considera.
Capítulo II **De las Sanciones** **Artículo 206.** La Ley Federal y de las Entidades Federativas, contemplarán como causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, al menos las siguientes: I. La falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados en la normatividad aplicable; II. Actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de las solicitudes en materia de acceso a la información o bien, al no difundir la información relativa a las obligaciones de transparencia previstas en la presente Ley; III. Incumplir los plazos de atención previstos en la presente Ley; IV. IV. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar,	**Capítulo II** **De las Sanciones** **Artículo 206.** La Ley Federal y de las Entidades Federativas, contemplarán como causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, al menos las siguientes: ***I La fa I. La falta de publicación en tiempo y forma de toda la Informaciónque genere o tenga en su posesión cualquiera de los sujetos obligados en la plataforma electrónica nacional de transparencia.*** ***II.*** La f II. La falta de respuesta a las solicitudes de ***Información*** en los plazos señalados en la normatividad aplicable; II. III. Actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de las solicitudes en materia de acceso a la ***Información*** o bien, al no difundir la ***Información*** relativa a las obligaciones de transparencia previstas en la presente Ley;

mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente, sin causa legítima, conforme a las facultades correspondientes, la información que se encuentre bajo la custodia de los sujetos obligados y de sus Servidores Públicos o a la cual tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión;	III. ***IV. …***
V.	IV. ***V***. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente, sin causa legítima, conforme a las facultades correspondientes, la ***Información*** que se encuentre bajo la custodia de los sujetos obligados y de sus Servidores Públicos o a la cual tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión;
VI. V. Entregar información incomprensible, incompleta, en un formato no accesible, una modalidad de envío o de entrega diferente a la solicitada previamente por el usuario en su solicitud de acceso a la información, al responder sin la debida motivación y fundamentación establecidas en esta Ley;	***V.*** VIIEntr ***VI***. Entregar***o publicar en la plataforma electrónica nacional de transparencia,Información*** incomprensible, incompleta, en un formato no accesible, una modalidad de envío o de entrega diferente a la solicitada previamente por el usuario en su solicitud de acceso a la información, al responder sin la debida motivación y fundamentación establecidas en esta Ley;
VI. No actualizar la información correspondiente a las obligaciones de transparencia en los plazos previstos en la presente Ley;	VI. ***VII.***No actualizar la ***Información*** correspondiente a las obligaciones de transparencia en los plazos previstos en la presente Ley;
VII. Declarar con dolo o negligencia la inexistencia de información cuando el sujeto obligado deba generarla, derivado del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones;	VII. ***VIII***. Declarar con dolo o negligencia la inexistencia de ***Información*** cuando el sujeto obligado deba generarla, derivado del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones;
VIII. Declarar la inexistencia de la información cuando exista total o parcialmente en sus archivos;	VIII. I***X***. Declarar la inexistencia de la ***Información*** cuando exista total o parcialmente en sus archivos;
IX. No documentar con dolo o negligencia, el ejercicio de sus facultades, competencias, funciones o actos de autoridad, de conformidad con la normatividad aplicable;	IX. ***X. …***
X. Realizar actos para intimidar a los solicitantes de información o inhibir el ejercicio del derecho;	X. ***XI***. Realizar actos para intimidar a los solicitantes de ***Información*** o inhibir el ejercicio del derecho;
XI. Denegar intencionalmente información que no se encuentre clasificada como reservada o confidencial;	XI. ***XII***. Denegar intencionalmente ***Información*** que no se encuentre clasificada como reservada o confidencial;
XII. Clasificar como reservada, con dolo o negligencia, la información sin que se cumplan las características señaladas en la presente Ley. La sanción procederá cuando exista una resolución previa del organismo garante, que haya quedado firme;	XII. ***XIII***. Clasificar como reservada, con dolo o negligencia, la ***Información*** sin que se cumplan las características señaladas en la presente Ley. La sanción procederá cuando exista una resolución previa del organismo garante, que haya quedado firme;
XIII. No desclasificar la información como reservada cuando los motivos que le dieron origen ya no existan o haya fenecido el plazo, cuando el organismo garante determine que existe una causa de interés público que persiste o no se solicite la prórroga al Comité de Transparencia;	XIII. ***XV***. No desclasificar la ***Información*** como reservada cuando los motivos que le dieron origen ya no existan o haya fenecido el plazo, cuando el organismo
XIV. No atender los requerimientos establecidos en la presente Ley, emitidos por los Organismos garantes, o	
XV. No acatar las resoluciones emitidas por los Organismos garantes, en ejercicio de sus funciones.	
La Ley Federal y las de las Entidades Federativas establecerán los criterios para calificar las sanciones	

conforme a la gravedad de la falta, en su caso, las condiciones económicas del infractor y la reincidencia. Asimismo, contemplarán el tipo de sanciones, los procedimientos y plazos para su ejecución. Las sanciones de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.	garante determine que existe una causa de interés público que persiste o no se solicite la prórroga al Comité de Transparencia; XIV. ***XVI. al XVII …*** … … … ….
Artículo 209. Ante incumplimientos en materia de transparencia y acceso a la información por parte de los partidos políticos, el Instituto u organismo garante competente dará vista, según corresponda, al Instituto Nacional Electoral o a los organismos públicos locales electorales de las Entidades Federativas competentes, para que resuelvan lo conducente, sin perjuicio de las sanciones establecidas para los partidos políticos en las leyes aplicables. En el caso de probables infracciones relacionadas con fideicomisos o fondos públicos, sindicatos o personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, el Instituto u organismo garante competente deberá dar vista al órgano interno de control del sujeto obligado relacionado con éstos, cuando sean Servidores Públicos, con el fin de que instrumenten los procedimientos administrativos a que haya lugar.	**Artículo 209.** Ante incumplimientos en materia de transparencia y acceso a la ***Información*** por parte de los partidos políticos, el Instituto u organismo garante competente dará vista, según corresponda, al Instituto Nacional Electoral o a los organismos públicos locales electorales de las Entidades Federativas competentes, para que resuelvan lo conducente, sin perjuicio de las sanciones establecidas para los partidos políticos en las leyes aplicables. **…**
Artículo 216. Las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o ejerzan actos de autoridad deberán proporcionar la información que permita al sujeto obligado que corresponda, cumplir con sus obligaciones de trasparencia y para atender las solicitudes de acceso correspondientes.	**Artículo 216.** Las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o ejerzan actos de autoridad deberán proporcionar la ***Información*** que permita al sujeto obligado que corresponda, cumplir con sus obligaciones de trasparencia y para atender las solicitudes de acceso correspondientes.
Transitorios **Octavo.** Los sujetos obligados se incorporarán a la Plataforma Nacional de Transparencia, en los términos que establezcan los lineamientos referidos en la fracción VI del artículo 31 de la presente Ley. En tanto entren en vigor los lineamientos que se refieren en el párrafo siguiente, los sujetos obligados deberán mantener y actualizar en sus respectivas páginas de Internet la información conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y las leyes de transparencia de las Entidades Federativas vigentes. El Presidente del Consejo Nacional, en un periodo que	**Transitorios** **Octavo. …** En tanto entren en vigor los lineamientos que se refieren en el párrafo siguiente, los sujetos obligados deberán mantener y actualizar en sus respectivas páginas de Internet la ***Información*** conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y las leyes de transparencia de las Entidades Federativas vigentes. …

no podrá exceder de un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo mediante el cual el Sistema Nacional aprueba los lineamientos que regularán la forma, términos y plazos en que los sujetos obligados deberán cumplir con las obligaciones de transparencia, a que se refieren los Capítulos del I al V del Título Quinto de la presente Ley. Las nuevas obligaciones establecidas en los artículos 70 a 83 de la presente Ley no contempladas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y en las leyes de transparencia de las Entidades Federativas vigentes, serán aplicables solo respecto de la información que se genere a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.	Las nuevas obligaciones establecidas en los artículos 70 a 83 de la presente Ley no contempladas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y en las leyes de transparencia de las Entidades Federativas vigentes, serán aplicables solo respecto de la ***Información*** que se genere a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.
Noveno. La información que hasta la fecha de entrada en vigor del presente decreto obra en los sistemas electrónicos de los Organismos garantes, formará parte de la Plataforma Nacional de Transparencia, conforme a los lineamientos que, para el efecto, emita el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.	**Noveno.** La ***Información*** que hasta la fecha de entrada en vigor del presente decreto obra en los sistemas electrónicos de los Organismos garantes, formará parte de la Plataforma Nacional de Transparencia, conforme a los lineamientos que, para el efecto, emita el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Décimo. Sin perjuicio de que la información que generen y posean es considerada pública, de conformidad con lo señalado en la presente Ley General y que le son aplicables los procedimientos, principios y bases de la misma; en tanto el Sistema Nacional emite los lineamientos, mecanismos y criterios correspondientes para determinar las acciones a tomar, los municipios con población menor a 70,000 habitantes cumplirán con las obligaciones de transparencia de conformidad con sus posibilidades presupuestarias. Lo anterior, sin perjuicio de que dichos municipios continuarán cumpliendo con las obligaciones de información a que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones que emanan de ésta, en los plazos, términos y condiciones previstas en dicha ley y en las disposiciones referidas.	**Décimo.** Sin perjuicio de que la ***Información*** que generen y posean es considerada pública, de conformidad con lo señalado en la presente Ley General y que le son aplicables los procedimientos, principios y bases de la misma; en tanto el Sistema Nacional emite los lineamientos, mecanismos y criterios correspondientes para determinar las acciones a tomar, los municipios con población menor a 70,000 habitantes cumplirán con las obligaciones de transparencia de conformidad con sus posibilidades presupuestarias. Lo anterior, sin perjuicio de que dichos municipios continuarán cumpliendo con las obligaciones de ***Información*** a que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones que emanan de ésta, en los plazos, términos y condiciones previstas en dicha ley y en las disposiciones referidas. …

Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente:

INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

ARTÍCULO PRIMERO: Se **reforman** los artículos 1, en su segundo párrafo, 2 numerales V y VII, 3 en su primer párrafo y en los numerales X, XI, XII, XVIy XXI, 4 en su segundo párrafo, 5 en su primer párrafo, 6 en su primer párrafo, 7 en su primer párrafo, 8 en su primer primer párrafo y en sus numerales VI y VII, 10

primer y segundo párrafos, 11, primer párrafo, 12 primer párrafo, 13 primero y segundo párrafos, 16 primer párrafos, 17 primer y segundo párrafos, 19 primer párrafo, 20 primer párrafo, 21 primer párrafo, 22 primer párrafo, 23 primer párrafo, 24 en su numeral VI, IX, XI y XII, 28 en su primer párrafo, 29 primer párrafo, 31 numerales V, VII, VIII y XIII, 37 primer párrafo, 38 primer párrafo, 41 numerales III y X, 42 numerales XI, XIII, y XV, 43 en su tercer y quinto párrafos, 44 numerales I, II, III, IV y VIII, 45 numerales I, II, III, IV, V, IX y último párrafo, 46 primer párrafo, 48 numeral VII, 51 primer párrafo, 53 segundo párrafo, 54 numerales I, II, III, IV, y V, 55 numerales II, III, y IV, La denominación del Capítulo II del Título Cuarto, 56 en su primer párrafo, 57 en su primer párrafo, 58 primero y segundo párrafos, 59 primer párrafo, 60 primer párrafo, 61 primer y segundo párrafos, 62 primer párrafo, 63 primer párrafo, 64 segundo párrafo, 65 primer y segundo párrafos, 66 primer párrafo, 67 primer párrafo, 68 primer y segundo párrafos, 70 primer párrafo en sus numerales XII, XV, XVII, XXI, XXII, XXIII, XXXVIII, XLVIII, y segundo párrafo, 71 primer párrafo inciso f, 72 primer párrafo numeral XI, 73 en su primer párrafo, 74 primer párrafo, numeral I, inciso l), numeral II incisos e) y f) y su numeral III, 75 primer párrafo numeral II y VII, 76 primer párrafo, 77 primer párrafo, 78 primero, segundo y tercer párrafos, 79 primer y segundo párrafos, 80 primer párrafo numeral I y III, 81 primer párrafo, 82 primer párrafo numeral I, 83 primer párrafo, 88 numeral I, 91 numeral V, 96 segundo párrafo, 100 primer párrafo, 101 segundo, tercero y cuarto párrafos, 102 primero y segundo párrafos, 103 primero, segundo y tercer párrafos, 104 primer párrafo, 105 primer párrafo, 106 primer párrafo, 108 primer y tercer párrafos, 109 primer párrafo, 112 primer párrafo, 113 párrafo primero, numeral IV, recorriéndose los demás en su orden, V y X, 115 numeral II, 116 párrafos primero, segundo, tercero y cuarto, 117 primer párrafo, 118 primer párrafo, 119 primer párrafo, 120 primer párrafo y segundo en sus numerales I y V, y tercer párrafo, 121 primer párrafo, 122 primer párrafo, eliminando el segundo 123 primer párrafo, 124 numeral III y segundo y tercer párrafos, 125 segundo párrafo, 127 primer párrafo, 128 primero, segundo y tercer párrafos, 129 primer y segundo párrafos, 130 primer párrafo, 131 primer párrafo, 133 primer párrafo, 134 segundo párrafo, 135 primer párrafo, 136 primer y segundo párrafos, 137 primero párrafo, y segundo en el inciso c), así como el tercer y cuarto párrafos, 138 primer párrafo en su numeral III, 139 primer párrafo, 141 primero, segundo y cuarto párrafos, 143 en sus fracciones IV, V, VI, VII, VIII, 147 primer párrafo, 148 primer párrafo, 150 numeral VI, 152 primer párrafo, 155 numeral V y VI recorriéndose los demás en su orden, 158 primer párrafo, 160 segundo párrafo, 165 tercer párrafo, 167 primer y segundo párrafos, 191 primer y segundo párrafos, 193 primer párrafo, 194 primer y segundo párrafos, 196 segundo párrafo, 197 segundo párrafo, 206 numerales I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII y XIII recorriéndose los demás en su orden, 209 primer párrafo, 216 primer párrafo, octavo transitorio en su segundo y cuarto párrafos, noveno transitorio en su primer párrafo, décimo transitorio en su primer y segundo párrafos; y se **adicionan** los artículos 1 segundo párrafo, 2 numeral VII, 3 primer párrafo numeral VII, XII, 4 segundo párrafo, 6 primer párrafo, 7 primer párrafo, y adicionando un cuarto párrafo, 8 numeral VI, 10 primer párrafo, 11 segundo párrafo, 12 primer párrafo, 16 primer párrafo, 18 primer párrafo, 20 primer párrafo, 23 primer párrafo, 59 primer párrafo, 71 primer párrafo, 72 primer párrafo, 73 primer párrafo, 74 primer párrafo, 75 primer párrafo, 76 primer párrafo, 77 primer párrafo, 78 primer párrafo, 83 primer párrafo, 101 tercer, cuarto y quinto párrafos, la denominación del Capítulo I del Título Séptimo, 122 primer párrafo, 134 segundo párrafo, 143 con el numeral XIV, 152 con un segundo párrafo, 206 con el numeral I, recorriéndose los demás en su orden, todos de la Ley General de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, para quedar como sigue:

Artículo 1. …

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso, ***publicación y disponibilidad permanente de toda*** la ***Información***en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato

que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios.

Artículo 2. Son objetivos de esta Ley:

I. al IV. ..

V. Establecer las bases y la ***Información*** de interés público que se debe difundir proactivamente;

VI. …

VII. Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso a la información, la participación ciudadana***, evaluación gubernamental, el presupuesto participativo,*** así como la rendición de cuentas, a través del establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de ***Información*** oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, que se difunda en los formatos más adecuados y accesibles para todo el público y atendiendo en todo momento las condiciones sociales, económicas y culturales de cada región;

VIII. al IX. …

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá, ***tanto en sus acepciones singulares y plurales,*** por:

I al VI. …

VII. **Documento:** Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares***, actos***, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas***, licitaciones, normas oficiales Mexicanas, formatos de trámites, requisitos de trámites, resolucionesjudiciales, resoluciones administrativas, resoluciones de órganos reguladores*** o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados, sus Servidores Públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico;

VIII al IX.

X. **Formatos Abiertos**: Conjunto de características técnicas y de presentación de la ***Información*** que corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos de forma integral y facilitan su procesamiento digital, cuyas especificaciones están disponibles públicamente y que permiten el acceso sin restricción de uso por parte de los usuarios;

XI. **Formatos Accesibles:** Cualquier manera o forma alternativa que dé acceso a los solicitantes de información, en forma tan viable y cómoda como la de las personas sin discapacidad ni otras dificultades para acceder a cualquier texto impreso y/o cualquier otro formato convencional en el que la ***Información*** pueda encontrarse;

XII. **Información:** Se refiere a ***toda*** la información, ***Documentos y Archivos*** que ***genere y esté en posesión de los sujetos obligados;***

XIII al XV. …

XVI. **Organismos garantes:** Aquellos con autonomía constitucional especializados en materia de acceso a la ***Información*** y protección de datos personales en términos de los artículos 6o., 116, fracción VIII y 122, apartado C, BASE PRIMERA, Fracción V, inciso ñ) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

XVII al XX.

XXI. **Versión Pública:** Documento o Expediente en el que se da acceso a ***Información***eliminando u omitiendo las partes o secciones clasificadas.

Artículo 4. El derecho humano de acceso a la ***Información*** comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información.

Como regla general, la Información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona.

La Información sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por las razones y casos que esta Ley establece.

Artículo 5. No podrá clasificarse como reservada aquella ***Información*** que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
…

Artículo 6. El Estado garantizará **la*efectiva publicación en la plataforma electrónica nacional de transparencia, concediendo*** acceso ***y disponibilidada*** toda persona, ***de*** la ***Información*** en posesión de cualquier entidad, autoridad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos; así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito de la Federación, de las Entidades Federativas y los municipios.

Artículo 7. El derecho de acceso ***y publicación*** a la **Información** o la clasificación de la **Información** se interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente Ley.
…
…

Para que los actos administrativos y de gobierno tengan validez legal y efectos vinculatorios, deberán ser publicitados en los términos de esta ley, salvo los actos que deban permanecer reservados en los términos de esta ley.

Capítulo II
De los Principios Generales
Sección Primera
De los principios rectores de los Organismos garantes

Artículo 8. Los Organismos garantes del derecho de acceso a la ***Información*** deberán regir su funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios:

I. al V. …

VI. **Máxima Publicidad:** Toda la ***Informaciónque esté*** en posesión **y sea generada*por*** los sujetos obligados ***será publicada en la plataforma electrónica nacional de transparencia y estará disponible de manera inmediata sin necesidad de ser solicitada. Dicha Informaciónserá pública, completa, oportuna y accesible.***

VII.**Objetividad:** Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales;

VIII. al IX. …

Sección Segunda
De los Principios en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Artículo 10. Es obligación de los Organismos garantes otorgar las medidas pertinentes para asegurar el acceso, ***publicación en la plataforma electrónica nacional de transparencia y disponibilidada la Información***a todas las personas en igualdad de condiciones con las demás.

Está prohibida toda discriminación que menoscabe o anule la transparencia o acceso a la ***Información*** pública en posesión de los sujetos obligados.

Artículo 11. Toda ***la Información***en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna***, disponible***, accesible ***y publicada en la plataforma electrónica nacional de transparencia sin necesidad de solicitud alguna.***

Artículo 12. Toda la ***Información*** pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública, disponible***, publicada sin necesidad de solicitud alguna*** y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley Federal y las correspondientes de las Entidades Federativas, así como demás normas aplicables.

Artículo 13. En la generación, publicación y entrega de ***Información*** se deberá garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del derecho de acceso a la ***Información*** de toda persona.

Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la ***Información*** generada tenga un lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida de lo posible, su accesibilidad y traducción a lenguas indígenas.

Artículo 16. El ejercicio del derecho de acceso a la ***Información*** no estará condicionado a que el solicitante acredite interés alguno o justifique su utilización, ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad***, así como no deberá ser necesaria solicitud o trámite alguno, con excepción de los casos previstos en la ley.***

Artículo 17. El ejercicio del derecho de acceso a la ***Información*** es gratuito y sólo podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada.

En ningún caso los Ajustes Razonables que se realicen para el acceso de la ***Información*** de solicitantes con discapacidad, será con costo a los mismos.

Artículo 18. Los sujetos obligados deberán documentar ***y publicar*** todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones.

Artículo 19. Se presume que la ***Información*** debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados.

En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia.

Artículo 20. Los sujetos obligados deberán solicitar autorización a las Unidades de Transparencia, cuando consideren que a la realización de un acto administrativo o de gobierno, los mismos no deban publicitarse, porque se encuentran en alguno de los casos de excepción previstos en esta Ley. Al efecto, las Unidades de Transparencia, si resuelven a favor la solicitud, la misma deberá ratificarse por los organismos garantes. Las resoluciones de la Unidades de Transparencia en favor de publicitar la información podrán ser únicamente recurridas por los particulares que tengan legitimación para hacerlo, que se sientan afectados.

Artículo 21. Todo procedimiento en materia de derecho de acceso a la ***Información***deberá sustanciarse de manera sencilla y expedita, de conformidad con las bases de esta Ley.

Artículo 22. En el procedimiento de acceso, entrega y publicación de la ***Información***se propiciarán las condiciones necesarias para que ésta sea accesible a cualquier persona, de conformidad con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Capítulo III
De los Sujetos Obligados

Artículo 23. Son sujetos obligados a ***publicar en la plataforma electrónica nacional de transparencia,*** transparentar y permitir el acceso a su ***Información***y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos***, incluyendo sus grupos parlamentarios,*** fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal.

Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza:

I. al V. …

VI. Proteger y resguardar la ***Información***clasificada como reservada o confidencial;

VII. al VIII.

IX. Fomentar el uso de tecnologías de la ***información***para garantizar la transparencia, el derecho de acceso a la ***Información*** y la accesibilidad a éstos;

X. Cumplir con las resoluciones emitidas por los Organismos garantes;

XI. Publicar y mantener actualizada la ***Información***relativa a las obligaciones de transparencia;

XII. Difundir proactivamente ***Información***de interés público;

XIII al XIV. …

TÍTULO SEGUNDO
RESPONSABLES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Capítulo I
Del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

Artículo 28. El Sistema Nacional se integra por el conjunto orgánico y articulado de sus miembros, procedimientos, instrumentos y políticas, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano. Tiene como finalidad coordinar y evaluar las acciones relativas a la política pública transversal de transparencia, acceso a la ***Información***y protección de datos personales, así como establecer e implementar los criterios y lineamientos, de conformidad con lo señalado en la presente Ley y demás normatividad aplicable.

Artículo 29. El Sistema Nacional se conformará a partir de la coordinación que se realice entre las distintas instancias que, en razón de sus ámbitos de competencia, contribuyen a la vigencia de la transparencia a nivel nacional, en los tres órdenes de gobierno. Este esfuerzo conjunto e integral, contribuirá a la generación de ***Información*** de calidad, a la gestión de la información, al procesamiento de la misma como un medio para facilitar el conocimiento y evaluación de la gestión pública, la promoción del derecho de acceso a la ***Información***y la difusión de una cultura de la transparencia y su accesibilidad, así como a una fiscalización y rendición de cuentas efectivas.

Artículo 31. El Sistema Nacional tiene como funciones:

I. al IV. …

V. Coadyuvar en la elaboración, fomento y difusión entre los sujetos obligados de los criterios para la sistematización y conservación de archivos que permitan localizar eficientemente la ***Información***pública de acuerdo a la normatividad en la materia;

VI. …

VII. Establecer políticas en cuanto a la digitalización de la ***Información***pública en posesión de los sujetos obligados y el uso de tecnologías de ***Información***y la implementación de Ajustes Razonables, que garanticen el pleno acceso a ésta;

VIII. Diseñar e implementar políticas en materia de generación, actualización, organización, clasificación, publicación, difusión, conservación y accesibilidad de la ***Información***pública de conformidad con la normatividad aplicable;

IX. …

X. Establecer programas de profesionalización, actualización y capacitación de los Servidores Públicos e integrantes de los sujetos obligados en materia de transparencia, acceso a la ***Información***pública, así como de protección de datos personales;

XI al XII. …

XIII. Promover el ejercicio del derecho de acceso a la ***Información***pública en toda la República mexicana;

XIV y XV. …
…

Capítulo II
De los Organismos garantes

Artículo 37. Los Organismos garantes son autónomos, especializados, independientes, imparciales y colegiados, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsables de garantizar, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de los derechos de acceso a la ***Información***y la protección de datos personales, conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo previsto en esta Ley y demás disposiciones aplicables.

…

Artículo 38. El Congreso de la Unión, los Congresos de las Entidades Federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de garantizar la integración colegiada y autónoma de los Organismos garantes, deberán prever en su conformación un número impar y sus integrantes se denominarán Comisionados. Procurarán en su conformación privilegiar la experiencia en materia de acceso a la ***Información***pública y protección de datos personales, así como procurar la igualdad de género. La duración del cargo no será mayor a siete años y se realizará de manera escalonada para garantizar el principio de autonomía.
…

Artículo 41. El Instituto, además de lo señalado en la Ley Federal y en el siguiente artículo, tendrá las siguientes atribuciones:

I. al II. …

III. Conocer y resolver los recursos de inconformidad que interpongan los particulares, en contra de las resoluciones emitidas por los Organismos garantes de las Entidades Federativas que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la ***Información***en términos de lo dispuesto en el Capítulo II, del Título Octavo de la presente Ley;

IV. al IX. …

X. Elaborar y presentar un informe anual de actividades y de la evaluación general en materia de acceso a la **Información**pública en el país, así como del ejercicio de su actuación y presentarlo ante la Cámara de Senadores, dentro de la segunda quincena del mes de enero, y hacerlo público, y

XI. …

Artículo 42. Los Organismos garantes tendrán, en el ámbito de su competencia, las siguientes atribuciones:

III. al VIII. …

IX. Suscribir convenios con los sujetos obligados que propicien la publicación de ***Información***en el marco de las políticas de transparencia proactiva;

X. al XII. ..

XIII. Coordinarse con las autoridades competentes para que en los procedimientos de acceso a la ***Información***, así como en los medios de impugnación, se contemple contar con la ***Información***necesaria en lenguas indígenas y Formatos Accesibles, para que sean sustanciados y atendidos en la misma lengua y, en su caso, se promuevan los Ajustes Razonables necesarios si se tratara de personas con discapacidad;

XIV. …

XV. Según corresponda, interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que vulneren el derecho de acceso a la ***Información***pública y la protección de datos personales;

XVI. al XXII. …

Capítulo III
De los Comités de Transparencia

Artículo 43. …
…
…
Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la ***Información***para determinar su clasificación, conforme a la normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda de la información.
…
La clasificación, desclasificación y acceso a la ***Información***que generen o custodien las instancias de inteligencia e investigación deberá apegarse a los términos previstos en la presente Ley y a los protocolos de seguridad y resguardo establecidos para ello.

Artículo 44. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:

I. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la ***implementación de los mecanismos*** en materia de acceso a la información;

II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la ***Información***y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

III. Ordenar, en su caso, a las Áreas competentes que generen la ***Información***que derivado de sus facultades, competencias y funciones deban tener en posesión o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga, de forma fundada y motivada, las razones por las cuales, en el caso particular, no ejercieron dichas facultades, competencias o funciones;

IV. Establecer políticas para facilitar ***la plena publicidad de laInformaciónde la dependencia de que se trate, para garantizar debidamente*** el ejercicio del derecho de acceso a la información;

V. al VII. …

VIII. Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la I***nformación***a que se refiere el artículo 101 de la presente Ley, y

IX. . …

Capítulo IV
De las Unidades de Transparencia

Artículo 45. Los sujetos obligados designarán al responsable de la Unidad de Transparencia que tendrá las siguientes funciones:

I. Recabar y difundir la **Información** a que se refieren los Capítulos II, III, IV y V del Título Quinto de esta Ley, así como la correspondiente de la Ley Federal y de las Entidades Federativas y propiciar que las Áreas la actualicen periódicamente, conforme la normatividad aplicable;

II. ***Implementar los sistemas*** de acceso a la información;

III. Auxiliar a los particulares ***para la obtención de la Información pertinente que deseen*** obtener ***Información***y, en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable;

IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de ***la máxima publicidada que los sujetos obligados deben llevar a cabo;***

V. ***Llevar a cabo las comunicaciones con los solicitantes;***

VI. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en la gestión de acceso a la información, conforme a la normatividad aplicable;

VII. . …

VIII. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas yresultados.

IX. Promover e implementar ***las*** políticas de transparencia, ***en cumplimiento con los mandatos de máxima publicidad establecidos en esta Ley;***

X. ***Llevar a cabo las acciones necesarias parala máxima*** transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado;

XI. al XII. …

Los sujetos obligados promoverán acuerdos con instituciones públicas especializadas que pudieran auxiliarles ***a implementar las obligaciones de máxima publicidad establecidas en esta Ley, así como los mecanismos para proporcionarInformación***en la lengua indígena, braille o cualquier formato accesible correspondiente, en forma más eficiente.

Artículo 46. Cuando alguna Area de los sujetos obligados se negar**e** a colaborar con la Unidad de Transparencia, ésta dará aviso al superior jerárquico para que le ordene realizar sin demora las acciones conducentes.

…

Artículo 48. Los Consejos Consultivos contarán con las siguientes facultades:

I. al VI. …

VII. Analizar y proponer la ejecución de programas, proyectos y acciones relacionadas con la materia de transparencia y acceso a la ***Información*** y su accesibilidad.

TÍTULO TERCERO
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA

Artículo 51. Los Organismos garantes promoverán la publicación de la ***Información***de Datos Abiertos y Accesibles.

TÍTULO CUARTO
CULTURA DE TRANSPARENCIA Y APERTURA GUBERNAMENTAL

Capítulo I
De la promoción de la transparencia y el derecho de acceso a la información

Artículo 53.…

Con el objeto de crear una cultura de la transparencia y acceso a la ***Información***entre los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos, los Organismos garantes deberán promover, en colaboración con instituciones educativas y culturales del sector público o privado, actividades, mesas de trabajo, exposiciones y concursos relativos a la transparencia y acceso a la información.

Artículo 54. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus respectivas competencias o a través de los mecanismos de coordinación que al efecto establezcan, podrán:

I. Proponer, a las autoridades educativas competentes que incluyan contenidos sobre la importancia social del derecho de acceso a la ***Información***en los planes y programas de estudio de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y para la formación de maestros de educación básica en sus respectivas jurisdicciones;

II. Promover, entre las instituciones públicas y privadas de educación media superior y superior, la inclusión, dentro de sus programas de estudio, actividades académicas curriculares y extracurriculares, de temas que ponderen la importancia social del derecho de acceso a la ***Información***y rendición de cuentas;

III. Promover, que en las bibliotecas y entidades especializadas en materia de archivos se prevea la instalación de módulos de información pública, que faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la ***Información*** y la consulta de la ***Información***derivada de las obligaciones de transparencia a que se refiere esta Ley;

IV. Proponer, entre las instituciones públicas y privadas de educación superior, la creación de centros de investigación, difusión y docencia sobre transparencia, derecho de acceso a la ***Información***y rendición de cuentas;

V. Establecer, entre las instituciones públicas de educación, acuerdos para la elaboración y publicación de materiales que fomenten la cultura del derecho de acceso a la ***Información*** y rendición de cuentas;

VI. a. IX. …

Artículo 55. Para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley, los sujetos obligados podrán desarrollar o adoptar, en lo individual o en acuerdo con otros sujetos obligados, esquemas de mejores prácticas que tengan por objeto:

I. …

II. Armonizar el acceso a la ***Información***por sectores;

III. Facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la ***Información***a las personas, y

IV. Procurar la accesibilidad de la ***Información.***

Capítulo II
De la *Implementación de la Máxima Publicidad*

Artículo 56. Los Organismos garantes emitirán políticas para ***el establecimiento de la máxima publicidad y plena transparencia en todos los sujetos obligados***, en atención a los lineamientos generales definidos para ello por el Sistema Nacional, diseñadas para incentivar a los sujetos obligados a publicar I***nformación***. Dichas políticas tendrán por objeto, entre otros, promover la reutilización de la ***Información***que generan los sujetos obligados, considerando la demanda de la sociedad, identificada con base en las metodologías previamente establecidas.

Artículo 57. La ***Información***publicada por los sujetos obligados, en el marco de la política de máxima publicidad, se difundirá en los medios y formatos que más convengan al público al que va dirigida.

Artículo 58. El Sistema Nacional emitirá los criterios para evaluar la efectividad de la política de ***máxima publicidad***, considerando como base, la reutilización que la sociedad haga a la información.

La ***Información***que se publique, como resultado de las políticas de ***máxima publicidad***, deberá permitir la

generación de conocimiento público útil, para ***eliminar*** asimetrías de la información, mejorar los accesos a trámites y servicios, optimizar la toma de decisiones de autoridades o ciudadanos y deberá tener un objeto claro enfocado en las necesidades de sectores de la sociedad determinados o determinables.

Capítulo III
Del Gobierno Abierto

Artículo 59. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus atribuciones coadyuvarán, con los sujetos obligados y representantes de la sociedad civil en la implementación de mecanismos de colaboración para la promoción e implementación de políticas y mecanismos de apertura gubernamental, ***para generar una interacción cotidiana de la ciudadanía con el gobierno, a fin de desarrollar mecanismos para el establecimiento de políticas públicas generadas por la interacción mencionada anteriormente.***

TÍTULO QUINTO
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
Capítulo I
De las disposiciones generales

Artículo 60. Las leyes en materia de transparencia y acceso a la información, en el orden federal y en las Entidades Federativas, establecerán la obligación de los sujetos obligados de poner a disposición de los particulares la ***Información***a que se refiere este Título en los sitios de Internet correspondientes de los sujetos obligados y a través de la Plataforma Nacional.

Artículo 61. Los lineamientos técnicos que emita el Sistema Nacional establecerán los formatos de publicación de la ***Información*** para asegurar que la ***Información***sea veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible, verificable.

Estos lineamientos contemplarán la homologación en la presentación de la ***Información***a la que hace referencia este Título por parte de los sujetos obligados.

Artículo 62. La ***Información***correspondiente a las obligaciones de ***reserva de Información***deberá actualizarse por lo menos cada tres meses, salvo que en la presente Ley o en otra disposición normativa se establezca un plazo diverso. El Sistema Nacional emitirá los criterios para determinar el plazo ***máximo*** que deberá permanecer ***bajo reserva*** la Información, atendiendo a ***los casos específicos establecidos por esta Ley.***

Artículo 63. Los Organismos garantes, de oficio o a petición de los ***sujetos*** obligados, ***verificarán los casos en que se la Informacióndeba ser reservada, así como*** el cumplimiento que los sujetos obligados den a las disposiciones previstas en este Título.
…

Artículo 64. La página de inicio de los portales de Internet de los sujetos obligados tendrá un vínculo de acceso directo al sitio donde se encuentra la I***nformación***pública a la que se refiere este Título, el cual deberá contar con un buscador.

La ***Información*** de transparencia deberá publicarse con perspectiva de género y discapacidad, cuando así corresponda a su naturaleza.

Artículo 65. Los Organismos garantes y los sujetos obligados establecerán las medidas que faciliten el acceso y búsqueda de la ***Información***para personas con discapacidad y se procurará que la ***Información***publicada sea accesible de manera focalizada a personas que hablen alguna lengua indígena.

Por lo que, por sí mismos o a través del Sistema Nacional, deberán promover y desarrollar de forma progresiva, políticas y programas tendientes a garantizar la accesibilidad de la ***Información***en la máxima medida posible.

…

Artículo 66. Los sujetos obligados pondrán a disposición de las personas interesadas equipos de cómputo con acceso a Internet, que permitan a los particulares consultar la ***Información***o utilizar el sistema de solicitudes de acceso a la ***Información***en las oficinas de las Unidades de Transparencia. Lo anterior, sin perjuicio de que adicionalmente se utilicen medios alternativos de difusión de la información, cuando en determinadas poblaciones éstos resulten de más fácil acceso y comprensión.

Artículo 67. La ***Información***publicada por los sujetos obligados, en términos del presente Título, no constituye propaganda gubernamental. Los sujetos obligados, incluso dentro de los procesos electorales, a partir del inicio de las precampañas y hasta la conclusión del proceso electoral, deberán mantener accesible la ***Información***en el portal de obligaciones de transparencia, salvo disposición expresa en contrario en la normatividad electoral.

Artículo 68. …

I. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de datos, en los casos que sea procedente, así como capacitar a los Servidores Públicos y dar a conocer ***Información*** sobre sus políticas en relación con la protección de tales datos, de conformidad con la normatividad aplicable;

IV. al VI. ….

Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la ***Información*** de acuerdo a la normatividad aplicable. Lo anterior, sin perjuicio a lo establecido por el artículo 120 de esta Ley.

Capítulo II

De las obligaciones de transparencia comunes

Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información***, todos*** los temas, documentos y políticas ***públicas ,incluyendo, sin limitación de toda la Informaciónde los actos administrativos, de gobierno y de las cuentas del erario público, así como fideicomisos y fondos. A manera enunciativa más no limitativa, incluirá la siguiente información:***

I. al XI.

XII. La ***Información***en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales de los Servidores Públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la normatividad aplicable;

XIII. al XIV. ..

XV. La ***Información***de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente:

XVI. …

XVII. La ***Información***curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto;

XVIII. al XX. …

XXI. La ***Información***financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable;

XXII. La ***Información***relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable;

XXIII. al XXVII. …

XXVIII. La ***Información***sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente:

XXIX.al XXXVII. …

XXXVIII. Los programas que ofrecen, incluyendo ***Información***sobre la población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos;

XXXIX. al XLVII. …

XLVIII. Cualquier otra ***Información***que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, con base en la ***Información***estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.

Los sujetos obligados deberán informar a los Organismos garantes y verificar que se publiquen en la Plataforma Nacional, cuáles son ***todos los rubros de la administraciónpública***, a sus páginas de Internet, con el objeto de que éstos verifiquen y aprueben, de forma fundada y motivada, la relación de fracciones aplicables a cada sujeto obligado.

Capítulo III

De las obligaciones de transparencia específicas de los sujetos obligados

Artículo 71. Además de lo señalado en el artículo anterior de la presente Ley, los sujetos obligados de los Poderes Ejecutivos Federal, de las Entidades Federativas y municipales, deberán poner a disposición del público y actualizar ***todos los temas, documentos y políticas públicas, incluyendo, sin limitación, toda la Informaciónde los actos administrativos, de gobierno y de las cuentas del erario público, así como fideicomisos y fondos. A manera enunciativa más no limitativa, incluirá*** la siguiente información:

I. En el caso del Poder Ejecutivo Federal, los poderes ejecutivos de las Entidades Federativas, el Órgano Ejecutivo del Distrito Federal y los municipios:

a) al c) …

d) El nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de los contribuyentes a los que se les hubiera cancelado o condonado algún crédito fiscal, así como los montos respectivos. Asimismo, la ***Información***estadística sobre las exenciones previstas en las disposiciones fiscales;

e) Los nombres de las personas a quienes se les habilitó para ejercer como corredores y notarios públicos, así como sus datos de contacto, la ***Información***relacionada con el proceso de otorgamiento de la patente y las sanciones que se les hubieran aplicado;

f) La ***Información***detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de uso y construcción otorgadas por los gobiernos municipales, y

g) …

II. …

Artículo 72. ***De manera enunciativa más no limitativa, a***demás de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, los sujetos obligados de los Poderes Legislativos Federal, de las Entidades Federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:

I. al X. …

XI. Las versiones públicas de la ***Información***entregada en las audiencias públicas, comparecencias y en los procedimientos de designación, ratificación, elección, reelección o cualquier otro;

XII. al XV. …

Artículo 73. ***De manera enunciativa más no limitativa, además*** de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, los sujetos obligados de los Poderes Judiciales Federal y de las Entidades Federativas deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:

I. al V. …

Artículo 74. ***De manera enunciativa más no limitativa, además*** de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, los órganos autónomos deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente

información:

I. Instituto Nacional Electoral y organismos públicos locales electorales de las Entidades Federativas:

a) al k) …

l) La ***Información***sobre votos de mexicanos residentes en el extranjero;

m) al n) …

II. Organismos de protección de los derechos humanos Nacional y de las Entidades federativas:

a) al d) …

e) Toda la ***Información***con que cuente, relacionada con hechos constitutivos de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, una vez determinados así por la autoridad competente, incluyendo, en su caso, las acciones de reparación del daño, atención a víctimas y de no repetición;

f) La ***Información***relacionada con las acciones y resultados de defensa, promoción y protección de los derechos humanos;

g) al m) …

III. Organismos garantes del derecho de acceso a la ***Información***y la protección de datos personales:

a) al g) …

Artículo 75*. De manera enunciativa más no limitativa, además* de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, las instituciones de educación superior públicas dotadas de autonomía deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:

I…

II. Toda la ***Información***relacionada con sus procedimientos administrativos;

III. al VI. …

VII. La ***Información***relativa a los procesos de selección de los consejos;

VIII. al IX. …

Artículo 76. ***De manera enunciativa más no limitativa, además*** de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, los partidos políticos nacionales y locales, las agrupaciones políticas nacionales y las personas morales constituidas en asociación civil creadas por los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente, según corresponda, deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:

II. Al XXX. …

Artículo 77. ***De manera enunciativa más no limitativa, además*** de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, los fideicomisos, fondos públicos, mandatos o cualquier contrato análogo, deberán poner a disposición del público y mantener actualizada y accesible, en lo que resulte aplicable a cada contrato, la siguiente información:

I. al VIII. ..

Artículo 78. ***De manera enunciativa más no limitativa*****,** las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral deberán poner a disposición del público y mantener actualizada y accesible**,** la siguiente ***Información*** de los sindicatos:

I. al VIII. ..

Las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral deberán expedir copias de los documentos que obren en los Expedientes de los registros a los solicitantes que los requieran, de conformidad con el procedimiento de acceso a la ***Información.***

Por lo que se refiere a los documentos que obran en el Expediente de registro de las asociaciones, únicamente estará clasificada como ***Información***confidencial, los domicilios de los trabajadores señalados en los padrones de socios.

Artículo 79. Los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán mantener actualizada y accesible, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, la ***Información***aplicable del artículo 70 de esta Ley, la señalada en el artículo anterior y la siguiente:

I. al IV. …

Por lo que se refiere a los documentos que obran en el Expediente de registro de las asociaciones, únicamente estará clasificada como ***Información*** confidencial, los domicilios de los trabajadores señalados en los padrones de socios.
…

Artículo 80. Para determinar la ***Información***adicional que publicarán todos los sujetos obligados de manera obligatoria, los Organismos garantes deberán:

I. Solicitar a los sujetos obligados que, atendiendo a los lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, remitan el listado de ***Información***que consideren de interés público;

II. …

III. Determinar el catálogo de ***Información***que el sujeto obligado deberá publicar como obligación de transparencia.

Capítulo IV
De las obligaciones específicas de las personas físicas o morales que reciben y ejercen recursos públicos o ejercen actos de autoridad

Artículo 81. Los Organismos garantes, dentro de sus respectivas competencias, determinarán los casos en que las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, cumplirán con las obligaciones de transparencia y acceso a la ***Información***directamente o a través de los sujetos obligados que les asignen dichos recursos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad.

…

…

Artículo 82. Para determinar la ***Información***que deberán hacer pública las personas físicas o morales que reciben y ejercen recursos públicos o realizan actos de autoridad, los Organismos garantes competentes deberán:

I. Solicitar a las personas físicas o morales que, atendiendo a los lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, remitan el listado de ***Información***que consideren de interés público;

II …

III. …

Capítulo V
De las obligaciones específicas en materia energética

Artículo 83*. De manera enunciativa más no limitativa, a*dicionalmente a la ***Información*** señalada en el artículo 70 de esta Ley, ***y de lo señalado en la Ley de Hidrocarburos y otras leyes de la materia***, los sujetos obligados del sector energético deberán garantizar la máxima transparencia de la ***Información***relacionada con los contratos, asignaciones, permisos, alianzas, sociedades y demás actos que el Estado suscriba u otorgue a particulares, empresas productivas del Estado, subsidiarias y filiales o que se celebren entre ellos en materia de las actividades de planeación y control del sistema eléctrico nacional; del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; de exploración y extracción de hidrocarburos, a través de mecanismos que garanticen su difusión y la consulta pública, por lo que deberán incluir, cuando menos, las bases, reglas, ingresos, costos, límites de costos, contraprestaciones, contribuciones y pagos realizados y de los procedimientos que se lleven a cabo para tal efecto.

Lo anterior, de conformidad con las obligaciones de transparencia previstas en la Ley Federal y lo dispuesto en las leyes de Hidrocarburos; de la Industria Eléctrica; de Ingresos sobre Hidrocarburos; de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, ***y demás disposiciones*** en esta materia.

Artículo 88. La verificación que realicen los Organismos garantes en el ámbito de sus respectivas competencias, se sujetará a lo siguiente:

I. Constatar que la I***nformación***esté completa, publicada y actualizada en tiempo y forma;

II. al IV. ..

…

…

…

Artículo 91. …

I. al IV. …

V. El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, únicamente para propósitos estadísticos. Esta ***Información*** será proporcionada por el denunciante de manera voluntaria. En ningún caso el dato sobre el nombre y el perfil podrán ser un requisito para la procedencia y trámite de la denuncia.

Artículo 96. …

La resolución debe ser fundada y motivada e invariablemente debe pronunciarse sobre el cumplimiento de la publicación de la **Información**por parte del sujeto obligado.

TÍTULO SEXTO
INFORMACIÓN CLASIFICADA

Capítulo I
De las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la información

Artículo 100. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina ***sujetar al escrutinio y autorización de los organismos garantes***, que la ***Información***en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título.

…

Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables ***de determinar si sujetan al escrutinio y autorización de los organismos garantes, a fin de*** clasificar la Información, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, la Ley Federal y de las Entidades Federativas.

Artículo 101. Los Documentos clasificados como reservados serán públicos cuando:

I. al IV. …

La ***Información***clasificada como reservada, según el artículo 113 de esta Ley, podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de cinco años. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que se clasifica el documento.

Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de Transparencia y ***ratificada por el organismo garante respectivo***, podrán ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de cinco años adicionales, siempre y cuando justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación, mediante la aplicación de una prueba de daño.

Para los casos previstos por la fracción II, cuando se trate de ***Información***cuya publicación pueda ocasionar la destrucción o inhabilitación de la infraestructura de carácter estratégico para la provisión de bienes o servicios públicos, o bien se refiera a las circunstancias expuestas en la fracción IV del artículo 113 de esta Ley y que a juicio de un sujeto obligado sea necesario ampliar nuevamente el periodo de reserva de la información; el Comité de Transparencia, ***con la ratificación del organismo garante*** respectivo deberá hacer la solicitud correspondiente al organismo garante competente, debidamente fundada y motivada, aplicando la prueba de daño y señalando el plazo de reserva, por lo menos con tres meses de anticipación

al vencimiento del periodo.

Artículo 102. Cada Área del sujeto obligado elaborará un índice de los Expedientes clasificados como reservados, por Área responsable de la ***Información***y tema, ***a fin de someterla a la aprobación del Comité de Transparencia, que deberá de ser ratificada por el organismo garante respectivo.***

El índice deberá ***ser público, y se*****elaborará** semestralmente***. La publicación se hará***en Formatos Abiertos al día siguiente de su elaboración. Dicho índice deberá indicar el Área que generó la información, el nombre del Documento, si se trata de una reserva completa o parcial, la fecha en que inicia y finaliza la reserva, su justificación, el plazo de reserva y, en su caso, las partes del Documento que se reservan y si se encuentra en prórroga.

En ningún caso el índice será considerado como ***Información***reservada.

Artículo 103. ***Los sujetos obligados no podrán negar*** el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, ***sin la aprobación d***el Comité de Transparencia, ***ratificada por el organismo garante competente***.

Para motivar la clasificación de la ***Información***y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de daño.

Tratándose de aquella ***Información***que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva.

Artículo 104. …

I. La divulgación de la ***Información***representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional;

II. al III. …

Artículo 105. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las excepciones al derecho de acceso a la ***Información***prevista en el presente Título y deberán acreditar su procedencia.

…

Artículo 106. La clasificación de la ***Información***se llevará a cabo en ***cualquier*** momento, ***al ser aprobada por el Comité de Transparencia y ratificado por el órgano de transparencia competente***.

Artículo 108. Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que clasifiquen Documentos o ***Información***como reservada. La clasificación ***solo*** podrá establecerse por el ***Comité de Transparencia correspondiente***, ***debidamente*** ratificada por el organismo garante competente, de manera parcial o total de acuerdo al contenido de la ***Información***del Documento y deberá estar ***debidamente motivada y fundamentada, de acuerdo*** con la actualización de los supuestos definidos en el presente Título como ***Información***clasificada.

…

La clasificación de ***Información***reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño.

Artículo 109. Los lineamientos generales que emita el Sistema Nacional en materia de clasificación de la ***Información***reservada y confidencial y, para la elaboración de versiones públicas, serán de observancia obligatoria para los sujetos obligados.

Artículo 112. La ***Información***contenida en las obligaciones de transparencia no podrá omitirse en las versiones públicas.

Capítulo II
De la Información Reservada

Artículo 113. Como ***Información***reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

I. al III. …

IV. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;

V. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes;

VI. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;

VII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;

VIII. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa;

IX. Afecte los derechos del debido proceso;

X. Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;

XI. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y

XII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales.

Artículo 115. …

I. …
II. Se trate de ***Información***relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables.

Capítulo III
De la Información Confidencial

Artículo 116. Se considera ***Información***confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.

La ***Información***confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

Se considera como ***Información***confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional.

Asimismo, será ***Información***confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.

Artículo 117. Los sujetos obligados que se constituyan como fideicomitentes, fideicomisarios o fiduciarios en fideicomisos que involucren recursos públicos, no podrán clasificar, por ese solo supuesto, la ***Información***relativa al ejercicio de éstos, como secreto bancario o fiduciario, sin perjuicio de las demás causales de clasificación que prevé la presente Ley.

Artículo 118. Los sujetos obligados que se constituyan como usuarios o como institución bancaria en operaciones que involucren recursos públicos, no podrán clasificar, por ese solo supuesto, la ***Información***relativa al ejercicio de éstos, como secreto bancario, sin perjuicio de las demás causales de clasificación que prevé la presente Ley.

Artículo 119. Los sujetos obligados que se constituyan como contribuyentes o como autoridades en materia tributaria, no podrán clasificar la ***Información***relativa al ejercicio de recursos públicos como secreto fiscal.

Artículo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a ***Información***confidencial requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información.

No se requerirá el consentimiento del titular de la ***Información***confidencial cuando:

I. La ***Información***se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;

II. al IV. …

V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la ***Información***se utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos.

Para efectos de la fracción IV del presente artículo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la ***Información***confidencial y un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la divulgación de la ***Información***confidencial y el interés público de la información.

TÍTULO SÉPTIMO

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Capítulo I

Del Procedimiento de Acceso a la Información *no disponible en la Plataforma Electrónica Nacional de Transparencia*

Artículo 121. Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deberán garantizar las medidas y condiciones ***para que toda la Informacióneste publicada en la plataforma electrónica nacional de transparencia y que esta Informaciónsea accesible*** para que toda persona pueda ejercer el derecho de acceso a la información, sin ***la necesidad de que medie solicitud alguna*** y deberá apoyar al solicitante en la ***búsqueda de la Información***de las mismas ***mediante soporte técnico***, de conformidad con las bases establecidas en el presente Título.

Artículo 122. ***Cuando la Informaciónrequerida no esté disponible***cualquier persona por sí misma o a través de su representante, podrá presentar solicitud de acceso a ***Información***ante ***el sujeto obligado o*** la Unidad de Transparencia, a través de la Plataforma Nacional, en la oficina u oficinas designadas para ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional.

Artículo 123. ***Las*** solicitudes de acceso a ***Información***formuladas mediante la Plataforma Nacional, se asignará automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. En los demás casos***, el sujeto obligado o*** la Unidad de Transparencia, ***en su caso***, tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la Plataforma Nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante, en el que se indique la fecha de recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables.

Artículo 124. …

I. al II. …

III. La descripción de la ***Información***solicitada;

IV. al V. …

En su caso, el solicitante señalará el formato accesible o la lengua indígena en la que se requiera la ***Información***de acuerdo a lo señalado en la presente Ley.

La ***Información***de las fracciones I y IV será proporcionada por el solicitante de manera opcional y, en ningún caso, podrá ser un requisito indispensable para la procedencia de la solicitud.

Artículo 125. …

En el caso de solicitudes recibidas en otros medios, en las que los solicitantes no proporcionen un domicilio o medio para recibir la ***Información***o, en su defecto, no haya sido posible practicar la notificación, se notificará por estrados en la oficina de la Unidad de Transparencia.

Artículo 127. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la ***Información***solicitada que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de Documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se

podrán poner a disposición del solicitante los Documentos en consulta directa, salvo la ***Información***clasificada.

…

Artículo 128. Cuando los detalles proporcionados para localizar los documentos resulten insuficientes, incompletos o sean erróneos, ***el sujeto obligadoo*** la Unidad de Transparencia, ***en su caso***, podrá requerir al solicitante, por una sola vez y dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a partir de la presentación de la solicitud, para que, en un término de hasta diez días, indique otros elementos o corrija los datos proporcionados o bien, precise uno o varios requerimientos de información.

Este requerimiento interrumpirá el plazo de respuesta establecido en el artículo 132 de la presente Ley, por lo que comenzará a computarse nuevamente al día siguiente del desahogo por parte del particular. En este caso, el sujeto obligado atenderá la solicitud en los términos en que fue desahogado el requerimiento de ***Información***adicional.

La solicitud se tendrá por no presentada cuando los solicitantes no atiendan el requerimiento de ***Información***adicional. En el caso de requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por presentada la solicitud por lo que respecta a los contenidos de ***Información***que no formaron parte del requerimiento.

Artículo 129. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la ***Información***o del lugar donde se encuentre así lo permita.

En el caso de que la ***Información***solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la misma en Formatos Abiertos.

Artículo 130. Cuando la ***Información***requerida por el solicitante ya esté disponible al público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha ***Información***en un plazo no mayor a cinco días.

Artículo 131. ***Los sujetos obligados o las*** Unidades de Transparencia, ***en su caso***, deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la ***Información***o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la ***Información***solicitada.

Artículo 133. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por el solicitante. Cuando la ***Información***no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega.

…

Artículo 134. Los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que darán trámite interno a las solicitudes en materia de acceso a la ***Información.***

Los sujetos obligados y los Comités de Transparencia deberán establecer accesos de toda la Informaciónno reservada a través de las plataformas de Internet.

Cuando el solicitante requiera Informaciónqueaun no se encuentre publicada en las plataformas de Internet y requiera la elaboración de versiones, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo, procederá una vez que se acredite el pago respectivo.
…

Artículo 135. La Unidad de Transparencia tendrá disponible la ***Información***solicitada, durante un plazo mínimo de sesenta días, contado a partir de que el solicitante hubiere realizado, en su caso, el pago respectivo, el cual deberá efectuarse en un plazo no mayor a treinta días.
…

Artículo 136. Cuando l***os sujetos obligados*** determinen la notoria incompetencia ***de las mismas, relativa a la Informaciónsolicitada, notificarán a la Unidad de Transparencia correspondiente para que ratifiquen la misma. Las Unidades de Transparencia***, deberán comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y, en caso de poderlo determinar, señalar al solicitante el o los sujetos obligados competentes.

Si los sujetos obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, deberá***nellos o la Unidad de Transparencia, en su caso***, dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la ***Información***sobre la cual es incompetente se procederá conforme lo señala el párrafo anterior.

Artículo 137. En caso de que los sujetos obligados consideren que los Documentos o la ***Información***deba ser clasificada, se sujetará a lo siguiente:

El Área deberá remitir la solicitud ***a la Unidad de Transparencia correspondiente***, ***con*** un escrito en el que funde y motive la clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver, ***con la ratificación del organismo garante competente***, para:

a) al b) …
c) ***Negar*** la clasificación y conceder el acceso a la información.

El Comité de Transparencia ***tendrá pleno*** acceso a la ***Información***que esté en poder del Área correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación.

La resolución del ***organismo garante correspondiente*** será notificada al interesado a ***través del Comité de Transparencia respectivo***, en el plazo de respuesta a la solicitud que establece el artículo 132 de la presente Ley.

Artículo 138. Cuando la ***Información***no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité de Transparencia:

I. al II. …

III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la ***Información***en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de Transparencia, y

IV …

Artículo 139. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la ***Información***solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable de contar con la misma.

Capítulo II
De las Cuotas de Acceso

Artículo 141. ***Únicamente en caso de que la persona requiera Información que aún no se encuentre en las plataformas de Internet y la misma se solicite en formatos que impliquen un costoéstos*** deberán cubrirse de manera previa a la entrega y no podrán ser superiores a la suma de:

I. al III. …

Las cuotas de los derechos aplicables deberán establecerse en la Ley Federal de Derechos, los cuales se publicarán en los sitios de Internet de los sujetos obligados. En su determinación se deberá considerar que los montos permitan o faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información, asimismo se establecerá la obligación de fijar una cuenta bancaria única y exclusivamente para que el solicitante realice el pago íntegro del costo de la ***Información***que solicitó.

…

La ***Información***deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas simples. Las unidades de transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias socioeconómicas del solicitante.

Artículo 143. El recurso de revisión procederá en contra de:

I. al III. …

IV. La entrega de ***Información***incompleta;

V. La entrega de ***Información***que no corresponda con lo solicitado;

VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la ***Información***dentro de los plazos establecidos en la ley;

VII. La notificación, entrega o puesta a disposición de ***Información***en una modalidad o formato distinto al solicitado;

VIII. La entrega o puesta a disposición de ***Información***en un formato incomprensible y/o no accesible para el solicitante;

IX. al XIII. …

XIV. ***La determinación de publicar o el publicar datos personales o información confidencial que no se encuentren en los casos de excepción establecidos en esta Ley.***

La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de revisión que proceda por las causales señaladas en las fracciones III, VI, VIII, IX, X, XI y ***XIV*** es susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante el organismo garante correspondiente.

Artículo 147. En todo momento, los Comisionados deberán tener acceso a la ***Información***clasificada para determinar su naturaleza según se requiera. El acceso se dará de conformidad con la normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda de la información.

Artículo 148. La ***Información***reservada o confidencial que, en su caso, sea consultada por los Comisionados, por resultar indispensable para resolver el asunto, deberá ser mantenida con ese carácter y no deberá estar disponible en el Expediente, salvo en los casos en los que sobreviniera la desclasificación de dicha ***Información***y continuara bajo el resguardo del sujeto obligado en el que originalmente se encontraba o cuando se requiera, por ser violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Artículo 150. …

I. al V. …

VI. El organismo garante no estará obligado a atender la ***Información***remitida por el sujeto obligado una vez decretado el cierre de instrucción, y

VII. …

Artículo 152. En las resoluciones los Organismos garantes podrán señalarle a los sujetos obligados que la ***Información***que deben proporcionar sea considerada como obligación de transparencia de conformidad con el Capítulo II del Título Quinto, denominado “De las obligaciones de transparencia comunes” en la presente Ley, atendiendo a la relevancia de la información, la incidencia de las solicitudes sobre la misma y el sentido reiterativo de las resoluciones.

Asimismo, las resoluciones de los Organismos garantes podrán ordenar que no se publique Información que sea considerada como datos personales que están fuera de los casos de excepción establecidos en esta ley, o Información confidencial.

Artículo 155. El recurso será desechado por improcedente cuando:

II. al IV. …

V. Se impugne la veracidad de la ***Información***proporcionada, ***o***

VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos contenidos.

Artículo 158. ***Salvo lo establecido en el artículo 157 anterior, únicamente los*** particulares podrán impugnar las determinaciones o resoluciones de los Organismos garantes ante el Poder Judicial de la Federación.

Artículo 160. El recurso de inconformidad procede contra las resoluciones emitidas por los Organismos garantes de las Entidades Federativas que:

I. al II. …

Se entenderá como negativa de acceso a la ***Información***la falta de resolución de los Organismos garantes de las Entidades Federativas dentro del plazo previsto para ello.

Artículo 165. …

...

Recibida la contestación, el Instituto deberá emitir su resolución en un plazo no mayor a quince días. En caso de no recibir la contestación por parte del Organismo garante de la Entidad Federativa o que éste no pruebe fehacientemente que dictó resolución o no exponga de manera fundada y motivada, a criterio del Instituto, que se trata de ***Información***reservada o confidencial, el Instituto resolverá a favor del solicitante.

Artículo 167. En todo caso, el Comisionado ponente del Instituto tendrá acceso a la ***Información***clasificada para determinar su naturaleza.

La ***Información***reservada o confidencial que, en su caso, sea consultada por el Comisionado ponente del Instituto, por resultar indispensable para resolver el asunto, deberá ser mantenida con ese carácter y no deberá estar disponible en el Expediente, salvo en los casos en los que sobreviniera la desclasificación de dicha información, continuando bajo el resguardo del sujeto obligado en el que originalmente se encontraba.

Artículo 191. La ***Información***reservada o confidencial que, en su caso, sea solicitada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por resultar indispensable para resolver el asunto, deberá ser mantenida con ese carácter y no estará disponible en el Expediente, salvo en las excepciones previstas en el artículo 120 de la presente Ley.

En todo momento, los Ministros deberán tener acceso a la ***Información***clasificada para determinar su naturaleza, según se requiera. El acceso se dará de conformidad con la normatividad previamente establecida para el resguardo o salvaguarda de la ***Información***por parte de los sujetos obligados.

Artículo 193. Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirma el sentido de la resolución recurrida, el sujeto obligado deberá dar cumplimiento y entregar la ***Información***en los términos que establece el artículo 196 de esta Ley.

…

Capítulo V
Del Recurso de Revisión de Asuntos Jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Artículo 194. En la aplicación de las disposiciones de la presente Ley, relacionadas con la ***Información***de asuntos jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se deberá crear un comité especializado en materia de acceso a la ***Información***integrado por tres ministros.

Para resolver los recursos de revisión relacionados con la ***Información***de asuntos jurisdiccionales, dicho comité atenderá a los principios, reglas y procedimientos de resolución establecidos en la presente Ley y tendrá las atribuciones de los Organismos garantes.

Capítulo VI
Del Cumplimiento

Artículo 196. …

Excepcionalmente, considerando las circunstancias especiales del caso, los sujetos obligados, ***con la autorización de la Unidad de Transparencia correspondiente***, podrán solicitar a los Organismos garantes, de manera fundada y motivada, una ampliación del plazo para el cumplimiento de la resolución.

…

Artículo 197. …

El organismo garante verificará de oficio la calidad de la ***Información***y, a más tardar al día siguiente de recibir el informe, dará vista al recurrente para que, dentro de los cinco días siguientes, manifieste lo que a su derecho convenga. Si dentro del plazo señalado el recurrente manifiesta que el cumplimiento no corresponde a lo ordenado por el organismo garante, deberá expresar las causas específicas por las cuales así lo considera.

Capítulo II
De las Sanciones

Artículo 206. …

I. ***La falta de publicación en tiempo y forma de toda la Informaciónque genere o tenga en su posesión cualquiera de los sujetos obligados en la plataforma electrónica nacional de transparencia.***

II.La falta de respuesta a las solicitudes de ***Información***en los plazos señalados en la normatividad aplicable;

III. Actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de las solicitudes en materia de acceso a la ***Información***o bien, al no difundir la ***Información***relativa a las obligaciones de transparencia previstas en la presente Ley;

IV. …

V. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente, sin causa legítima, conforme a las facultades correspondientes, la ***Información***que se encuentre bajo la custodia de los sujetos obligados y de sus Servidores Públicos o a la cual tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión;

VI. Entregar ***o publicar en la plataforma electrónica nacional de transparencia,Información*** incomprensible, incompleta, en un formato no accesible, una modalidad de envío o de entrega diferente a la solicitada previamente por el usuario en su solicitud de acceso a la información, al responder sin la debida motivación y fundamentación establecidas en esta Ley;

VII. No actualizar la ***Información***correspondiente a las obligaciones de transparencia en los plazos previstos en la presente Ley;

VIII. Declarar con dolo o negligencia la inexistencia de ***Información***cuando el sujeto obligado deba generarla, derivado del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones;

IX. Declarar la inexistencia de la ***Información***cuando exista total o parcialmente en sus archivos;

X. …

XI. Realizar actos para intimidar a los solicitantes de ***Información***o inhibir el ejercicio del derecho;

XII. Denegar intencionalmente ***Información***que no se encuentre clasificada como reservada o confidencial;

XIII. Clasificar como reservada, con dolo o negligencia, la ***Información***sin que se cumplan las características señaladas en la presente Ley. La sanción procederá cuando exista una resolución previa del organismo garante, que haya quedado firme;

XIV. No desclasificar la ***Información***como reservada cuando los motivos que le dieron origen ya no existan o haya fenecido el plazo, cuando el organismo garante determine que existe una causa de interés público que persiste o no se solicite la prórroga al Comité de Transparencia;

XV. al XVI. …

…

…

Artículo 209. Ante incumplimientos en materia de transparencia y acceso a la ***Información***por parte de los partidos políticos, el Instituto u organismo garante competente dará vista, según corresponda, al Instituto Nacional Electoral o a los organismos públicos locales electorales de las Entidades Federativas competentes, para que resuelvan lo conducente, sin perjuicio de las sanciones establecidas para los partidos políticos en las leyes aplicables.

…

Artículo 216. Las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o ejerzan actos de autoridad deberán proporcionar la ***Información***que permita al sujeto obligado que corresponda, cumplir con sus obligaciones de trasparencia y para atender las solicitudes de acceso correspondientes.

Transitorios

Octavo. …

En tanto entren en vigor los lineamientos que se refieren en el párrafo siguiente, los sujetos obligados deberán mantener y actualizar en sus respectivas páginas de Internet la ***Información***conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y las leyes de transparencia de las Entidades Federativas vigentes.

…

Las nuevas obligaciones establecidas en los artículos 70 a 83 de la presente Ley no contempladas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y en las leyes de transparencia de las Entidades Federativas vigentes, serán aplicables solo respecto de la ***Información***que se genere a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Noveno. La ***Información***que hasta la fecha de entrada en vigor del presente decreto obra en los sistemas electrónicos de los Organismos garantes, formará parte de la Plataforma Nacional de Transparencia, conforme a los lineamientos que, para el efecto, emita el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Décimo. Sin perjuicio de que la ***Información***que generen y posean es considerada pública, de conformidad con lo señalado en la presente Ley General y que le son aplicables los procedimientos, principios y bases de la misma; en tanto el Sistema Nacional emite los lineamientos, mecanismos y criterios correspondientes

para determinar las acciones a tomar, los municipios con población menor a 70,000 habitantes cumplirán con las obligaciones de transparencia de conformidad con sus posibilidades presupuestarias.

Lo anterior, sin perjuicio de que dichos municipios continuarán cumpliendo con las obligaciones de ***Información*** a que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones que emanan de ésta, en los plazos, términos y condiciones previstas en dicha ley y en las disposiciones referidas.
…

Artículos Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los sujetos obligados tendrán un plazo de un año, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para publicar en la plataforma electrónica nacional de transparencia**,** laInformacióntodos los Documentos y Expedientes en su poder. Dicha Informaciónserá comprensible, completa, en un formato accesible.

Tercero. Los poderes legislativos, en sus instancias correspondientes otorgarán a los sujetos obligados los presupuestos necesarios para llevar a cabo la publicidad a que se refiere el artículo Segundo anterior.

Cuarto. Para los efectos del artículo Tercero anterior, los sujetos obligados someterán a la consideración del Poder Ejecutivo Federal y de los de las entidades federativas respectivas, sus presupuestos para la publicidad a que se refiere el artículo Segundo transitorio anterior.

Cámara de Senadores del H. Congreso de Unión, sede de la Comisión Permanente.

Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiséis días del mes de Agosto del dos mil quince.

C. DIPUTADO FEDERAL CARLOS FERNANDO ANGULO PARRA

Firma

_____

Del Dip. Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en materia de datos abiertos.



DIP. JUAN PABLO ADAME ALEMÁN

El que suscribe, diputado federal **JUAN PABLO ADAME ALEMÁN**, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL EN MATERIA DE DATOS ABIERTOS**, sujetando la misma al tenor de la siguiente:

E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S

Como es sabido, en las últimas décadas, en México y en todo el mundo, el papel de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)se ha hecho cada vez más determinante en la vida de los seres humanos ante la inminente revolución tecnológica que estamos viviendo. Éstas se han permeado a gran parte de la vida diaria de los individuos y han abarcado desde los ámbitos social y laboral, hasta el político, económico y cultural. En este sentido, las TIC se han vuelto una herramienta indispensable del siglo XXIen los ámbitos económico, educativo, científico y cívico, entre otros.

En ese sentido, las posibilidades de innovación, generación de valor y la producción de mejoras en el sector público mediante la información que éste genera son prácticamente ilimitadas, pero ha hecho falta que se ponga a disposición de forma oportuna y de modo que sea sencilla su reutilización por parte de los “desarrolladores cívicos” y el público en general.

Desde la integración de datos de tráfico en casetas federales, datos del clima, hasta el Presupuesto de Egresos de la Federación y su ejercicio son susceptibles de análisis, mezcla, y reutilización por parte de la academia, proveedores de servicios, desarrolladores y, en general, los ciudadanos.

En este sentido, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de Mayo del presente año, ya adopta en su glosario ubicado en el Artículo 3º los conceptos de “Datos Abiertos” y “Formatos Abiertos”, así como la prioridad que se le deben de dar a estos, en la medida de la posible, a la hora de publicar información pública o entregarla al ciudadano previa solicitud.

Es por lo anterior importante que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se armonice con la Ley General, e incluso se ponga adelante al hacer mandatorio que las obligaciones de transparencia que se establecen en el Artículo 7 sean proporcionadas con esas características, aprovechando los avances que en ese sentido se tienen a nivel federal por la antigüedad de dicha ley y por las capacidades técnicas en los Poderes de la Unión frente a los Estados.

Además de ello, se cuentan como antecedentes el acuerdo por el que se establece el Esquema de Interoperabilidad y de Datos Abiertos de la Administración Pública Federal, emitido por la Secretaría de la Función Pública en el Diario Oficial de la Federación el 6 de Septiembre de 2011 en donde, como parte de la

estrategia de Gobierno Digital y con el fin de un manejo transparente y eficiente de la información, y al ofrecimiento de trámites y servicios electrónicos a los ciudadanos, se definieron principios, características y obligaciones a entidades de la Administración Pública Federal para el almacenamiento y puesta a disposición de la información con la que cuentan para poder "comunicarse" electrónicamente entre ellas, así como con los equipos de los particulares.

Esto se retoma en la Estrategia Digital Nacional, presentada por el actual Ejecutivo Federal el 25 de Noviembre de 2013, la cual contempla la promoción y uso de datos abiertos, la participación ciudadana a través de concursos de innovación y campañas para la elevación de capacidades digitales, el fomento de plataformas de fuentes de datos abiertos que permitan la innovación por parte de la población, el establecimiento de mecanismos digitales de diálogo, la promoción del uso de plataformas digitales en la población para el análisis del impacto de la política pública, y el aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación para fomentar la participación ciudadana en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas.

También el 20 de Febrero de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se establece la regulación en materia de Datos Abiertos, el cual considera que los datos abiertos del gobierno federal constituyen un activo usable y reutilizable por cualquier sector de la sociedad, que contribuye a impulsar el crecimiento económico, fortalecer la competitividad y promover la innovación, incrementar la transparencia y rendición de cuentas, fomentar la participación ciudadana, así como detonar una mayor eficiencia gubernamental y mejora de los servicios públicos en apoyo a los objetivos de desarrollo, de buen gobierno y de generación de conocimiento.

Visto lo anterior, tomando en cuenta las mejores prácticas internacionales y los avances que en esa materia ha tenido México en los últimos años, es que pongo a consideración de esta H. Cámara de Diputados la presente:

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en materia de Datos Abiertos.

ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona una nueva fracción II y VI al artículo 3, y un tercer párrafo al artículo 44; y se reforman los artículos 9 y 47, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para quedar como sigue:

Artículo 3. …

I. …

II. Datos abiertos: Los datos digitales de carácter público que son accesibles en línea que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado y que tienen las siguientes características:

a) Accesibles: Los datos están disponibles para la gama más amplia de usuarios, para cualquier propósito;

b) Integrales: Contienen el tema que describen a detalle y con los metadatos necesarios;

c) Gratuitos: Se obtienen sin entregar a cambio contraprestación alguna;

d) No discriminatorios: Los datos están disponibles para cualquier persona, sin necesidad de registro;

e) Oportunos: Son actualizados, periódicamente, conforme se generen;

f) Permanentes: Se conservan en el tiempo, para lo cual, las versiones históricas relevantes para uso público se mantendrán disponibles con identificadores adecuados al efecto;

g) Primarios: Provienen de la fuente de origen con el máximo nivel de desagregación posible;

h) Legibles por máquinas: Deberán estar estructurados, total o parcialmente, para ser procesados e interpretados por equipos electrónicos de manera automática;

i) En formatos abiertos: Los datos estarán disponibles con el conjunto de características técnicas y de presentación que corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos en un archivo digital, cuyas especificaciones técnicas están disponibles públicamente, que no suponen una dificultad de acceso y que su aplicación y reproducción no estén condicionadas a contraprestación alguna;

j) De libre uso: Citan la fuente de origen como único requerimiento para ser utilizados libremente;

III. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable;

IV. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico;

V. Dependencias y entidades: Las señaladas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, incluidas la Presidencia de la República, los órganos administrativos desconcentrados, así como la Procuraduría General de la República;

VI. Formatos Abiertos: Conjunto de características técnicas y de presentación de la información que corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos de forma integral y facilitan su procesamiento digital, cuyas especificaciones están disponibles públicamente y que permiten el acceso sin restricción de uso por parte de los usuarios;

VII. Información: La contenida en los documentos que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier título;

VIII. Información reservada: Aquella información que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en los Artículos 13 y 14 de esta Ley;

IX. Instituto: El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, establecido en el Artículo 33 de esta Ley;

X Ley: La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; IX. Órganos constitucionales autónomos: El Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Banco de México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía y cualquier otro establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

XI. Órganos constitucionales autónomos: El Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Banco de México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía y cualquier otro establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

XII. Reglamento: El Reglamento respecto al Poder Ejecutivo Federal, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;

XIII. Servidores públicos: Los mencionados en el párrafo primero del Artículo 108 Constitucional y todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos públicos federales;

XIV. Seguridad nacional: Acciones destinadas a proteger la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, la gobernabilidad democrática, la defensa exterior y la seguridad interior de la Federación, orientadas al bienestar general de la sociedad que permitan el cumplimiento de los fines del Estado constitucional;

XV. Sistema de datos personales: El conjunto ordenado de datos personales que estén en posesión de un sujeto obligado;

XVI. Sujetos obligados:

a) El Poder Ejecutivo Federal, la Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la República;

b) El Poder Legislativo Federal, integrado por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Comisión Permanente y cualquiera de sus órganos;

c) El Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal;

d) Los órganos constitucionales autónomos;

e) Los tribunales administrativos federales, y

f) Cualquier otro órgano federal.

XVII. Unidades administrativas: Las que de acuerdo con la normatividad de cada uno de los sujetos obligados tengan la información de conformidad con las facultades que les correspondan.

Artículo 9. La información a que se refiere el Artículo 7 deberá estar a disposición del público, a través de medios remotos o locales de comunicación electrónica**, cumpliendo con las características de datos abiertos**. Los sujetos obligados deberán tener a disposición de las personas interesadas equipo de cómputo, a fin de que éstas puedan obtener la información, de manera directa o mediante impresiones. Asimismo, éstos deberán proporcionar apoyo a los usuarios que lo requieran y proveer todo tipo de

asistencia respecto de los trámites y servicios que presten.

Artículo 44....

...

En caso de que se haya solicitado la entrega de la información en forma electrónica, en la medida de lo posible se entregará ésta en formatos abiertos.

...

Artículo 47. Las solicitudes de acceso a la información y las respuestas que se les dé, incluyendo, en su caso, la información entregada, serán públicas. Asimismo, las dependencias y entidades deberán poner a disposición del público esta información, en la medida de lo posible a través de medios remotos ~~**o locales**~~ de comunicación electrónica **y con las características de Datos Abiertos**.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor a los 180 días naturales después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los 26 días del mes de Agostode 2015

DIP. JUAN PABLO ADAME ALEMÁN

CONTINÚA TOMO II



SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL

Consulta la Gaceta del Senado en ***www.senado.gob.mx***

Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”.